

**UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE**

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS



**TESIS DOCTORAL**

**La emancipación residencial de los jóvenes españoles: un problema social  
agravado tras la crisis económica de 2008**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Jonathan Torres Téllez**

Director

Paulo Abrao

**Sevilla, 2020**

**Título de la tesis:**

**LA EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL DE LOS JÓVENES  
ESPAÑOLES: UN PROBLEMA SOCIAL AGRAVADO TRAS LA  
CRISIS ECONÓMICA DE 2008**

**Autor: Jonathan Torres Téllez**

Tesis Doctoral presentada en el Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas  
y Políticas como requisito para la obtención del **Título de Doctor Europeo en  
Ciencias Jurídicas y Políticas**

**Director: Dr. Paulo Abrao**

**Sevilla, 2020**

**Universidad Pablo de Olavide**

**Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas**

El director aprueba la Tesis Doctoral

**Título de la tesis**

**LA EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL DE LOS JÓVENES  
ESPAÑOLES: UN PROBLEMA SOCIAL AGRAVADO TRAS LA  
CRISIS ECONÓMICA DE 2008**

Elaborada por

**Jonathan Torres Téllez**

Como requisito parcial para la obtención del Título de Doctor en Ciencias  
Jurídicas y Políticas

**Sevilla, 2020**



*A mi Yo del pasado: a pesar de todo lo conseguimos.*

## Agradecimientos

Después de tanto tiempo deseando escribir los agradecimientos de esta tesis doctoral realmente no sé por dónde empezar ni cómo hacerlo, pero lo que sí tengo claro es a quiénes dedicarle estas líneas con todo el amor y la admiración que profeso por ellos.

Han sido cinco largos años de trabajo por los que he pasado por todo tipo de estados de ánimo: desde la ilusión que supone el empezar un doctorado; pasando por los momentos más duros en los que ves que no obtienes ningún resultado y que el tiempo pasa y tú sientes que sigues en el mismo lugar que al inicio; hasta la más completa desesperación al ver que tras cada problema aparece uno nuevo y el final de todo nunca llega.

Sin duda, mi tesis doctoral no ha sido una tesis normal ni estándar; ha pasado por infinidad de situaciones excepcionales o poco habituales que lo que menos podía hacer pensar es que llegase a buen puerto. Pero, a pesar de todo ello, las páginas que siguen a estos agradecimientos es muestra de que se logró acabar a pesar de la multitud de obstáculos que ha habido por el camino.

Una tesis doctoral se trata de un proceso que conlleva una gran fuerza de voluntad, disciplina y, sobre todo, de muchos momentos de soledad. Momentos en los que tus amigos no entienden por lo que estás pasando, momentos en los que tus padres tampoco llegan a comprenderlo y momentos en los que tu pareja tan solo puede mostrarte una paciencia infinita y una sonrisa como mejores terapias (que no es poco). No es fácil ver cómo vas haciéndote mayor y que mientras que tu vida está en una especie de *stand-by*, todo a tu alrededor va completando aquellas fases que son consideradas como normales según lo establecido por el curso de la vida.

Pero a pesar de todo esto, por mucha soledad que suponga una tesis doctoral, por mucho que sientas que te quedas atrás respecto a los cánones de la sociedad y por las miles de horas que pasarás trabajando en ella sin que nadie lo vea y sin recompensa alguna, no estás solo; y créeme cuando te digo que si la tarea ya es ardua de por sí, sin todos tus seres queridos te será prácticamente imposible: porque a pesar de no entenderte, estarán; porque a pesar de no apreciar del mismo modo que tú esos pequeños avances, lo

celebrarán; porque cuando lleguen malos resultados, te apoyarán; porque cuando necesites un empujón, te lo darán; y, lo más importante de todo, porque cuando te caigas, y créeme que lo harás y no una ni dos veces, te levantarán.

Lo primero darle las gracias a mi director Paulo Abrao por su disposición a ayudarme durante todos estos años, por sus consejos, por sus correcciones y por ir formándome como investigador gracias a sus indicaciones y lecciones.

Nada de esto hubiese sido posible sin Alberto Montero, mi padre intelectual y mi guía en este proceso. Nunca podrá llegar a comprender el honor que supone para mí el hecho de que hace tantos años viese algo en mí que hizo que me dedique tanto tiempo, paciencia y trabajo. Quiero que sepa que no le guardo ningún tipo de rencor ni resentimiento por las ausencias y las largas esperas que en muchas ocasiones fueron demasiado difíciles, y que cuando le he reprochado algo ha sido por ser egoísta y querer sentirme más cerca de él y que me dedicase más tiempo para poder seguir trabajando y aprendiendo. Después de todo, yo sabía a qué me exponía: trabajar con los mejores tiene sus costes. Espero que todo el mundo a lo largo de su vida tenga la oportunidad de trabajar con alguien a quien admira como yo he tenido la suerte y espero seguir teniendo. Lo conseguimos, Alberto, costó lo inestimable pero lo conseguimos; de todas formas, esto no ha hecho nada más que empezar. Que no se te olvide que fui el primero que no se aburrió de ti y terminó lo empezado.

Gracias a mis padres por haberme dado hasta el último de sus recursos sin pedir nada a cambio y sin dudarlo ni tan siquiera un segundo. No cabe en mi cabeza haber conseguido esto sin vosotros. Siempre seréis mis mayores referentes y ejemplos, no solo por brindar a vuestros dos hijos todas aquellas oportunidades que a vosotros os negó la vida y de permitirles soñar con quienes quisiesen ser, sino también por enseñarme conceptos tan importantes como lo que es la familia o el aprender a dar a tus seres queridos todo sin esperar recibir nada a cambio.

Quiero pedir os perdón a vosotros dos, perdón por todas las malas contestaciones, por el dolor causado al verme sufrir durante todos estos años, perdón por sentir os juzgados por la gente de vuestro alrededor por mi culpa, perdón por los comentarios de todo el mundo sobre vuestro hijo, su futuro y las típicas frases: ¿pero ha terminado ya?

¿qué le queda? ¿piensa trabajar alguna vez? Y un largo etcétera. Y, sobre todo, perdón por si en algún momento no he cumplido con todas vuestras expectativas y os he decepcionado en algo. Os juro que he puesto todo mi empeño, constancia y esfuerzo por hacerlo lo mejor posible. Solo espero que estéis la mitad de orgullosos de mí que de lo que yo lo estoy de vosotros; eso vale más que cualquier tesis doctoral.

Mi hermano también es parte de todo esto, porque aunque no lo exprese sé de su considerable admiración por mí y es una de las cosas que más feliz me hace. Lo que más echaré de menos cuando consiga formar mi propio hogar será el no verle madurar todos los días y aceptar que esos momentos que llevamos viviendo tantísimos años no se volverán a repetir; porque si algo bueno ha tenido el hecho de no poder independizarme antes indudablemente ha sido eso. Por último, darle las gracias por enseñarme a aceptar las derrotas al hacerme comprender que no siempre voy a ser el mejor ni siquiera en mi propia casa. Eso sí, debe saber que nunca cambiará el hecho de que soy el primero de la familia que tiene un doctorado.

Y mi último agradecimiento es para la persona más bondadosa que conozco: Carmen, mi compañera de vida, la que me agarró de la mano casi al inicio de este proceso y no me la ha soltado en ningún momento. La sonrisa eterna, la alegría infinita, el lucero que me ha permitido volver al sendero aquellas veces en las que lo abandoné y me sentía completamente perdido. Gran parte de esta tesis te pertenece.

Sin embargo, también me veo en la obligación de pedirte perdón a ti: perdón por las miles de horas y momentos juntos que nos ha robado esta tesis doctoral; por no estar presente físicamente en muchas reuniones y en muchos eventos; por esas cervezas al sol a las que has tenido que renunciar por mi culpa. Y gracias, de verdad que gracias: por entender mis ausencias, por intentar comprender en todo momento cómo me sentía, por tu paciencia infinita, por los días en los que fuiste una completa coraza ante mis malos humores, por haberme transmitido toda esa energía que en muchas ocasiones había perdido. En definitiva, gracias por estar y no haberme abandonado a mitad del camino. Y no, no te ibas a quedar sin tus líneas y sin demostrarte mi eterno agradecimiento por ser parte de este proceso y por compartir este camino llamado vida que andamos juntos. Esta guerra sin ti, sin tu paz, jamás hubiese sido posible.





## Resumen

En las últimas décadas la independencia residencial está dejando de ser el último y definitivo paso que proporciona autonomía y autosuficiencia a los jóvenes, sino que se trata más bien de una etapa más que la juventud intercala y que, por ende, no sigue un cronograma preestablecido como ocurría en las generaciones anteriores.

En España tradicionalmente esta fase de la transición a la vida adulta se ha completado a una edad media superior que en los países vecinos de su entorno. Las razones que justifican este hecho, según la literatura académica, han sido variadas: aspectos culturales, características particulares del mercado laboral y del sistema educativo, factores institucionales debido a un tardío desarrollo del estado de bienestar o el sistema de viviendas del país.

Además, a todo estos factores se unieron las consecuencias socioeconómicas y el deterioro de la situación financiera del país que ocasionó la crisis económica iniciada en 2008, un suceso reciente que indudablemente ha afectado a las posibilidades de emancipación de los jóvenes españoles.

De hecho, durante los años del boom inmobiliario la tasa de emancipación en España creció a pesar de los desorbitados precios que tenía la vivienda y fue en el momento en que la crisis económica golpeó al mercado laboral, con especial énfasis en el sector juvenil, cuando la tasa de emancipación cambió la tendencia positiva que tenía en los últimos años.

Ante estos sucesos, el objetivo principal de la presente investigación es analizar el contexto de emancipación español actual a partir de los elementos que destaca la literatura para posteriormente conocer el impacto concreto que el deterioro de la situación económica provocado por la reciente crisis económica y el consiguiente incremento de la tasa de desempleo y temporalidad podría haber tenido sobre los procesos de emancipación de los jóvenes españoles y sobre la formación de nuevos hogares.

Los resultados que se obtienen a lo largo de este trabajo confirman que el shock económico supuso un claro frenazo a la tasa de emancipación y a la de la formación de hogares que, de momento, no han recuperado los niveles previos a la crisis de 2008. Y

no solo eso, sino que demuestran que a corto plazo el shock que se produjo en el desempleo afectó de manera considerable a la emancipación juvenil en España pero que, sin embargo, a largo plazo esta variable dejó de ser tan determinante y que, en cambio, la tasa de temporalidad de los jóvenes y el precio de la vivienda se tornaron fundamentales en la explicación de este proceso.

De esta manera, se confirmaría que el proceso de emancipación en el caso español depende más de las condiciones laborales a las que acceden los jóvenes y su capacidad de mantenimiento en el mercado de trabajo que de la propia entrada a él, ya que la emancipación ni siquiera se plantearía cuando no se dispone de un puesto de trabajo.

Finalmente esta investigación examina las diferentes políticas públicas que se han desarrollado en otros países europeos para facilitar la transición juvenil, poniendo especial énfasis en aquellas dirigidas al sistema educativo, al mercado laboral y a la vivienda, con el fin de extraer potenciales medidas que ayuden a solucionar el problema que tienen los jóvenes españoles a la hora de abandonar el hogar familiar.

**Palabras clave:** emancipación juvenil; formación de hogares; mercado laboral; parque de vivienda; crisis económica.

## Summary

In recent decades, residential independence is not anymore the last and definitive step that provides autonomy and self-sufficiency to young people, but rather it is one more stage than youth intersperse and that, therefore, does not follow a pre-established schedule as it happened in previous generations.

In Spain, this stage which belongs to the transition to adult life has traditionally been completed at a higher average age than in neighbouring countries. The reasons that justify this fact, according to the academic literature, have been varied: cultural aspects, particular characteristics of the labour market and the educational system, the country's housing system, or institutional factors as a result of the late development of the welfare state.

In addition to all these factors were added the socioeconomic consequences and the deterioration of the country's financial situation that caused the economic crisis that began in 2008, a recent event that has undoubtedly affected the possibilities of emancipation of young Spaniards.

In fact, during the years of the real estate boom, the emancipation rate in Spain grew despite the exorbitant housing prices, and it was at the time when the economic crisis hit the labour market, with special emphasis on the youth sector, when the emancipation rate changed the positive trend it had in those previous years.

Given these events, the main objective of this research is to analyse the current Spanish emancipation context based on the elements highlighted in the literature, in order to know afterward the concrete impact that the deterioration of the economic situation caused by the recent crisis and the consequent increase in the unemployment rate could have had on the emancipation processes of young Spanish people and on household formation.

The results obtained throughout this study confirm that the economic shock was a clear slowdown in the rate of emancipation and the formation of households which, for the time being, have not recovered the levels prior to the 2008 crisis. Not only that, but results also show that in the short term the unemployment shock affected youth emancipation in Spain, whereas in the long term, this variable was no longer so decisive

and, by contrast, the temporality rate of young people and the housing price became fundamental in the explanation of this process.

In this way, it would be confirmed that emancipation processes depend more on the working conditions of young people and their ability to maintain themselves in the job market than on their ability to enter into it, since people do not consider emancipation as an option when they do not even have a job.

Finally, this research examines the different public policies that have been developed in other European countries in order to facilitate youth transition, placing special emphasis on those aimed at the education system, the labour system, and housing market, with a view to extract potential measures to help solve the problem that young Spanish people have when leaving the parental home.

**Keywords:** youth emancipation; household formation; labour market; housing stock; economic crisis.

## Índice General

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	12
<b>Fundamentación del estudio</b> .....	12
<b>Objetivos, hipótesis y metodología empleada en la investigación</b> .....	15
<i>Hipótesis de trabajo</i> .....	17
<i>Metodología de la investigación</i> .....	20
<b>Marco teórico: la transición juvenil desde diferentes perspectivas teóricas</b> .....	21
<i>El ciclo vital</i> .....	23
<i>La posición generacional</i> .....	24
<i>El itinerario bibliográfico</i> .....	25
<i>El enfoque institucional</i> .....	25
<i>La perspectiva economicista</i> .....	26
<i>La teoría Emerging adulthood</i> .....	27
<b>El enfoque multidisciplinar desde el que parte esta investigación</b> .....	28
 <b>Capítulo 1. El Contexto de emancipación: una perspectiva comparada a nivel europeo a partir de los estados de bienestar</b> .....	31
<b>1.1. El modelo de transición juvenil socialdemócrata</b> .....	34
<b>1.2. El modelo de transición juvenil corporativista</b> .....	43
<b>1.3. El modelo de transición juvenil liberal</b> .....	53
<b>1.4. El modelo de transición juvenil mediterráneo</b> .....	64
 <b>Capítulo 2. Revisión de la literatura</b> .....	78
<b>2.1. La vivienda como factor determinante en la independencia residencial de los jóvenes: una revisión de la literatura</b> .....	79
2.1.1. La influencia del precio de la vivienda en la emancipación juvenil.....	80
2.1.2. La incidencia del parque de vivienda en la independencia residencial .....	81
2.1.3. La vivienda como factor determinante en en la emancipación juvenil española .....	84
<b>2.2. El mercado laboral como elemento fundamental en la emancipación: análisis del estado de la cuestión</b> .....	90
2.2.1. El desempleo juvenil como factor explicativo del retraso de la emancipación .....	91
2.2.2. La incidencia de los ingresos en la independencia residencial de los jóvenes .....	95
2.2.3. La literatura sobre los efectos del mercado laboral en la emancipación de los jóvenes españoles.....	97
<b>2.3. Los efectos de la crisis económica de 2008 en la emancipación residencial juvenil: un repaso a la literatura</b> .....	100
2.3.1. Los efectos de la crisis económica de 2008 en la emancipación residencial juvenil en España.....	105
 <b>Capítulo 3. Los factores estructurales que inciden en la emancipación juvenil en España</b> .....	111
<b>3.1. Aspectos institucionales del estado de bienestar que repercuten sobre la emancipación de los jóvenes españoles</b> .....	111
<b>3.2. Emancipación juvenil y mercado de trabajo en España</b> .....	116
3.2.1. El desempleo juvenil y el sistema educativo en España.....	127

<b>3.3. El sistema residencial de España: un obstáculo para la emancipación juvenil ...</b>	<b>142</b>
3.3.1. El alquiler como opción residencial para el sector juvenil después de la crisis .....	147
3.3.2. Los problemas de la vivienda social en España .....	151
<b>3.4. El abandono del hogar familiar por parte de los jóvenes en España.....</b>	<b>162</b>
 <b>Capítulo 4. Los efectos de la crisis económica de 2008 en la emancipación juvenil y en la formación de nuevos hogares: un análisis empírico .....</b>	<b>168</b>
<b>Metodología común utilizada .....</b>	<b>169</b>
<i>El modelo de Vectores Autorregresivos .....</i>	<i>171</i>
<b>4.1. El mercado de trabajo y sus efectos en la emancipación de los jóvenes españoles .....</b>	<b>173</b>
4.1.1. Metodología y datos .....	173
4.1.1.1. <i>El modelo de Vectores Autorregresivos .....</i>	<i>177</i>
4.1.2. La emancipación juvenil en España: principales resultados .....	179
4.1.2.1. <i>Funciones de impulso respuesta.....</i>	<i>181</i>
4.1.2.2. <i>Descomposición de la varianza .....</i>	<i>183</i>
4.1.3. Conclusiones.....	184
<b>4.2. Los efectos de la crisis económica en la formación de hogares en España.....</b>	<b>186</b>
4.2.1. Creación de nuevos hogares y condiciones económicas en España (1995-2017)....	186
4.2.2. Metodología y datos .....	191
4.2.2.1 <i>El modelo de Vectores Autorregresivos .....</i>	<i>194</i>
4.2.3. La formación de nuevos hogares en España: principales resultados.....	196
4.2.3.1. <i>Funciones de impulso y respuesta .....</i>	<i>198</i>
4.2.3.2. <i>Descomposición de la varianza .....</i>	<i>201</i>
4.2.4. Conclusiones.....	202
<b>4.3. La formación de hogares tras la crisis económica: el caso de Portugal.....</b>	<b>204</b>
4.3.1. Creación de nuevos hogares y condiciones económicas en Portugal (2003-2017)..	205
4.3.2. Metodología y datos .....	209
4.3.2.1. <i>El modelo de Vectores Autorregresivos .....</i>	<i>212</i>
4.3.3. Principales resultados en relación con la creación de nuevos hogares en Portugal .	214
4.3.3.1. <i>Funciones de impulso respuesta.....</i>	<i>217</i>
4.3.3.2. <i>Descomposición de la varianza .....</i>	<i>219</i>
4.3.4. Conclusiones.....	220
4.3.4.1. <i>Conclusiones en comparación con España .....</i>	<i>221</i>
<b>4.4. El precio de la vivienda en España tras el inicio de la crisis económica de 2008: un análisis empírico .....</b>	<b>223</b>
4.4.1. Estado de la cuestión .....	224
4.4.2. Datos y modelo .....	226
4.4.2.1. <i>Especificación del modelo .....</i>	<i>229</i>
4.4.3. Resultados.....	233
4.4.4. Conclusiones.....	237
 <b>Capítulo 5. Políticas publicas que faciliten la emancipación juvenil en España.....</b>	<b>239</b>
<b>5.1. Actuaciones y estrategias relacionadas con la educación y la formación de los jóvenes.....</b>	<b>241</b>
5.1.1. El abandono escolar como gran problema de la educación .....	242
5.1.1.1. <i>Las medidas de otros países europeos contra el abandono escolar .....</i>	<i>243</i>

5.1.1.2. <i>El abandono escolar en España</i> .....	246
5.1.2. Medidas y recomendaciones orientadas a reducir el abandono escolar prematuro en España.....	248
5.1.3. La formación profesional dual: una modalidad educativa para la reducción del abandono escolar y para la mejora de las trayectorias laborales de los jóvenes .....	250
<b>5.2. Políticas públicas dirigidas a reducir el desempleo juvenil</b> .....	253
5.2.1. Algunas medidas aplicadas en otros países de la Unión Europea .....	254
5.2.1.1. <i>Formación de mercado de trabajo</i> .....	256
5.2.1.2. <i>Servicios de orientación laboral</i> .....	258
5.2.1.3. <i>El empleo intensivo de obras públicas y servicios comunitarios</i> .....	259
5.2.1.4. Subsidios de empleo .....	260
5.2.1.5. <i>Promoción del emprendimiento</i> .....	263
5.2.2. La Garantía Juvenil como herramienta principal de la UE contra el desempleo juvenil .....	265
5.2.2.1. <i>Resultados de la Garantía juvenil</i> .....	270
5.2.3. Las políticas de empleo contra el desempleo juvenil en España .....	271
5.2.3.1. <i>La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016</i> .....	271
5.2.3.2. <i>El Sistema Nacional de Garantía Juvenil</i> .....	276
5.2.3.3. <i>El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021</i> .....	280
5.2.4. Recomendaciones en materia de política pública de empleo para el sector juvenil .	285
<b>5.3. Políticas Públicas de vivienda para favorecer la emancipación juvenil</b> .....	287
5.3.1. Medidas aplicadas en la Unión Europea dirigidas a garantizar el acceso a la vivienda al sector juvenil.....	288
5.3.2. La vivienda social como elemento favorecedor de la emancipación juvenil .....	293
5.3.2.1. <i>La vivienda social en España</i> .....	295
5.3.3. Recomendaciones sobre la vivienda social .....	301
<b>Conclusiones finales</b> .....	304
<b>Conclusions</b> .....	317
<b>Referencias</b> .....	329



## Índice de Gráficos

Gráfico 1.1. Edad media de emancipación en la Unión Europea (2018) .....	32
Gráfico 1.2. Gasto total en euros por habitante en protección social en la UE (precios constantes a 2010) (2000-2017) .....	35
Gráfico 1.3. Media del índice de Gini en la UE (2005-2018) .....	36
Gráfico 1.4. Gasto público medio en asuntos familiares respecto al PIB en la UE (en porcentajes) (2005-2018).....	37
Gráfico 1.5. Porcentaje de adultos jóvenes de entre 18 y 24 años que viven con sus padres en la UE (2018).....	38
Gráfico 1.6. Tasa de desempleo entre los jóvenes de 20 a 29 años en los países incluidos en el modelo socialdemócrata (2002-2018) .....	40
Gráfico 1.7. Régimen de tenencia de la vivienda en los países incluidos en el modelo socialdemócrata (2017).....	41
Gráfico 1.8. Gasto medio en euro por habitante en protección social en la UE (a precios constantes de 2010) (2005-2017) .....	44
Gráfica 1.9. Tasa de desempleo en los países del modelo corporativista (2000-2018).....	45
Gráfico 1.10. Tasa de desempleo menores de 25 años en los países del modelo corporativista (2000-2018) .....	47
Gráfico 1.11. Porcentaje de personas menores de 25 años empleadas temporalmente en los países incluidos en el modelo corporativista (2002-2018) .....	48
Gráfico 1.12. Porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años que viven con sus padres en la UE (2018).....	49
Gráfico 1.13. Régimen de tenencia de la vivienda en los países del modelo corporativista (2017).....	51
Gráfico 1.14. Gasto medio en política vivienda respecto al PIB en los países del modelo corporativista (en porcentajes) (2000-2017).....	52
Gráfica 1.15. Tasa de desempleo en los países del modelo liberal (2000-2018) .....	56
Gráfica 1.16. Tasa de desempleo juvenil en los países del modelo liberal (2000-2018) .....	58
Gráfico 1.17. Porcentaje de la población con estudios inferiores a la secundaria en los países del modelo liberal (1992-2018) .....	59
Gráfico 1.18. Régimen de tenencia de la vivienda en los países del modelo liberal (2017)	61
Gráfico 1.19. Media del gasto público en política de vivienda respecto al PIB en los países del modelo liberal (en porcentajes) (2000-2017) .....	62
Gráfico 1.20. Evolución del gasto total en prestaciones de protección social respecto al PIB en el modelo mediterráneo (en porcentajes) (1995-2017).....	65
Gráfico 1.21. Tasa de desempleo en los países del modelo mediterráneo (1997-2018) .....	67
Gráfico 1.22. Tasa de actividad femenina en los países del modelo mediterráneo (1995- 2018).....	69
Gráfico 1.23. Tasa de desempleo juvenil en los países del modelo mediterráneo (1997- 2018).....	70
Gráfico 1.24. Porcentaje de personas entre 18-34 años que viven con sus padres en la Unión Europea (2018) .....	71
Gráfico 1.25. Porcentaje de abandono temprano de la educación y de la formación entre la población de 18 a 24 años en los países del modelo mediterráneo (1992-2018) .....	73

Gráfico 1.26. Porcentaje de la población que tiene educación terciaria en los países del modelo mediterráneo (1992-2018) .....	74
Gráfico 1.27. Régimen de tenencia de la vivienda en los países del modelo mediterráneo (2017).....	75
Gráfico 3.1. Porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España, en la Unión Europea y en la Eurozona (2005-2018) .....	113
Gráfico 3.2. Porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que viven con sus padres en España y en la Unión Europea (2004-2018) .....	115
Gráfico 3.3. Porcentaje de empleados temporales totales y menores de 25 años en España (1995-2018) .....	118
Gráfico 3.4. Porcentaje total de trabajadores a tiempo parcial subempleados y menores de 25 años en España (2008-2018).....	120
Gráfico 3.5. Porcentajes de desempleados de larga duración total y menores de 30 años en España y en la Unión Europea (1995-2018).....	121
Gráfico 3.6. Tasas de desempleo total y menores de 25 años en España (2002-2018).....	123
Gráfico 3.7. Tasas de desempleo de jóvenes desagregada por grupos de edad (2002-2018) .....	124
Gráfico 3.8. Renta media total y de menores de 25 años en España (1995-2018) .....	126
Gráfico 3.9. Porcentaje de abandono temprano de la educación y la formación entre los jóvenes de 18 a 24 años en España y en la Unión Europea (1992-2018).....	129
Gráfico 3.10. Tasa de desempleo en menores de 30 años según nivel educativo en España (1993-2018) .....	131
Gráfico 3.11. Porcentaje de la población que tiene educación terciaria en España y en la Unión Europea (1992-2018).....	132
Gráfico 3.12. Porcentaje de población sobrecualificada para el puesto de trabajo que desempeña con estudios superiores en España y en la Unión Europea (2008-2018).....	135
Gráfico 3.13. Porcentaje de personas menores de 25 años que trabajan y estudian en España, en la Unión Europea y en la Euro área (2005-2018).....	136
Gráfico 3.14. Porcentaje de jóvenes menores de 30 años que no trabajan ni estudian en España y en la Unión Europea (2004-2018).....	138
Gráfico 3.15. Gasto público en porcentaje del PIB en política de empleo en España y en la UE-15 (2004-2017).....	141
Gráfico 3.16. Evolución de la tenencia de los hogares en España (1950-2017) .....	144
Gráfico 3.17. Coste/esfuerzo de acceso al mercado de vivienda (2002-2017).....	146
Gráfico 3.18. Evolución del alquiler y de la propiedad entre los jóvenes menores de 30 años en España (2004-2017) .....	149
Gráfico 3.19. Coste/esfuerzo acceso al alquiler en menores de 30 años en España (en porcentaje) (2008-2017) .....	150
Gráfico 3.20. Porcentaje de vivienda en alquiler social en la Unión Europea (2017).....	152
Gráfico 3.21. Evolución de la construcción de viviendas protegidas, libres y totales en España (1970-2018).....	153
Gráfico 3.22. Evolución del precio de la vivienda protegida m <sup>2</sup> (2005-2018).....	155
Gráfico 3.23. Porcentaje de vivienda de protección social en alquiler sobre el conjunto de las viviendas protegidas (según calificación provisional) (2005-2018) .....	156
Gráfico 3.24. Gasto público total en vivienda en España (2000-2016).....	160
Gráfico 3.25. Tasa de emancipación menores de 30 años y tasa de desempleo de menores de 30 años (2002-2017) .....	163

Gráfico 3.26. Tasa de coresidencia entre padres e hijos menores de 30 años en España y en la Unión Europea (2004-2018) .....	164
Gráfico 4.1. Evolución del número de emancipados en valor absoluto (1995-2017) .....	175
Gráfico 4.2. Cambios en las variables analizadas (1995-2017) .....	176
Gráfico 4.3. Funciones de impulso respuesta de la emancipación ante un shock de una desviación estándar en la tasa de desempleo (A) y en la tasa de temporalidad (B) .....	182
Gráfico 4.4. Tasa de crecimiento anual del PIB en España (1990-2018).....	187
Gráfico 4.5. Tasas de desempleo total y juvenil (<25 años) de España (2003-2017) .....	187
Gráfico 4.6. Tasa de crecimiento de los hogares en España (2002-2017).....	188
Gráfico 4.7. Tasa de crecimiento de los préstamos hipotecarios en España (1995-2018) .	189
Gráfico 4.8. Índice de precios real de la vivienda en España (2015=100) (1990-2017) ...	190
Gráfico 4.9. Formación de nuevos hogares en España (1995-2017).....	192
Gráfico 4.10. Cambio en las variables analizadas (1995-2017) .....	193
Gráfico 4.11. Función impulso respuesta del cambio de hogares ante un shock de una desviación estándar en la tasa de desempleo .....	199
Gráfico 4.12. Función impulso respuesta del cambio de hogares ante un shock de una desviación estándar en el número de viviendas iniciadas (izquierda) y ante un shock de una desviación estándar en el precio de la vivienda (derecha) .....	200
Gráfico 4.13. Tasa de crecimiento anual del PIB real en Portugal (1990-2018).....	206
Gráfico 4.14. Tasa de desempleo total y juvenil en Portugal (2002-2017) .....	206
Gráfico 4.15. Tasa de crecimiento de los hogares en Portugal (2002-2017).....	207
Gráfico 4.16. Tasa de crecimiento de los préstamos hipotecarios en Portugal (1995-2018) .....	208
Gráfico 4.17. Índice de precios real de la vivienda en Portugal (2015=100) (1990-2017) .....	209
Gráfico 4.18. Formación de nuevos hogares en Portugal (2004-2017).....	211
Gráfico 4.19. Cambios en las variables analizadas (2003-2017) .....	211
Gráfico 4.20. Residuos de las ecuaciones de cambio de viviendas iniciadas y de precios inmobiliarios .....	216
Gráfico 4.21. Función impulso respuesta del cambio de hogares ante un shock de una desviación estándar en la tasa de desempleo .....	218
Gráfico 4.22. Efecto acumulado del cambio de hogares un shock de una desviación estándar en la tasa de desempleo .....	219
Gráfico 4.23. Índice del precio real de la vivienda en España (1T 2004=100) (2004-2018) .....	224
Tabla 3.1. Variaciones respecto al año anterior de la construcción de viviendas protegidas, libres y totales en España (2006-2018).....	154
Tabla 4.1. Fuente y periodicidad temporal de las series (1995-2017).....	175
Tabla 4.2. Test de raíces unitarias para las series individuales .....	178
Tabla 4.3. Criterios de selección del orden del VAR .....	178
Tabla 4.4. VAR para las variables endógenas .....	179
Tabla 4.5. Descomposición de la varianza para los cambios en la emancipación juvenil .	183
Tabla 4.6. Fuente y periodicidad temporal de las series (1995-2017).....	191
Tabla 4.7. Test de raíces unitarias para las series individuales .....	195
Tabla 4.8. Criterios de selección del orden del VAR .....	195
Tabla 4.9. VAR para las variables endógenas .....	196
Tabla 4.10. Descomposición de la varianza para el cambio en el número de hogares .....	201
Tabla 4.11. Fuente y periodicidad temporal de las series (2003-2017).....	210

Tabla 4.12. Test de raíces unitarias para las series individuales .....	213
Tabla 4.13. Criterios de selección del orden del VAR .....	213
Tabla 4.14. VAR para las variables endógenas .....	214
Tabla 4.15. Descomposición de la varianza para los cambios en el número de hogares ...	220
Tabla 4.16. Variables empleadas en la investigación .....	227
Tabla 4.17. Resultados del Test ADF .....	231
Tabla 4.18. Test de Hausman .....	232
Tabla 4.19. F-Test.....	233
Tabla 4.20. Incidencia de los factores sobre la variable dependiente.....	234
Tabla 5.1. Programas de empleo juvenil según sus ventajas y desventajas .....	255
Tabla 5.2. Principales acciones según los programas de Garantía Juvenil de cada país ....	268
Tabla 5.3. Líneas de actuación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013- 2016 según su ámbito de influencia .....	273

## Índice de Diagramas

Diagrama 1. Proceso de la derivación del modelo .....	230
---	-----

## INTRODUCCIÓN

### Fundamentación del estudio

El paso de la juventud a la edad adulta es un proceso marcado por tres dimensiones relacionadas entre sí: la familiar, entendida como la formación de una familia propia; la económico-laboral, que se produce a la finalización de la etapa educativa con el acceso al mercado laboral; y la residencial, es decir, el abandono del hogar de los progenitores para desarrollar una vida independiente en otra vivienda (Galland, 1991; Jones y Wallace, 1992; Jones, 1995).

En Europa este proceso, hasta la década de 1980, se desarrollaba entre la población juvenil a edades tempranas y, por lo general, en periodos de tiempos breves, lineales y con unas fases muy definidas y conceptualizadas (Bosch Meda, 2017). Sin embargo, en los últimos tiempos la transición a la vida adulta está cambiando y adoptando nuevas dinámicas caracterizadas, sobre todo, por la dilatación del tiempo necesario para completarla, por el retraso a la hora de iniciar el proceso y por la diversificación de formas en las que el mismo se produce, lo que en cierto modo conduce a la modificación del propio concepto de juventud (Billari y Liefbroer, 2010).

Sobre esta cuestión, Furlong *et al.* (2006) indican que el tradicional modelo lineal de transición que explicaba el desarrollo de la vida de los jóvenes empezó a transformarse de manera evidente a partir de la crisis industrial de los años ochenta como consecuencia de la complejidad y dificultad que comenzó a experimentar el paso de la educación al mercado de trabajo, un hecho que claramente hizo que las trayectorias de los jóvenes se diversificaran y dificultaran. Este proceso ha sido denominado como “la desestandarización de las transiciones juveniles” (Du Bois-Reymond y López Blasco, 2004).

De este modo, los jóvenes de hoy en día no siguen los pasos característicos y secuenciales que, por lo general, siguieron sus padres: abandonar el hogar familiar, acceder al mercado laboral, ser independientes económicamente y crear su propia familia, sino que alternan estas fases y desarrollan distintas alternativas en pos de conseguir su

propia autonomía e identidad. Esto ha hecho que el concepto de transición juvenil se haya desprendido de su carácter estático y se haya convertido en un proceso dinámico que incluso en muchas ocasiones se vuelve reversible (Kaplan, 2009).

Sin duda, una de las fases que mayores modificaciones está sufriendo es el abandono del hogar familiar y la formación de uno propio. La importancia de esta fase radica en que la transición a la adultez tiene como cúspide el abandono del hogar familiar y la constitución de un hogar en el que cada persona definirá su proyecto vital personal. Esto se debe a que, generalmente, la formación de un hogar está relacionada con la consecución de la independencia económica y física del individuo, ya que los recursos económicos necesarios para ello se alcanzan, por lo común, a través de un empleo que posibilita no depender de terceras personas.

Sin embargo, en los últimos tiempos la independencia residencial está dejando de ser el último y definitivo paso que proporciona autonomía y autosuficiencia a los jóvenes, sino que se trata más bien de una etapa más del proceso que la juventud puede intercalar y llevar a cabo en muchos momentos diferentes y por causas distintas. Es común que los jóvenes vivan en otras viviendas diferentes a la del hogar paterno por motivos de estudios; que reciban ayuda económica de sus progenitores para poder sufragar los gastos como consecuencia de la precariedad laboral, lo que no los hace completamente independientes; o las cada vez más habituales trayectorias *yo-yo*, en las que se alternan periodos de independencia residencial con otros en los que se retorna al hogar familiar por no disponer de recursos económicos suficientes, tras finalizar una etapa educativa superior o por la separación de la pareja sentimental, entre otros motivos. En este aspecto Bosch Meda (2017, p. 109) afirma que “se ha producido una creciente disociación entre emancipación económica y emancipación residencial, la desestandarización de los procesos de formación de nuevos hogares y de adquisición de la autonomía económica”.

De esta forma, para poder dimensionar este fenómeno se utilizará el concepto de emancipación en el mismo sentido que lo hace Echaves (2016, p. 55), esto es, como un “proceso que marca la finalización de la etapa juvenil y el comienzo de la etapa adulta, que en cualquier caso supone el abandono del domicilio (de forma irreversible o no) en el que se residía con los padres, para formar un hogar independiente”.

En España, tradicionalmente esta etapa de la transición a la vida adulta se completa a una edad media superior que en los países vecinos de su entorno. Esta característica de los jóvenes españoles ha sido justificada por la literatura académica haciendo referencia a aspectos culturales arraigados en un importante familiarismo, en las características particulares del mercado laboral, en factores institucionales o en el sistema de vivienda del país.

Además, a esto se ha unido el importante deterioro de la situación económica tras la crisis iniciada en 2008 y las graves consecuencias socioeconómicas que tuvo no solo para el sector juvenil, sino para toda la población española. En este sentido, el porcentaje de los jóvenes españoles emancipados comenzó a incrementarse a partir de 2002 hasta alcanzar en 2008 su tasa máxima histórica. Entre los factores que justifican ese repunte se encuentran claramente la bonanza económica que experimentaba el país y que repercutía en un descenso de la tasa de desempleo de los más jóvenes. Sin embargo, después del estallido de la burbuja inmobiliaria y del incremento generalizado del desempleo la tasa de emancipación empezó a disminuir. De este modo, el aumento de la tasa de emancipación coincidió con la caída en la tasa de desempleo juvenil, es decir, las mayores oportunidades de trabajo que tenían los jóvenes españoles durante los años previos a la crisis favorecieron los procesos de independencia residencial; mientras que el incremento del desempleo juvenil tras la crisis corre en paralelo a la caída en la tasa de emancipación.

Ante este hecho, el sentido de este trabajo reside en investigar cómo la crisis económica ha podido influir en los patrones de emancipación de los jóvenes españoles, y determinar si el proceso de dilatación que ya se venía produciendo en las últimas décadas se ha podido ver repercutido, o no, por las graves consecuencias socioeconómicas que experimentó España a partir de 2008 y durante los años posteriores de recesión.

Para ello se ha decidido analizar la emancipación residencial de los jóvenes españoles a partir de un enfoque multidisciplinar con la idea de poder superar las limitaciones que presentan los enfoques más particulares. Esta elección permitirá combinar distintos elementos como el institucional, el laboral, el cultural o el residencial,

que ayudarán a entender la transformación del proceso de emancipación en España en los últimos tiempos.

Además, esto posibilita llevar a cabo un análisis de este proceso dentro de un marco comparado europeo, lo que permitirá extraer conclusiones que ayuden a definir las características propias y los elementos determinantes del modelo de emancipación en España. Para facilitar esta perspectiva comparada se ha empleado la tipología clásica de los estados de bienestar con la idea de agrupar los distintos países de la Unión Europea (UE) según sus marcos institucionales, ya que los regímenes de bienestar definen distintos contextos de emancipación en tanto que son factores determinantes de la configuración de la situación social, económica y familiar de los jóvenes, y al proporcionar herramientas y ayudas que pueden facilitar los distintos procesos de la transición a la vida adulta.

Así, en los primeros compases de la investigación se realizará un análisis de los contextos de emancipación en la Unión Europea agrupados a partir de sus estados de bienestar, para posteriormente examinar las características de la independencia residencial en España. Finalmente, una vez expuestas las transiciones a la vida adulta en los distintos países del entorno europeo y puestas de relieve las particularidades del contexto de emancipación español, se llevará a cabo un análisis econométrico que permita determinar cómo la crisis económica de 2008, y especialmente el estado del mercado laboral y del inmobiliario, han repercutido en los patrones de emancipación y en la formación de hogares en España. Por último, se analizarán las políticas públicas de los países del entorno europeo que han podido tener una incidencia positiva en la emancipación, con el fin de valorar la traslación de algunas de ellas al caso español y hacer una serie de propuestas que faciliten la transición juvenil en este país.

### **Objetivos, hipótesis y metodología empleada en la investigación**

El objetivo principal de esta investigación se centra en analizar el contexto de emancipación español a partir de una serie de elementos que la literatura destaca como factores claves en la independencia residencial de los jóvenes para, a partir de ello,



comprobar cómo las consecuencias socioeconómicas de la última crisis económica han podido afectar a este proceso en España.

Al mismo tiempo, otro objetivo clave relacionado con el anterior es verificar si la incidencia de la crisis económica de 2008 en la emancipación de los jóvenes españoles ha supuesto modificaciones estructurales y definitivas en los patrones de emancipación o si, por el contrario, se trata meramente de cambios temporales causados por el shock económico que sufrió el país y que, por tanto, cabe esperar que a partir de la mejora de los indicadores económicos los patrones de emancipación vuelvan a ser similares a los previos a la crisis.

De estos dos objetivos parten otros más específicos que son los siguientes:

a) Analizar los elementos claves de la emancipación juvenil en Europa en un marco comparativo a partir de los diferentes contextos de emancipación que permita tener presente los distintos aspectos económicos, institucionales, educativos o de vivienda que inciden en este proceso. Esto posibilitará estudiar los elementos estructurales que son claves en los patrones de emancipación de otros países, con el fin de extraer conclusiones que permitan determinar qué factores facilitan la independencia residencial.

b) Investigar la situación educativa y laboral de los jóvenes españoles con la idea de detallar y localizar los elementos más vulnerables que pueden repercutir en la transición a la vida adulta y que, por ende, retrasan la emancipación. En este punto se pondrá especial atención sobre la precariedad laboral y el desajuste de la oferta y de la demanda en el mercado de trabajo, junto con los principales problemas del sistema educativo español como el temprano abandono escolar.

c) Analizar el sistema residencial al que se incorporan los jóvenes españoles al tratarse de un elemento clave en la emancipación juvenil. Esto permitirá extraer conclusiones sobre algunos factores característicos del parque de viviendas de este país, como son la práctica ausencia de vivienda pública o una sobredimensión de la propiedad, que pueden estar repercutiendo en la independencia residencial del sector juvenil.

d) En conexión con el objetivo anterior surge otro relacionado con la vivienda, y es que España, durante los años previos a la burbuja inmobiliaria, tuvo unos incrementos del precio de la vivienda desconocidos hasta ese momento, un hecho que pudo influir en

el retraso de la emancipación en el país. Por esta razón, se pretende analizar en profundidad cómo el precio de la vivienda ha evolucionado tras la crisis económica de 2008 y qué influencia ejerce sobre las decisiones de independencia y formación de nuevos hogares.

e) Estudiar las diferentes políticas encaminadas a facilitar la transición juvenil que han sido aplicadas en el entorno europeo, poniendo especial énfasis en aquellas dirigidas al sistema educativo, al mercado laboral y a la vivienda al tratarse de las tres fases fundamentales del paso de la juventud a la vida adulta. Esto permitirá identificar distintas acciones y herramientas que pueden ser trasladadas al caso español, con el objetivo de poner en marcha políticas públicas dirigidas a facilitar la emancipación de los jóvenes de este país.

f) Además, como la emancipación de los jóvenes tiene una relación directa con la formación de hogares, puesto que se trata del grupo de población con mayor potencial de cara a la creación de uno nuevo, se considera fundamental comprobar también cómo los efectos de la crisis económica han influido en este proceso.

### *Hipótesis de trabajo*

Todos estos objetivos nacen alrededor de una serie de hipótesis que esta investigación pretende contrastar. La principal de ellas es la siguiente: en un contexto de emancipación ya de por sí complicado para los jóvenes españoles debido a elementos estructurales relacionados con el mercado de trabajo y con el sistema residencial, la creciente vulnerabilidad laboral del sector juvenil como consecuencia de la crisis económica de 2008 ha supuesto un obstáculo y un retraso considerable en la emancipación juvenil de este país. De este modo, la crisis económica, especialmente el aumento de la precariedad laboral y del desempleo juvenil, es un elemento directo que explica por qué se frenó la tendencia positiva y ascendente que tenía la tasa de emancipación en España desde principios del siglo XXI.

En relación con esta hipótesis principal surgen otras más específicas:

-A pesar de que el precio de la vivienda cayó tras la crisis económica de 2008, la emancipación de los jóvenes españoles no ha mejorado debido a que el esfuerzo que tienen que realizar para acceder a una sigue siendo elevado. Esto es resultado directo de la sobredimensión que tiene la propiedad como principal régimen de tenencia en España, de un raquítico parque de alquiler y de unos porcentajes de vivienda social muy alejados de los que tienen los países de su entorno europeo, unas características que dificultan la independencia residencial de los jóvenes españoles.

-El mercado laboral se presenta como un elemento fundamental tanto en la transición a la vida adulta como en la emancipación residencial, ya que se trata del momento en el que generalmente los jóvenes adquieren autonomía económica y dejan de depender de las rentas de terceras personas. De este modo, durante los años del boom inmobiliario la tasa de emancipación en España creció a pesar de los desorbitados precios que tenía la vivienda y es en el momento en que la crisis económica golpea al mercado laboral, con especial énfasis en el sector juvenil, cuando la tasa de emancipación cambia la tendencia positiva que mantenía hasta entonces. Es decir, mientras que la bonanza económica que atravesaba España proporcionaba oportunidades laborales, la emancipación creció a pesar de los precios de la vivienda. Por esta razón, esta investigación plantea como hipótesis que el mercado laboral y los ingresos que obtienen los jóvenes tienen una capacidad explicativa más determinante en la emancipación del sector juvenil en España que el sistema residencial al que acceden y los precios del mercado inmobiliario.

-Finalmente, esta trabajo considera que debido al importante shock económico que supuso la crisis y el posterior incremento de la precariedad laboral, los efectos que estos han tenido sobre la emancipación residencial de los más jóvenes se han mantenido estables en el tiempo, por lo que se rechaza que la mejora de los indicadores económicos a corto plazo sea suficiente para recuperar los niveles de la tasa de emancipación previos a la crisis.

Además, como se mencionó en los objetivos, la emancipación tiene una incidencia directa en la formación de hogares. En este sentido, a partir de 2008 la tasa de formación de nuevo hogares, que estaba cercana al 3%, comienza a descender hasta que alcanzó

cifras muy próximas al 0% en 2015, unos porcentajes que, a pesar de la mejora macroeconómica de los últimos años, no se han traducido en la recuperación de los niveles de tasa de formación de nuevos hogares previos a la crisis económica. Por esta razón, se plantea la siguiente hipótesis: la reducción de la tasa de emancipación como consecuencia de la crisis, el deterioro de las variables económicas y la influencia de las condiciones financieras han supuesto un claro frenazo a la formación de nuevos hogares en España que se está manteniendo constante en el tiempo.

En relación con la anterior hipótesis igualmente se establece que en aquellos países encuadrados en el mismo modelo de bienestar que España, en el mediterráneo o rudimentario, al tener unos elementos estructurales similares la crisis económica ha tenido una incidencia parecida sobre la tasa de formación de hogares. De este modo, la situación del mercado laboral y la capacidad de acceder a un crédito hipotecario se posicionan como elementos más determinantes que otros, como puede ser el sistema residencial. Además, del mismo modo que se plantea para España, las modificaciones en la tasa de formación de nuevos hogares como consecuencia del deterioro de las variables económicas se mantendrían constantes en el tiempo y no volverían a recuperar los niveles anteriores a la crisis debido a las graves consecuencias que supuso el shock económico de 2008.

Por último, a pesar de los efectos tan grandes que tuvo la crisis económica en España causados, en parte, por la formación de la burbuja inmobiliaria durante esos años, el mercado de la vivienda no ha experimentado grandes cambios y corre el riesgo de caer en los mismos errores que en el pasado. Así, en el contexto de mejora del mercado inmobiliario y un comportamiento alcista de los precios que se mantiene en los últimos años, se plantea la hipótesis de que la demanda sigue siendo un factor determinante en el aumento de los niveles del precio de la vivienda en España; mientras que la oferta sigue sin ser un elemento que frene, como cabría esperar, el incremento de los precios.

## *Metodología de la investigación*

Para conseguir verificar estas hipótesis y alcanzar los objetivos propuestos anteriormente, esta investigación emplea una metodología cuantitativa que permite representar con claridad la realidad de la emancipación juvenil en España y que, a su vez, posibilita examinar los distintos procesos que la componen. Los indicadores que se han desarrollado y examinado han sido seleccionados a partir de la teoría y de la incidencia que la literatura científica reconoce que tienen sobre la independencia residencial.

No obstante, ante la múltiple dimensión del objeto de estudio y las dificultades que presenta el acceso a muchos datos, o incluso la ausencia de ellos en algunos casos, se ha optado por realizar un análisis estático desde una perspectiva transversal que permita aportar, dentro de las limitaciones de las fuentes estadísticas, una imagen lo más aproximada posible a las características generales de la emancipación en España. De este modo, se ha decidido no desarrollar un análisis longitudinal dinámico que permitiese seguir a una determinada muestra de generaciones a lo largo del ciclo vital, lo que sin duda hubiese reforzado el valor de la investigación a nivel micro. Por ello, en próximas investigaciones se optará por utilizar este método que complete y complemente los resultados obtenidos en este estudio.

Para poder usar esta metodología y garantizar su desarrollo se han empleado las siguientes herramientas y técnicas:

**-Fuentes documentales.** Se ha llevado a cabo una profunda revisión bibliográfica con el objetivo de contextualizar el objeto de estudio y, a su vez, poder incorporar a la temática los distintos aspectos más importantes sobre los que está incidiendo actualmente la comunidad científica en ciencias sociales, con el fin de asegurar que esta investigación suponga un avance sobre los conocimientos existentes hasta ahora.

**-Fuentes estadísticas.** Para obtener toda la información estadística sobre los indicadores que se han examinado a nivel europeo se han explotado diferentes fuentes de información como la *European Union Statistics on Income and Living Conditions*, la *European Labour Survey* o, en aquellos casos que ha sido necesario, se ha profundizado en los datos ofrecidos por los distintos Institutos de Estadística Nacional de cada país,

bancos centrales u otros organismos nacionales que se podrán ver a lo largo del trabajo. En lo que respecta a España, aparte del uso de las dos fuentes europeas anteriores, también se han utilizado la Encuesta de Calidad de Vida, la Encuesta de Población Activa, las estadísticas que proporciona el Ministerio de Fomento sobre la construcción de vivienda o los datos que facilita el Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI), entre otras fuentes estadísticas.

**-Análisis econométrico.** Para el análisis de los datos estadísticos se han aplicado dos métodos econométricos: por un lado, para examinar los efectos de la crisis en la emancipación y en la tasa de formación de nuevos hogares se han estimado distintos modelos de vectores autorregresivos (VAR); y, por otro lado, se ha desarrollado un modelo de panel de datos con efectos fijos empleando mínimos cuadrados ordinarios para analizar los factores que inciden en el precio de la vivienda en España. En ambos casos se ha utilizado el paquete estadístico EViews 10.0.

Por último, en lo referido a la delimitación temporal, como esta investigación pone el foco de atención en torno a la crisis económica de 2008, el periodo que se ha decidido tener en cuenta transcurre aproximadamente desde el año 2000 hasta el 2018, con la idea de centrar el estudio respecto al ciclo alcista del crecimiento económico español y la posterior recesión. No obstante, en aquellos indicadores que por su naturaleza y características precisan que el análisis comprenda un periodo de tiempo más extenso para entender correctamente el fenómeno, los años de las observaciones se han ampliado. Un ejemplo de esto es el sistema residencial, ya que las características especiales de este elemento, como el lento proceso para la conformación y transformación del parque de viviendas, lo hace necesario.

### **Marco teórico: la transición juvenil desde diferentes perspectivas teóricas**

Un importante grueso de las investigaciones sobre la transición a la vida adulta llegan a una conclusión clara: este proceso se ha dilatado en los últimos años (Pais, 2003; Gil Calvo, 2005; De Singly, 2005; Requena, 2006; Billari y Liefbroer, 2010).

Desde la Sociología se ha intentado aportar explicaciones a este retraso generalizado que están experimentando las transiciones juveniles. Una conclusión común

que comparten la mayoría de las teorías es que se ha producido una desestandarización del proceso tradicional y lineal que suponía el paso a la vida adulta por parte de las generaciones anteriores, dando lugar a itinerarios más complejos y variados (Pais, 2003; Requena, 2006).

De esta forma, han surgido teorías que se enmarcan dentro de un enfoque individualista y que afirman que las trayectorias vitales de los jóvenes están condicionadas por una individualización cada vez mayor en las decisiones respecto a las distintas fases del ciclo de la vida de los jóvenes. Es decir, son las estrategias y elecciones personales de cada uno frente a las diversas situaciones ante las que se encuentren las que determinarán las características de su proceso de emancipación, aunque estas decisiones estarán influenciadas por indicadores estructurales como el desempleo o los recursos públicos. En este sentido, Moreno Mínguez *et al.* (2012, p. 17) afirman que “el retraso en la asunción de responsabilidades, tendencia común en toda Europa, estaría relacionado con los nuevos estilos de vida de los jóvenes, que deciden autónomamente su elección, aunque bajo la influencia de determinantes estructurales como el desempleo, la precariedad económica y laboral”.

Las teorías que parten del enfoque individualista han sido confrontadas desde un enfoque estructuralista que considera que las elecciones de los jóvenes no están aisladas de los elementos estructurales que definen una sociedad, una cuestión que si no se tiene en cuenta puede conllevar a realizar análisis erróneos o espurios.

No obstante, estos dos enfoques en ningún caso deben interpretarse como mutuamente excluyentes, pues pueden ser empleados de manera complementaria e interrelacionados permitiendo obtener una descripción más exacta del fenómeno estudiado (Patón, 2007).

En este enfoque estructural el andamiaje teórico para explicar el porqué del retraso de la emancipación juvenil parte del entorno contextual en el que se desarrollan los jóvenes, es decir, considera que este proceso es el resultado de la incidencia de numerosos factores como la cultura, la familia, la economía, las instituciones o las políticas públicas. De este modo, el enfoque estructuralista afirma que existen diferentes patrones de emancipación que han sido moldeados por las características particulares de los distintos

países y que, por tanto, la capacidad de decidir libremente del sujeto se ve limitada por factores que se encuentran fuera de su control (Brannen y Nilsen, 2005; Bynner, 2005; Molgat, 2007). En este sentido, Patón (2007, pp. 524-525) manifiesta que “disponemos de argumentos suficientes para defender que la heterogeneidad observable en los diferentes países en cuanto a las experiencias transicionales de los jóvenes –en particular, la edad de emancipación- depende más del conjunto de variables sociales y económicas –y, sobre todo, institucionales- que de las predisposiciones culturales y las orientaciones actitudinales previas de los jóvenes o de sus familias”.

A partir de la importancia de estos enfoques se han desarrollado numerosos marcos teóricos sociológicos para interpretar las modificaciones que está experimentando la juventud como proceso en las últimas décadas y cómo está repercutiendo sobre los jóvenes. Entre estos, destacan, por encima del resto, el planteamiento del ciclo vital, el de las nuevas generaciones, el itinerario biográfico o el institucional.

### *El ciclo vital*

La perspectiva del ciclo vital propone que las vidas de los individuos sean clasificadas en cuatro etapas consecutivas, con sus correspondientes subdimensiones, que recojan todos sus momentos vitales: la infancia, la juventud, la vida adulta y la vejez. Así, plantea la juventud como un proceso lineal de fases que conduce a la consecución del estatus de adulto. Para alcanzar el reconocimiento como persona adulta entiende que es necesario que los jóvenes abandonen las pautas propias del ciclo anterior y que consigan una serie de objetivos sociales y personales propios de la etapa adulta, como acabar la formación educativa o conseguir un puesto de trabajo (Casal *et al.*, 2006).

De este modo, en las sociedades en las que se están expandiendo los tiempos necesarios para completar las distintas fases de la juventud se produce una disociación entre la consecución por parte de los jóvenes de las características biológicas propias de un adulto, como son la madurez sexual o el desarrollo físico, y los logros sociales más importantes de la vida adulta, como el acceso a una vivienda o el inicio de la vida en pareja. Este desajuste origina situaciones de tensión entre padres e hijos que suelen causar



crisis generacionales, lo que puede influir en las modificaciones de los comportamientos de los jóvenes a lo largo de las subdivisiones previas de la fase de la juventud antes de convertirse en personas adultas (Allerbeck y Rosenmayr, 1995)

Algunos autores, como Moreno Mínguez *et al.* (2012), señalan que este enfoque tiene ciertas limitaciones al definir la transición juvenil como un proceso consecutivo, como podía ocurrir en generaciones pasadas, y no contemplar la actual diversidad de este fenómeno ni tampoco la posibilidad de que distintas fases del paso a la vida adulta se hayan vuelto reversibles.

### *La posición generacional*

De manera paralela al enfoque del ciclo vital apareció la perspectiva de la posición generacional. Este marco teórico parte de los conflictos generacionales que se producen entre hijos y padres comentados anteriormente. La transición juvenil es considerada como un proceso de ruptura con las dimensiones y los valores establecidos por el mundo adulto, ya que los jóvenes representan nuevos valores como producto de la incorporación del cambio social a su sistema de valores; un hecho que choca con los valores tradicionales de la sociedad. Es decir, mientras que la población juvenil simboliza la anomia, los adultos conforman los valores inmutables y seguros (Casal *et al.*, 2006).

Por consiguiente, esta perspectiva considera a los jóvenes como un sector en movimiento y palanca de cambio de la realidad social que produce constantes transformaciones en la estructura social, lo que hace que la emancipación de cada generación de jóvenes se guíe por identidades nuevas, estilos de vida modernos o formas novedosas de consumo. Esto, a su vez, produce un enfrentamiento con el “antiguo mundo” del que son parte sus padres al tener que negociar con ellos las pautas de convivencia, las características de las relaciones afectivas que mantendrán y los recursos económicos a los que tendrán acceso (Moreno Mínguez *et al.*, 2012).

### *El itinerario bibliográfico*

El itinerario bibliográfico se presenta como una tercera vía que intenta superar algunas limitaciones de los dos enfoques anteriores. Para ello incorpora en los itinerarios de los jóvenes tanto los conflictos generados entre las distintas generaciones como la disociación en los roles de la juventud, al considerar que no son parte excluyente la una de la otra y que ambas definen las trayectorias juveniles.

El punto de partida de este planteamiento es la individualidad del ser como eje central de explicación y de análisis en los procesos de transición a la vida adulta (Pais, 2007; Mandic, 2008). En ese marco, las decisiones propias del individuo son más determinantes que los factores estructurales que condicionan la transición a la vida adulta. De este modo, el concepto “itinerario” es definido como el recorrido vital constituido por las elecciones y decisiones del sujeto, pero influido por el marco sociopolítico en el que transcurre la transición juvenil. Así, este enfoque define una triangulación en el que la sociedad es la estructura, los individuos los actores y las generaciones el proceso histórico de cambio (Casal, 1996).

Como ocurre en la teoría de ciclo vital, en este enfoque la juventud es un tramo de la biografía de las personas que va desde la aparición de los primeros rasgos físicos de la pubertad hasta la emancipación familiar plena. Es decir, la juventud es entendida como un proceso por el cual el sujeto va adquiriendo autonomía paulatinamente. Durante este periodo se produce, en mayor o menor medida, una cierta tensión intrafamiliar debido a la aspiración de independencia y la necesidad de seguridad y protección familiar por parte del joven; este conflicto finaliza en el momento en el que el individuo conforma su propio hogar y consigue su completa independencia.

### *El enfoque institucional*

Finalmente, el último enfoque es el institucional. Esta perspectiva destaca el papel clave de las diferentes estructuras del Estado y concluye que las distintas políticas públicas aplicadas configuran las estrategias de emancipación de los jóvenes. En este sentido, la individualidad de las decisiones y elecciones del sujeto están condicionadas por una serie

de factores normativos, económicos, culturales o sociales propios de su entorno, lo que explicaría que países que tienen el mismo sistema económico tengan diferentes estrategias de emancipación y que esta se complete a edades más temprana en unos que en otros (Gil Calvo, 2002).

Generalmente, cuando se aplica esta perspectiva se suele partir de la clasificación canónica que elaboró Esping-Andersen (1990) sobre los estados de bienestar al tratarse de un buen marco interpretativo en el que agrupar los distintos países según sus características institucionales, aunque Wallace y Bendit (2009) destacan que las tipologías deben utilizarse como un dispositivo heurístico útil para la comparación internacional y no como una clasificación rígida.

Sin duda, la incidencia de los estados de bienestar es un elemento clave en la configuración de la situación social, económica y familiar de los jóvenes, que proporciona herramientas y ayudas que pueden facilitar los distintos procesos de la transición a la vida adulta. Sin embargo, en las últimas décadas las políticas sociales han perdido peso, lo que ha hecho que la incertidumbre y la inseguridad del sector juvenil ante el futuro haya aumentado y, por tanto, se fortalezca la decisión de los jóvenes de retrasar cualquier tipo de responsabilidad o de postergar las etapas hacia la vida adulta más determinantes, como la emancipación residencial (Kathleen, 2010; Moreno Mínguez *et al.*, 2012).

### *La perspectiva economicista*

Ahora bien, cualquiera que sea la perspectiva teórica de la que se parta, no se puede obviar que la transición a la vida adulta por parte de los jóvenes se produce en un contexto laboral y económico inestable y deteriorado en comparación con el de las generaciones anteriores (Moreno Mínguez *et al.*, 2012). Por esta razón, también se han ofrecido explicaciones al retraso de la emancipación de los jóvenes europeos desde una perspectiva económica.

La perspectiva economicista parte del efecto-renta y de la capacidad racional económica del joven, que establecen que el individuo retrasa su emancipación debido a que no cuenta con los recursos suficientes y que no abandonará el hogar familiar hasta el

momento que en el que dispongan de ellos. En este sentido, Gil Calvo (2002) señala que el primer obstáculo es el empleo tanto en cantidad, entendida como la tasa de desempleo, como en calidad, entendida como el nivel de precariedad laboral. Tras conseguir la estabilidad de los recursos, el segundo problema que aparece es el poder adquisitivo de los salarios de los jóvenes para poder hacer frente a los gastos que conlleva la emancipación, como la vivienda a la que accederán. Por último, el tercer factor que destaca este enfoque es una combinación entre el riesgo y la incertidumbre, es decir, la inseguridad ante las posibles pérdidas de empleo y la dificultad de volver a encontrar un buen trabajo en un mercado laboral que cada vez les resulta más adverso.

Así, esta perspectiva parte de los actuales retos ante los que se encuentra el sector juvenil como son: la dificultad de acceder al mercado de trabajo y mantenerse en él, los altos niveles de precariedad laboral o el sobreesfuerzo económico a la hora de acceder a una vivienda (Beck y Beck-Gernsheim, 2002; Chandler *et al.*, 2004).

### *La teoría Emerging adulthood*

Otra teoría reciente, encuadrada en el enfoque individualista pero que tiene en cuenta el contexto laboral y económico, es la conocida como *Emerging adulthood* (Arnett, 2000). La hipótesis de este autor es que el retraso de la transición juvenil de los jóvenes de 18 a 25 años de los países desarrollados se produce porque, ante las pocas expectativas de mejoras laborales y económicas, estos deciden no asumir las responsabilidades inherentes a la vida adulta y, de esta forma, mantener sus niveles de consumo y ocio amparados en la seguridad y protección que les ofrece permanecer en el hogar familiar. Por lo tanto, se produciría una fase prolongada del ciclo de la vida que está situada entre la adolescencia y el momento de ser adulto, entendiendo como ello el completar todas las fases propias a la vida adulta. La razón de esta estrategia se sustenta como una defensa por parte de los jóvenes ante las sociedades de riesgo.

## **El enfoque multidisciplinar desde el que parte esta investigación**

Ante estas cuestiones, la intención de esta investigación es incorporar un enfoque multidisciplinar que posibilite combinar los distintos elementos que pudieran ayudar a la transformación del proceso de emancipación en España, con la idea de superar las limitaciones que presentan los enfoques más reduccionistas. Por ello, el punto de partida teórico de este trabajo parte de una perspectiva economicista e institucional a partir de los modelos de regímenes de transición que desarrolla Walther (2006) según los estados de bienestar, al entender que la transición a la vida adulta se lleva a cabo dentro de un contexto de emancipación que está determinado por una serie de factores entre los que destacan:

**-Institucional:** a pesar de que en los últimos tiempos haya crecido la consideración de la importancia de la individualidad del joven en la planificación de las distintas estrategias de emancipación, el sector juvenil sigue completando las fases del ciclo vital en un contexto normativo e institucional que determinará muchas de las oportunidades laborales o educativas que tendrán a lo largo de sus vidas. Además, en aquellas situaciones de dificultades propias del hogar familiar se espera que las instituciones públicas sean las responsables de ofrecer oportunidades y ayudas que puedan facilitar la emancipación. De este modo, se prestará especial atención a aquellas políticas públicas que afecten, de manera directa o indirecta, al sector juvenil.

**-Educativo:** una de las dimensiones del paso de la juventud a la edad adulta es la finalización de la etapa educativa con el consiguiente acceso al mercado laboral. Durante la etapa de formación educativa los jóvenes adquirirán distintas herramientas y conocimientos que serán claves a lo largo de su vida para encontrar un trabajo con buenas condiciones económicas, un aspecto que les facilitará alcanzar la solvencia económica necesaria para iniciar el proceso de emancipación. Por consiguiente, el sistema educativo al que se incorpora es una estructura propia de cada país que tiene una serie de características, limitaciones y ventajas que son determinantes en las elecciones de las trayectorias educativas y en la formación de los jóvenes.

-**Trabajo:** otra de las dimensiones claves en la transición a la vida adulta es la económico-laboral. Las características del mercado de trabajo al que acceden los jóvenes son definitorias para la explicación del patrón de emancipación residencial juvenil y su retraso, ya que la experiencia de los jóvenes ante la precariedad y las faltas de oportunidades del mercado laboral son factores centrales en la modelación de las expectativas a la hora de establecer la ruta de salida del hogar familiar. Cada país tiene un mercado laboral con unas estructuras muy delimitadas que repercutirán tanto en las estrategias de encontrar empleo, como en las de independencia residencial.

-**Vivienda:** la última dimensión de la transición a la vida adulta es el abandono del hogar de los progenitores. El parque de viviendas y la configuración del mercado inmobiliario de un país serán claves para determinar la emancipación y las formas de convivencia.

A su vez, durante el análisis de estos indicadores se deben tener presentes las consecuencias que la crisis económica de 2008 tuvo sobre ellos. Y es que existe cierto consenso en la literatura sobre el hecho de que las condiciones económicas, tanto generales como individuales, moldean las pautas de formación de nuevos hogares, por lo que las recesiones ocasionan retrasos y cambios en este proceso (Lee y Painter, 2013).

Uno de los efectos generalizados han sido los reajustes y la reducción del gasto público en casi toda la Unión Europea, una tendencia común en los últimos años que se ha visto incrementada a raíz de la crisis financiera, aunque sobre todo con especial énfasis en los países del sur de Europa. Sin duda, una de las repercusiones que ha tenido esto ha sido un impacto sobre los presupuestos de las políticas sociales. Sobre este hecho Moreno Mínguez *et al.* (2012, p. 27) manifiestan que “el reajuste de la financiación social es un asunto urgente y compartido en toda Europa, con reorganización de las agendas políticas en términos de cuantía de las prestaciones, formas de intervenciones y colectivos de beneficiarios. En algunos países se incrementan los mecanismos de regulación de las prestaciones sociales para reducir el gasto público”.

Además, en muchos países, y a raíz de la crisis económica, el mercado laboral experimentó un importante derrumbe que tuvo al sector juvenil como uno de los grupos sociales más afectados por la destrucción masiva de empleos. Este hecho no solo ha

dificultado en los últimos años la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo sino que, además, ha afectado de manera generalizada a la precariedad de sus trayectorias laborales, cuestiones que inciden directamente en sus aspiraciones de independizarse por su impacto en términos de falta de seguridad y de estabilidad de los recursos económicos necesarios para acceder al mercado inmobiliario, lo que ha podido tener consecuencias negativas en la emancipación de los distintos regímenes de transición.

## Capítulo 1

### **El Contexto de emancipación: una perspectiva comparada a nivel europeo a partir de los estados de bienestar**

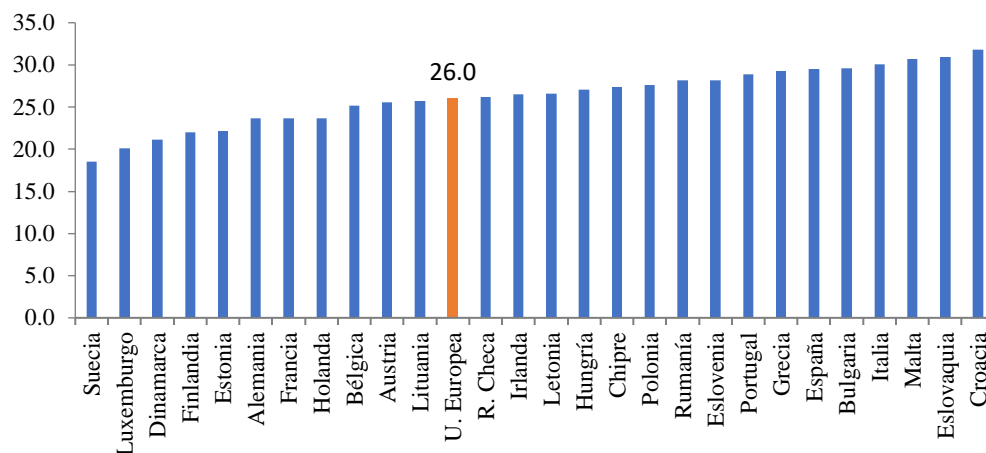
Desde una perspectiva que combina lo institucional con lo económico, el punto de partida es reconocer que la emancipación de los jóvenes no sigue un patrón similar en todos los países europeos y que presenta importantes diferencias entre ellos al existir contextos de emancipación distintos. Las razones que explican esas variaciones son muy diversas y dependen tanto de factores estructurales particulares, entre los que destacan las condiciones socioeconómicas para acceder a una vivienda y el marco normativo e institucional que regula el mercado de vivienda, como de componentes sociológicos generales e, incluso, de actitudes psicológicas particulares (Jurado, 2003).

La consecuencia es que en Europa no existe ni una convergencia hacia una edad media común en el momento de dejar el nicho familiar ni hacia una forma determinada de hacerlo (Buchmann y Kreisi, 2011). De hecho, Blossfeld *et al.* (2005) manifiestan que en un mundo globalizado las transiciones juveniles se han vuelto más heterogéneas que antes debido a los riesgos sociales y a la mayor complejidad a la hora de gestionarlos. Además, Mayer (2001) concluye que la heterogeneidad seguirá ampliándose a pesar del proceso globalizador, ya que los retos que presenta este fenómeno, y que afectan directamente a toda la sociedad, son respondidos por los países de manera diferente según sus características propias y por las medidas políticas que adopten.

Estas diferencias de edad sobre el momento en el que se produce la independencia residencial son visibles en el Gráfico 1.1. Así, por ejemplo, mientras que los jóvenes de los países nórdicos abandonan la vivienda familiar a una edad temprana, en los países meridionales toman esa decisión de forma mucho más tardía (Allen *et al.*, 2004).



Gráfico 1.1. Edad media de emancipación en la Unión Europea (2018)



*Fuente:* Eurostat.

Este hecho hace que los estudios con perspectiva comparativa entre países ayuden a extraer conclusiones sobre qué factores estructurales pueden tener mayor o menor incidencia sobre la emancipación de cada país examinado (Breen y Buchmann, 2002; Walther *et al.*, 2009). Por esta razón, y porque España pertenece a un organismo supranacional que incide en su economía y política, como es la Unión Europea, se ha optado por realizar un análisis comparado de España con respecto al resto de países miembros de la UE.

El análisis se hace a partir de la categoría de “régimen de transición” desarrollado por Walther (2006), que se diferencia en distintos modelos según el tipo de estado de bienestar en el que se produzca dicha transición. El objetivo es comparar la emancipación de los jóvenes españoles con la de sus coetáneos europeos para poder determinar las estructuras y características que retrasan el abandono del hogar familiar en España.

No obstante, es necesario tener presente que se describen modelos y no sistemas nacionales específicos a excepción de España por ser el objeto de estudio. Esta opción provoca que se diluyan las diferencias propias que presentan los países que integran un mismo modelo, lo que puede ser considerado como una limitación de este enfoque.

A pesar de ello, el concepto de régimen de transición ayuda a entender el contexto de emancipación en el que transcurrirá la transición a la vida adulta y permite tener en cuenta las incidencias generales propias de los aspectos culturales y de las transiciones

educativas, laborales y residenciales de los jóvenes en cada marco nacional (Moreno Mínguez *et al.*, 2012). Sobre esta cuestión Walther *et al.* (2009, p. 15) manifiestan que “el término de régimen se refiere al poder que tienen tales constelaciones en la medida en que explican los fundamentos de las instituciones y las políticas, pero también sirven como marcadores de la orientación biográfica de los individuos”.

En lo que respecta a los estados de bienestar que dan cuerpo a los distintos modelos, Walther (2006) determina los distintos regímenes de transición a partir de la tipología de Esping-Andersen (1990) y Gallie y Paugman (2000).

En principio, Esping-Andersen estableció tres modelos de estados de bienestar a los que denominó corporativista, liberal y socialdemócrata a partir del análisis de tres aspectos fundamentales: el grado de desmercantilización, interpretado como las intervenciones gubernamentales para cubrir las necesidades básicas de la población y que permiten depender en menor medida del mercado; las formas de estratificación social y las políticas empleadas para ello; y la combinación entre la familia, el Estado y el mercado a la hora de proveer los distintos servicios necesarios para la sociedad (Esping-Andersen, 1990).

Sin embargo, Esping-Andersen en su tipología no incluyó a los países mediterráneos con la excepción de Italia al que clasificó en el modelo corporativista. Ante esta situación diferentes investigadores han elaborado un nuevo régimen de bienestar para englobar a los países del sur de Europa al que han denominado modelo rudimentario o mediterráneo (Leibfried, 1992; Ferrera, 1996); tipología que fue asumida más tarde por el propio Esping-Andersen (1999). En este sentido, Walther (2006) incluye un cuarto régimen denominado “Subprotector” en el que encuadra a España, Italia y Portugal.

Además, hay que destacar que tras la caída de la Unión Soviética y la incorporación de los países excomunistas al sistema capitalista también surgió el debate sobre si era preciso elaborar otro nuevo modelo, el “transicional”, que agrupase a estos Estados o si, por el contrario, debían ser clasificados dentro de los regímenes ya existentes (Fenger, 2007). Ante la falta de consenso académico sobre la necesidad de elaborar una nueva tipología que encuadre a estos países se ha optado por no incluir al modelo transicional en esta investigación. Además, a esto se une el hecho de que existen importantes diferencias

entre estos países que dificulta la homogeneización de los factores en categorías generales que permitan establecer el estudio comparativo y extraer resultados concluyentes.

A continuación se examinarán las características claves de cada modelo de transición juvenil con el objetivo de identificar qué particularidades de cada régimen de bienestar inciden de manera determinante en la independencia residencial de los jóvenes de la Unión Europea.

### **1.1. El modelo de transición juvenil socialdemócrata**

El modelo socialdemócrata, que engloba a países nórdicos como Finlandia, Suecia y Dinamarca, se caracteriza por el desarrollo de unas estructuras de bienestar orientadas a partir de los efectos socioeconómicos producidos por la política liberal y el libre mercado. Por ello tiene como objetivos fundamentales el pleno empleo y la igualdad social, es decir, procurar que todas las personas tengan acceso a los recursos y medios necesarios para que puedan ser parte activa de la comunidad y no queden excluidos de ella. De este modo, existe un acuerdo tácito entre la sociedad civil y las instituciones públicas con la finalidad de alcanzar estas metas mediante un amplio y sólido estado de bienestar que preste los servicios necesarios, lo que supone un gran grado de desmercantilización (Esping-Andersen, 1990).

Para tal fin se desarrollan políticas sociales redistributivas que permiten realizar grandes gastos públicos expansivos, gracias a una alta imposición fiscal y a un sistema tributario progresivo que recae sobre las personas con mayores niveles de ingresos (Anxo *et al.*, 2010).

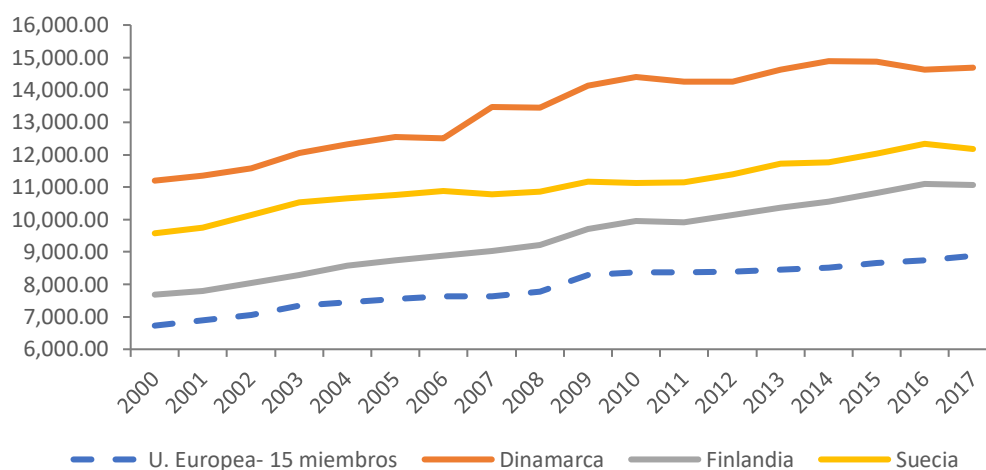
Gracias a la contribución fiscal de la ciudadanía, los Estados que conforman este modelo pueden disponer de un sistema educativo y sanitario público y universal, junto con políticas de apoyo social y familiar cuya finalidad global es dar la cobertura necesaria en cualquier etapa vital en la que se encuentre el individuo (Esping-Andersen, 1990).

Y no solo eso, sino que estos países destinan un importante gasto en protección social que permite aliviar las posibles dificultades socioeconómicas en aquellos casos en los que los servicios públicos anteriores no puedan cubrir las necesidades de los distintos

sectores de la población. En palabras de Navarro Ruvalcaba (2006, p. 118): “lo que los estados de bienestar socialdemócratas hacen es, simplemente, intentar excluir de ese ámbito (el privado) ciertos bienes y servicios. El cuidado de la salud, la educación, la vivienda y la seguridad en el ingreso —formalmente todos los bienes se obtienen como mercancías a cambio de dinero en efectivo en las economías de mercado— son —en los estados de bienestar socialdemócratas— asignados en lugar de ser beneficios y servicios del Estado. Ya no son comprados y vendidos, su distribución no es dictada por la subyacente distribución del ingreso y la riqueza dentro de la comunidad. Eso abre el camino, a su vez, para que esas mercancías sean distribuidas en la comunidad de forma más igualitaria de lo que lo son el ingreso o la riqueza”.

En el Gráfico 1.2 se puede comprobar cómo los países nórdicos han realizado un gasto social por habitante superior a la media europea año tras año. En 2017, la última fecha para la que existen datos disponibles, Dinamarca, Suecia y Finlandia fueron el segundo, tercer y cuarto país, respectivamente, que más dinero destinaron a protección social por habitante, tan solo por detrás de Luxemburgo.

Gráfico 1.2. Gasto total en euros por habitante en protección social en la UE (precios constantes a 2010) (2000-2017)

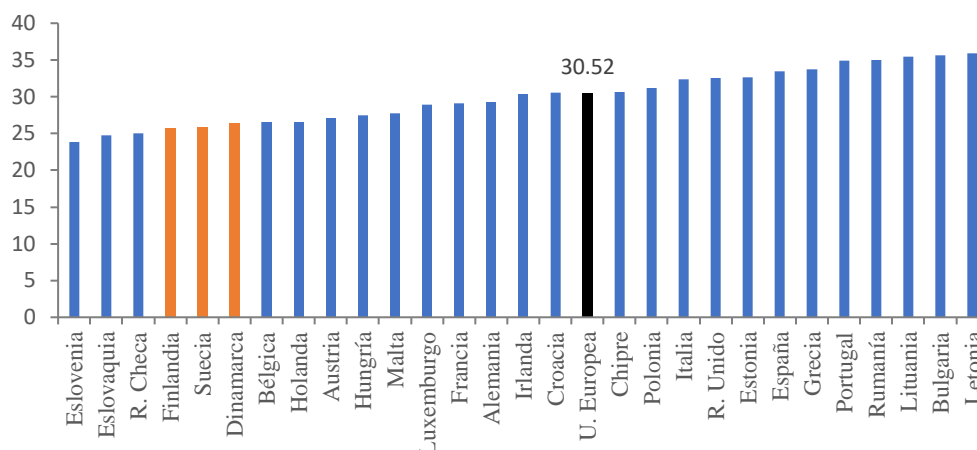


*Fuente:* Eurostat.

Así, gracias a las importantes políticas distributivas, al gasto social y a unos servicios públicos universales y bien consolidados, los países del modelo socialdemócrata

suelen ser los más igualitarios de Europa (Stephen *et al.*, 2010). En este sentido, la media del índice de Gini<sup>1</sup> de los últimos 15 años muestra que Finlandia, Suecia y Dinamarca se encuentran entre los países de la Unión Europea que menos nivel de desigualdad tienen en sus sociedades.

Gráfico 1.3. Media del índice de Gini en la UE (2005-2018)



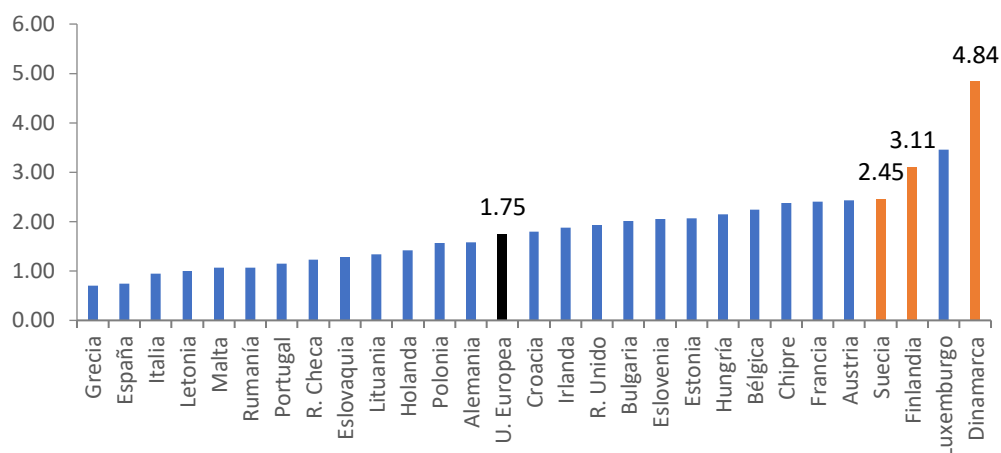
*Fuente:* Eurostat.

Se trata, por tanto, de un sistema en el que existe una significativa defensa y promoción de los derechos individuales y sociales y que gira en torno a la igualdad de oportunidades y la universalidad. Esta búsqueda de la igualdad que guía a las acciones de este modelo ha hecho que la mujer esté completamente incorporada al mercado laboral desde hace muchos años y, no solo eso, sino que tengan bajas tasas de desempleo femenino. Esto es posible gracias, sobre todo, a la aplicación de políticas familiares tempranas dirigidas a desarrollar un sistema sólido de cuidado infantil y a tener en funcionamiento guarderías de alta calidad a precios asequibles que posibilita la

<sup>1</sup>El coeficiente de Gini se trata de la medida representativa de la desigualdad que suele usarse con mayor frecuencia en las distintas investigaciones. Esta variable expresa la desigualdad existente en una población a partir de los ingresos obtenidos por las personas y puede oscilar entre 0 y 1 (o en escala del 0 al 100), siendo 0 la máxima igualdad posible y 1 el mayor grado de desigualdad. Se trata, por tanto, de la variable que representa más adecuadamente la situación de desigualdad en que se puede encontrar un país.

conciliación entre la familia y el trabajo (Fitzpatrick y Stephens, 2007a). Al respecto, se puede observar cómo los Estados incluidos en el modelo socialdemócrata son los que, de media, mayor porcentaje del PIB han destinado a la política familiar en los últimos 13 años. En el caso danés, que ocupa el primer lugar, en esta década el presupuesto que ha dirigido a esta materia llega a ser el triple que la media en la UE.

Gráfico 1.4. Gasto público medio en asuntos familiares respecto al PIB en la UE (en porcentajes) (2005-2018)



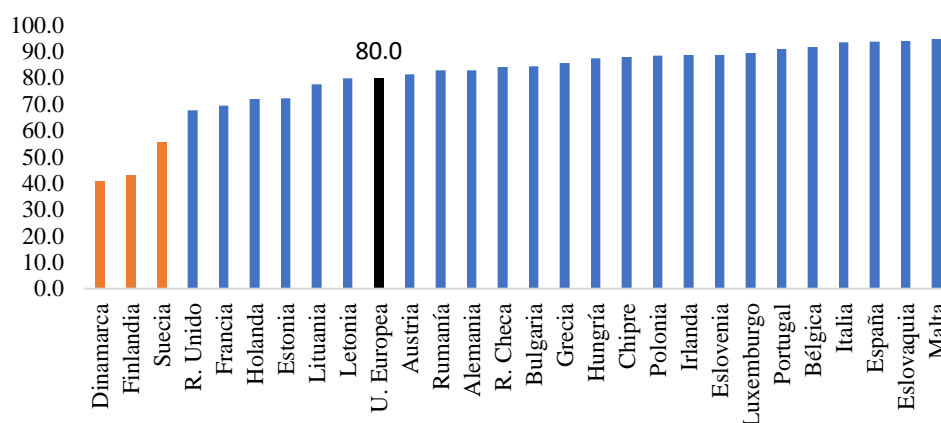
*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

Además, entre estos derechos también se incluye un fuerte compromiso colectivo en apoyar a los jóvenes, no solo por ser un recurso potencial para el futuro de la sociedad, sino para que disfruten de su juventud y tengan las herramientas necesarias para alcanzar de la manera más adecuada posible la autonomía y la independencia (Walther, 2006). Para ello se desarrollan políticas de juventud que inciden en los aspectos educativos y de capacitación con el fin de facilitar y garantizar el empoderamientos de los jóvenes, a lo que se añade un importante fomento de oportunidades para que este grupo social se sienta parte de la comunidad (Wallace y Bendit, 2009).

Así, los países que forman parte del modelo socialdemócrata se caracterizan porque la emancipación juvenil se produce a edades tempranas, entre los 19 y 21 años (Gráfico 1.1). Esto hace que los jóvenes de estos países tengan la menor tasa de coresidencia con sus padres de toda la UE. Cabe destacar que la diferencia con la media europea es abismal,

ya que mientras que en Dinamarca o en Finlandia tan solo algo más del 40% de la población menor de 25 años vive con sus progenitores, el promedio para la UE es el doble de ese porcentaje con un 80% de cohabitación. Además, la comparación de este modelo con países pertenecientes a otros regímenes, como España (93,7%) para el mediterráneo, Francia (69,4%) para el corporativista o R. Unido (67,6%) para el liberal, permite observar la disparidad existente en lo que respecta a la emancipación residencial en este tramo de edad.

Gráfico 1.5. Porcentaje de adultos jóvenes de entre 18 y 24 años que viven con sus padres en la UE (2018)



*Fuente:* Eurostat.

Esto sucede, en parte, debido a la existencia de un patrón cultural intergeneracional de autonomía residencial en el cual los progenitores prestan recursos económicos a sus hijos para garantizar que consigan independizarse, a lo que se unen ambiciosas políticas públicas como becas educativas, ayudas al pago de la vivienda o generosas prestaciones por el desempleo para fortalecer los procesos de abandono del hogar familiar y que la pérdida del empleo no suponga dificultades económicas insalvables que provoquen la vuelta con sus padres (Moreno Mínguez *et al.*, 2012).

Uno de los factores que incide en estas tasas de coresidencia es el sistema escolar público y gratuito con el que cuentan estos países, que gracias a su flexibilidad permite combinar los planes de estudios con la formación profesional o con el desempeño de trabajos a tiempo parcial. Esto hace que los jóvenes, desde edades muy tempranas, no

solo tengan acceso a recursos económicos que favorecerán su independencia sino que adquieran experiencia y capacidades laborales que les facilitarán la incorporación al mercado de trabajo al finalizar la formación educativa (Walther, 2006).

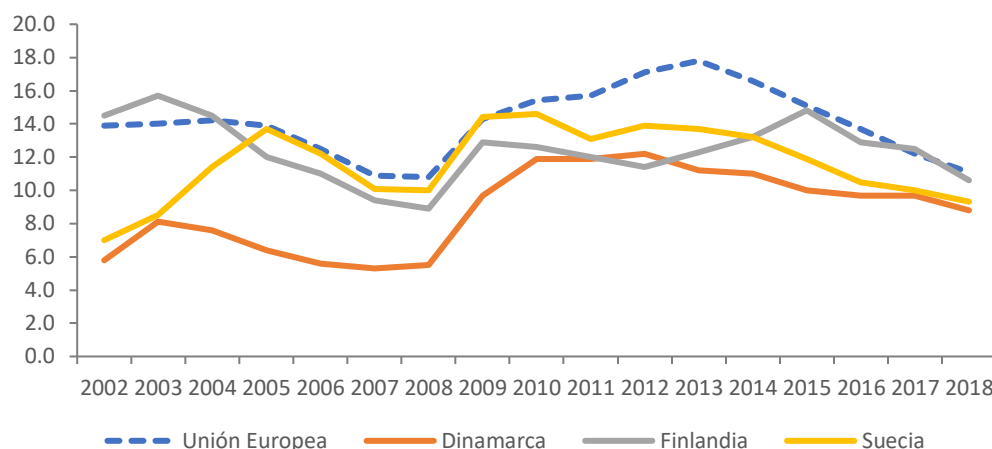
A esto hay que añadir que durante las etapas de educación o la transición al empleo existe un importante entramado institucional enfocado a la orientación laboral de los más jóvenes, cuyo objetivo principal es reforzar la motivación de los individuos para mantener un desarrollo personal constante y evitar la creación de frustraciones laborales y académicas ante la posible falta de oportunidades.

El fomento del empleo entre los más jóvenes también está apoyado por un sistema de seguridad social que coordina políticas de formación, subsidios y potentes políticas activas de empleo juvenil (Halvorsen y Hvinden, 2018). Esto hace que las partidas presupuestarias destinadas a estas cuestiones presenten los mayores porcentajes de gasto en políticas de empleo sobre el PIB de toda la UE. No obstante, desde el año 2000 en Suecia y en Finlandia las medidas protectoras contra el desempleo juvenil se han reducido, un hecho que, además, se agravó con la crisis económica de 2008 (Lorentzen *et al.*, 2014).

Estas acciones han ayudado a que el desempleo juvenil tradicionalmente se sitúe en niveles bajos, puesto que se espera que los que no están laboralmente activos se encuentren estudiando. Además, generalmente el desempleo entre los jóvenes no suele persistir durante grandes periodos de tiempo, por lo que no experimentan importantes desconexiones con el mercado laboral y muchas veces la acción de búsqueda de empleo está relacionada con el hecho de que un número importante de jóvenes buscan trabajo para compaginarlo con sus estudios (Lundahl y Olofsson, 2014).



Gráfico 1.6. Tasa de desempleo entre los jóvenes de 20 a 29 años en los países incluidos en el modelo socialdemócrata (2002-2018)



*Fuente:* Eurostat.

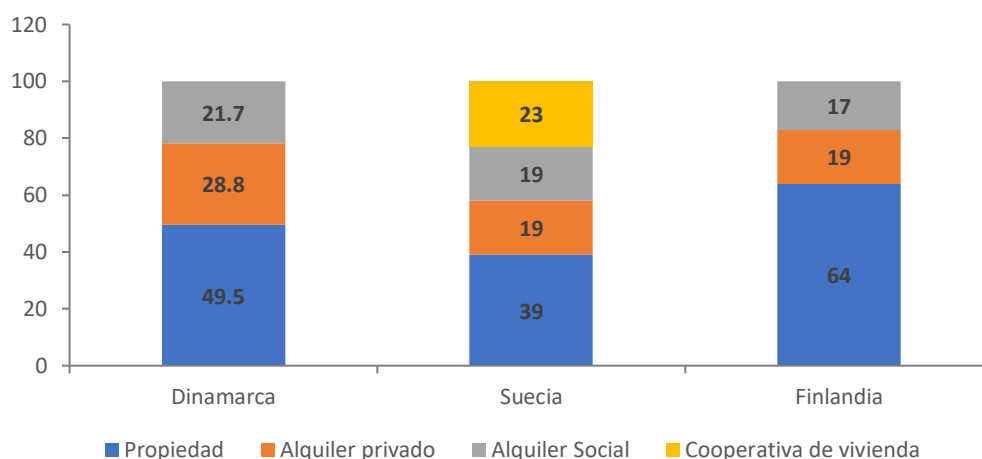
De este modo, se puede comprobar cómo en los últimos 16 años los niveles de desempleo juvenil en los países nórdicos han sido relativamente bajos. Incluso a pesar de las consecuencias que tuvo la crisis económica la tasa de desempleo para los jóvenes de 20 a 29 años se mantuvo por debajo del 15%. Asimismo, tras la mejora macroeconómica de los últimos años la tasa de desempleo de los jóvenes de los países pertenecientes al régimen socialdemócrata no supera casi el 10%.

Los bajos niveles de desempleo han permitido que los jóvenes de los países socialdemócratas consigan relativamente rápido la autonomía económica necesaria para abandonar el hogar familiar. A esto se unen otros dos factores claves que permiten su pronta emancipación: el sistema residencial y las políticas de vivienda desarrolladas. Y es que tradicionalmente estos países han combinado importantes ayudas directas al pago de la vivienda junto con la asistencia social para mayores de 18 años con independencia de los ingresos familiares, lo que ha dado como resultado a lo largo de los años escasos niveles de exclusión residencial (Fitzpatrick y Stephens, 2007b).

Además, estos países también han destacado por no tener la propiedad de la vivienda como principal régimen de tenencia y por disponer de un importante parque de alquiler social en buenas condiciones o, incluso, por desarrollar otras alternativas diferentes a la compra, como ha sido el caso de la vivienda cooperativa en Dinamarca.

Gracias a estas características se ha facilitado la emancipación de los jóvenes y se ha evitado la exclusión residencial de la población en general. Así, se puede comprobar que en el caso danés la propiedad no alcanza el 50%, mientras que en el parque de viviendas sueco este tipo de tenencia no supone ni el 40%. Es cierto que Finlandia tiene un sistema residencial en el que la propiedad sí tiene una mayor importancia que en los otros países nórdicos, un hecho que le asemeja más al parque de viviendas de los estados del modelo corporativista que al socialdemócrata; pero, a pesar de ello, tradicionalmente ha presentado alternativas sólidas a la propiedad, como es el alquiler social o el privado, lo que ha compensado las posibles dificultades que puede suponer el alto porcentaje de propiedad para la emancipación residencial de los jóvenes finlandeses.

Gráfico 1.7. Régimen de tenencia de la vivienda en los países incluidos en el modelo socialdemócrata (2017)



*Fuente:* Pittini *et al.*, 2017; elaboración propia.

Sin embargo, como indica Bosch Meda (2015, p. 44) desde hace un tiempo esto está cambiando: “a pesar de todo este vasto desarrollo de la política de vivienda, en estos países la propiedad creció de forma considerable antes de la crisis y, con ello, los precios, la deuda hipotecaria de las familias y el esfuerzo económico medio para acceder a la vivienda. De hecho, en estos países, el esfuerzo económico es de los más altos de toda Europa y, por tanto, un gran segmento de la población depende por completo de las ayudas publicas para pagar el coste de su vivienda”.

Por ejemplo, en Finlandia en los últimos años la asequibilidad de una vivienda ha disminuido notablemente, lo que en parte se explica por un aumento en la relación precio-alquiler. Esto ocurre porque los altos precios en el mercado libre se han unido a la escasez de la vivienda en alquiler, lo que ha hecho que el coste de arrendar haya experimentado un importante aumento que complica la formación de nuevos hogares. A esto se le añade el menor apoyo presupuestario que este país está destinando últimamente a la nueva construcción, que tendría como objetivo que los municipios promoviesen nuevas edificaciones para ampliar el parque de viviendas y acabar así con el exceso de demanda. Además, los hogares finlandeses han visto aumentar su deuda hasta situarse en niveles similares a los de la zona euro como consecuencia del incremento del precio de la vivienda antes de la crisis económica de 2008 y una posterior escasa caída (Marrez y Pontuch, 2013). También en el caso de Suecia se ha dificultado el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes. Esto ocurre porque los altos precios de la vivienda se han unido a la escasez de la misma, ya que 255 de 290 municipios alertan de la necesidad de ampliar el parque de viviendas y se calcula que harán falta aproximadamente unas 710 mil en los próximos 10 años. Esto también se ha visto agravado por los precios del alquiler y la insuficiente oferta, que hacen que los estudiantes y los trabajadores jóvenes experimenten dificultades para acceder al mercado inmobiliario (Pittini *et al.*, 2017).

Sin duda, el debilitamiento del estado de bienestar en las últimas décadas es una de las causas de esta situación, un hecho que, además, se vio potenciado por la crisis económica iniciada en el año 2008. Estas circunstancias económicas han provocado que el Estado tenga dificultades para soportar el importante gasto público que supone el mantener las extensas redes de protección y promoción de estos derechos. De hecho, como señala Bosch Meda (2015, p. 43), “los principios de universalidad y solidaridad del modelo nórdico de bienestar han sufrido considerables retrocesos tanto cuantitativos como cualitativos. Las dificultades económicas para mantener los inmensos costos en transferencias sociales han socavado ideológicamente el carácter universal de los servicios públicos, y en ciertos ámbitos, como, por ejemplo, en política de vivienda, se ha redefinido el papel del Estado”.

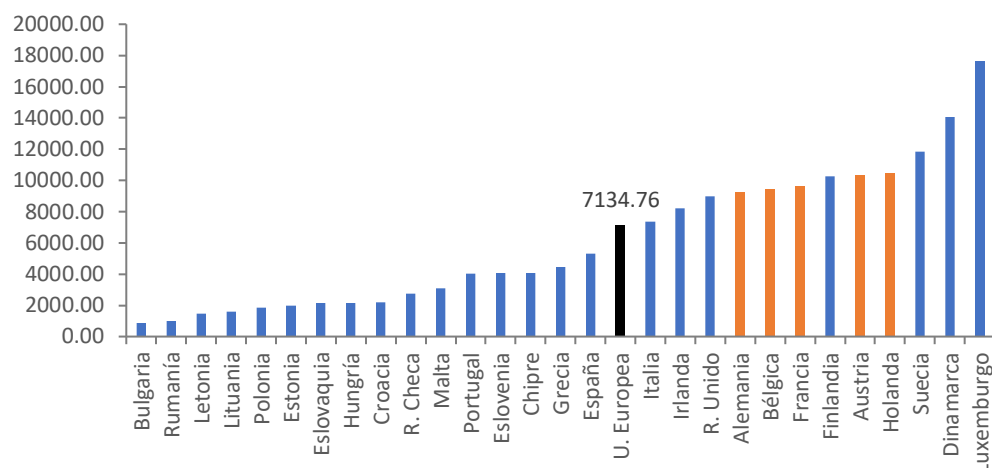
En resumen, son los jóvenes de los países nórdicos los que disfrutan de un contexto de emancipación mucho más favorables que sus coetáneos europeos, lo que hace que sean los que se independicen residencialmente a edades más tempranas. Esto ha sido posible gracias a un sólido y generoso estado de bienestar que ha proporcionado distintas ayudas sociales y económicas dirigidas a este fin y que, además, reconoce y defiende el derecho a la juventud. El mercado laboral y el sistema educativo también son otros elementos que facilitan la transición a la vida adulta, ya que presentan numerosas oportunidades al sector juvenil y en muchas ocasiones permiten alternar y complementar capacitación con educación. A esto se une, a su vez, un flexible parque de viviendas que presenta distintas alternativas que facilitan la incorporación de los más jóvenes al mercado inmobiliario.

No obstante, en los últimos años se han producido una serie de acontecimientos relacionados con el debilitamiento del estado de bienestar, como la privatización de algunos elementos públicos, la disminución de la protección contra el desempleo o la reducción de las políticas de vivienda, que abre un escenario nuevo y que puede repercutir directamente sobre la emancipación residencial de los jóvenes de estos países.

## **1.2. El modelo de transición juvenil corporativista**

Los países pertenecientes al modelo corporativista, como Alemania, Austria, Francia, Bélgica u Holanda, destacan por tener un Estado bastante activo en la provisión de servicios de bienestar. Al respecto, en el Gráfico 1.8 se puede comprobar que Holanda, Austria y Francia, por ejemplo, son de los países de toda la Unión Europea que más euros de media por habitante han gastado en protección social en los últimos años. Además, el resto de los países que son incluidos en el régimen corporativista también destinaron un presupuesto mayor que la media de la UE y muy cercanos a los niveles de los países nórdicos, entre los que se pueden destacar a Austria y a Holanda.

Gráfico 1.8. Gasto medio en euro por habitante en protección social en la UE (a precios constantes de 2010) (2005-2017)



*Fuente:* Eurostat.

No obstante, no se produce la redistribución de los ingresos desde las capas sociales más pudientes hacia los sectores de la población más necesitados, puesto que las políticas de bienestar a nivel estatal parten de la protección de la estructura social existente lo que apuntala una notable estratificación de la sociedad (Hoekstra, 2003). Esto ocurre porque no establecen sus fundamentos alrededor de la igualdad, sino que lo hacen en torno a la cohesión social con el fin de alcanzar dos objetivos: la seguridad y la estabilidad (Esping-Andersen, 1990). En este sentido, Esping-Andersen (1999, p. 111) afirma que “en estos estados de bienestar conservadores y fuertemente "corporativistas", la obsesión liberal con la eficiencia del mercado y la mercantilización nunca fue preeminente (...) el énfasis del Estado en mantener las diferencias de estatus significa que su impacto redistributivo es insignificante (...). Lo que predominaba era la preservación de los diferenciales de estatus; los derechos, por lo tanto, estaban unidos a la clase y al estatus”.

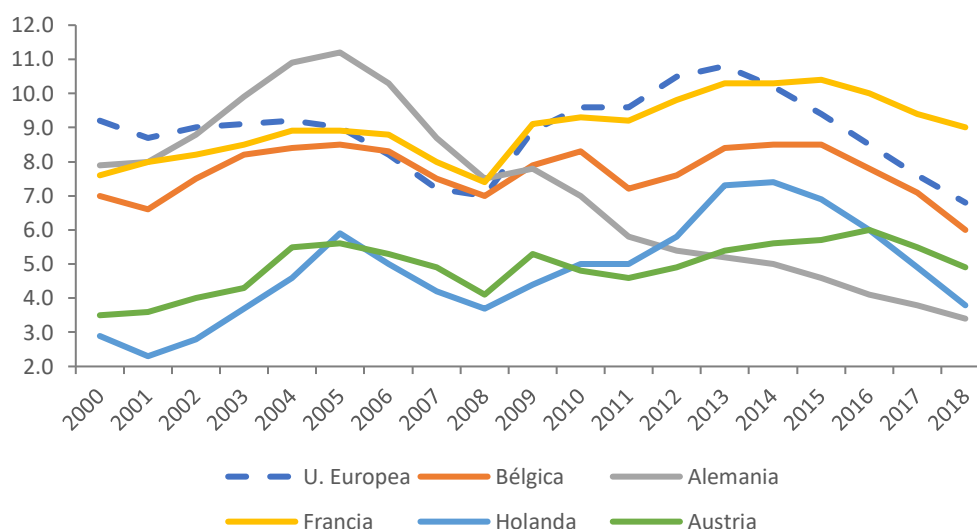
Así, el estado de bienestar en estos países se aleja de la universalidad de los servicios y de la redistribución de la riqueza típica del modelo socialdemócrata. Esto hace que el grado de desmercantilización en estos casos sea más moderado al tener el libre mercado un papel más determinante como proveedor de servicios sociales. Como indica Navarro Ruvalcaba (2006, p. 120), “su meta principal es la de conservar el orden social existente y su modelo de distribución, en contraste con el estado de bienestar

socialdemócrata y su franca intención de alterar el modelo por medio de la redistribución”.

Para ello considera que el empleo debe de ser el eje central de la intervención pública, con la intención de que todo el mundo disponga de algún tipo de recurso económico para poder acudir al mercado a cubrir sus necesidades (Esping-Andersen, 1990). De este modo, se puede comprobar en el Gráfico 1.9 cómo en los últimos 20 años la tasa de desempleo no ha superado el 12% en ninguno de los países del modelo corporativista y, de hecho, en el caso de Austria u Holanda no ha llegado a alcanzar ni siquiera un 7,5% en todo este tiempo.

Además, a pesar del deterioro del mercado laboral ocasionado por la crisis económica de 2008, las tasas de desempleo no han sido tan altas como en otros países de la Unión Europea y en los últimos años se han vuelto a situar en su mayoría en torno al 5%, excepto Francia que presenta una tasa algo superior con un 8,5%. Cabe destacar el 3,4% de desempleo en Holanda, o el 3,2% en Alemania que lo sitúa como el segundo país de toda la UE con menos tasa de desempleo, tan solo por detrás de la República Checa.

Gráfica 1.9. Tasa de desempleo en los países del modelo corporativista (2000-2018)



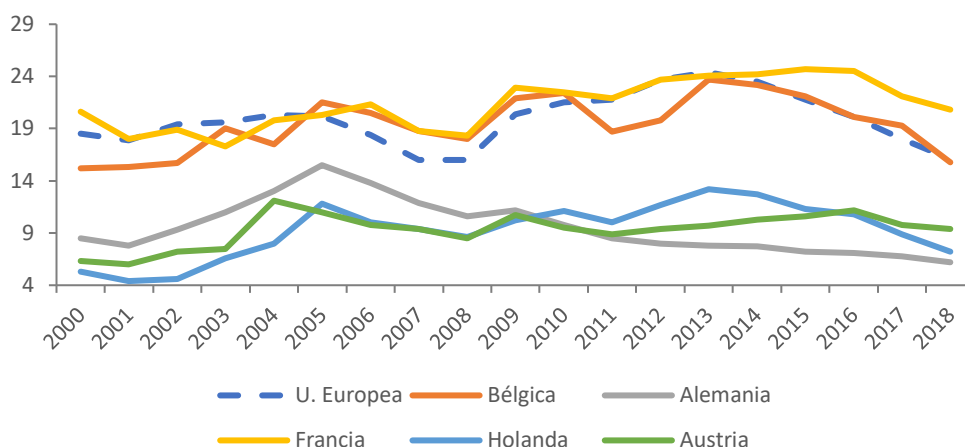
Fuente: Eurostat.

Los programas públicos de inserción laboral desempeñan un papel clave para conseguir estas tasas, por lo que generalmente el gasto público en políticas de empleo suele ser elevado, incluso llegando a ser en algunos casos superior a los países del modelo socialdemócrata. La razón de ello es que las políticas activas de empleo en muchas ocasiones resultan ser fundamentales a la hora de facilitar el acceso al mercado de trabajo y adquirir distintas capacidades profesionales; para ello habitualmente se establecen convenios entre el Estado, los empresarios y los sindicatos con el fin de que exista una coordinación entre estos tres actores para ajustar la oferta laboral a la demanda (Palier, 2010).

No obstante, uno de los problemas que suele presentar el mercado laboral de estos países es una importante dualización que origina con claridad dos grupos bien diferenciados de trabajadores: por un lado, aquellos que disfrutan de trabajos fijos y seguros con buenas condiciones laborales y salariales; y, por el otro, sectores de la población que tienen empleos precarios con una escasa protección (Esping-Andersen, 1990). Esta característica tiene una importante repercusión en la segmentación del mercado de trabajo, ya que uno de los requisitos necesarios para acceder a los beneficios sociales es haber contribuido lo suficiente a la Seguridad Social, por lo que con frecuencia aquellas personas que forman parte del segundo conjunto no tendrán derecho a beneficiarse de todas las ayudas públicas correspondientes al desempleo y, por tanto, quedan desprotegidas ante posibles contratiempos (Walther, 2006).

El sector juvenil normalmente forma parte de este segundo grupo de trabajadores. En este aspecto es preciso señalar que existen diferencias entre la situación de los jóvenes en el mercado laboral de cada país del modelo corporativista, ya que mientras que Francia y Bélgica tienen una tasa de desempleo juvenil por encima de la media de la UE, Austria no alcanza el 9%, o los casos de Alemania y Holanda que oscilan alrededor del 6% de desempleo juvenil.

Gráfico 1.10. Tasa de desempleo menores de 25 años en los países del modelo corporativista (2000-2018)



Fuente: Eurostat.

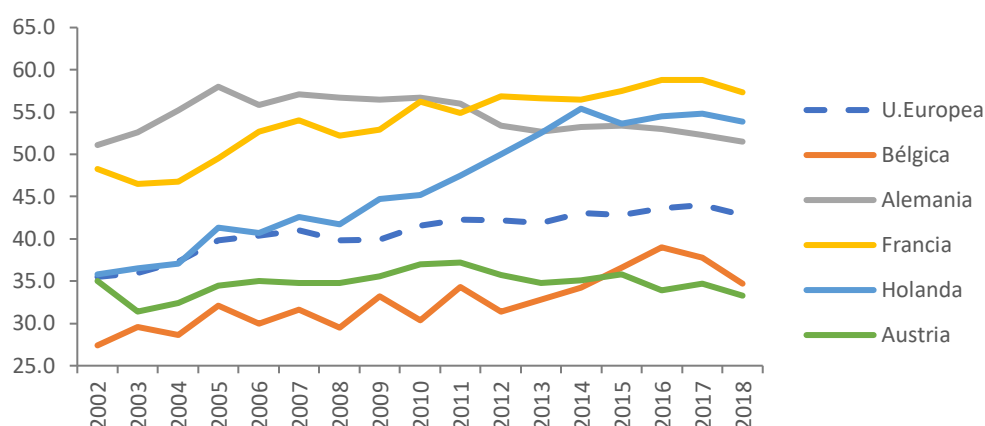
Una de las razones de ello reside en las transformaciones que la transición de la educación al trabajo ha experimentado en Francia y Bélgica en las últimas décadas. Esto produjo, entre otros efectos, una fuerte expansión de la educación y la dilatación del tiempo necesario para finalizar los estudios al fomentarse los estudios superiores en estos países. A su vez, esto supuso que desde la década de 1980 la demanda de empleos muy cualificados creciese de manera más lenta que el número de jóvenes que finalizaban sus estudios superiores, lo que provocó un desajuste en el mercado laboral entre la oferta y la demanda laboral. Esto hace que frecuentemente los jóvenes titulados tengan que aceptar trabajos para los que están sobrecualificados, lo que a su vez supone en muchos casos la expulsión del mercado laboral de los jóvenes sin estudios (Erhel *et al.*, 2010).

Mientras que, por el contrario, en países como Alemania o Austria esto no ha ocurrido ya que apostaron por unos sistemas educativos en los que la universidad no tenía un papel principal y en los que, en cambio, se le dio un gran peso a la formación profesional dual; una modalidad educativa que permite combinar acciones formativas junto con el desarrollo de un empleo, lo que facilita la transición de los jóvenes al mercado laboral. Además, también se emplea como un mecanismo de regulación entre el ámbito educativo y el laboral, ya que las ofertas de los cursos de formación profesional dual se ajustan a las necesidades del mercado de trabajo.



A pesar de ello, en el modelo corporativista el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo frecuentemente pasa por contratos precarios de empleo y por una elevada temporalidad de los mismo (Mairhuber, 2010). Esto ha sido la tendencia general en los últimos 15 años, lo que ha conducido a que actualmente en Alemania, Francia y Holanda más del 50% de los menores de 25 años que tienen un empleo estén contratados de manera temporal, un valor superior a la media de la Unión Europea.

Gráfico 1.11. Porcentaje de personas menores de 25 años empleadas temporalmente en los países incluidos en el modelo corporativista (2002-2018)



Fuente: Eurostat.

De este modo, los jóvenes no tienen acceso directo a los beneficios de la Seguridad Social porque generalmente no han cotizado lo suficiente o, si lo han hecho, ha sido en condiciones deficitarias debido a la temporalidad y precariedad que padecen. Esto hace que el mercado laboral ante el que se encuentra el sector juvenil de los países del modelo corporativista no facilite la independencia residencial de la misma manera que ocurre en el régimen socialdemócrata (Bosch Meda, 2015).

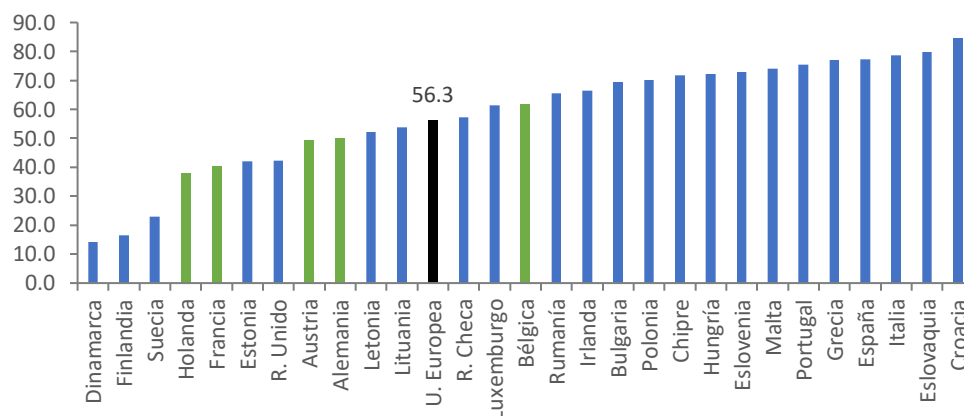
Por esta razón las familias se hacen cargo de mucho de los gastos de sus hijos no solo durante la etapa educativa, sino también durante los extensos periodos de estabilización laboral, lo que prolonga el hecho de que los jóvenes dependan financieramente de sus progenitores (Anxo *et al.*, 2010). Por ejemplo, en Francia el 50% de los padres sigue apoyando económicamente a sus hijos tras dejar el hogar familiar (Erhel *et al.*, 2010).

Además, la importancia de la familia radica en que los recursos económicos del hogar de origen serán determinantes para delimitar las posibilidades de los jóvenes en una sociedad muy estratificada y con escasa movilidad social, lo que permite conservar firmemente los estamentos propios de las familias tradicionales. Y no menos importante, la intervención social del Estado tan solo se produce cuando es rigurosamente necesario y la familia no ha podido responder como institución protectora (Hoesktra, 2003).

Al respecto, Esping-Andersen (1990) manifiesta que “los regímenes corporativos también son típicamente moldeados por la Iglesia y, por lo tanto, fuertemente comprometidos con la preservación de la familia tradicional (...). El principio de 'subsidiariedad' sirve para enfatizar que el estado solo interferirá cuando se agote la capacidad de la familia para servir a sus miembros”.

De esta manera, en el modelo corporativista la familia adopta un papel más determinante como sostén socioeconómico que facilita la transición a la vida adulta de los jóvenes que en el régimen socialdemócrata, aunque en menor medida que en el modelo mediterráneo. Esto influye en el hecho de que las tasas de coresidencia sean mayores que en los países nórdicos y que la edad a la que se produce la salida del hogar de los progenitores sea un poco más tardía, como por ejemplo en Alemania o en Francia en donde completan esta fase en torno a los 24 años (Gráfico 1.1).

Gráfico 1.12. Porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años que viven con sus padres en la UE (2018)



Fuente: Eurostat.

En este sentido, tras los países que son parte del régimen socialdemócrata, Holanda (38%) y Francia (40,2%) son los Estados que tienen un menor porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años viviendo con sus padres. Con unos valores algo más elevados están Austria (49,4%) y Alemania (50,1%), aunque también presentan unas cifras inferiores a la mayoría de los países de la Unión Europea. En cambio, la dinámica de Bélgica se separa un poco de la tendencia común de los anteriores países, y con un 61,6% presenta un valor más alto que la media europea.

En estos porcentajes también influye el hecho de que, por lo general y como se ha señalado, los periodos de formación educativa suelen ser largos, lo que retrasa el abandono del hogar familiar. Además, cuando los progenitores pueden proporcionar suficiente apoyo económico se produce con frecuencia la disociación entre la emancipación residencial y la autonomía económica de los jóvenes (Bosch, 2015), un fenómeno típico del modelo corporativista que recibe el nombre de “trayectorias independientes del modelo corporativista” (Chanvrlil *et al.*, 2009). Esto ocurre porque los jóvenes se independizan físicamente del hogar de los progenitores pero siguen dependiendo de sus recursos económicos, por lo que no se emancipan completamente de sus familias.

El parque de viviendas también es un factor explicativo de estos niveles de tasas de coresidencia. Generalmente se caracterizan por una desmercantilización de la vivienda más moderada que en el caso del modelo socialdemócrata debido a que en esta ocasión el sector privado es más determinante en el acceso a una vivienda, aunque el Estado también tiene un notable peso como proveedor de servicios relacionados con la misma (Bosch Meda, 2015).

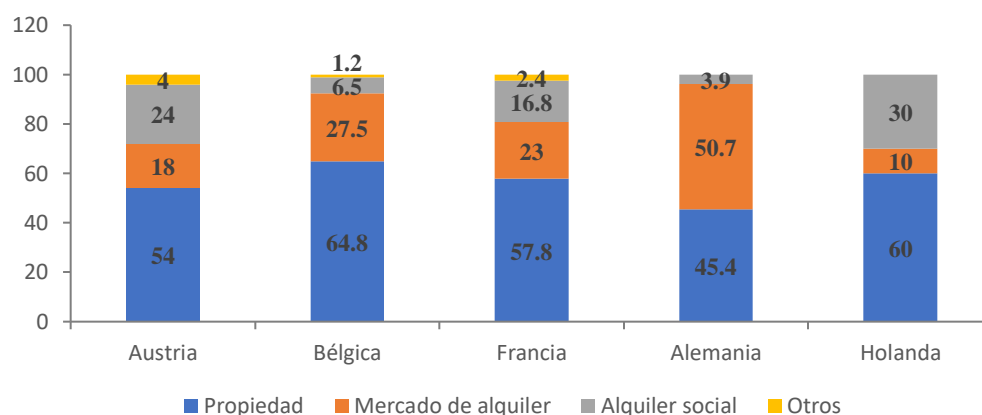
A pesar de las disparidades existentes entre los países del modelo corporativista, en general destaca la mayor relevancia de la vivienda en propiedad como principal régimen de tenencia respecto a los países nórdicos, aunque lejos de los valores del modelo mediterráneo. Sin embargo, para los jóvenes del régimen corporativista la compra de una vivienda no suele ser el primer paso de la emancipación, sino que se identifica con una fase vital posterior que coincide con el momento de alcanzar un puesto de trabajo estable

y con los ingresos necesarios que les permitan afrontar la adquisición de una vivienda (Mulder y Billari, 2010).

No obstante, la propiedad habitualmente está en equilibrio con el parque de alquiler privado y con el social. En los procesos de independencia residencial, los jóvenes consideran estas dos opciones como una buena alternativa a la adquisición de una vivienda. La razón de ello es que se ajustan adecuadamente a sus necesidades y expectativas a corto y medio plazo, como por ejemplo el hecho de que posibilitan el desarrollo de sus estudios superiores lejos del hogar familiar (Patón, 2007).

Todos los países del modelo corporativista cuentan con regulaciones estatales sólidas en materia de alquiler que garantizan a los inquilinos tanto unos contratos de arrendamiento con condiciones óptimas como el cumplimiento de los mismos, una característica que favorece a la emancipación juvenil aún cuando el individuo no sea receptor de ayudas públicas gracias a la protección y estabilidad que generalmente tienen los arrendatarios. Sin embargo, existen importantes diferencias en cuanto al tamaño del parque de alquiler dependiendo del país examinado (Pittini *et al.*, 2017).

Gráfico 1.13. Régimen de tenencia de la vivienda en los países del modelo corporativista (2017)



*Fuente:* Pittini *et al.*, 2017; elaboración propia.

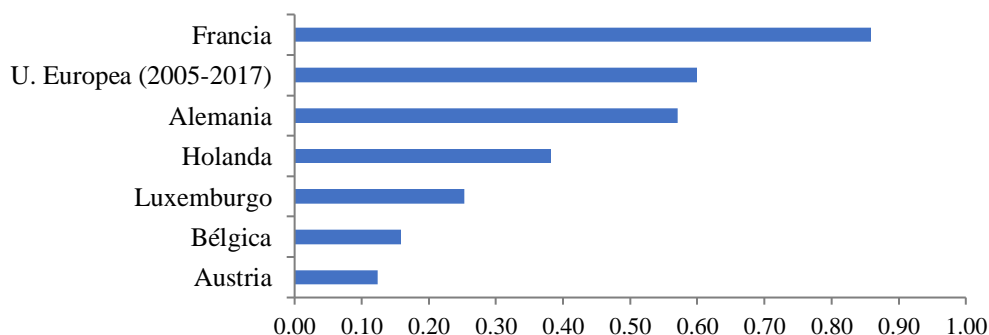
Especialmente destaca el caso de Alemania, que con un mercado de alquiler privado que representa el 50,7% del total de su parque de viviendas es el único país de la Unión Europea en el que este modo de tenencia supera a la propiedad.

Además, en lo que se refiere al parque público sobresalen los casos de Holanda y Austria, que son los únicos que tienen un alquiler social superior al privado. En el lado opuesto se sitúan Bélgica (6,5%) y Alemania (3,9%). Estas cifras ponen de relieve la importancia de la vivienda social en la emancipación juvenil, ya que el menor porcentaje de vivienda social de estos dos países coincide con el hecho de que son los que tienen una mayor tasa de coresidencia en el modelo corporativista (Gráfico 1.12).

No obstante, en el caso alemán el importante parque de alquiler privado que tiene compensa en parte esta circunstancia y hace que el valor de su tasa de coresidencia no esté muy alejado del que tienen el resto de los países de este régimen. No ocurre lo mismo en el caso belga, debido a que el tamaño del parque de alquiler privado en esta ocasión es más reducido y que, en cambio, tiene un mayor porcentaje de vivienda en propiedad, lo que incide en que su tasa de coresidencia sea mayor que la media de la UE y superior en más de 10 puntos porcentuales a los demás países corporativistas.

También ha influido en ello el hecho de que Bélgica sea el segundo país de este modelo que menos gasto ha realizado en política de vivienda en los últimos 20 años, con apenas un 0,16% del PIB. Por el contrario, Alemania y Francia, que son los otros dos países de este régimen de bienestar que tienen un menor porcentaje de vivienda social, han sido los que mayores presupuestos han destinado a esta política con un 0,86% y un 0,57% respectivamente, un hecho que ha favorecido a la emancipación residencial de sus jóvenes (Patón, 2007).

Gráfico 1.14. Gasto medio en política vivienda respecto al PIB en los países del modelo corporativista (en porcentajes) (2000-2017)



*Fuente:* Eurostat.

Austria se trata del país de este modelo que menos gasto ha destinado en materia de vivienda en las dos últimas décadas, aunque ha desarrollado estrategias orientadas a la oferta del alquiler que han tenido una incidencia positiva sobre la emancipación; medidas contrarias, por otra parte, a las que se están aplicando en otros países que priorizan un enfoque basado en la promoción de la propiedad. Sin embargo, en los últimos años la discusión política en Austria la está acaparando el problema de la asequibilidad de la vivienda y cómo esto está afectando especialmente a los hogares con pocos ingresos y a los nuevos participantes del mercado inmobiliario, como el sector juvenil.

La misma problemática también la está experimentando Alemania, sobre todo en sus grandes ciudades. A esto se ha unido un importante aumento de los precios de los arrendamientos que dificulta especialmente la emancipación residencial de los jóvenes alemanes, lo que ha originado el debate sobre la necesidad o no de aplicar medidas que regulen el precio del mercado de alquiler (Pittini *et al.*, 2017).

En definitiva, en el modelo corporativista la emancipación residencial está protegida aunque en menor grado que en el régimen socialdemócrata, y suele llevarse a cabo a una edad que coincide con la finalización de los estudios superiores. Además, cabe destacar que las variaciones existentes en las tasas de emancipación entre los propios países que conforman este modelo son justificadas por las disparidades en determinados elementos como el gasto público en política de vivienda, los heterogéneos parques de viviendas del que disponen los Estados y de la solidez del mercado laboral que repercute directamente en las tasas de desempleo juvenil.

### **1.3. El modelo de transición juvenil liberal**

El modelo liberal en Europa es característico de los países anglosajones como Irlanda o Reino Unido. Este régimen se basa en los principios básicos de igualdad de oportunidades e individualismo autosuficiente, por lo que los derechos y las responsabilidades individuales se valoran por encima de lo colectivo. Los Estados liberales parten de la creencia de que el libre mercado es un maximizador del bienestar que permite alcanzar la libertad individual y la plena ciudadanía, siempre y cuando no exista la interferencia

de agentes externos. Por ello consideran que la intervención pública supone un obstáculo en las operaciones de los mercados y, por tanto, abogan por la mínima incidencia de las instituciones públicas, con la salvedad de la regulación y salvaguarda de algunos aspectos como la seguridad o la justicia (Hemerijck *et al.*, 2013).

De este modo, estos países dejan a la iniciativa privada el abastecimiento de diversos servicios de naturaleza social, quedando el Estado relegado a una provisión residual de dichos servicios; es más, este generalmente aparece como un ente vigilante encargado de garantizar que se cumplen las condiciones necesarias para el libre intercambio en el mercado, al mismo tiempo que desarrolla acciones para estimularlo ya sea de forma pasiva o activa (Esping-Andersen, 1990).

Las características anteriores hacen que el Estado solo intervenga cuando la familia o el mercado fallan y estas instituciones no son capaces de cubrir las necesidades mínimas de los individuos, por lo que las intervenciones públicas son consideradas como asistencia social de último recurso o residual y tienen una clara orientación hacia los grupos más vulnerables que se encuentran en extrema necesidad (Castles, 2010). De este modo, si el régimen socialdemócrata tenía como meta reducir las desigualdades o en el caso del corporativista proteger la cohesión social, este modelo tiene como objetivo mantener a la población por encima de los niveles mínimos de pobreza.

Por lo tanto, los países clasificados en el modelo liberal tienen un gasto público menor en servicios sociales que los estados corporativistas o socialdemócratas. Una consecuencia directa de ello es que los países liberales minimizan los efectos de la desmercantilización al tener el mercado privado un papel dominante en la provisión de servicios sociales. A su vez, este hecho ha reforzado la estratificación existente en estas sociedades, que se dividen en dos grupos sociales bien diferenciados: aquellos individuos que reciben beneficios sociales por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad y los que tienen la capacidad económica para acudir por sí mismos al mercado a adquirir los servicios necesarios (Esping-Andersen, 1999).

Además, los niveles relativamente bajos de gasto público social se corresponden con un sistema de impuestos y transferencias con poca capacidad de recaudación, debido

a que no tiene como objetivo promover la igualdad mediante políticas redistributivas (White, 2012).

La razón de ello es que los Estados liberales, al partir de la igualdad de oportunidades, rechazan las políticas intervencionistas de redistribución de ingresos puesto que las consideran como invasoras de la libertad del individuo al quitarle parte de los beneficios que ha obtenido con su trabajo. Ante este hecho consideran que la política social no tiene que ser un soporte que simplemente aporte seguridad y estabilidad a las personas que lo necesiten, sino que debe utilizarse como un “trampolín” que permita que el individuo se reintegre en la esfera social y que una vez finalizada la ayuda temporal de la administración pública se valga por sí mismo para superar su situación de vulnerabilidad (Hemerijck *et al.*, 2013).

Para ello establecen una fuerte dependencia del empleo y de la empleabilidad para luchar contra la pobreza y la exclusión social, y vinculan los derechos y las condiciones de los beneficios sociales a la búsqueda activa de empleo o al inicio de cursos de capacitación. Es decir, en vez de desarrollar una amplia red de seguridad para los desempleados, estos países interpretan la capacidad de acción estatal como una herramienta de reincorporación al mercado laboral, considerado como el principal elemento de integración social (Hemerijck, 2013).

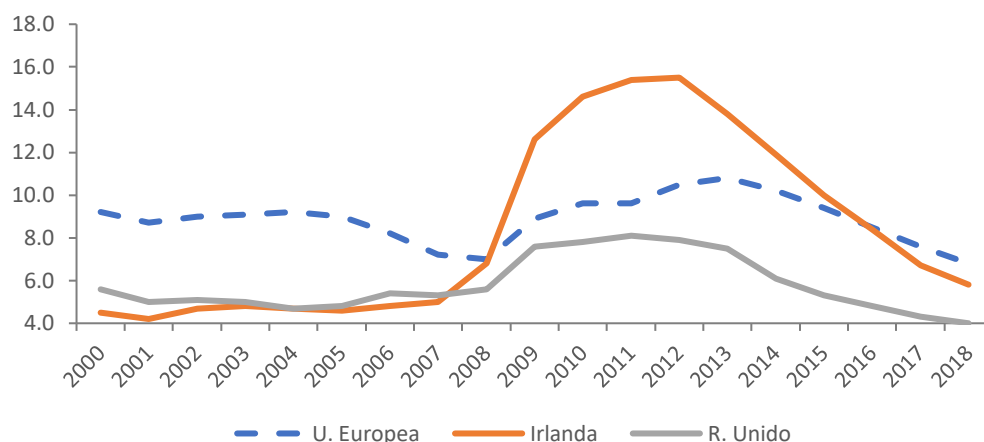
Esto ha hecho que tradicionalmente los países liberales cuenten con bajos niveles de desempleo favorecido por el alto grado de flexibilidad del mercado laboral y los bajos niveles de cualificación profesional requeridos para el empleo. Estas características provocan que se trate de mercados de trabajo fluidos con constantes entradas y salidas debido a las numerosas opciones de acceso y de movilidad dentro del mismo (Anxo *et al.*, 2010).

En este sentido, durante los primeros años del siglo XXI Reino Unido e Irlanda tuvieron unas tasas de desempleo inferiores al 6%, unos valores que se sitúan con claridad por debajo de la media de la Unión Europea. Además, en Reino Unido la crisis económica de 2008 no supuso un shock en el empleo como sí ocurrió en otros países, ya que el desempleo no superó en ningún momento el 8% y desde 2011 comenzó una recuperación constante que ha supuesto que en 2018 tenga una tasa de desempleo del 4%. Por su parte,



Irlanda sí acusó gravemente la crisis económica hasta el punto que tuvo que ser rescatada económicamente por parte de las instituciones europeas, lo que supuso que en 2012 tuviese un 15,5% de desempleo, unos valores atípicos respecto a los niveles de desempleo que suele tener, aunque lejos de los países del modelo mediterráneo. A partir de ese año comienza una dinámica positiva y constante que actualmente se mantiene en el tiempo, lo que ha dado como resultado que para 2018 la tasa de desempleo esté próxima al 5%.

Gráfica 1.15. Tasa de desempleo en los países del modelo liberal (2000-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

Estas características del mercado de trabajo, junto con la ausencia de una fuerte regulación laboral y los bajos costos de la seguridad social han facilitado relativamente la incorporación de la mujer al mercado laboral en estos países. En esto también ha repercutido el fenómeno de desfamiliarización, un proceso que ha hecho que la demanda de mano de obra femenina aumente para cubrir puestos de trabajos relacionados con asuntos familiares y de cuidados (Orloff, 2002).

Sin embargo, las mujeres normalmente ocupan puestos de trabajos más precarios que los hombres. Esto en gran medida ocurre por dos motivos interdependientes: por un lado, está el hecho de que en estas sociedades aún se mantiene el rol de la mujer como cuidadora de la familia; y, por el otro, es que, a diferencia del modelo socialdemócrata, los Estados liberales destinan presupuestos bajos a la política familiar y al cuidado infantil

que ayuden a liberar a las mujeres de estas actividades, por lo que estos servicios dependen casi en exclusividad de los recursos económicos propios de los hogares.

Así, estas dos condiciones unidas hacen que las mujeres, por lo general, dispongan de menos tiempo para poder tener un trabajo con mejores condiciones laborales, puesto que en aquellas situaciones en las que una familia no pueda permitirse económicamente acudir al mercado privado para cubrir estos servicios será la mujer la que se encargue de los hijos y de las actividades familiares (Furlong y McNeish, 2001; Dukelow y Heins, 2017). Además, estas circunstancias afectan sobre todo a la juventud femenina que es madre, ya que las delicadas condiciones económicas que suelen tener los jóvenes hacen que sean ellas las que se queden en el hogar cuidando de sus hijos, lo que puede conducir a sacrificar su vida profesional por la familiar.

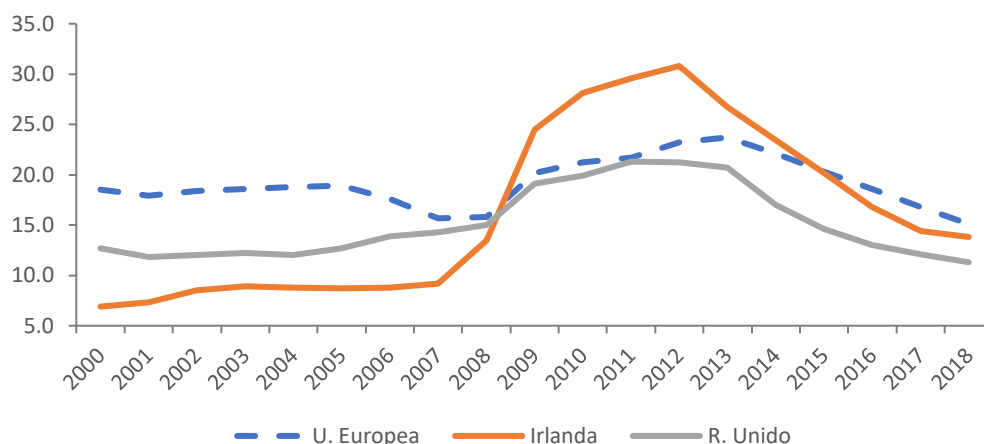
Del mismo modo, el sector juvenil tampoco encuentra grandes dificultades a la hora de incorporarse al mercado de trabajo como sí ocurre en otros modelos de bienestar. La razón de ello es que la alta flexibilidad y la fluidez del mercado laboral, que se comentaba anteriormente, facilitan la absorción de los nuevos participantes, lo que posibilita que a partir de los 25 años las personas estén completamente integradas en el mercado laboral (Rubery, 2010).

Un hecho que tradicionalmente ha incidido en que los países liberales hayan tenido unas tasas de desempleo juvenil aceptables en relación con el resto de los modelos de bienestar e inferiores a la media europea. Sin embargo, se tratan de unos valores que en comparación con el nivel general de desempleo del país suele ser alto, llegando incluso a duplicarlo. El motivo de esto es que se trata de un mercado laboral profundamente volátil en el que el empleo de los jóvenes queda ligado a los ciclos de recuperación y desaceleración de la economía (Furlong y McNeish, 2001).

Por ello, este grupo de edad fue uno de los más damnificados por la crisis, lo que hizo que el porcentaje de jóvenes sin empleo alcanzase niveles atípicos para este modelo de bienestar. Aún así, Reino Unido mantuvo unos valores inferiores a la media de la Unión Europea, y en 2011 este sector poblacional experimentó una leve mejoría que se ha ido ampliando año tras año hasta alcanzar, según los últimos datos disponibles, una tasa de desempleo juvenil del 11,3%. En el caso de Irlanda las convulsiones económicas

de 2008 sí que repercutieron de manera más intensa sobre sus jóvenes, aunque igualmente desde 2013 la economía del país comenzó una dinámica positiva y constante que perdura desde entonces y que ha supuesto la reducción del desempleo juvenil en 18,3 puntos porcentuales en tan solo siete años, alcanzando porcentajes por debajo del promedio europeo y muy cerca de los valores de Reino Unido.

Gráfica 1.16. Tasa de desempleo juvenil en los países del modelo liberal (2000-2018)



*Fuente:* Eurostat.

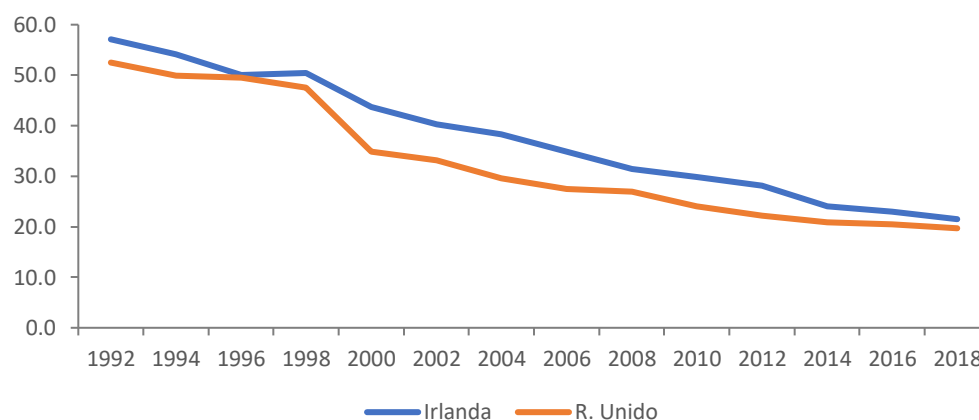
Además, el sector juvenil se trata de un grupo social en el que se pone especial énfasis para que en el caso de que estén recibiendo beneficios públicos por encontrarse desempleados pasen a reincorporarse al mercado laboral cuanto antes y no dependan económicamente de las ayudas estatales (Clasen, 2005). Para conseguir este objetivo los programas de desempleo juvenil están enfocados a la incorporación inmediata de los jóvenes al mercado laboral dejando de lado aquellas estrategias dirigidas a mejorar sus competencias formativas o profesionales. Esto, junto al hecho de que las políticas de empleo tienen una duración limitada y que tienen como requisito general la búsqueda activa de trabajo para ser beneficiarios de ellas, provoca dos claros efectos relacionados entre sí en el sector juvenil: por un lado, la difícil incorporación de los jóvenes al mercado laboral con trabajos estables y en buenas condiciones; y, por otro lado, que suele ser parte explicativa de la anterior, el prematuro abandono de la formación educativa que ha

recortado su duración y ha producido bajos niveles de titulados superiores en estos países (Walther, 2006).

Así, hasta principios de la década de 1980 un porcentaje muy elevado de jóvenes con 16 años abandonaba la educación tras acabar los estudios obligatorios. El Gráfico 1.17 muestra que a inicios de la década de los noventa el porcentaje de la población que tenía estudios inferiores a la secundaria era del casi 60% en el caso irlandés y de más del 50% en el británico. Esto sucedía porque los jóvenes, al contar con una escasa protección familiar y pocos beneficios sociales por parte del Estado, se incorporaban prematuramente al mercado laboral con el fin de conseguir los recursos económicos necesarios ante la imposibilidad de seguir en un sistema educativo no accesible por su elevado coste.

Sin embargo, en las últimas décadas esta situación se ha revertido debido, en parte, al retraso de la edad a la que era posible acceder a beneficios sociales y al desarrollo de una educación posobligatoria más diversificada que permite una formación más vocacional y flexible (Walther, 2006). Gracias a estas medidas la proporción de la población que abandonaba la formación educativa tras acabar la secundaria o antes de ello ha disminuido considerablemente hasta situarse en torno al 20%, es decir, en aproximadamente 20 años se ha reducido entre 35 y 40 puntos porcentuales.

Gráfico 1.17. Porcentaje de la población con estudios inferiores a la secundaria en los países del modelo liberal (1992-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

Sin duda, las características del mercado laboral han ayudado a favorecer la transición a la vida adulta de manera rápida al permitir que los jóvenes alcancen la independencia económica mediante el desempeño de un puesto de trabajo (Rubery, 2010). La lógica es que pasen cuanto antes a ser personas adultas con autonomía económica que les permita ser parte de la esfera social y un elemento potencial más del mercado (Berthoud y Iacovou, 2004), razón por la que en los países del modelo de bienestar liberal la etapa de la juventud se interpreta como una fase necesaria y transitoria hacia la vida adulta que cuanto antes se complete mejor.

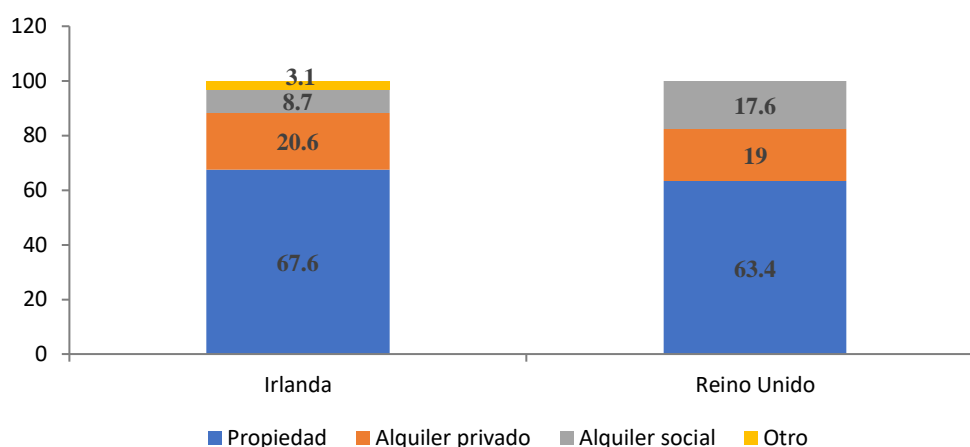
De este modo, la emancipación residencial en el modelo liberal se produce a edades similares a las del corporativista (Gráfico 1.1), aunque en esta ocasión el riesgo de caer en la pobreza durante este proceso es mayor (Gaviria, 2011). No obstante, existe cierta diferencia entre la edad en que se decide abandonar el hogar familiar en Reino Unido (24 años) y en Irlanda (26 años), lo que también justifica unas mayores tasas de coresidencia en el caso irlandés (Gráfico 1.12).

Una de las explicaciones de esta circunstancia son las profundas raíces que tienen los valores familiares en los hogares irlandeses como consecuencia directa de la herencia de la cultura católica, un factor que actúa como un importante freno a la hora de abandonar el hogar de los progenitores en muchas ocasiones (Furlong y McNeish, 2001; Burgess y Leahy, 2004).

Además, otro importante elemento que ayuda a entender esta disparidad es la política de vivienda que desarrolla Reino Unido, que facilita en mayor grado la transición residencial que en el caso de Irlanda, especialmente gracias a las ayudas directas al pago de alquiler o a un mayor parque de viviendas sociales (Bosch Meda, 2015).

Se puede observar en el Gráfico 1.18 que Reino Unido, a pesar de tener un 63,4% de vivienda en propiedad, combina este hecho con un parque de alquiler desarrollado, tanto social (17,6%) como privado (19%); mientras que Irlanda tiene un parque público menor (8,7%) y una tasa de propiedad superior (con un 67,6%), aunque lo compensa con un amplio parque de alquiler privado (20,6%).

Gráfico 1.18. Régimen de tenencia de la vivienda en los países del modelo liberal  
(2017)



*Fuente:* Pittini *et al.*, 2017; elaboración propia.

Así, el importante peso del alquiler, a pesar de su continua privatización en los últimos años, ha hecho que la emancipación residencial juvenil en estos países se vea favorecida (Laino y Pittini, 2011). Sin embargo, en la actualidad se está produciendo un problema de asequibilidad de la vivienda que está afectando a los más jóvenes.

Los últimos datos para el Reino Unido muestran que el número de propietarios se ha estancado debido a que los precios de la vivienda y las ganancias de la población han divergido. Ahora la compra de una vivienda supone 7,7 veces el salario promedio de un trabajador a tiempo completo, mientras que en 2002 era de 4,9 veces (Pittini *et al.*, 2017).

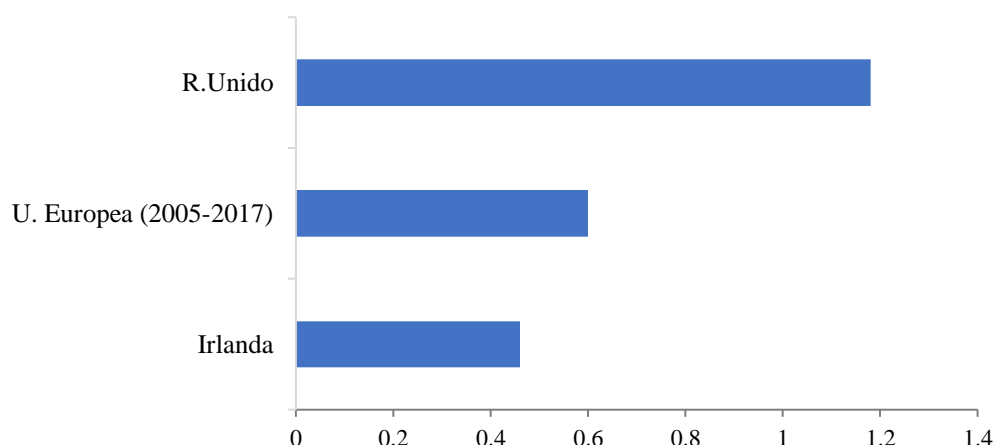
Uno de los efectos que ha provocado esta situación ha sido la duplicación de inquilinos en el mercado privado de alquiler entre 2002 y 2015, lo que a su vez ha producido un aumento de los precios de los arrendamientos debido a la existencia de un exceso de demanda que el mercado no ha tenido la capacidad de absorber. Esta situación, sin duda, está afectando especialmente a los jóvenes ya que debido a sus precarias circunstancias económicas están teniendo problemas para afrontar la subida de precios de los alquileres del sector privado (Stone *et al.*, 2011).

La asequibilidad de la vivienda en Irlanda también se está volviendo un problema que está afectando especialmente a los hogares con bajos ingresos o a los sectores más desprotegidos, como el juvenil. Uno de los grandes desafíos de la política de vivienda en

este país pasa, por tanto, por desprenderse de la dependencia del mercado privado a favor del aumento de nuevas viviendas sociales (Pittini *et al.*, 2017).

Para enfrentar estos problemas de asequibilidad estos países generalmente efectúan un gasto público en políticas de vivienda bastante generoso en comparación con el que destinan a otras políticas. Especialmente destaca el caso de Reino Unido, que tiene uno de los sistemas de ayudas directas al pago de la vivienda más desarrollados de Europa y que favorece la emancipación residencial. Así, en torno a un 11% de la población mayor de 16 años recibe algún beneficio público relacionado directamente con el pago de la vivienda. Sin embargo, este sistema no es universal y, por lo tanto, no tienen acceso a él todos los sectores de la población, sino que está dirigido a los segmentos más vulnerables (Bosch Meda, 2015).

Gráfico 1.19. Media del gasto público en política de vivienda respecto al PIB en los países del modelo liberal (en porcentajes) (2000-2017)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

En el Gráfico 1.19 se puede constatar que la media de gasto público en política de vivienda en Reino Unido (1,18%) en los últimos 20 años es prácticamente el doble que en el promedio de la UE (0,6%). Uno de sus proyectos principales y actuales que pretende facilitar la incorporación al mercado de vivienda a los sectores más vulnerables es el programa llamado *Shared Ownership and Affordable Homes*. Los objetivos que tiene este proyecto son: entregar viviendas asequibles con un precio en torno al 80% del precio del

mercado; alquiler con opción a compra en el que los inquilinos pagan aproximadamente un 20% del valor del mercado durante los cinco primeros años, con la idea de que puedan ahorrar durante este periodo de tiempo para hacer frente a la posterior compra; y la propiedad compartida, una estrategia que supone que el comprador adquiere una parte de la vivienda y paga un alquiler mensual de la parte no comprada a otro propietario. Sin embargo, la gran crítica que se le puede hacer a este ambicioso plan es que se focaliza de modo casi completo en la propiedad y deja de lado cualquier tipo de subsidio a las viviendas de alquiler social.

En el caso de Irlanda el gasto público medio en políticas de vivienda es algo inferior al promedio de la Unión Europea. Sin embargo, tras la crisis económica y los graves problemas que tuvo el mercado inmobiliario irlandés se han desarrollado distintas medidas con el fin de reestructurarlo y que no desarrolle una dinámica tan explosiva como ocurrió en el pasado. Destaca el programa *Rebuilding Ireland - an Action Plan for Housing and Homelessness*, que se erige en torno a cinco pilares de acción entre los que resaltan: aumentar la entrega de viviendas sociales, mejorar el mercado de alquiler privado o utilizar las viviendas vacías existentes para destinarlas a subsanar el problema de acceso a una por parte de los sectores más desfavorecidos (Pittini *et al.*, 2017).

En definitiva, en el modelo liberal no se protege a la juventud como ocurre en el régimen socialdemócrata o en el corporativista, sino que la transición a la vida adulta se entiende como un proceso que debe llevarse a cabo de la manera más rápida posible con el fin de que los jóvenes se incorporen cuanto antes a la esfera social y al mercado. Esto hace que, a pesar de no contar con las mismas ayudas que en los otros modelos de bienestar, la emancipación residencial se realice a edades similares al régimen corporativista, aunque el riesgo de caer en la pobreza es más alto en los países liberales. A esto colabora un mercado laboral que, a pesar de ser precario para este sector de la población, no tiene grandes barreras para acceder a él, por lo que desde edades tempranas y con escasa cualificación pueden adquirir independencia económica. El parque de viviendas también facilita este proceso, ya que aunque la propiedad tiene un peso importante dispone de un amplio mercado de alquiler que favorece a la emancipación juvenil, aunque en los últimos años esta situación parece estar cambiando. Además, en



muchas ocasiones los jóvenes tienen acceso a programas públicos de vivienda que les facilitan encarar esta etapa de la transición a la vida adulta.

#### **1.4. El modelo de transición juvenil mediterráneo**

En la tipología que Esping-Andersen (1990) elaboró sobre los estados de bienestar no incluyó a los países del sur de Europa con la única excepción de Italia, que lo clasificó en el modelo corporativista. Más adelante a esta clasificación distintos investigadores incorporaron una nueva categoría, denominada rudimentaria o mediterráneo, que engloba a España, Portugal, Italia, y Grecia<sup>2</sup> (Leibfried, 1992; Ferrera, 1996), ya que consideraban que debido a las características propias y comunes de estos Estados sería más preciso el desarrollo de un modelo que los encuadrara que incluirlos en los regímenes ya conceptualizados (Hoekstra, 2005).

Los países clasificados en este nuevo modelo comparten la característica de que cuentan con un estado de bienestar relativamente reciente y poco desarrollado en comparación con el resto de los países de Europa occidental, y en el que destaca el hecho de que la familia juega un papel principal en la provisión de servicios sociales y apoyo material (Ferrera, 1996).

Esto ha hecho que, a pesar de contar generalmente con una sanidad pública universal y un sistema educativo accesible a casi todos los sectores de la población, la política social y de bienestar que desarrollan estos países se encuentre generalmente en una fase inmadura<sup>3</sup> respecto a los estados de bienestar más avanzados, por lo que presentan un nivel alto de mercantilización de sus servicios sociales (Leibfried, 1992). Se puede observar en el Gráfico 1.20 cómo desde 1995 estos países siempre han efectuado un gasto inferior en prestaciones sociales que la media de la UE, con la excepción de Italia en los últimos años,

---

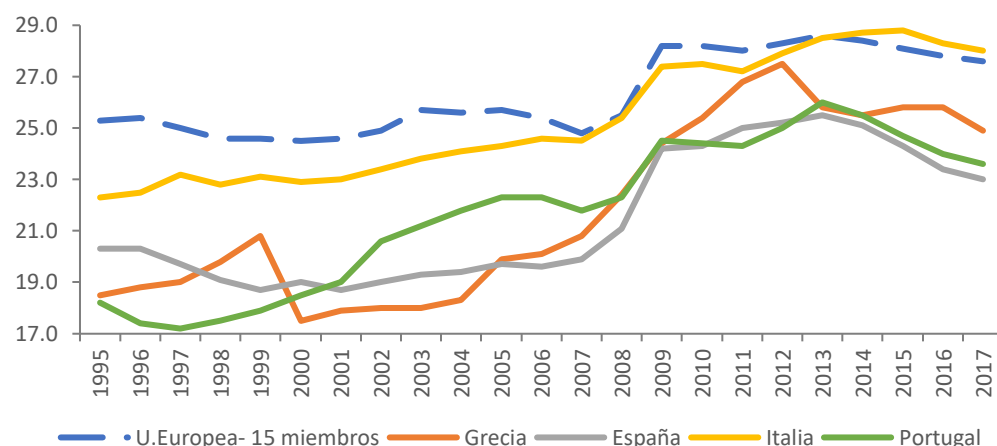
<sup>2</sup> Son susceptibles de incluirse en esta categoría otros países como Chipre o Malta.

<sup>3</sup> Algunos autores, como Martin (2015), señalan que ya no se tratan de sistemas de protección social subdesarrollados, puesto que a partir del inicio del siglo XXI, aproximadamente, se produjo un continuo crecimiento que los llevó a reducir la distancia entre sus gastos sociales y la media europea.

lo que ha supuesto que constantemente hayan destinado unos presupuestos menores para asuntos sociales que los Estados clasificados en el modelo socialdemócrata y en el corporativista.

La razón de esta característica reside en la “trayectoria atípica de cambio” (Gunther *et al.*, 1995) que han experimentado estos países como consecuencia de unas transiciones tardías a la democracia y de un posterior proceso acelerado de modernización de sus estructuras (Guillén y León, 2011). La causa de ello son sus relativamente recientes experiencias de dictaduras y gobiernos autoritarios que afectaron y retrasaron los procesos de modernización y de desarrollo de sus estructuras sociales y económicas y la construcción de sus estados de bienestar (Moreno, 2009).

Gráfico 1.20. Evolución del gasto total en prestaciones de protección social respecto al PIB en el modelo mediterráneo (en porcentajes) (1995-2017)



Fuente: Eurostat.

Además, este retraso del proceso de modernización también afectó al mercado laboral, ya que hasta bien entrado el siglo XX las economías de estos países se basaban principalmente en el sector primario y en distintas formas de autoempleo, a la vez que tenía una fuerte presencia la economía informal. A esto se une el hecho de que la transición al fordismo industrial fue más complicada que en otros territorios europeos debido a que el proceso de transformación de estas economías coincidió con las crisis del petróleo de la década de los setenta, lo que aumentó la vulnerabilidad estructural de los

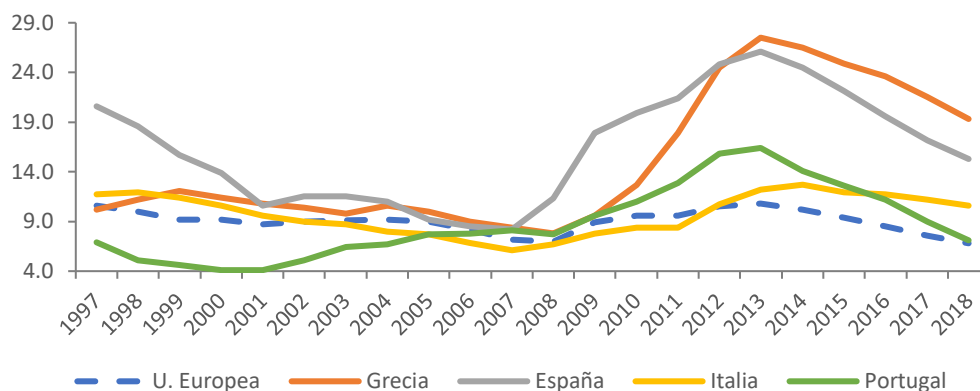
países del modelo mediterráneo e impidió una completa conversión de sus economías (Ferrera, 2010).

Posteriormente, durante la década de 1980, sus mercados laborales experimentaron un acelerado proceso de cambio: el sector primario dejó de tener el peso tan importante que tenía en la producción en los años anteriores como consecuencia, en parte, de la terciarización de sus economías, lo que significó una reestructuración muy significativa de las actividades productivas hacia el sector servicios que superó el umbral del 50% en los cuatro países; y la aplicación de una serie de políticas laborales durante la transición industrial que supuso, por un lado, la conformación de un mercado de trabajo altamente protector para un determinado sector y, por otro, un aumento de la flexibilidad laboral (Moreno y Marí-Klose, 2013).

Estos hechos produjeron una serie de problemas estructurales que, de momento, no se han conseguido resolver. Entre ellos destacan concretamente dos: los altos niveles de desempleo que tienen estos países comparados con el resto de Estados europeos; y una fuerte segmentación del mercado de trabajo debido a la existencia de un grupo bien protegido con buenas condiciones laborales y otro que, en cambio, tiene poca protección laboral y condiciones precarias (Ferrera, 2010).

En este sentido, las tasas de desempleo comenzaron a descender a mediados de los ochenta y no es hasta comienzos del siglo XXI cuando se aproximaron a los porcentajes medios de la UE, con la excepción de Portugal. Sin embargo, los países del mediterráneo tuvieron unas consecuencias socioeconómicas más graves que el resto de Europa durante la crisis iniciada en 2008 que hizo que nuevamente sus tasas de desempleo se distanciasen del promedio europeo. Y no solo eso, sino que también han experimentado una recuperación más lenta de sus economías como se puede comprobar en el Gráfico 1.21. De hecho, actualmente los tres países con mayores tasas de desempleo de la Unión Europea son, por orden, Grecia, España e Italia.

Gráfico 1.21. Tasa de desempleo en los países del modelo mediterráneo (1997-2018)



*Fuente:* Eurostat.

Los problemas del mercado laboral, junto con el incompleto y débil desarrollo del estado de bienestar de estos países, provocan que la provisión de los servicios sociales no esté garantizada para todos los estratos de la población, un aspecto que tradicionalmente ha sido suplido por una fuerte solidaridad intergeneracional dentro de la familia.

Así, el fuerte familiarismo de los países del sur de Europa actúa como un ancla importante en la provisión de cohesión social al funcionar como una red de seguridad ante las dificultades laborales y al proporcionar, en la medida de lo posible, aquellos servicios sociales que las administraciones públicas no pueden proveer: dedicación y ayuda en distintos temas como el cuidado y bienestar de los niños y de las personas dependientes, apoyo económico a sus jóvenes durante amplios periodos de tiempo o ayudarles a que accedan a una vivienda, entre otras cuestiones (Moreno y Marí-Klose, 2013).

Por lo tanto, el familiarismo aparece como una característica propia del modelo mediterráneo y desempeña un papel determinante en la conformación del sistema de bienestar. Lo que diferencia el papel de la familia en este modelo con respecto a otros es que mientras que en los países socialdemócratas, por ejemplo, existe un apoyo explícito mediante políticas sociales concretas para que la familia actúe como proveedor de asistencia social, en los países mediterráneos esta institución actúa supliendo la deficiencia de las intervenciones públicas (León y Migliavacca, 2013).

Debido a ello la familia extendida, compuesta por tres o más generaciones, ha sobrevivido prácticamente hasta la actualidad y ha incidido en que el tamaño promedio de los hogares mediterráneos haya sido uno de los más altos de Europa (Moreno, 2006). Además, a pesar de que en las últimas décadas la convivencia entre el número de integrantes en un mismo hogar se haya reducido y aproximado a los niveles europeos, los lazos solidarios entre miembros familiares siguen siendo mucho más robustos que en la gran mayoría de Europa (Naldini, 2003).

No obstante, este familiarismo también ha producido una serie de problemas de cara al desarrollo del estado de bienestar mediterráneo. Por un lado, ha sido señalado como una de las causas de la escasa intervención social pública ya que sustenta un círculo vicioso perverso que se retroalimenta. Es decir, el hecho de que la familia se presente como una institución determinante en la provisión de bienestar social obstruye las intervenciones públicas por la vía de la demanda de beneficios y servicios sociales por parte de la población, que los necesita especialmente en asuntos familiares y de cuidados (Flaquer, 2000).

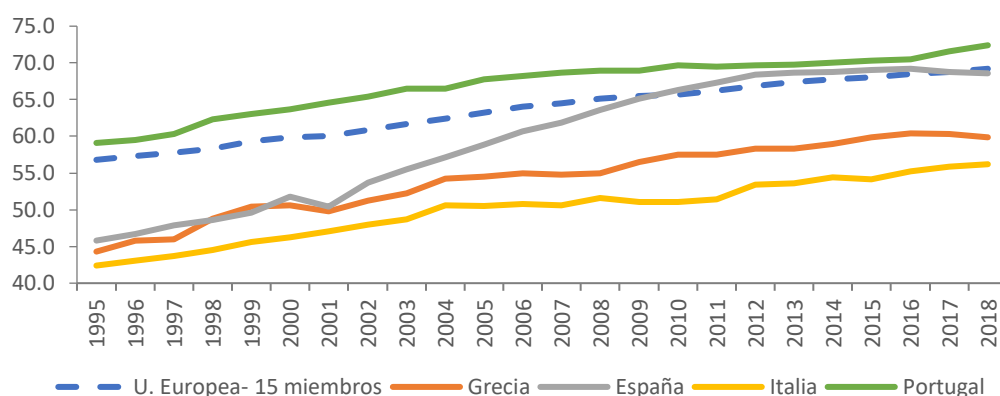
Así, por ejemplo, los países pertenecientes al modelo mediterráneo son los que menor partida presupuestaria asignan a políticas de familia según Eurostat. Grecia y España, ambos con 0,8% del total del PIB, son los que menos gasto realizan de toda la Unión Europea al respecto, seguidos de Italia y Portugal con un 0,9%, valores que en todos los casos suponen casi un punto porcentual menos que el promedio europeo y muy lejos del 4,3% del total del PIB que destina Dinamarca, por ejemplo.

Por otro lado, la relación estado-familia-mercado también ha generado problemas socioeconómicos en torno al mercado laboral y en los que las principales víctimas han sido las mujeres y los jóvenes (Martin, 2015). En el primer caso, una particularidad de los Estados del régimen mediterráneo ha sido la lenta y complicada incorporación de la mujer al mercado del trabajo, junto con la existencia de marcadas diferencias de género en términos de condiciones de empleo. Esto ha sido consecuencia directa de que el familiarismo de estos países ha estado basado tradicionalmente en un modelo masculino de sostenimiento económico de la familia y en el que la mujer se encargaba de las tareas domésticas no remuneradas y de todos los asuntos relacionados con el cuidado infantil y

de ancianos. De este modo, la mujer quedaba fuera del mercado laboral, lo que a su vez incidía en el hecho de que no contase con los requisitos necesarios para beneficiarse de las políticas públicas dirigidas tanto a garantizar su independencia económica como a facilitar su incorporación al mercado de trabajo (León y Migliavacca, 2013).

Así, aunque ya se había producido una cierta mejoría respecto a las décadas anteriores, en 1995 Italia, Grecia y España apenas alcanzaban una tasa de actividad femenina del 45%, 10 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. En cambio, desde el inicio de la serie examinada Portugal ha tenido una tasa de actividad femenina superior al promedio europeo. Uno de los factores históricos que incidió en estos porcentajes fue la importancia que tuvo el servicio militar entre los hombres durante la década de los ochenta y noventa, que provocó que las mujeres buscasen trabajos remunerados para compensar la falta de recursos económicos ante la ausencia del principal miembro sustentador de la familia (Ferrera, 2010).

Gráfico 1.22. Tasa de actividad femenina en los países del modelo mediterráneo (1995-2018)



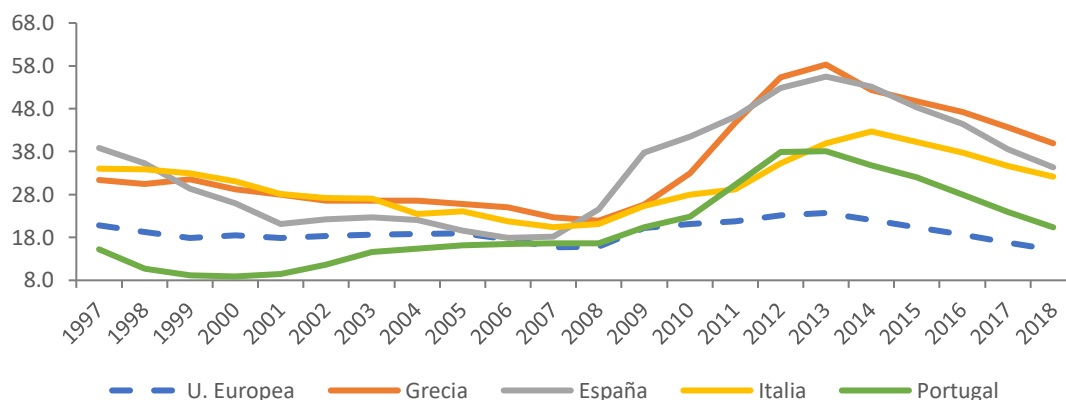
*Fuente:* Eurostat.

No obstante, esta característica del modelo mediterráneo está cambiando en los últimos tiempos. En el gráfico anterior se observa que la participación de la mujer en el mercado laboral se ha incrementado de manera progresiva y constante en todos los casos, aunque es necesario resaltar que sigue estando lejos tanto de las tasas de otros países europeos como del peso de los hombres en la fuerza laboral. Especialmente hay que

destacar el caso de España, ya que a partir de 2002 tuvo un importante crecimiento de la tasa de actividad femenina que ha hecho que se distancie de manera considerable de Grecia e Italia, y que incluso se sitúe por encima de la media europea. Esto está provocando que estos países estén atravesando un proceso de transformación del modelo masculino de sostén económico de la familia típico del régimen mediterráneo a uno de doble sueldo, especialmente entre los hogares más jóvenes (Migliavacca, 2008).

De hecho, el sector juvenil es otro grupo al que históricamente las condiciones del mercado laboral también ha afectado de manera importante dificultando su incorporación a la fuerza laboral. Como consecuencia de ello, los países del modelo mediterráneo han tenido unos porcentajes de desempleo juvenil muy altos a lo largo de las décadas, llegando a ser superior al 30% a finales de los noventa en el caso de España, Italia y Grecia. A pesar de la reducción constante del desempleo juvenil desde 1997 hasta 2008 en estos tres países, solo España fue capaz de aproximarse a los valores promedios de la Unión Europea.

Gráfico 1.23. Tasa de desempleo juvenil en los países del modelo mediterráneo (1997-2018)



*Fuente:* Eurostat.

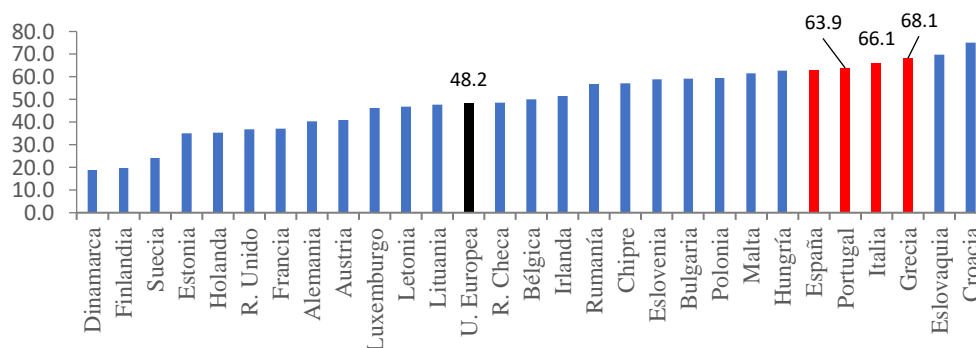
Además, hay que añadir que esta situación se vio agravada tras el inicio de la crisis financiera de 2008, cuando el shock económico golpeo severamente al empleo juvenil. Esto supuso que en solo 4-5 años Italia alcanzase el 40% de desempleo juvenil; que España y Grecia superasen el 55%; o que incluso en Portugal, que en la década anterior

estuvo por debajo del promedio europeo en todo momento, este porcentaje se disparase del mismo modo hasta el 38%. En 2018, estos cuatro países seguían siendo los miembros de la UE con mayor porcentaje de desempleo entre sus jóvenes, según datos de Eurostat. Y no solo eso, sino que, a pesar de que es una tendencia generalizada en Europa, en los países de este régimen se ha producido un considerable incremento de la temporalidad laboral de este grupo, lo que aumenta aún más el riesgo de marginalización y exclusión social (Moreno Mínguez, 2012).

De este modo, los jóvenes del modelo mediterráneo a lo largo de los años se han encontrado ante una situación en la que se contraponen dos elementos: la ausencia de oportunidades para conseguir autonomía económica a través de un empleo y una importante dependencia familiar.

Una de las consecuencias de ello es que históricamente los países del sur de Europa han tenido unos altos niveles de convivencia intergeneracional. Y es que, sin duda, son los jóvenes de los estados que conforman el modelo mediterráneo los que más retrasan la decisión de abandonar el núcleo familiar en la Unión Europea (Martin, 2015). En Grecia, el 68,1% de los jóvenes entre 18-34 años vive con sus padres, lo que le sitúa como el tercer país de la Unión Europea con un mayor grado de coresidencia entre hijos y progenitores, tan solo por detrás de Croacia y Eslovaquia. Justo después se colocan Italia, Portugal y España con valores que no bajan del 60%, lejos del 48,2% de media de la Unión Europea.

Gráfico 1.24. Porcentaje de personas entre 18-34 años que viven con sus padres en la Unión Europea (2018)



*Fuente:* Eurostat.



La tardía transición a la vida adulta de los estados del modelo mediterráneo también se ha visto afectada por otros dos elementos que están relacionados con el mercado laboral: el sistema educativo y el sistema residencial de vivienda (Moreno Mínguez *et al.*, 2012).

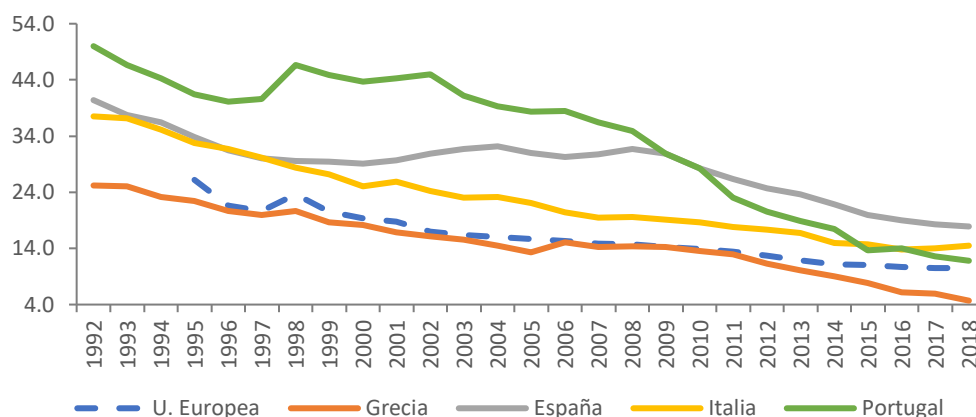
Tradicionalmente, los países del sur de Europa han estado caracterizados por una baja cualificación de la mano de obra como consecuencia de la tardía modernización de sus estructuras económicas. Uno de los factores que ha incidido en ello ha sido el alto índice de abandono escolar que estos países han ostentado a lo largo de los años. La deserción prematura de la educación reglada, y antes de finalizar la enseñanza secundaria, obstaculiza en gran medida tanto que los jóvenes se incorporen al mercado laboral como que tengan trayectorias laborales estables, puesto que no desarrollan las habilidades necesarias suficientes para un mercado de trabajo cada vez más exigente. Si este problema en la formación de las personas no se soluciona de manera efectiva genera efectos negativos que se extienden y reproducen a lo largo de la vida laboral del trabajador, como pueden ser amplios periodos de desempleo, una mayor inestabilidad debido a contratos temporales o niveles salariales inferiores (Serrano y Soler, 2015).

En el Gráfico 1.25 se puede comprobar cómo al comienzo de la serie solo Grecia (25,2%) presentaba unos valores relativamente aceptables en comparación con el resto de los países del modelo mediterráneo. Por su parte, en 1992 en Portugal la mitad de la población de 18 a 24 años abandonaba la educación y cualquier otro tipo de formación reglada de manera prematura, mientras que España e Italia para ese mismo año tenían alrededor de un 40% de abandono.

Sin embargo, desde la década de los noventa todos los países del sur de Europa experimentaron una reducción constante de los índices de abandono escolar, una dinámica que se ha prolongado en el tiempo, al menos de momento, hasta 2018. La única salvedad fue España, que tuvo un destacado repunte durante los primeros años del siglo XXI. La razón de ello es que durante aquellos años muchos jóvenes dejaron la educación de manera abrupta para trabajar en la construcción debido a los importantes salarios que ofrecía este sector y a la escasa cualificación que se solicitaba para ser contratado.

Esto ha supuesto una importante reducción de estos porcentajes en todos los países, lo que ha hecho que en Grecia en 2018 el abandono escolar prácticamente haya dejado de ser un problema con un reducido 4,7%, mientras que Portugal (11,8%) ha conseguido disminuirlo de manera significativa hasta situarse a la par de los niveles de Europa. La nota menos positiva la ponen Italia y España que, aunque también han mejorado sus resultados durante las últimas décadas, siguen teniendo unos porcentajes de abandono escolar prematuro por encima del promedio europeo, y que en el caso español llega a suponer casi un 20%.

Gráfico 1.25. Porcentaje de abandono temprano de la educación y de la formación entre la población de 18 a 24 años en los países del modelo mediterráneo (1992-2018)



*Fuente:* Eurostat.

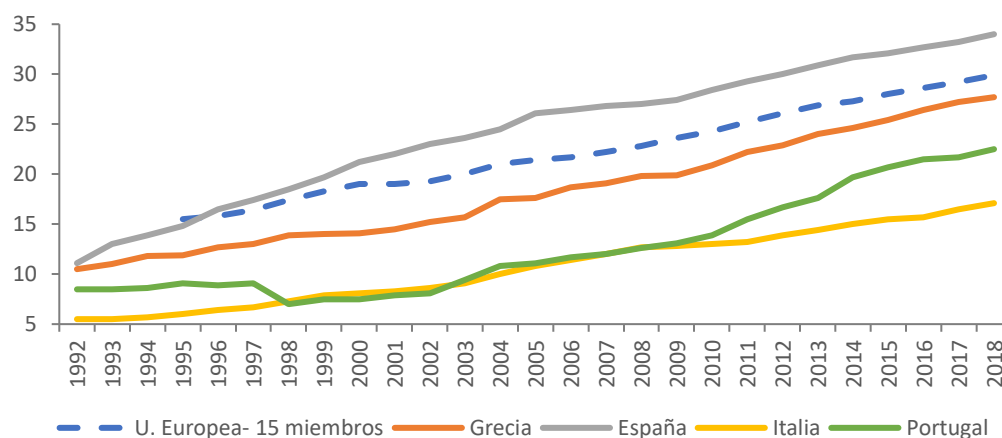
El alto índice de abandono escolar no es el único problema relacionado con el sistema educativo que tienen los países del modelo mediterráneo. Y es que, en los últimos años, han experimentado una considerable concentración hacia la formación universitaria que está dificultando la transición de los jóvenes al mercado laboral.

El importante crecimiento de los titulados superiores que han tenido estos países en los últimos años ha estado muy desajustado de la demanda de puestos de trabajo cualificados en el mercado laboral. Esta sobreoferta de mano de obra cualificada ha provocado que estar actualmente en posesión de un título universitario no garantice una mejor empleabilidad o mejores condiciones laborales, sino que el desempleo entre

titulados superiores haya aumentado a la vez que ha provocado que muchos tengan sobrecualificación para los puestos de trabajos que están ocupando (Anxo *et al.*, 2010).

Así, en España en solo 25 años se ha incrementado el porcentaje de la población con educación terciaria en más de un 20%, hasta situarse en 2018 en el 35% del total, lo que le convierte en el país del modelo mediterráneo con mayor proporción de titulados superiores. Esta tendencia la han seguido los otros tres países que, al igual que en el caso español, han visto triplicarse el porcentaje de personas con educación terciaria. De este modo, Portugal ha pasado del 8,5% al 23,6%; Grecia del 10% hasta el 27,8%; o Italia del 5,5% al 17,3%.

Gráfico 1.26. Porcentaje de la población que tiene educación terciaria en los países del modelo mediterráneo (1992-2018)

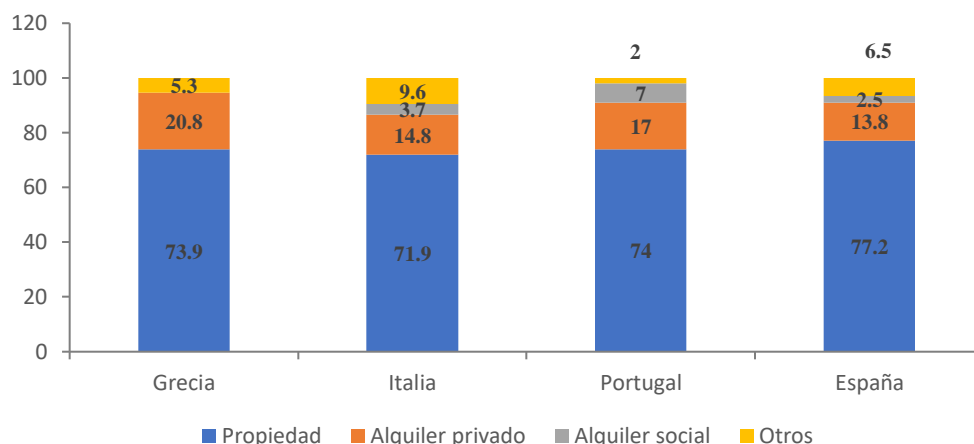


Fuente: Eurostat.

Las dificultades para completar con éxito la transición del ámbito educativo al laboral complica que los jóvenes consigan la autosuficiencia económica necesaria que les permita emanciparse residencialmente de sus familias (Eurofound, 2013). Además, esto supone un obstáculo aun mayor en el caso de los países del mediterráneo, ya que la forma más común de acceder a una vivienda es mediante la compra, lo que retrasa y obstaculiza la formación de nuevos hogares debido al importante desembolso económico que conlleva la adquisición de una vivienda. A esto se añade el claro fomento de la propiedad como principal régimen de tenencia por parte de las autoridades públicas (Allen *et al.*,

2004) en el marco de un parque de viviendas caracterizado por una baja proporción de vivienda social y de alquiler y por un importante peso de las viviendas secundarias, características que tampoco facilitan la emancipación residencial (Bosch Meda, 2017).

Gráfico 1.27. Régimen de tenencia de la vivienda en los países del modelo mediterráneo (2017)



*Fuente:* Pittini *et al.*, 2017; elaboración propia.

En el Gráfico 1.27 se puede observar cómo, según el informe *Housing Europe Review* elaborado por Pittini *et al.* (2017), la propiedad como régimen de tenencia supera el 70% en los cuatro países examinados y que, por el contrario, el alquiler social es prácticamente inexistente. Destaca el hecho de que Grecia sea uno de los pocos Estados de la Unión Europea que no cuenta con ningún tipo de régimen de vivienda social. O el caso de Italia y España que poseen un parque de alquiler público muy residual, un aspecto que en los últimos años ha supuesto un importante problema ya que no ha sido una alternativa habitacional real para aquellas familias de bajos y medianos ingresos que han sido expulsadas del mercado privado de alquiler debido al considerable aumento de los precios de arrendamiento.

Esto, sin duda, ha afectado de manera especial a los jóvenes no solo al dificultar lo que en muchas ocasiones podría ser el primer paso en sus incorporaciones al mercado de vivienda como ocurre en el modelo corporativista y socialdemócrata, sino también por el hecho de no ofrecer oportunidades que garanticen la emancipación residencial en un

contexto de deterioro económico y laboral generalizado que les impide abandonar el hogar familiar vía compra de una vivienda como es común en los países del mediterráneo.

Además, en estas dificultades para la emancipación ha incidido el hecho de que tradicionalmente el presupuesto público en políticas de vivienda ha sido escaso y las ayudas públicas directas para facilitar la independencia residencial de los jóvenes han sido mínimas. Esta escasa intervención del Estado en materia de vivienda ha reforzado el papel determinante de la familia como sostén socioeconómico, ya que la familia brinda la ayuda económica que frecuentemente no aportan las instituciones públicas para afrontar el proceso de emancipación (Hoekstra, 2005). Aparte, también colaboran con una serie de estrategias personales típicas entre los más jóvenes de este modelo, que consisten en la consecución de una cierta estabilidad económica antes de abandonar la vivienda familiar (Emmanuel, 2013).

En resumen, históricamente los jóvenes del modelo mediterráneo han tenido un contexto de emancipación complicado que además, en su caso, se ha visto agravado especialmente por la crisis económica de 2008, lo que explica por qué se trata de los países en los que más se retrasa el abandono del hogar de los progenitores. El mercado laboral al que acceden es precario, impidiendo que tengan trayectorias estables que les permita alcanzar la autonomía económica necesaria para independizarse residencialmente de sus familias. Además, en los últimos años se ha producido una considerable concentración en el sistema educativo hacia la universidad que no solo dilata los distintos procesos vitales de la juventud, sino que ha producido que en estos países el número de titulados superiores esté desajustado de la demanda de puestos de trabajo cualificados en el mercado laboral, lo que dificulta la transición del ámbito educativo al laboral. Por último, la emancipación juvenil en los países del modelo mediterráneo también encuentra un considerable obstáculo en el sistema residencial que los caracteriza. La razón de ello es que al estar dominados por la propiedad dejan un reducido espacio a otras opciones, lo que hace que el acceso a una vivienda se produzca permanentemente vía compra conllevando un esfuerzo económico muy grande que difícilmente se puede afrontar durante los primeros años de la etapa adulta. Esto hace que, ante la ausencia de alternativas y de una escasa política pública de vivienda, la familia adopte un papel

decisivo en la emancipación residencial de los jóvenes tanto al apoyarlos mientras permanecen en el hogar familiar como al respaldarlos económicamente cuando se emancipan.

## **Capítulo 2**

### **Revisión de la literatura**

La decisión de abandonar la vivienda de los progenitores y comenzar un proyecto de vida lejos del hogar familiar está condicionada por un importante número de factores, que determinarán la forma de hacerlo y el régimen de tenencia de vivienda por el que optarán.

En el capítulo anterior se ha comprobado que existen diferentes patrones de emancipación que en gran medida están condicionados por distintos elementos del estado de bienestar del país correspondiente. Pero, sin embargo, todos ellos comparten que en los últimos tiempos la transición a la vida adulta está cambiando y adoptando nuevas dinámicas caracterizadas, sobre todo, por la dilatación del tiempo necesario para completarla.

El atraso que en la gran mayoría de las sociedades viene experimentando la emancipación juvenil ha sido objeto de investigación previamente desde la década de los ochenta. Entre los elementos más decisivos la literatura académica ha destacado el mercado laboral al que se incorporan los individuos, la configuración del sistema residencial al que acceden o los efectos que la crisis ha ocasionado en este proceso.

Así, en este capítulo se realiza una revisión de la bibliografía existente a partir de los tres apartados anteriores y haciendo especial referencia al caso de España.

La primera sección examina los trabajos que han analizado cómo influye el parque de viviendas en la emancipación juvenil, ya que se trata de un elemento igual de determinante que el mercado laboral a la hora de explicar el retraso que ha experimentado la independencia residencial tanto en España como en otros países. En ese sentido, el Consejo Económico Social (2002, p. 56) manifiesta que “en la emancipación residencial la vivienda (o para ser más exactos el mercado residencial) constituye otro gran factor objetivo, tanto o más importante que el empleo para explicar ese retraso. Aunque en su origen dependa de la situación del mercado de trabajo y de la posición en él de los jóvenes, la suficiencia de los ingresos para la emancipación residencial no tiene otra medida que el acceso a una vivienda independiente”.

En el segundo apartado se profundiza en las investigaciones sobre el retraso de la emancipación que tienen como hipótesis principal al mercado laboral, puesto que las características del mercado de trabajo al que accede la población juvenil son determinantes para la explicación de los patrones de la emancipación residencial, ya que la experiencia de los jóvenes ante la precariedad del mercado laboral es un factor central en la modelación de las expectativas a la hora de establecer la ruta del abandono del hogar familiar (Mills *et al.*, 2005).

Finalmente, se revisan las investigaciones más recientes que analizan cómo la crisis económica de 2008 y las consecuencias que tuvo la misma han influido en la emancipación juvenil. La justificación a ello reside en que, durante ese periodo de tiempo, en muchos países el sector juvenil se vio especialmente golpeado por el shock económico lo que supuso la expulsión de muchos jóvenes del mercado de trabajo, el deterioro de sus condiciones laborales y la disminución de sus salarios, unas circunstancias que indudablemente han podido alterar los distintos patrones de emancipación.

## **2.1. La vivienda como factor determinante en la independencia residencial de los jóvenes: una revisión de la literatura**

La literatura que prestaba especial atención al papel que juega la vivienda en la emancipación residencial era limitada hasta que el mercado inmobiliario se sobredimensionó y experimentó un crecimiento muy pronunciado de sus precios en muchos países occidentales (Mulder, 2013). Este escaso interés por estudiar este aspecto parecería no estar en línea con la idea dominante de que los jóvenes realizan un cálculo económico racional a la hora de abandonar el hogar parental y que, por lo tanto, enfrentarse a un parque de viviendas con elevados precios y pocas alternativas a la propiedad, como puede ser un reducido mercado de alquiler, conllevaría el retraso de la independencia residencial.



### 2.1.1. La influencia del precio de la vivienda en la emancipación juvenil

Una de las primeras investigaciones al respecto sobre la influencia del precio de la vivienda en la emancipación es la de Börsch-Supan (1986), cuyo principal resultado fue que la tasa de formación de nuevos hogares en Estados Unidos era muy sensible a los precios del mercado inmobiliario. Para ello estimó un modelo de demanda de vivienda que incluía la decisión de las personas de 20 a 35 años de formar hogares independientes en tres áreas metropolitanas de EE.UU.

Haurin *et al.* (1993) también analizaron la incidencia del precio en las decisiones de independizarse de los jóvenes estadounidenses de 22 a 29 años, aunque en esta ocasión esta investigación se centró en las fluctuaciones de los precios en el mercado de alquiler. Los datos que utilizaron fueron extraídos de la ola de 1987 de la encuesta *National Longitudinal Surveys* y se explotaron mediante un modelo demográfico en el que incluyeron determinantes económicos que podían afectar a la independencia juvenil y a las formas de llevarla a cabo. Los resultados que obtuvieron, nuevamente, destacaron la importancia del precio para comprender la elección residencial de los jóvenes, ya que la probabilidad de que la población juvenil se emancipase residencialmente aumentaba en casi un 12% en las ubicaciones donde existían niveles de precios más bajos para el alquiler.

Ante estos resultados, Clark y Dieleman (1996) realizaron un estudio comparativo entre dos mercados de vivienda contrapuestos, el de los Países Bajos y el de los Estados Unidos, con el objetivo de demostrar que el proceso de elección de vivienda en el mundo occidental mostraba semejanzas a pesar de las diferencias institucionales y contextuales que puedan existir entre los países. El resultado principal fue claro: en cualquiera de los casos el precio de la vivienda era un factor decisivo que determinaba las opciones de que las nuevas generaciones se incorporasen al mercado inmobiliario y que, por ende, se pudiesen independizar.

Una década más tarde Di y Liu (2006) reforzaron estos resultados ya que, tras analizar los datos de la Encuesta de Vivienda Estadounidense de 1985 a 1995 para la cohorte de 25 a 34 años, proporcionaron nuevas evidencias sólidas sobre el hecho de que

los niveles de precios del mercado de alquiler local eran determinantes en la configuración de las estrategias de emancipación de los jóvenes norteamericanos.

Durante estos años también se publicaron trabajos para el caso de otros países sobre la incidencia del precio de la vivienda en la emancipación juvenil con resultados similares a las investigaciones para Estados Unidos. Así, por ejemplo, para Reino Unido Ermisch y Di Salvo (1997) elaboraron un modelo teórico en el que tuvieron en cuenta distintos factores que incidían sobre la probabilidad de que un joven abandonase la vivienda familiar para formar su propio hogar y establecieron que los altos precios del mercado inmobiliario reducían de manera significativa las opciones de emancipación de los jóvenes británicos.

O Bourassa *et al.* (1994) y Haurin *et al.* (1997) que analizaron el caso australiano, y ambas investigaciones señalaron no solo que los niveles de precios de la vivienda eran un factor muy importante para determinar si la población joven australiana vivía de manera independiente o si decidía quedarse con los padres, sino que, además, destacaron que la diferencia de precios entre el mercado de propiedad y el de alquiler tenía una considerable influencia en la decisión de tenencia de los jóvenes.

#### 2.1.2. La incidencia del parque de vivienda en la independencia residencial

La estructura del parque de vivienda de los países puede dificultar en gran medida la entrada de los jóvenes en él y, por tanto, suponer un obstáculo que retrase la emancipación residencial. De este modo, un sistema residencial en el que la propiedad sea la principal vía de acceso al mercado inmobiliario y que no ofrezca otras alternativas reales, como puede ser un amplio parque de alquiler privado o público, obstaculiza los procesos de emancipación de los jóvenes.

En este sentido, Mulder y Clark (2000) examinaron la entrada al mercado inmobiliario de los adultos jóvenes estadounidenses para comprobar cómo incidía la estructura del parque de viviendas en sus estrategias de emancipación. Para ello, a partir de los datos del *Panel Study of Income Dynamics* para el periodo 1969-1992, desarrollaron un modelo de elección multinomial formado por tres categorías: ser

propietario de una casa, tener un remolque o alquilar. Concluyeron que el camino principal que seguían los jóvenes norteamericanos para abandonar el hogar familiar era el alquiler para más tarde pasar a ser propietarios de una vivienda, un hecho que estaba dificultado por un mercado de vivienda dominado por la propiedad. De este modo, la configuración del parque de viviendas de este país obstaculizaba la independencia residencial debido a que tan solo una pequeña minoría del sector juvenil podía emanciparse por la vía de la adquisición al no tener los recursos económicos suficientes.

A resultados similares llegaron Mulder y Hooimeijer (2002) para el caso de los Países Bajos. Estos dos investigadores examinaron en qué momento abandonaban el hogar familiar los jóvenes holandeses y bajo qué forma de régimen de tenencia lo hacían a partir de los datos que ofrecía la Encuesta Familiar Holandesa de 1993. Entre sus conclusiones destacaban que en este país la forma más común para llevar a cabo la emancipación juvenil era arrendando una vivienda, por lo que afirmaban que tener un amplio parque de alquiler era fundamental para que los jóvenes holandeses completasen esta fase de la transición a la vida adulta. Además, señalaban que los altos precios de la vivienda y el mercado de arrendamiento eran fundamentales para comprender tanto el momento de independizarse como la manera de hacerlo.

La incidencia de la estructura de la vivienda en la formación de nuevos hogares y en la emancipación juvenil también ha sido investigada en Suecia por Abramsson *et al.* (2004). Esta investigación examinó para los individuos de 16 a 25 años del municipio sueco de Gävle el comienzo de sus carreras de vivienda cuando abandonan el hogar familiar y la elección de tenencia para su primer y segundo movimiento durante 1985-1995. Determinaron que se había producido un retraso en la edad de emancipación juvenil como consecuencia, entre otros factores, de la escasez de oferta en el mercado de alquiler y del incremento del precio de los arrendamientos. De este modo, concluyeron que un parque de viviendas con mayor porcentaje de propiedad obstaculiza la independencia residencial de los jóvenes de esta localidad sueca. Estos resultados fueron apoyados por Lauster (2006), que desarrolló un modelo que demostró que en Suecia la tasa de formación de nuevos hogares está condicionada por las limitaciones del mercado de vivienda y que, además, a medida que los precios son relativamente menores respecto a

los ingresos es mayor el número de jóvenes que pueden acceder a una vivienda e independizarse de manera más rápida y con mejores condiciones.

No obstante, durante estos años también se publicó algún estudio que contrarrestaba los resultados anteriores. Así, por ejemplo, Iacovou (2002) puso en duda el argumento de que un reducido mercado de alquiler junto con los altos precios de la vivienda fuesen dos factores determinantes a la hora de explicar el retraso de la emancipación juvenil en Europa y en Estados Unidos. Afirmaba que no quedaba claro si el sector juvenil adelantaría el proceso de independencia ante la oportunidad de acceder a viviendas más asequibles. La razón de ello es que la actual oferta del mercado, que supuestamente imposibilita el abandono del hogar familiar, podría estar respondiendo a la demanda del sector juvenil y que, por tanto, el suministro de viviendas adaptadas a las características de los jóvenes no supondría una variación positiva en los procesos de emancipación juvenil.

Posteriormente Mulder y Billari (2010) rechazaron la conclusión de Iacovou (2002) tras analizar también el caso de EE.UU y de distintos países europeos. Estos dos autores argumentaron que un parque de viviendas en el que domina de manera considerable la propiedad como principal régimen de tenencia dificulta en gran medida tanto el abandono del hogar de los progenitores como la formación familiar; sobre todo en aquellos países que combinan altos niveles de propiedad con una disponibilidad limitada de hipotecas.

Esta relación entre el acceso al crédito hipotecario y el abandono del hogar parental ha sido investigada por Martins y Villanueva (2006) para el caso de Portugal, con el objetivo de conocer qué incidencia tiene esta variable en la emancipación juvenil en este país. Mediante el empleo de los datos de la Encuesta de la Fuerza Laboral Portuguesa y de los registros de deuda administrativa obtuvieron que conseguir un préstamo hipotecario incrementa la tasa de emancipación entre un 31% y un 54%. Además, ampliaron su investigación al combinar sus estimaciones con los datos del Panel de Hogares Europeos y hallaron que, si su valoración se mantiene estable para todos los países, el mercado crediticio puede llegar a explicar hasta un 20% de las diferencias existentes en las edades de emancipación entre el norte y el sur de Europa. Resultados similares surgieron en la investigación de Ermisch (1999) para el Reino Unido, Martínez-

Granado y Ruiz-Castillo (2002) para España o Giannelli y Monfardini (2003) para Italia.

Esta desigual edad a la hora de abandonar el nicho familiar entre los distintos países europeos también puede ser explicada por las políticas de vivienda aplicadas, debido a que moldean la estructura del mercado de vivienda y pueden dar lugar o no a facilidades y alternativas para que los jóvenes accedan a él.

En esta cuestión profundizó Patón (2007), que examinó qué importancia pueden tener las políticas de vivienda en el proceso de emancipación en diferentes países de Europa. Este autor afirmó que, aunque la emancipación juvenil depende de múltiples factores y circunstancias interrelacionadas, la política de vivienda puede impactar por sí sola en la edad en la que se independizan los jóvenes. Esto es respaldado en Billari (2004), que expresó que la adopción de políticas dirigidas al subsidio de vivienda o a la limitación del pago inicial de las nuevas hipotecas son determinantes a la hora de que los jóvenes europeos planifiquen su transición a la vida adulta.

Arundel y Ronald (2015) en una investigación posterior también concluyeron que los factores institucionales y el sistema de vivienda son claves para la emancipación juvenil en la Unión Europea, ratificando que parte del nivel de independencia residencial encuentra explicación en el contexto del régimen de bienestar de cada país examinado.

### 2.1.3. La vivienda como factor determinante en la emancipación juvenil española

En lo que respecta al caso español, el Consejo Económico y Social (2002) elaboró un informe llamado “La emancipación de los jóvenes y la situación de la vivienda en España” en el que enumeró detalladamente los factores que repercutían en el retraso de la edad de la emancipación juvenil. Entre los elementos que destacaba se encontraba el mercado residencial ante el que se enfrentaban los jóvenes. Al respecto el Consejo Económico Social (2002, pp. 154-155) manifestó lo siguiente: “el tercer factor estudiado ha sido la dificultad de acceso a la vivienda. En efecto, esta aparece como determinante de la emancipación residencial (...). Entre los principales motivos de esa dificultad puede señalarse la existencia de una escasa y cara oferta en el mercado de alquiler, prácticamente olvidado por las políticas públicas de vivienda, que hace más atractiva la

fórmula de la propiedad pese a su también elevado coste (...). El mercado residencial se viene mostrando incapaz de dar respuesta a la demanda de primer acceso de los jóvenes que, en el mejor de los casos, han de ceñir sus expectativas al ámbito de la vivienda protegida”.

Sin embargo, en España hasta ese momento las investigaciones eran escasas y generalmente hechas de forma descriptiva, como se puede comprobar en Leal y Cortés (1995) o Leal (2000).

Ante esta falta de estudios, uno de los primeros trabajos empíricos que se puede encontrar es el de Garrido y Requena (1997). El resultado principal que obtuvieron es que la configuración del mercado de vivienda español estaba generando un retraso en la emancipación de los jóvenes. Esto era debido a que se había producido un desequilibrio en el mercado inmobiliario entre la oferta y la demanda. La razón de ello era que el ciclo de vida de la vivienda se estaba alargando más que en el pasado al haber un mayor porcentaje de personas en avanzada edad que no las abandonaban y que, por tanto, no quedaban disponibles para una demanda cada vez más pujante liderada por la generación *baby boom*.

Holdsworth e Irazoqui (2002) complementarían esta conclusión tras afirmar que tanto el sistema familiar como el mercado inmobiliario eran dos factores claves en la configuración del patrón de emancipación español. En este sentido, consideraron que la estructura del mercado de vivienda, que fomenta de manera clara la propiedad, refuerza la necesidad de que los jóvenes permanezcan más tiempo en casa de sus padres, ya que los altos costes que conlleva la compra de una vivienda les imposibilita abordar antes este complejo proceso. Por último, manifestaron que era necesaria una reestructuración drástica del mercado de vivienda que proporcionara más opciones a los jóvenes a la hora de abandonar el hogar de los progenitores y así facilitara su emancipación.

Uno de los artículos más destacado e importante de la literatura académica para el caso español es, sin duda, el de Jurado Guerrero (2003), que compara el caso de España con el de Francia. El objetivo principal de esa investigación es analizar la influencia que ejerce la configuración del mercado y la política de vivienda en España sobre la formación familiar, que abarca la fase de la emancipación, entre 1980 y 2000. Su

principal hipótesis de partida es que las características de la oferta y de la política de vivienda retrasan la emancipación residencial en España y que, además, dificultan el establecimiento de otros tipos de relaciones que no sean el matrimonio, como pueden ser las parejas de hecho o los hogares unipersonales. El resultado que obtuvo es que el mercado inmobiliario ofrece escasas oportunidades a la formación de nuevos hogares, lo que ayuda a entender, en parte, el retraso que está sufriendo la emancipación de los jóvenes. En este sentido, Jurado Guerrero (2003, p. 142) señala que “se privilegia claramente las viviendas en propiedad a través de deducciones fiscales para la adquisición de la vivienda habitual. Estas deducciones favorecen más a los españoles adultos bien insertados laboralmente y a los hogares de más de un ingreso que a los jóvenes y a los ciudadanos de bajos ingresos que no se pueden plantear la adquisición de una vivienda. Las ayudas directas en forma de vivienda de protección oficial no han conseguido paliar significativamente la falta de accesibilidad de los jóvenes a una vivienda, por un lado, por su escasa promoción del alquiler social y, por otro lado, por la insuficiencia de VPO en propiedad para los segmentos de la población con menores ingresos, como es el caso de los jóvenes al inicio de su inserción laboral”.

Unos años después, como consecuencia de sus resultados anteriores, Jurado Guerrero (2006) argumentó que el importante fomento de la propiedad entre la población española, a través de unas políticas públicas que estaban dirigidas a favorecer la compra y penalizar otras formas de tenencia como el alquiler, ocasionó un importante incremento de los precios de la vivienda. Este hecho tuvo consecuencias sociales, entre las que destacó el retraso de la formación de nuevos hogares entre los jóvenes, ya que tanto la población en general como la juventud en particular, al realizar un cálculo económico racional sobre las distintas opciones de acceso a una vivienda, llegaban a la conclusión de que la manera más adecuada, frente al escenario en el que se encontraba, era la adquisición de una. Esto hizo que los jóvenes adoptasen como estrategia emancipadora el retraso del abandono del hogar parental hasta el momento en el que pudiesen convertirse en propietarios.

Así, Melo y Miret (2010) afirmaron que en el modelo español generalizado de emancipación la adquisición de una vivienda en propiedad es un fuerte componente para

poder abandonar el hogar de los progenitores y formar su propia familia, resultado que consideran como la culminación de la independencia.

Esta incentivación a la propiedad en el sistema residencial español ha producido que el precio de la vivienda sea un factor determinante en la explicación del retraso de la emancipación en España. Al respecto, Holdsworth (1998) comparó los patrones regionales de emancipación de España durante 1970-1980 a partir de la Encuesta Sociodemográfica Española de 1991 y uno de sus resultados más importante confirmó que a pesar de existir una cierta divergencia en los patrones de emancipación entre las distintas zonas examinadas, en todas ellas el aumento del precio de la vivienda era uno de los factores que parecía haber afectado con mayor magnitud al retraso cada vez más pronunciado del momento de abandonar el hogar parental.

Sobre la incidencia del precio en la independencia residencial de los jóvenes españoles Martínez-Granado y Ruíz-Castillo (2002) aportaron nuevas conclusiones al determinar que el tamaño del parque de vivienda de alquiler y el precio de los arrendamientos es un importante factor explicativo de la emancipación residencial de los jóvenes españoles de 18 a 35 años.

A esto añadió Requena (2006) que, en la última década, las mejoras de inserción laboral, unas condiciones de trabajo más estables y la caída de los tipos de interés pudieron ocasionar un contexto favorable para incrementar las oportunidades de independencia entre los jóvenes pero que, sin embargo, esta situación fue contrarrestada por la desproporcionada subida del precio de la vivienda que experimentó el país entre 1996 y 2005.

Ante esta situación Jurado Guerrero (2006, p. 15) recomendó la necesidad de que el parque de vivienda en alquiler experimentase una reestructuración para favorecer a la emancipación juvenil: “las nuevas tendencias familiares deberían hacer reflexionar sobre la conveniencia de aumentar el parque de viviendas en alquiler ante el crecimiento del dinamismo y la pluralización familiar y de situaciones vitales y familiares de transición que se adecuan mejor a viviendas de alquiler. El potencial de demandantes de vivienda en alquiler es enorme. Se puede cifrar como mínimo en la mitad de los 10 millones de jóvenes españoles de 15 a 34 años de edad”.



Por su parte, la relación entre el alquiler y la emancipación en España ha sido analizada por Botelho Azevedo (2016) en uno de los capítulos de su tesis doctoral. Así, manifestó que una adecuada política de vivienda que frenase las acciones especulativas y estabilizase los precios, junto a un mayor fomento del alquiler y de la rehabilitación de edificios antiguos beneficiaría a los adultos jóvenes con menos ingresos e impulsaría la emancipación residencial. Además, la investigación, al haberse realizado años después del inicio de la crisis de 2008, rechaza con datos oficiales la hipótesis de la necesidad de ampliar la oferta de vivienda libre puesto que el stock desarrollado durante los años de la burbuja inmobiliaria era más que suficiente para satisfacer las necesidades de la población. En cambio, apuesta por el fomento de una mayor oferta de alquiler que facilite el acceso a una vivienda por parte de aquellos sectores que, como el juvenil, tradicionalmente se han visto excluidos del parque de viviendas en España.

De este modo, la ampliación del mercado de alquiler y la mejora de las condiciones de accesibilidad de los jóvenes al mismo puede ayudar a que estos adopten la decisión de emanciparse a una edad más temprana. Este hecho fue analizado por Aparicio-Fenoll y Oppedisano (2015), que examinaron los efectos que produjo sobre la independencia, la formación familiar y la fertilidad de los jóvenes la medida política conocida como “Renta Básica de Emancipación”, un subsidio al alquiler que aprobó el gobierno central de España en 2008 con el objetivo de que los jóvenes alquilaran una vivienda. Los datos que emplearon fueron extraídos de la Encuesta de Población Activa entre 2006 y 2009 a los que añadieron otros indicadores extraídos de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Sus resultados apoyan los efectos positivos que tuvo esta política pública sobre la independencia residencial juvenil, ya que la tasa de emancipación para los jóvenes de 22 años mejora entre 1,2-2,4 puntos porcentuales en comparación a la de los de 21 años. Además, hallaron que la incidencia positiva era mayor aún en los casos en los que la población juvenil tenía ingresos bajos y vivía en territorios donde los precios del alquiler eran elevados.

Gentile (2016) también revisó, aunque de una manera más descriptiva, la implementación y el impacto de la Renta Básica de Emancipación en el periodo de tiempo 2007-2012. Los resultados positivos de esta medida sobre la emancipación de los jóvenes

españoles también fueron apoyados por este investigador. Uno de los aspectos que subrayó, al igual que Patón (2007), es que la política de vivienda que elabora cada país determinará en gran medida las posibilidades de los jóvenes a la hora de independizarse del hogar de sus padres y que, sin embargo, en España ha sido prácticamente inexistente en comparación con otras políticas públicas. De este modo, manifestó que la Renta Básica de Emancipación fue realmente la primera intervención política que tenía como idea la reducción del peso que tiene la propiedad en el modelo residencial español y conseguir que sus características se asemejasen algo más a las del parque de viviendas de otros países en los que la emancipación juvenil se presenta como un proceso menos problemático.

En conclusión, puede afirmarse que la estructura del parque inmobiliario de España ha repercutido de manera importante en la configuración de los patrones de emancipación juvenil de este país. Un mercado de vivienda dominado primordialmente por la propiedad y por elevados precios ha colaborado a que se retrase la independencia juvenil y, además, ha potenciado más aún las estrategias basadas en el atraso de la salida del hogar familiar hasta el momento en el que los jóvenes tengan los suficientes recursos económicos como para acometer la compra de una vivienda libre en el mercado.

A esto han contribuido no solo un reducido parque de alquiler que suele encontrarse en malas condiciones sino también las políticas públicas de vivienda que en las últimas décadas han acentuado esta situación debido a la continua promoción de la propiedad y a la ausencia de fomento de otros tipos de regímenes de tenencia. Por estos motivos, distintas investigaciones manifiestan que el alquiler facilitaría la emancipación juvenil y que, por tanto, la apuesta por él puede ser parte de la solución a los problemas de emancipación ante los que se encuentran los jóvenes españoles; razón para que las medidas políticas aplicadas, como la Renta Básica de Emancipación, deban estar dirigidas en este sentido y no a facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado inmobiliario vía adquisición.

Pero, sin duda, dos elementos decisivos relacionados entre sí que inciden en la emancipación juvenil, ya sea mediante la compra o el alquiler, y que pueden explicar la decisión por parte de los jóvenes de abandonar el hogar familiar son el mercado laboral

y los ingresos de los que disponen. Esto es debido a que el acceso al mercado de trabajo se trata de una fase fundamental y muy marcada en la transición a la vida adulta, ya que el acceso a un empleo adecuado con buenas condiciones laborales proporcionará autosuficiencia económica a los jóvenes y les permitirá afrontar el proceso de independencia residencial.

## **2.2. El mercado laboral como elemento fundamental en la emancipación: análisis del estado de la cuestión**

Las características del mercado de trabajo al que accede la población juvenil son determinantes para la explicación de los patrones de la emancipación residencial, ya que la experiencia de los jóvenes ante la precariedad del mercado laboral es un factor central en la modelación de las expectativas a la hora de establecer la ruta del abandono del hogar familiar (Mills *et al.*, 2005).

Sin embargo, como señala Ghidoni (2002), en la literatura económica los análisis sobre la formación de nuevos hogares no fueron muy comunes hasta finales de 1980, mientras que los trabajos en otras ciencias sociales en su gran mayoría eran de naturaleza descriptiva.

Entre las primeras investigaciones que utilizaron el análisis económico para modelar la decisión de formar un hogar propio se encuentran los trabajos de McElroy (1985), Goldscheider y DaVanzo (1985) y Rosenzweig y Wolpin (1993), que determinaron que la probabilidad de vivir fuera del hogar de los progenitores crecía a medida que los jóvenes disponen de mayores ingresos, puesto que esto les permite no tener dependencia del apoyo familiar y disfrutar de más privacidad. Además, señalaron que los mayores niveles de ingresos familiares aumentan la posibilidad de cohabitar entre padres e hijos debido a que existe la oportunidad de que la incorporación al mercado de trabajo por parte de los jóvenes se posponga con el fin de buscar mejores empleos y condiciones laborales más favorables.

A raíz de estas investigaciones se promovió el debate académico en torno a la incidencia del mercado laboral y de los ingresos en la emancipación residencial, a lo que

también se unió la preocupación por el retraso cada vez más dilatado que este proceso estaba experimentando en las últimas décadas.

Además, en los últimos años esta literatura se ha visto ampliada de manera importante, tanto a nivel nacional como internacional, debido a dos factores claros: por un lado, por el creciente interés ante cómo la incertidumbre económica de las últimas décadas está afectando a la transición a la vida adulta; y, por otro lado, por la crisis económica de 2008, aspecto en el que se profundizará en el próximo apartado de este capítulo.

#### 2.2.1. El desempleo juvenil como factor explicativo del retraso de la emancipación

Entre la proliferación de artículos que se produjo a partir de la década de los noventa destaca el de DaVanzo y Goldscheider (1990), que encontraron que el ingreso y el desempleo son elementos importantes para la independencia residencial en Estados Unidos. Buck y Scott (1993) también examinaron los patrones de emancipación residencial de los jóvenes estadounidenses mediante el análisis de los datos que proporciona el *Panel Study of Income Dynamics* y establecieron que, aunque por sí sola la incidencia del ingreso es leve, el acceso a un empleo a tiempo completo sí implica un impacto positivo y robusto en la independencia residencial.

Los resultados que se obtuvieron una década después sobre los efectos que ejerce el estado del mercado laboral en la emancipación de los jóvenes estadounidenses fueron similares a los estudios anteriores. Así, Bell *et al.* (2007) hallaron que desde 1980 la edad del matrimonio y de la formación de un hogar por parte de las nuevas generaciones se estaba retrasando como consecuencia del deterioro del mercado de trabajo y la disminución de oportunidades laborales. Y Hill y Holzer (2007), que también concluyeron que la transformación del mercado laboral explicaba las modificaciones que se habían producido al respecto en las formas de convivencia entre los jóvenes de 20 a 22 años entre 1984 y 2002.

Los trabajos de Kaplan (2009; 2010) analizaron los ajustes que realizan los jóvenes estadounidense en sus condiciones de vida según el estado en el que se encuentre el

mercado laboral y demostró que pasar de estar empleado a no disponer de un trabajo aumenta las posibilidades de retornar al hogar de los progenitores en un 70%. Este investigador concluyó que parece existir un periodo de transición durante el cual los jóvenes entran y salen del hogar familiar hasta que finalmente se independizan. Por último, también defiende la hipótesis de que la coresidencia con los padres es una estrategia cada vez más común ante las imposibilidades de tener la suficiente capacidad económica para emanciparse.

Esto último también es ratificado por el estudio de Matsudaira (2010) que, tras analizar datos de más de 12 millones de individuos entre 1960 y 2007, afirmó que los contextos de pocas oportunidades de trabajo, salarios bajos y un precio del alquiler elevado establecen una relación positiva con el aumento de la coresidencia en los hogares, ya que los jóvenes deciden compartir la vivienda con sus padres como estrategia protectora ante la situación económica. A su vez, destacó que, aunque la incidencia es mayor en los jóvenes de menor edad, la cohorte 30-34 años también se muestra sensible a las condiciones del mercado laboral. Igualmente, Wiemers (2014) afirmó que existe evidencia sólida de que las personas, ante coyunturas económicas convulsas, utilizan la coresidencia como modo de protección para compartir los gastos y el consumo. De este modo, concluyó que las personas que pierden su empleo tienen tres veces más posibilidades de mudarse a vivir con otras y que esto se produce sobre todo entre la población más joven. Las razones que ofrece a este fenómeno es que son bajas las probabilidades de que tengan ahorros suficientes para que afronten el desempleo durante un amplio periodo de tiempo, a lo que se une el hecho de que muchos de ellos no reúnen todos los requisitos necesarios para acceder a los beneficios sociales relacionados con el desempleo.

La influencia del mercado laboral en la emancipación de los jóvenes también ha sido investigada en la literatura europea con idénticas conclusiones que en el caso norteamericano. Chiuri y Del Boca (2008) presentaron una investigación sobre la independencia residencial de los jóvenes de 14 países europeos que incorpora aspectos concretos de los mercados laborales, de los de vivienda y del matrimonial. Una de sus conclusiones es que las condiciones del mercado laboral y las escasas políticas sociales

reducen las posibilidades de que los jóvenes puedan formar un hogar propio, situación que vuelven a examinar a partir de las diferencias existentes entre género en Chiuri y Del Boca (2010).

A resultados similares llegó otro importante trabajo para Europa como es el de Becker *et al.* (2010). Este estudio investigó para el caso de 13 países cómo afectó la inseguridad laboral sobre la independencia residencial de los jóvenes durante el periodo 1983-2005. El análisis econométrico que realizan para la cohorte de 20-24 años y la de 25-29 años que viven en el hogar de los progenitores establece que la coresidencia entre la población joven y sus familias aumenta un 1,7% cuando se incrementa en 10 puntos porcentuales la proporción de jóvenes que consideran que su trabajo es inseguro. Lo contrario ocurre cuando la inseguridad laboral entre los progenitores crece en el mismo porcentaje, ya que esto supone una disminución del 1,1% de la cohabitación intrafamiliar. Argumentaron que este hecho ocurre debido a que como la familia no tiene la capacidad para mantener los niveles de seguridad que tienen los jóvenes, estos deciden buscar empleo lejos de casa con la idea de descargar la tensión económica de sus hogares de origen. Además, profundizan su análisis en el caso de Italia examinando también estos efectos entre los jóvenes de este país entre 1995 y 1998. Los resultados en este caso son similares, puesto que el aumento de la inseguridad laboral juvenil presenta una relación negativa con la emancipación residencial, mientras que el deterioro de las situaciones laborales de los padres tiene una correlación positiva con ello.

Esta última conclusión está en línea con una investigación previa de Aassve *et al.* (2001), ya que determinaban que la situación económica personal y familiar tienen un papel clave en las decisiones de emancipación de los jóvenes italianos. Manacorda y Moretti (2006) también afirmaron que a medida que las condiciones laborales de las familias italianas son mejores la coresidencia aumenta entre padres e hijos. O Giannelli y Monfardini (2003), que confirmaron que cuando las oportunidades del mercado laboral de este país son escasas, los jóvenes retrasan la salida del hogar familiar con la idea de ampliar sus estudios universitarios para poder acceder a empleos con mayores ingresos y mejores condiciones laborales.

Esta cuestión también ha sido examinada para Portugal, Italia, Grecia y España en el trabajo de Parisi (2008). No solo confirmó que los ingresos familiares son determinantes en el proceso de emancipación juvenil, sino que también ratificó que los jóvenes de los países del sur de Europa retrasan su partida del hogar familiar como método de protección ante las dificultades laborales.

En otros países europeos también se publicaron trabajos transversales centrados en las condiciones del mercado laboral como factor determinante en la emancipación residencial. Así, para el caso de Reino Unido Stone *et al.* (2011) examinaron la cohorte de la población de 16 y 34 años durante el periodo 1998-2008 y obtuvieron una relación positiva entre la incertidumbre del mercado laboral ante el que se encuentran especialmente los jóvenes y el incremento de las tasas de coresidencia con sus padres.

En el caso alemán, el trabajo de Wagner y Huinink (1991) utilizó distintas fuentes de datos y confirmó que tanto el estatus ocupacional como la experiencia laboral son factores determinantes a la hora de abandonar el hogar de los progenitores en Alemania Occidental. Igualmente, Gartner (2000) para el caso de los jóvenes alemanes también estableció una fuerte relación entre tener un trabajo a tiempo completo y emanciparse, mientras que cualquier otro tipo de contrato laboral no proporcionaba resultados significativos. Más recientemente Berngruber (2015) también investigó esta temática para Alemania, y no solo determinó que la independencia financiera ocasionada por las mejores oportunidades laborales permite a los jóvenes alemanes que se emancipasen con éxito, sino que también reduce de manera ostensible las posibilidades de retornar al hogar familiar una vez que se había abandonado.

Unos resultados similares obtuvieron Nilsson y Strandh (1999) para Suecia, que concluyeron que existe una asociación estadísticamente significativa entre el empleo y la emancipación residencial juvenil y que, además, las probabilidades de que los jóvenes vuelvan al hogar familiar aumenta cuando experimentan dificultades en el mercado laboral.

### 2.2.2. La incidencia de los ingresos en la independencia residencial de los jóvenes

El nivel de ingresos que los jóvenes reciben por el desempeño de un empleo se presenta como un factor concreto que puede afectar sus procesos de emancipación, ya que las rentas monetarias de las que dispongan moldearán sus decisiones de independencia residencial. Sobre este hecho, tanto Haurin *et al.* (1993) como Avery *et al.* (1992) establecieron una correlación positiva relativamente fuerte entre los salarios laborales de los jóvenes y el abandono del hogar en EE.UU, es decir, a medida que tienen mayores ingresos sus posibilidades de abandonar el hogar familiar para constituir uno propio aumentan.

A esta conclusión igualmente llegaron Whittington y Peters (1996), ya que confirmaron que el nivel salarial de los jóvenes es determinante a la hora de que afronten la emancipación residencial, aunque en esta ocasión añadieron que se trata de un factor más decisivo en el caso de los hombres que en el de las mujeres. El estudio posterior de Card y Lemieux (2000) también halló evidencias empíricas similares y, por tanto, enunció que para los jóvenes de 16 a 24 años existe una relación inversa entre la coresidencia parental y los niveles altos de salarios y las bajas tasas de desempleo. Asimismo, Mulder y Clark (2000) encontraron que, si bien la vivienda familiar incide en las oportunidades de formar un nuevo hogar, son los ingresos propios de los jóvenes los que tienen una mayor capacidad explicativa en este proceso.

Del mismo modo, estos resultados también se obtuvieron en distintas investigaciones para Europa. Uno de los primeros estudios que se puede encontrar es el de Fernández Cordon (1997), que examinó las posibilidades de emancipación que tenían los jóvenes de la Unión Europea en relación con el mercado laboral. A partir del análisis de las Encuestas *Labour Force Survey* del periodo 1983-1994, los resultados obtenidos mostraron que el aumento de la población juvenil no activa y los empleos que generan pocos ingresos conducen a un incremento del porcentaje de jóvenes que conviven con sus padres. Especialmente señalaba el deterioro de la situación del sector juvenil en los países del sur de Europa.



Sobre esto último también incidió Ghidoni (2002), que tras aplicar un modelo econométrico *logit* multinomial respaldó la afirmación de que las circunstancias laborales de las que parten los jóvenes de los países del mediterráneo, fundamentalmente el deterioro relativo de los salarios y el aumento del desempleo, son determinantes en la configuración de las decisiones de abandono del hogar familiar y que ayudan a explicar las diferencias existentes en la emancipación de los distintos países europeos.

Las variaciones que se pueden encontrar en el proceso de independencia residencial de los jóvenes entre los países de Europa también fueron examinadas por Aassve *et al.* (2002). El objetivo de esa investigación era demostrar el papel determinante que juega el estado de bienestar en la decisión de los jóvenes europeos a la hora de abandonar el nicho familiar. Los resultados que obtuvieron constataron la existencia de diferencias en el proceso de emancipación juvenil entre los regímenes de bienestar, ya que mientras que el empleo y los ingresos son factores muy importantes para los jóvenes de los países del sur de Europa para los del modelo continental los efectos son menores, llegando a tener estas dos variables una influencia prácticamente insignificante para el régimen socialdemócrata y para el liberal.

Igualmente, Le Blanc y Wolff (2006) examinaron para 11 países europeos tanto la incidencia de los ingresos de los padres como la de los hijos en la decisión de estos últimos de independizarse residencialmente de sus familias. Tras desarrollar modelos aleatorios y de efectos fijos los resultados que obtuvieron establecieron una relación positiva entre el nivel de los emolumentos de los jóvenes y sus posibilidades de independizarse pero, al contrario de otros estudios, no hallaron una asociación tan clara en el caso de la renta familiar.

En cambio, en una investigación más reciente, Iacovou (2010) sí obtuvo para una muestra de 13 países de la Unión Europea que a medida que los ingresos familiares eran más ostensibles la correlación con el abandono del hogar de los progenitores se volvía negativa. De este modo, sus resultados son acordes a los que llegan con regularidad las investigaciones anteriores, ya que los ingresos de los jóvenes también establecen una relación positiva y sólida con la independencia residencial en todos los países examinados.

### 2.2.3. La literatura sobre los efectos del mercado laboral en la emancipación de los jóvenes españoles

La producción científica en España correspondiente a este tema fue escasa, al igual que ocurre en sus países vecinos, hasta el comienzo de la crisis económica de 2008. Este acontecimiento supuso un importante aumento de la literatura que analizaba la incidencia de las características del mercado de trabajo al que accede la población juvenil en el proceso de emancipación de los jóvenes españoles.

No obstante, antes de esto se publicaron algunos estudios que prestaron atención a cómo el mercado laboral español podía estar influyendo en la independencia de los jóvenes de este país.

Así, Colom *et al.* (2001) investigaron si la formación del hogar y la participación laboral eran dos decisiones interrelacionadas para la juventud española de 18 a 35 años. Para ello aplicaron un modelo *logit* multinomial anidado a una muestra de 21.155 hogares españoles proporcionada por la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1990-1991, que recopila información demográfica, económica y características personales de los individuos que integran estos hogares. Los resultados que obtuvieron indican que la capacidad económica de la población joven es un factor vital para su emancipación residencial. Estas conclusiones fueron respaldadas más tarde por Colom y Molés (2016), tras aplicar un modelo *logit* binomial para analizar tres momentos temporales distintos (1990, 2000 y 2010).

Díaz y Guilló (2000) también sostienen que si los jóvenes perciben que su salario es muy bajo retrasarán el abandono de la vivienda de sus padres. Cantó-Sánchez y Mercader-Prats (2000) añadieron a esto que la inestabilidad del empleo es un elemento clave, junto al precio de la vivienda, para comprender por qué los jóvenes españoles se mantienen con sus progenitores durante periodos de tiempo tan largos.

Sobre la inestabilidad laboral y sus efectos en la emancipación juvenil en España profundizó Baizán *et al.* (2002), que investigaron los cambios a nivel educativo, ocupacional y familiar que experimentaron los jóvenes españoles nacidos entre 1945 y 1974. La razón de ello parte de que se pudieron producir modificaciones en la dinámica

de la transición a la vida adulta entre estas generaciones debido a los acontecimientos históricos de esos años, como pudieron ser los procesos globales que tuvieron lugar durante la liberalización y la individualización del mercado. Para ello construyeron secuencias de estados usando los datos que proporciona la Encuesta Española de Fertilidad y Familia. En sus resultados identificaron tanto un incremento en la discontinuidad de la situación ocupacional como incluso la exclusión laboral, lo que influía en la posposición de la formación del hogar debido a que los riesgos del desempleo y las consecuencias de la flexibilización del mercado laboral afectaban especialmente a los jóvenes.

Unos resultados similares fueron obtenidos por Martínez y Ruíz-Castillo (2002), que también se centraron en esta problemática aunque a nivel regional. Estos dos investigadores analizaron los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1990-1991 para determinar por qué los padres y sus hijos de entre 18 y 35 años decidían ampliar notoriamente el tiempo de convivencia en el mismo hogar. Sus resultados confirmaron de manera plausible sus hipótesis de partida: el trabajo y los niveles de desempleo regionales tienen una importancia fundamental junto con la trascendencia que adquiere cada vez más el precio de la vivienda. Además, hallaron la misma relación que encuentran otros trabajos, como McElroy (1985), sobre el hecho de que el estatus socioeconómico de los padres influye en las pautas de emancipación de los jóvenes españoles. De hecho, Bernardi (2007) afirmó que una condición necesaria para que los jóvenes españoles se emancipen es que estos alcancen una posición socioeconómica similar a la de sus progenitores, lo que en numerosas ocasiones se ve imposibilitado ante la falta de oportunidades laborales.

El estudio de Holdsworth *et al.* (2002) también aportó información sobre los elementos más determinantes en la emancipación residencial a nivel regional en el caso español. Tras analizar los datos con modelos multinivel, que controlan las características individuales y provinciales, los resultados confirmaron que los factores económicos, como las oportunidades de empleo, junto con los aspectos del mercado de la vivienda, como el precio o el stock de vivienda de alquiler, tienen una importancia vital a nivel individual. Sin embargo, a nivel provincial pierden efecto y son los componentes

culturales, como el matrimonio, los que adquieren mayor importancia. De esta manera, señalaron una significativa variación entre las comunidades autónomas españolas que indicaba la existencia de diferentes patrones regionales de emancipación.

No obstante, a pesar de que Miret (2006) también comparte la premisa de la existencia de una considerable heterogeneidad en el proceso de emancipación entre las comunidades autónomas, afirmó, por el contrario, que en todos los casos la participación de los hombres jóvenes en el mercado laboral se trataba de un factor muy importante en el desarrollo de las estrategias de emancipación juvenil en toda España.

Vitali (2010) también coincide en estas cuestiones con Miret (2006), de modo que confirmó que en España existe una significativa heterogeneidad a nivel regional en la transición a la vida adulta y que, incluso, estas divergencias se manifiestan con más claridad aún en el ámbito municipal; e igualmente afirmó que el empleo se torna en todo el territorio como un factor esencial para la emancipación de los jóvenes españoles.

Por su parte, Carbajo (2014) en su tesis doctoral investigó las trayectorias y las estrategias residenciales de la juventud en la comunidad autónoma del País Vasco, y una de sus conclusiones fue que los jóvenes de esta región retrasan el abandono del hogar familiar y/o alternan las situaciones de idas y venidas como estrategia ante la inestabilidad laboral y el deterioro de los ingresos. Donat y Martín-Lagos (2020) obtienen resultados similares para el caso de Andalucía, ya que confirman que un empleo estable y tener los suficientes recursos económicos también es vital para la emancipación juvenil en esta región.

Por último, destacar el trabajo de Moreno Mínguez (2012), que tiene como objetivo describir e identificar los factores económicos, institucionales y culturales que actúan en el proceso de transición a la vida adulta en España mediante un estudio comparativo con 13 países europeos y EE.UU para el 2005. Los resultados que obtuvo apoyan las conclusiones anteriores, ya que afirmó que la situación económica de la población juvenil y el crecimiento de la incertidumbre del mercado laboral al que acceden los jóvenes españoles son partes fundamentales en la explicación del retraso del proceso de emancipación en este país.

En definitiva, los estudios que han investigado el papel que juega el mercado laboral y los ingresos de los jóvenes muestran claramente que se tratan de dos factores decisivos a la hora de que estos tomen la decisión de abandonar el hogar familiar. Es decir, tener un empleo estable y con buenas condiciones laborales que proporcione unos considerables ingresos incide de manera positiva en adelantar la edad de emancipación. Y no solo eso, sino que el estatus socioeconómico de la familia suele presentarse como fundamental en este proceso.

Asimismo, parece que se establece de manera genérica, tanto en Estados Unidos como en Europa, que cada vez son más comunes entre los jóvenes las estrategias enfocadas en retrasar la independencia residencial con el objetivo de acumular recursos económicos y capital humano que les garantice enfrentar la independencia residencial con cierta protección y seguridad. Esta estrategia especialmente se lleva a cabo en los países del sur de Europa que parece ser, sin duda, donde el mercado laboral, el empleo y la familia juegan un papel más decisivo.

Sin embargo, a la incertidumbre económica de los jóvenes y al precario mercado laboral al que acceden se une la crisis económica de 2008 y cómo sus consecuencias pueden estar modificando las pautas de emancipación juvenil. Por esta razón en la siguiente sección se examinará la literatura más reciente publicada al respecto, con el fin de poder identificar qué efectos han producido las convulsiones económicas de los últimos años en la independencia residencial de los jóvenes.

### **2.3. Los efectos de la crisis económica de 2008 en la emancipación residencial juvenil: un repaso a la literatura**

La investigación sobre los efectos de la crisis económica de 2008 en la emancipación residencial de los jóvenes y cómo estos se comportan ante el estrés económico en relación a sus decisiones de acceso a la vivienda son escasas (Lennartz *et al.*, 2016).

Uno de los primeros estudios que investigó esta cuestión para los Estados Unidos fue el de Mykyta y Macartney (2011). Estos autores afirmaron que la literatura académica no había documentado profundamente cómo responden los hogares ante una situación de

tensión económica. Con el fin de aportar una nueva evidencia sobre este tema el objetivo de ese estudio fue estimar el aumento del número de personas mayores de 18 años que vuelven a casa de sus padres y el caso contrario, es decir, progenitores que se mudan al hogar de sus descendientes. Para ello analizaron los efectos que tuvo la recesión económica sobre la formación de hogares a partir de la Encuesta de Población de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para el año 2008 y 2010. Los resultados indicaron que el porcentaje de población que compartía vivienda se situó por encima del 6% tras el inicio de la recesión frente al promedio habitual del 2%. Además, los jóvenes entre 25 y 34 años tenían mayores probabilidades de convertirse en un adulto adicional en un hogar, un hecho marcado especialmente por los niveles de educación y desempleo. Los autores también manifestaron que la cohabitación es una estrategia empleada por las familias más desfavorecidas para afrontar los problemas económicos originados en la crisis.

Al año siguiente estos resultados fueron ampliados y reforzados por otra investigación de Mykyta (2012). En esta ocasión examinó los comportamientos de emancipación residencial de los jóvenes desde 1995 a 2011 con el objetivo de determinar los efectos que la recesión había tenido en este proceso y cómo varía dependiendo del estado socioeconómico de la población joven. En este sentido, confirmó que la autonomía residencial se redujo durante la recesión económica y que, por tanto, aumentaron las formas de convivencia en una misma vivienda entre los más jóvenes. Además, esta autora apuntó que las dificultades económicas, como el importante aumento del desempleo, estaban retrasando la independencia residencial hasta a partir de los 25 años.

El trabajo de Lee y Painter (2013) apoya estas conclusiones, ya que afirmó que en Estados Unidos un incremento del 2% de la tasa de desempleo disminuye en un 1% la creación de nuevos hogares. Pero lo que es más importante, confirmó que la presencia de recesiones supone un importante freno a la tasa de formación de hogares ya que la probabilidad de que una persona joven forme uno durante este periodo se reduce entre 1% y 9%, mientras que si a esto se añade el hecho de que no tengan un empleo las posibilidades disminuyen en un 11%. Entre sus últimas consideraciones destaca la

necesidad de investigar qué periodo de tiempo es necesario para que la tasa de formación de hogares recupere sus niveles previos a una crisis económica.

Esto último es el objeto de estudio de un trabajo posterior de Choi y Painter (2015), que investigó no solo cómo afecta un shock en la tasa de desempleo en la formación de hogares, sino también durante cuánto tiempo persisten dichos efectos. Para evaluar esto recopilaban datos económicos de Estados Unidos para el periodo que transcurre desde 1975 hasta 2012. Los resultados de esta investigación muestran que el crecimiento del desempleo en un 1,68% reduce la tasa de formación en casi 60.000 hogares a partir del tercer trimestre desde que ocurre el shock económico, y que estos efectos se extienden durante varios más. Es a partir del décimo trimestre cuando la tasa de crecimiento de los hogares retorna a su valor original, a pesar de que el desempleo no haya recuperado sus niveles previos a la convulsión económica. Es decir, afirmaron que los factores demográficos con el tiempo terminan imponiéndose a los económicos cuando las personas adoptan la decisión de crear un nuevo hogar.

Paciorek (2016) concluyó que a medida que el mercado laboral estadounidense se estabilizase tras el impacto que tuvo la crisis económica, la formación de hogares iría aumentando al ser el desempleo y los ingresos factores determinantes en este proceso. En línea con estas afirmaciones, Cooper y Luengo (2018) enunciaron que la grave pérdida de empleo que ocasionó la recesión junto con los elevados precios de la vivienda explican en torno al 70% de la disminución en la constitución de nuevos hogares en los individuos de 23 a 33 años.

Otro estudio que indica el deterioro del mercado laboral causado por la crisis económica como un factor determinante en el retraso de la formación de hogares en el país norteamericano es el de Matsudaira (2016). Sus resultados confirmaron que no solo los más jóvenes deciden no abandonar el hogar familiar como estrategia para soportar las cargas económica cuando el mercado laboral es inestable a causa de una recesión, sino que también incide en la determinación de hacerlo en las personas que conforman la cohorte de 30 a 34 años. Además, señaló que tanto el costo de la vivienda como los elevados precios del alquiler tienen un mayor peso como variable explicativa de la reducción de la tasa de formación de hogares en los momentos de recesión económica.

Las consecuencias tan graves que tuvo la crisis económica en Europa, especialmente en el sur de este continente, han hecho que también proliferen las investigaciones al respecto sobre esta temática.

En este sentido, Bayrakdar y Coulter (2018) investigaron cómo las características socioeconómicas y los costes locales de la vivienda moldean las decisiones de emanciparse de los jóvenes británicos. Con este objetivo aplican modelos *probit* de interceptaciones aleatorias multinivel a los datos de la *Household Longitudinal Study* y obtienen resultados que apoyan la hipótesis de que los mayores precios de la vivienda están relacionados con el retraso por parte de los jóvenes de abandonar el hogar familiar. Sin embargo, indican que esta asociación ejerce una influencia modesta y que es considerablemente menor de lo que se suele pensar.

En cambio, un estudio reciente de Torres-Tellez y Montero (2020) para el caso de Portugal halla que la repercusión de la crisis económica de 2008 disminuyó la tasa de creación de nuevos hogares y que el empeoramiento de las condiciones económicas provocó el retraso en la emancipación del núcleo familiar especialmente entre los jóvenes portugueses, al ser los que se vieron afectados en mayor medida por el desempleo. Además, afirma que estos efectos se extienden sobre la creación de hogares durante casi dos años.

Por su parte, Aassve *et al.* (2013) analizaron para 24 países cómo las dificultades económicas de los adultos jóvenes en el contexto de crisis afectan en el corto plazo a la transición a la vida adulta. Para ello utilizan la Encuesta sobre Ingresos y Condiciones de Vida de la Unión Europea para el periodo 2005-2011. Su principal conclusión es clara: la vulnerabilidad del sector juvenil aumenta durante la recesión económica, especialmente entre el grupo de 18 a 24 años, por lo que deciden retrasar el abandono del hogar familiar ante las dificultades económicas. De este modo, como afirmaban para el caso estadounidense Matsudaira (2016) o Mykyta y Macartney (2011), muchos jóvenes europeos deciden quedarse con sus progenitores como estrategia para hacer frente a la incertidumbre económica y al deterioro del mercado laboral. A esto añaden que los efectos tienen importantes variaciones según los regímenes de bienestar e incluso existen diferencias internas entre los países de cada modelo. Sobre todo mencionan el caso de los



países del sur de Europa, que debido a su estado de bienestar esperan mayores aumentos en las tasas de coresidencia entre padres e hijos.

Estas conclusiones son compartidas por Lennartz *et al.* (2016) tras analizar una muestra de 15 países de la Unión Europea a partir de los datos agregados a nivel micro de la encuesta *European Union Statistics on Income and Living Conditions* de 2007 y 2012. Estos investigadores afirmaron que tanto la tasa de formación de hogares como la vivienda en propiedad han experimentado fuertes caídas entre los jóvenes de 18 y 34 años como consecuencia de la crisis de 2008. Además, sostienen que el proceso que más ha crecido como forma de habitar una vivienda entre los jóvenes es la coresidencia con sus padres. Por último, respaldan en base de las evidencias obtenidas el hecho de que las crisis económicas en general, y en especial esta última, pueden transformar de manera significativa los patrones juveniles residenciales existentes.

De hecho, estas modificaciones de las estrategias de emancipación son respaldadas por Byrne *et al.* (2018) para el caso de Irlanda, ya que tras el inicio de la crisis económica la tasa de formación de hogares creció en este país debido a un cambio de comportamiento en la población joven, que ante los descensos de los precios del mercado de alquiler consideraron que tenían la capacidad económica suficiente para independizarse residencialmente. No obstante, en los últimos años la tendencia está cambiando nuevamente como consecuencia de la mejora macroeconómica del país, lo que ha hecho que los precios del alquiler vuelvan a crecer debido a las presiones demográficas, a la mejora de los ingresos de la población y a una reducida oferta de alquiler, lo que parece que está repercutiendo negativamente en la tasa de formación de hogares.

Sobre esta última cuestión, Clark (2011) también argumentó que el descenso de los precios de la vivienda puede haber supuesto un refuerzo positivo en la decisión de los jóvenes de EE.UU a la hora de abandonar el hogar familiar y acceder al mercado de alquiler, lo que también podría haber provocado una variación en el patrón de emancipación de los jóvenes estadounidenses.

### 2.3.1. Los efectos de la crisis económica de 2008 en la emancipación residencial juvenil en España

La incidencia y los efectos de la crisis económica son factores que también han incidido sobre la emancipación juvenil en España. No solo por tratarse de un país que ya de por sí tenía una edad media de emancipación bastante superior a la de la Unión Europea, sino por ser uno de los que también más ha padecido la crisis. Sin embargo, Moreno Mínguez (2016) destacó la poca bibliografía existente que ponderase para el caso español los efectos que la última recesión económica ha producido en la emancipación de los jóvenes. No obstante, sí hay una mayor cantidad de estudios de carácter descriptivo de la situación juvenil y de las características de la independencia residencial tras este acontecimiento.

Entre estos trabajos destaca un informe que elaboró Gentile (2013), que presenta un diagnóstico de la situación de los jóvenes entre 20 y 34 años a partir de 2008. Para ello también tiene en consideración la correspondiente información previa de los años anteriores al inicio de la crisis económica y pone especial énfasis en cuestiones que van desde el abandono escolar, la sobrecualificación o el paro juvenil hasta los aspectos culturales y estructurales que determinan el acceso a una vivienda y a las formas en que el sector juvenil lleva a cabo la emancipación residencial. Así, entre sus conclusiones destaca que los jóvenes españoles encaran su transición hacia la vida adulta con mucha incertidumbre y con poca seguridad. Esto produce que sus opciones de independencia residencial dependan prácticamente de una elección racional a partir del coste-oportunidad, lo que hace que en numerosas ocasiones decidan quedarse en el hogar familiar para no disminuir los niveles de bienestar que vienen experimentando, reforzando el papel clave de la familia como unidad de integración y autodefensa.

Otra investigación sobre la transición juvenil en España durante la crisis económica es Moreno Mínguez *et al.* (2012). Este estudio analizó la situación de los jóvenes españoles en un marco comparado europeo desde una perspectiva teórica y descriptiva utilizando distintos indicadores, como los económicos o los institucionales. Una de las conclusiones más destacables, y que choca con lo expuesto en las investigaciones internacionales anteriores, es que aunque la crisis haya empeorado drásticamente la

situación laboral de los jóvenes españoles no ha afectado de manera destacable a sus pautas de emancipación. La explicación que dan a esto es que el contexto de emancipación residencial en España ya era muy complicado incluso antes de la crisis y que el deterioro de sus circunstancias laborales y económicas se venía produciendo desde hacía tiempo.

Estas últimas conclusiones son compartidas por Echaves (2016) en su tesis doctoral. La hipótesis de partida que plantea es que el contexto socioeconómico en el que se independizaban los jóvenes ya era muy adverso de por sí, por lo que es de esperar que no se hayan producido modificaciones importantes en las tendencias de emancipación como consecuencia de la crisis económica. Los resultados obtenidos por este investigador apoyan esta conjetura, ya que si bien la crisis supuso el frenazo del aumento que la tasa de emancipación residencial venía experimentando en España antes de 2008, las variaciones que ha sufrido el proceso no han sido lo suficientemente importantes como cabría esperar en una coyuntura económica tan grave.

Los resultados de Ahn y Sánchez-Marcos (2017) van más allá aún sobre esta cuestión. Estos investigadores hallaron que el porcentaje de jóvenes que se independizaban entre 18 y 40 años no solo no disminuyó, sino que creció del 44% entre los años 2005-2008 hasta el 46% durante 2009 y 2013. La explicación que dan a este resultado es que la emancipación residencial entre los trabajadores empleados a tiempo completo aumentó de manera sustancial en este periodo. Además, examinaron otros posibles factores que hayan podido repercutir en estos hechos y afirmaron que la caída del precio de la vivienda junto con la baja tasa de interés pudo permitir que los jóvenes que no fueron afectados económicamente por la crisis se emancipasen. Por último, también señalaron los posibles efectos positivos de la Renta Básica de Emancipación para jóvenes que se desarrolló en España y que podría haber facilitado la independencia residencial sobre todo de los trabajadores a tiempo completo, lo que coincide con Gentile (2016) entre otros.

El estudio de Barceló y Villanueva (2018) también puso especial atención en los trabajadores a tiempo completo, ya que examinó cómo influye la inseguridad laboral o la posibilidad de perder el empleo en la formación de nuevos hogares en España. Con este

fin analizaron los datos de la Encuesta Financiera de las Familias entre 2002 y 2014. Las estimaciones de este trabajo aluden a que el fortalecimiento de la protección laboral disminuye la proporción de jóvenes trabajadores que viven con sus padres y que el incremento del 1% de los contratos de empleo indefinido aumenta en un 1,2% las posibilidades de formar un hogar, lo que confirma que existe una importante relación entre la seguridad laboral y la creación de hogares entre la población joven. Ahora bien, no hallaron una relación causal sólida entre el aumento de la seguridad laboral en los jóvenes y la adquisición de una vivienda. Además, rechazaron la posibilidad de que el aumento del alquiler como régimen de tenencia se deba a las dificultades para acceder a un crédito hipotecario.

En relación a esta última afirmación Moreno Mínguez (2016) manifestó la posible formación de una nueva cultura de acceso a la vivienda entre los jóvenes españoles después de la crisis económica donde el alquiler adquiere una mayor importancia relativa, aunque la aspiración a la propiedad sigue siendo alta. El motivo que esta investigadora argumentó es que la independencia residencial ya no es la fase que finaliza la transición a la vida adulta, sino que es una parte más del proceso el cual adopta diferentes alternativas e incluso su posible reversión. Esto muestra la posibilidad de la ruptura del modelo típico de emancipación en España donde se accedía al mercado laboral con el fin de alcanzar una estabilidad financiera que permitiese comprar una vivienda, mientras que ahora la independencia residencial también es vista por la población como un mecanismo que facilita la búsqueda de trabajo. De este modo, concluyó que los datos apuntan a nuevas estrategias emergentes de vida guiadas, en parte, por el cambio en las preferencias a la hora de acceder a una vivienda, aunque el alcance de esto aún se desconoce.

Sobre esta cuestión también Módenes y López-Colás (2014) determinaron el importante crecimiento del alquiler entre los jóvenes tras la crisis económica de 2008, a la vez que cuestionaron la propiedad como el elemento dominante del sistema residencial español del futuro. No obstante, tienen ciertas reservas sobre estos hechos ya que a partir de la información disponible afirmaron que no es posible determinar aún con total garantía si el sistema residencial español se ha transformado o volverá a su estado anterior. Estas conclusiones fueron reforzadas en Módenes y Botelho Azevedo (2017),

donde se mantuvo tanto que el sistema residencial español está evolucionando desde que se inició la crisis como que el patrón de comportamiento residencial ha cambiado al adquirir el alquiler un mayor peso entre los jóvenes en detrimento de la propiedad.

Otro importante estudio es el de Bosch Meda (2015), que analizó específicamente esta problemática para la comunidad autónoma del País Vasco. Este trabajo desarrolló un análisis que se inicia examinando la emancipación juvenil en Europa, para luego desagregar la información y pasar a describir el caso de España hasta llegar finalmente a la situación del País Vasco. El objetivo de esta investigación es examinar a partir de los modelos de bienestar elaborados por Esping-Andersen (1990) cómo los efectos de la crisis están afectando a la emancipación. Entre sus conclusiones destaca que, a pesar de que cada tipología de bienestar tenga su propio modelo de emancipación, existen una serie de factores que afectan a este proceso por igual independientemente de a qué régimen pertenezca un país. Estos factores son: la forma en que la crisis ha incrementado el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda por parte de los jóvenes, el deterioro generalizado del mercado laboral, las distintas políticas de vivienda desarrolladas por los países y la estrategia residencial que utilizan los jóvenes ante la actual coyuntura económica.

También a partir de los modelos de bienestar, López-Andreu y Verd (2017) investigaron cómo la recesión económica ha modificado los patrones de emancipación residencial en España y en Reino Unido. La comparación entre dos países con estados de bienestar diferentes busca comprobar si los efectos ocasionados por la crisis han sido los mismos o no en distintos regímenes de transición juvenil. Los resultados de esta investigación mostraron que las consecuencias de la crisis en el Reino Unido afectaron rápidamente a la emancipación de sus jóvenes, mientras que este comportamiento en España se produjo de manera más paulatina. Sin embargo, con el alargamiento de la crisis esta tendencia cambia y Reino Unido recupera sus niveles iniciales de emancipación, pero, por el contrario, los jóvenes españoles muestran una mayor persistencia a esta recuperación.

En resumidas cuentas, las consecuencias tan graves que produjo la crisis económica han afectado a los patrones de emancipación de los jóvenes. Esto ha ocasionado el

incremento de la coresidencia prácticamente en casi todos los países, aunque parecen existir ciertas excepciones como en el caso de Irlanda. Además, nuevamente se destaca la decisión de retrasar el abandono del hogar parental como medida de protección ante la convulsa situación económica.

Asimismo, la situación socioeconómica de la población se ha visto más agravada en los países del sur de Europa. En concreto, en España el mercado laboral experimentó un importante desplome que ocasionó la expulsión de muchas personas de él. Especialmente afectó al sector juvenil que vio cómo se le excluía del mercado de trabajo, cómo empeoraban sus condiciones laborales y cómo disminuían sus salarios. Esto ha dificultado en gran medida que los jóvenes españoles encarasen el proceso de emancipación con garantías y seguridad, lo que ha supuesto un frenazo a la tasa de formación de nuevos hogares en este país.

No obstante, no existe un consenso claro sobre la incidencia que las consecuencias socioeconómicas de la crisis de 2008 han supuesto en los patrones de emancipación de los jóvenes en España, ya que existen estudios que, por un lado, afirman que la crisis económica sí ha afectado a la independencia residencial juvenil, mientras que, por otro lado, otras investigaciones manifiestan que este acontecimiento no ha producido un importante impacto en la emancipación juvenil. De hecho, Ahn y Sánchez (2017) llegan a afirmar que la independencia residencial en España se ha visto beneficiada durante este periodo gracias, en parte, al descenso de los desorbitados precios de la vivienda. Bajo esta premisa, además, algunos investigadores señalan que ante las imposibilidades de comprar una vivienda por las dificultades económicas la población más joven ha optado por alquilar cada vez más, lo que según algunos autores puede estar ocasionando una variación en el sistema residencial español.

Pero, sin embargo, ninguno de los estudios anteriores, con excepción del de Choi y Painter (2015) para el caso estadounidense, ha explicado si el desempleo tiene efectos duraderos en el tiempo en la formación de nuevos hogares o si por el contrario la tasa de formación de hogares recupera sus valores anteriores y cuánto tarda en tal caso.

De este modo, este trabajo no solo tiene como objetivo proporcionar nuevas evidencias empíricas sobre la incidencia de la crisis económica de 2008 en la

emancipación juvenil de los jóvenes españoles, sino que también pretende aportar resultados sobre si los efectos de la crisis en este proceso perduran en el tiempo o si, por el contrario, se tratan de modificaciones coyunturales que desaparecen tras la recuperación macroeconómica.

Por este motivo, es necesario analizar en el próximo capítulo los factores estructurales que influyen en la emancipación de los jóvenes españoles para posteriormente poder comprender de la forma más correcta y precisa posible la incidencia y los efectos que la crisis de 2008 ha ocasionado en ellos; y, así, analizar qué consecuencias ha tenido este suceso para la emancipación juvenil en España y conocer si las secuelas son duraderas o si por el contrario la tasa de formación de hogares ha vuelto a sus niveles previos a la crisis económica.

### **Capítulo 3**

#### **Los factores estructurales que inciden en la emancipación juvenil en España**

Uno de los países que pertenece al modelo mediterráneo es España. Con 29,5 años de media para 2018 se sitúa como el sexto país de la Unión Europea donde las personas atrasan más el abandono del hogar familiar para formar uno propio. En este sentido, en las dos últimas décadas la edad media de emancipación en España no ha disminuido de los 28 años y, no solo eso, sino que, según los datos más recientes, se trata de la edad media más elevada de los últimos veinte años en la que los jóvenes españoles se independizan residencialmente de sus progenitores (Echaves, 2016).

Para profundizar en las causas de este fenómeno, en este capítulo se analizará cómo las transiciones educativas, laborales, residenciales y algunos aspectos institucionales particulares de la sociedad española han podido influir en el retraso de la emancipación de sus jóvenes (Moreno Mínguez, 2012).

#### **3.1. Aspectos institucionales del estado de bienestar que repercuten sobre la emancipación de los jóvenes españoles**

Al igual que Grecia o Portugal, España tiene un estado de bienestar relativamente reciente y poco desarrollado en comparación con el resto de los países de Europa occidental y en el que destaca el hecho de que la familia juega un papel principal en la provisión de cuidados y protección (Ferrera, 1996). Sobre esta realidad influyó la “trayectoria atípica de cambio” que experimentó este país, una consecuencia directa de la tardía transición a la democracia y del proceso acelerado de modernización de sus estructuras de bienestar en la década de los ochenta y noventa (Guillén y León, 2011).

Esto ha dado lugar a que la política social y de bienestar española no se haya desarrollado al nivel de otros países más avanzados.

Una consecuencia de ello es que el nivel de mercantilización de los servicios sociales es más alto, dejando al mercado privado un importante espacio como proveedor de aquellos servicios que no proporcionan las instituciones públicas (Leibfried, 1992).



La expansión incompleta de las estructuras de bienestar se ha debido, además, a su baja capacidad de recaudación fiscal. La razón de ello obedece a que durante los años de transformación de sus instituciones se determinó que los distintos aspectos de la asistencia social, a excepción de las pensiones y de las prestaciones por desempleo, se financiaran mediante impuestos; una decisión que, indudablemente, produjo que los niveles de protección social quedasen condicionados a la capacidad recaudatoria de su sistema tributario (Hemerijck, 2013).

Además, a la débil capacidad recaudatoria del sistema impositivo español se une también la escasa capacidad redistributiva que tiene su estructura de transferencias y prestaciones sociales (Gutiérrez, 2014); un hecho condicionado porque las políticas redistributivas están orientadas normalmente hacia las clases medias y no llegan a los deciles más bajos de renta, lo que produce altos niveles de desigualdad (Culfaz, 2014).

Y es que el sistema de impuestos y prestaciones español es uno de los menos efectivos de toda la UE en redistribuir las rentas familiares (Cantó, 2014). Sobre estas cuestiones un informe de Cantó (2014) para la Fundación Foessa destaca el importante peso redistributivo que tienen las pensiones contributivas y el escaso efecto igualador por parte del impuesto sobre la renta, un gravamen que además viene reduciéndose desde la década de los noventa tras las continuas reformas del mismo y que ha contribuido en la disminución de sus efectos redistributivos en este país.

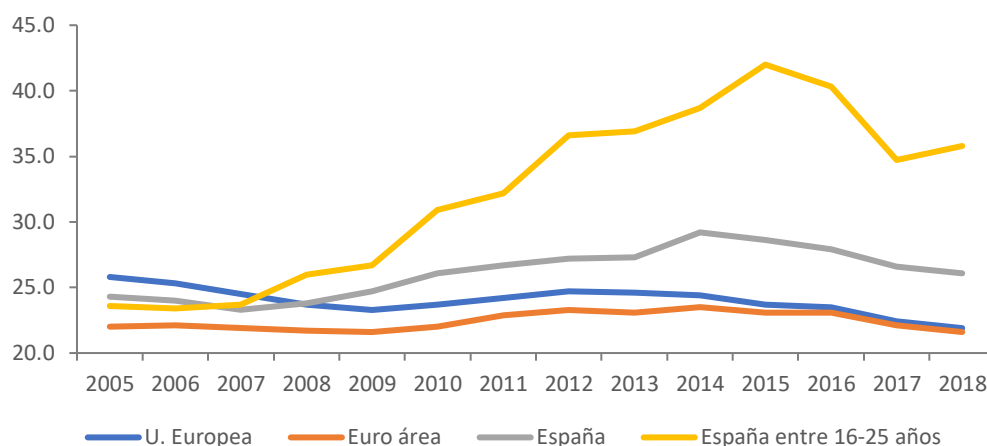
De este modo, la intervención del Estado, que en muchas situaciones no llega al núcleo de los problemas socioeconómicos de los hogares, junto con unos altos niveles de desigualdad han producido que a lo largo de los años España mantenga una importante proporción de su población en riesgo de pobreza o de exclusión social (Hemerijck *et al.*, 2013).

Esto se vio agravado con la crisis económica, ya que en 2014 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza se disparó hasta alcanzar el 29,2%.

Y no solo eso, sino que el riesgo de exclusión social o de pobreza no es igual para toda la población. De hecho, el sector juvenil ha sido uno de los más afectados en este aspecto, ya que si bien antes de 2008 se trataba de un grupo social con menor riesgo de pobreza que la totalidad de la población, tras el inicio de la crisis su vulnerabilidad

aumentó. Así, mientras que en 2005 un 23,6% de los jóvenes menores de 25 años tenía problemas de pobreza, a raíz de la recesión ese porcentaje llegó a alcanzar el 42% en 2015: un incremento de casi 20 puntos porcentuales en tan solo siete años.

Gráfico 3.1. Porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España, en la Unión Europea y en la Eurozona (2005-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

Uno de los factores que explica esta situación es que la red de seguridad social de España se desarrolló de manera lenta, fragmentada y enfocada en distintos sectores de la población, como discapacitados, ancianos, desempleados, etc., lo que produjo dos efectos interconectados: por un lado, se originaron ciertos desajustes entre los servicios y las ayudas a las que tienen acceso la totalidad de la población; y, por otro lado, como causa directa de lo anterior, se protegió a unos grupos sociales más que a otros (Hemerijck, 2013).

De este modo, existe un sesgo considerable en el sistema de transferencias sociales hacia las pensiones en comparación con las prestaciones familiares y de juventud, dejando el Estado las cuestiones familiares y juveniles fuera de su área de influencia directa y quedando dominada por la lógica mercantil la satisfacción de las necesidades que se generan en esos ámbitos (Gutiérrez, 2014).

Esto ha hecho que, según Eurostat, desde 1995 la partida presupuestaria destinadas a las políticas de familia tan solo haya supuesto, de media, un 0,7% del PIB; mientras que, por el contrario, para las cuestiones relacionadas con las personas mayores, especialmente

las pensiones, el gasto medio público en ese periodo se sitúa alrededor del 7% del PIB. Además, esta divergencia se ha visto ampliada tras la crisis económica hasta alcanzar la mayor diferencia en los últimos veinte años, ya que el gasto en pensiones llegó a su valor máximo en 2018 con un 9,4% y, en cambio, el presupuesto destinado a políticas de familia prácticamente no creció.

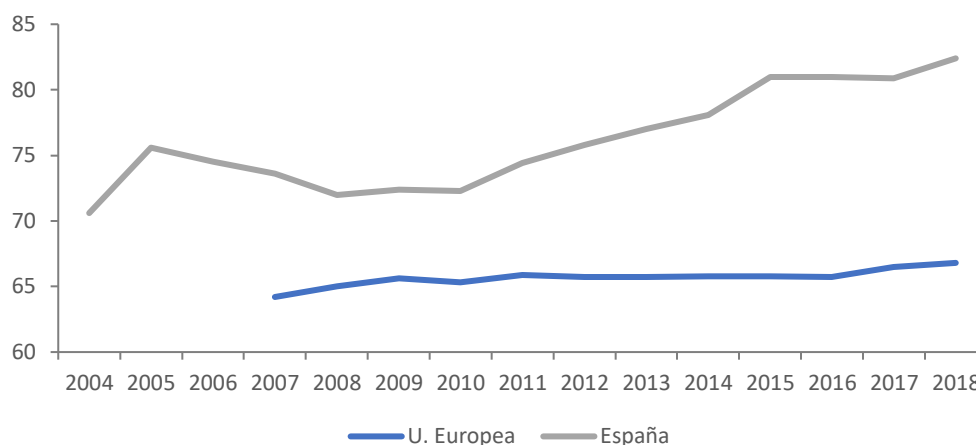
La debilidad del estado de bienestar español es compensada por otra de las características típicas del modelo mediterráneo: un fuerte familiarismo. La familia como institución adquiere gran relevancia al actuar como complemento en la provisión de todos los servicios que las administraciones públicas no pueden ofrecer y al reducir la necesidad de acudir para ello al mercado (Leibfried, 1992). En este sentido, Flaquer (2004, p. 36) manifiesta que “la escasez de servicios públicos para la primera infancia, la falta de apoyo monetario a las familias y la insuficiencia de medidas para conciliar la vida laboral y la familiar hacen gravitar casi en exclusiva las cargas familiares sobre las espaldas de los progenitores, quienes tienden a desplegar estrategias privadas a la hora de resolver sus dificultades de armonización de la familia con el empleo”.

Esta característica particular del modelo mediterráneo explica parcialmente que, en España, las familias tengan un tamaño promedio mayor que las de los países centrales y del norte de Europa, existiendo una importante proporción de hogares multigeneracionales y, por el contrario, pocos hogares unipersonales (Moreno Mínguez, 2007).

A pesar de que el patrón familiar español cada vez se aproxima más al de otros modelos de bienestar, las familias españolas siguen estando compuestas por un mayor número de personas que el promedio de la Unión Europea (Añón y Miravet, 2005).

Uno de los factores claves que explica este hecho es el porcentaje de jóvenes menores de 30 años que residen con sus padres como una consecuencia directa del retraso en la edad de emancipación. En el Gráfico 3.2 se puede comprobar cómo antes de la crisis de 2008 siete de cada diez jóvenes de entre 16 y 29 años vivía en el hogar de sus progenitores. Además, durante los años de la recesión esta proporción no ha dejado de crecer hasta alcanzar en 2018 su máximo con un 82,4%, lo que supone 15,6 puntos porcentuales más que la media de la Unión Europea.

Gráfico 3.2. Porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que viven con sus padres en España y en la Unión Europea (2004-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

Así, la familia española actúa como un importante sostén socioeconómico que asume el cuidado de niños y/o ancianos, el apoyo económico a sus jóvenes durante amplios periodos de tiempo o el acceso a una vivienda, entre otras cuestiones (Allen *et al.*, 2004; Holdsworth, 2005). Al respecto Añón y Miravet (2005, pp. 105-106) añaden que “las políticas sociales continúan «abusando» funcionalmente de las solidaridades familiares de forma contradictoria y con efectos abiertamente contraproducentes. De hecho, uno de los diagnósticos sobre la evolución de los estados del bienestar del sur en relación a la familia apunta a la problemática sostenibilidad de una política social permanentemente *delegativa* (...) en un contexto que reclama políticas de signo desfamiliarizador”.

De este modo, tradicionalmente las redes familiares han evitado que los niveles de pobreza existentes en España junto con una tasa de desempleo alta y una extendida precariedad laboral no hayan provocado unos niveles de exclusión aún más elevados (Aguilar y Laparra, 1999).

Esto cobró mayor importancia, si cabe, durante los años de la crisis económica de 2008 y la posterior recesión, ya que las familias fueron clave en el sostenimiento de muchas personas gracias a su ayuda ante la extensión del desempleo. Y, sobre todo, fueron un escudo de protección muy importante del sector juvenil, al ser uno de los grupos

sociales más golpeados por la crisis económica y que experimentó los niveles de desempleo más altos.

Y es que el mercado laboral es uno de los factores que más repercuten en la transición juvenil hacia la vida adulta puesto que la incorporación al mismo será determinante en la consecución de la suficiencia económica necesaria para encarar las distintas fases de este proceso, entre el que se encuentra la emancipación residencial. Sin embargo, desde hace muchos años las características propias del mercado de trabajo de España dificultan la incorporación del sector juvenil al mismo, algo que se ha visto agravado más aún durante la recesión económica. Por esta razón, en la siguiente sección se examinará la relación existente entre el mercado laboral y la emancipación del sector juvenil buscando las claves que permitan identificar la incidencia de aquel sobre esta.

### **3.2. Emancipación juvenil y mercado de trabajo en España**

El mercado de trabajo en España reviste características diferenciales con respecto al de otras economías europeas, aunque existe una en común como consecuencia de la crisis económica de 2008: la poralización del empleo (Carrasco *et al.*, 2014; Moreno-Galbis y Sopraseuth, 2014).

A partir de numerosos indicadores, distintas investigaciones han llegado a la conclusión de que la estructura del mercado laboral se está modificando debido a la supresión de trabajos clasificados como de calidad media a favor de un importante crecimiento del empleo precario y poco cualificado (Eurofound, 2013; Autor, 2014; Carrasco *et al.*, 2014).

En España, antes de la crisis ya existía esta dinámica de reestructuración del mercado de trabajo hacia una polarización en los extremos de la estructura del empleo; indudablemente, este reajuste se aceleró como consecuencia de la recesión económica (Häusermann y Schwander, 2012). La explicación de este fenómeno ha sido analizada desde distintas perspectivas y sobresalen como principales factores explicativos el cambio tecnológico, la globalización y las decisiones en políticas de empleo (Verd y López-Andreu, 2016). En este último aspecto inciden Emmenegger *et al.* (2012)

argumentando que tanto las instituciones como las políticas públicas son claves en el proceso de dualización del mercado laboral entre los distintos perfiles de trabajadores.

En efecto, en las últimas décadas el mercado laboral español ha estado caracterizado por la dualidad y una fuerte segmentación como consecuencia del desarrollo de políticas de flexibilización destinadas, presuntamente, a reducir el desempleo, lo que ha provocado una importante sensibilidad del empleo ante los ciclos económicos (Verd y López-Andreu, 2016).

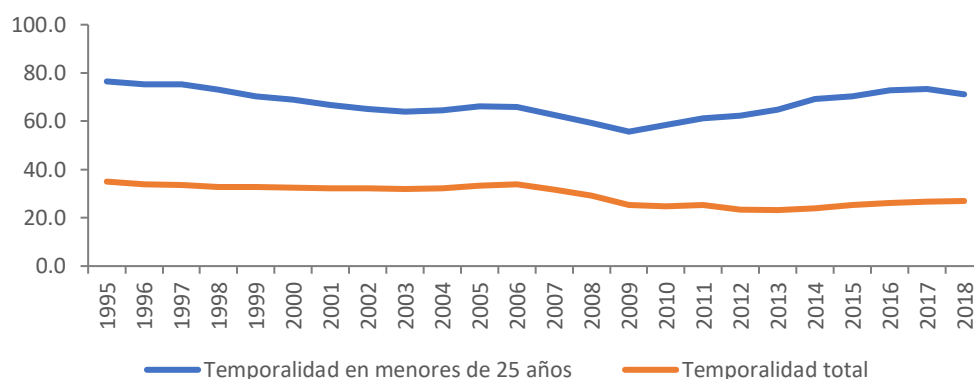
Dichas características tienen su origen en la reforma del Estatuto de los Trabajadores que se aprobó en 1984 y que permitió la contratación temporal para todas las actividades productivas regulares y no solo para las estacionales, como hasta ese momento, a la vez que mantenía una elevada protección para los contratos indefinidos (Dolado *et al.*, 2002). Sobre esta cuestión Moreno Mínguez (2015, p. 16) manifiesta que “dicha reforma permitió el uso indiscriminado de la contratación temporal (con reducidos costes de despido) para cualquier actividad productiva regular, al tiempo que mantenía inalterada la rígida protección de los contratos indefinidos a través de elevadas indemnizaciones por despido (...). La tasa de temporalidad (es decir, la proporción que representan los trabajadores con contrato temporal sobre el total de asalariados) se disparó desde un 15% antes de la reforma de 1984 hasta el 35,4% a mediados de los noventa. Desde entonces, un porcentaje superior al 90% (el 94% en la actualidad) de las nuevas contrataciones se han producido en esta modalidad contractual, mientras que la tasa media de conversión de contratos temporales a indefinidos ha oscilado entre el 10% en los noventa y primera mitad de los 2000, para pasar a situarse en el 5% en la actualidad (2013)”.

Esto ha generado un mercado laboral marcado por la dualidad y en donde existe un grupo formado por trabajadores con puestos estables, denominados *insiders*, que accedieron a sus empleos antes de la década de los noventa y buenas condiciones laborales y otro, los *outsiders*, formado por trabajadores con empleos precarios, baja protección social y desempleo, entre los que destacan los individuos más jóvenes (García Polavieja, 2003; Bernardi y Martínez-Pastor, 2010). No obstante, algunos autores como

Lehwess-Litzmann (2014) indican que un importante sector de los calificados como *insiders* también han visto empeoradas sus condiciones laborales en los últimos tiempos.

Pero, además, el mercado de trabajo español también se caracteriza por una elevada temporalidad, hasta el punto en que esta se ha convertido en un rasgo estructural y se ha normalizado, con el agravante de que afecta con mayor incidencia a determinados grupos sociales, como el de los jóvenes (Crespo *et al.*, 2009). A esto Verd y López-Andreu (2016, p.10) añaden que “el uso masivo de contratos temporales por parte de las empresas desde inicios de los años noventa, junto con la diferente protección entre el empleo indefinido y el temporal, han servido para que algunos autores destaquen la «segmentación generacional» del mercado laboral español”.

Gráfico 3.3. Porcentaje de empleados temporales totales y menores de 25 años en España (1995-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

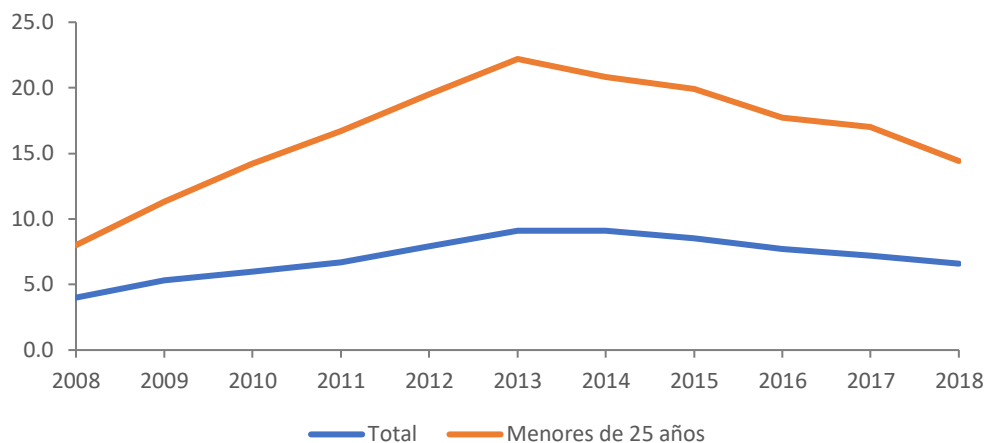
Así, en el Gráfico 3.3 se puede observar cómo la temporalidad entre la población ocupada de España en los últimos años afecta en torno al 30% del total de los trabajadores. En el caso de los jóvenes menores de 25 años esta circunstancia es mucho más pronunciada, ya que al inicio de la serie examinada se puede ver que el 76,5% de ellos tenía un contrato temporal. Si bien estos porcentajes mejoraron durante finales del siglo pasado e inicio del actual, con la crisis se ha vuelto a incrementar el porcentaje de temporalidad de los trabajadores jóvenes hasta situarse nuevamente en un 70%, es decir, 45 puntos porcentuales más que la población total ocupada.

La alta tasa de temporalidad es preocupante para el devenir de los jóvenes españoles, ya que es poco frecuente que pasen de estar contratados de manera temporal a indefinida a pesar de querer trabajar más tiempo; de hecho, lo normal es que tengan una trayectoria opuesta, es decir, que pasen de contrataciones temporales a la inactividad o al desempleo (Toharia *et al.*, 2001; Cebrián, 2008). Este hecho lo confirman García-Pérez y Muñoz-Bullón (2011) en su estudio empírico, en el que demuestran que la probabilidad entre los jóvenes de encadenar un contrato temporal con otro es muy alta en comparación con las posibilidades de conseguir un empleo fijo. En este sentido, García López (2014, p. 20) también argumenta que “la evidencia empírica muestra que el trabajo temporal puede suponer una trampa para ciertos colectivos de jóvenes, que los perpetúe en un círculo vicioso de temporalidad-desempleo-escasas oportunidades de formación (...). La literatura reciente demuestra que la temporalidad en España es un fenómeno persistente entre los menores de 25 años: en torno al 90 por 100 de los jóvenes que acceden al mercado de trabajo lo hacen con un contrato de duración determinada. Si bien este porcentaje se reduce a lo largo de su vida laboral, lo hace lentamente, de tal modo que una década después todavía 4 de cada 10 continúan como temporales tras haber alternado etapas de empleo (temporal), con episodios de desempleo y de inactividad”.

Otro aspecto importante del mercado laboral español es el subempleo, sobre todo entre el sector juvenil (Gráfico 3.4). Desde el inicio de la crisis el porcentaje de trabajadores subempleados fue aumentando hasta 2013, cuando un 22,2% de los empleados menores de 25 años manifestaba que trabajaba menos de 40 horas semanales pero que deseaba estar contratado a jornada completa. A partir de 2014 esta situación empezó a mejorar, aunque actualmente un 14,4% de trabajadores juveniles a tiempo parcial afirma que querría desempeñar un empleo a tiempo completo.



Gráfico 3.4. Porcentaje total de trabajadores a tiempo parcial subempleados y menores de 25 años en España (2008-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

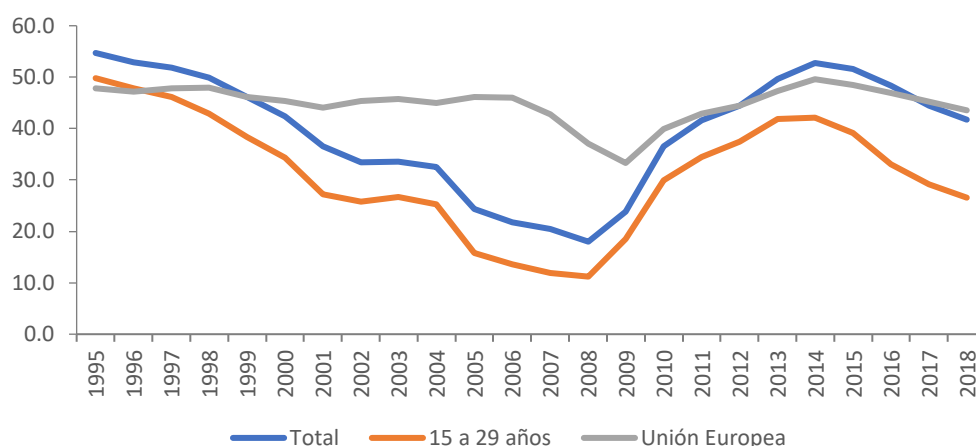
El otro rasgo característico de las condiciones laborales en España es el desempleo de larga duración, entendido como la búsqueda de empleo activamente desde hace más de un año. Al respecto, Herrador Buendía (2002, p.121) manifiesta que “el fenómeno del desempleo de larga duración se plantea, actualmente, en el contexto de la industrialización, no solamente, como uno de los mayores problemas sino también como uno de los grandes desafíos que deben afrontar los países desarrollados para poder seguir manteniendo lo que se conoce como Welfare State o <<estructuras del bienestar>>, a través del mantenimiento e incremento de los niveles generales de crecimiento económico en términos de productividad, generación de riqueza y de empleo”.

Aunque no se trata de una cuestión nueva en la sociedad española, sí es cierto que desde 1995 hasta 2008 este fenómeno estaba reduciéndose en España de manera considerable. De hecho, a mediados de la primera década del siglo XXI el porcentaje de desempleados de larga duración había descendido desde un 54,7% hasta alrededor del 20%, siendo destacable la situación de los jóvenes menores de 30 años que no superaban prácticamente el 15% de desempleo de larga duración durante este periodo de tiempo.

Sin embargo, el inicio de la crisis económica cambió bruscamente la tendencia e hizo que el porcentaje de desempleados de larga duración alcanzase el 52,8%, una cifra que ha superado a la media europea. En el caso de las personas menores de 30 años la

tónica ha sido similar, aunque mantiene cierto margen de distancia con el porcentaje de desempleo de larga duración total. Actualmente, España sigue teniendo una importante proporción de desempleados de larga duración y todavía no ha recuperado los niveles previos a la recesión.

Gráfico 3.5. Porcentajes de desempleados de larga duración total y menores de 30 años en España y en la Unión Europea (1995-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

El desempleo de larga duración causa efectos nocivos sobre los desempleados que, además, se potencian en aquellos grupos sociales que por sus características tienen generalmente problemas de acceso al mercado laboral, como es el caso del sector juvenil (OECD, 1991). Una de sus consecuencias es el aumento del riesgo de que los trabajadores experimenten situaciones de exclusión laboral, debido a que estos largos periodos de tiempo sin trabajar producen una desconexión cada vez mayor por parte de los desempleados de los requisitos y capacidades que reclama un mercado de trabajo continuamente en evolución y más exigente (Jansen, 2016).

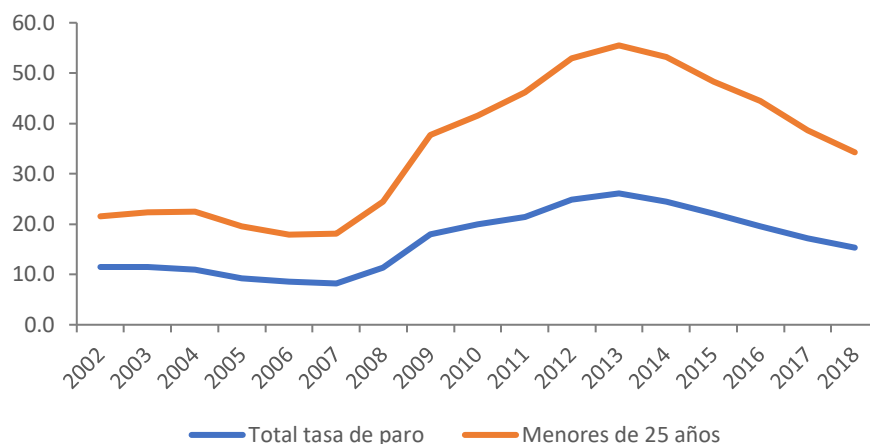
Además, en el caso de los jóvenes se añade el hecho de que normalmente acceden a unas prestaciones por desempleo de corta duración e importe reducido y que difícilmente tienen la capacidad de mitigar las consecuencias socioeconómicas de estar sin empleo durante largos periodos de tiempo. La razón de esto es que en España la duración del subsidio por desempleo está determinada por el tiempo que se ha cotizado a

la Seguridad Social, siendo necesario como mínimo un total de doce meses en los últimos seis años; mientras que la cantidad económica que recibe el beneficiario está condicionada de manera proporcional al salario recibido en los últimos seis meses trabajados (un 70% los primeros 180 días y un 50% el periodo restante). De este modo, la precaria trayectoria laboral de los jóvenes, caracterizada por empleos temporales o experiencias laborales intermitentes y escasas remuneraciones, no les permite reunir los requisitos necesarios para tener derecho a prestaciones de desempleo con mejores condiciones (Gentile y Valls, 2015).

En definitiva, los jóvenes españoles se encuentran con una doble restricción en el momento de acceder al mercado de trabajo. Por un lado, la elevada tasa de desempleo que sufren y, por otro lado, el hecho de que una vez que ingresan a él sus condiciones laborales suelen ser muy precarias, siendo la temporalidad y el subempleo los elementos que en mayor medida refuerzan esa precariedad.

Bien es cierto que esos factores no afectan exclusivamente a la juventud española. Como señala García López (2014), el desempleo juvenil en España, aunque es superior a la media europea, se explica por disfunciones estructurales propias del mercado laboral español que inciden sobre el conjunto de los trabajadores y no por factores idiosincrásicos de los jóvenes españoles o por el aumento de la tasa de desempleo a raíz de la crisis económica, ya que los problemas de inserción laboral del resto de jóvenes europeos han sido similares a los de los españoles. Sobre esta cuestión Arrazola *et al.* (2018, p. 64) concluyen que “no obstante, y a pesar de lo abultado de las cifras absolutas, en términos relativos al nivel de desempleo de los adultos, la tasa de paro juvenil española no es muy diferente de la de otros países. Efectivamente, si se considera la ratio entre la tasa de desempleo juvenil y la tasa de desempleo de los adultos, se observa para España unos valores muy parecidos a los de los países de la UE-28. Esto hace pensar que quizá España no tenga tanto un problema de paro juvenil específico en comparación a otros muchos países de nuestro entorno como un problema general de desempleo, en el que la elevadísima tasa de paro juvenil sería sobre todo un síntoma más de un mal funcionamiento general de su mercado de trabajo”.

Gráfico 3.6. Tasas de desempleo total y menores de 25 años en España (2002-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

En cualquier caso, basta ver la incidencia que el impacto de la crisis tuvo sobre la tasa de desempleo de los jóvenes españoles (Gráfico 3.6) para constatar su vulnerabilidad ante los cambios del ciclo, con consecuencias previsibles sobre sus perspectivas de emancipación del hogar familiar.

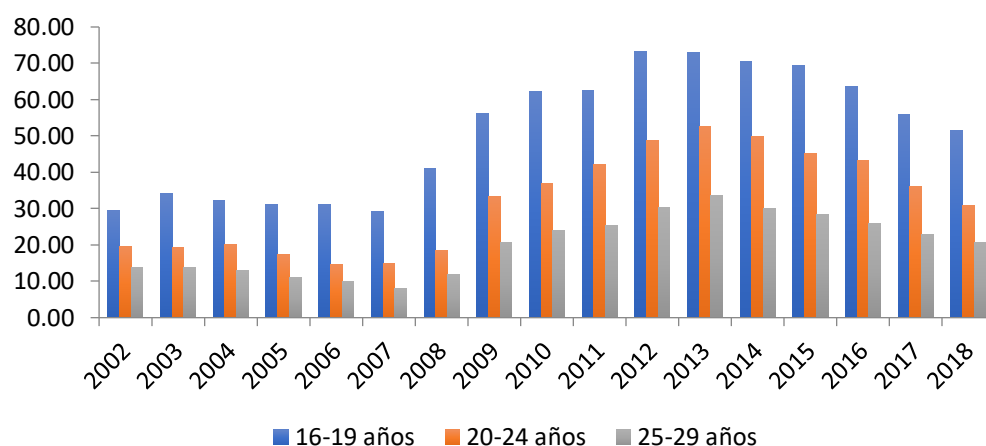
Así, la desaceleración de la economía a partir de 2008 provocó un fuerte aumento de la tasa de desempleo que llegó a alcanzar en 2013 el valor máximo de las últimas décadas, tanto para el conjunto de la población (26,1%) como para el caso específico de los jóvenes (55,5%). De hecho, la tasa de desempleo juvenil en España aumentó más de 30 puntos en apenas seis años, lo que la situó entre las más altas de toda la Unión Europea (Gráfico 3.6).

Además, si los datos de desempleo juvenil son desagregados por grupos de edad pueden observarse importantes diferencias. En 2013 la tasa de desempleo para los jóvenes con una edad comprendida entre los 16 y los 19 años llegó al 73% y la del grupo de 20 a 24 años alcanzó el 52,62%, mientras que los jóvenes situados entre los 25 y 30 años tuvieron un 33,76%. Sin embargo, a partir del cambio de ciclo de 2014 la tasa de desempleo descende, aunque los valores siguen manteniéndose superiores a los años anteriores al derrumbe de la economía española.

Esto refleja que las personas de menor edad experimentan mayores dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo, ya que en el caso de los menores de 19 años sus

opciones laborales son reducidas, puesto que 5 de cada 10 que están en situación de poder trabajar se encuentran desempleados. En cambio, el tramo de edad de 25 a 30 años muestra una cierta estabilidad dentro del mercado laboral y sus niveles de desempleo no distan de ser tan diferentes respecto al desempleo total, como sí ocurre con los grupos de menos edad. El problema, por tanto, adquiere mayor dimensión y gravedad a medida que los jóvenes que pretenden acceder al mercado laboral tienen menos edad.

Gráfico 3.7. Tasas de desempleo de jóvenes desagregada por grupos de edad (2002-2018)



*Fuente:* INE; elaboración propia.

Los datos anteriores ya comienzan a mostrar la dificultad para que la edad media de emancipación en España se pueda aproximar a la de los países nórdicos o incluso a los del modelo corporativista. La razón de ello es que hasta a partir de los 25 años las oportunidades laborales son, generalmente, escasas para el sector juvenil, por lo que es complicado que los jóvenes de grupos de edades inferiores a este tramo se emancipen residencialmente de sus familias ante la ausencia de la capacidad económica y de la seguridad laboral necesarias para afrontar este proceso.

Los altos porcentajes de desempleo juvenil y de temporalidad no han sido las únicas consecuencias de la crisis. También se ha producido un deterioro en la renta media de este colectivo lo que, indudablemente, afecta a sus posibilidades de emancipación (Pérez Infante, 2013). Las diferencias salariales entre el sector juvenil y el adulto es otra de las

distorsiones existentes en el mercado laboral, ya que los jóvenes generalmente tienen menores emolumentos que la población adulta. Esto es debido, entre otros factores, a que en los grupos de menor edad el capital humano no está completamente desarrollado y, normalmente, disponen de menos habilidades y competencias para desempeñar el puesto de trabajo al que acceden, mientras que la población adulta ya acumula un bagaje y una experiencia previa que les permitirá tener mayor productividad. Ante esta situación las empresas valoran económicamente los costes de contratar a un joven y el tiempo necesario para que pueda adquirir la capacitación que exige el correspondiente puesto de empleo. De esta manera, el dilema inicial al que se enfrenta el empresario cuando tiene que decidir si emplea a un joven, debido a que no conoce si podrá llevar a cabo todas las tareas requeridas por el trabajo o si, por el contrario, selecciona a una persona de mayor edad con más referencias laborales, se resuelve mediante la oferta de contratos de trabajo con salarios más bajos (Bell y Blanchflower, 2011).

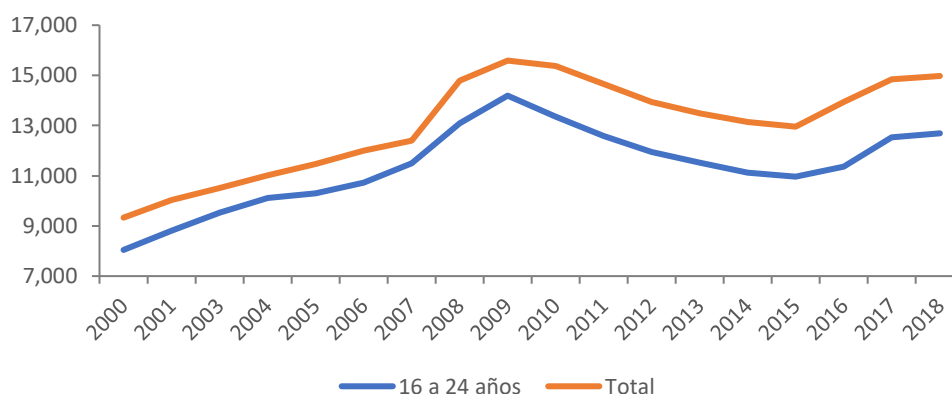
A este hecho se une el que la dilatación de los periodos de desempleo y temporalidad puede estigmatizar a la población joven durante importantes lapsos de tiempo y, de esta manera, limitar sus trayectorias laborales y personales pudiendo ocasionar la pérdida salarial y la imposibilidad de acceder a trabajos más cualificados, lo que es conocido como efecto *scarring* (Kwon *et al.*, 2010; Hillmert, 2011; Skans, 2011; Kelly *et al.*, 2012). En este sentido, Arrazola *et al.* (2018, pp. 68-69) afirman que “se puede decir que la evidencia empírica internacional apunta a que existen efectos *scarring* generados por las tasas de desempleo juvenil. La mayor o menor persistencia de ese efecto *scarring* difiere entre países, pero la mayoría de los trabajos coinciden en que la pérdida de experiencia laboral que supone sufrir episodios de desempleo durante la juventud genera una pérdida salarial persistente en el tiempo. Además, existe evidencia que sugiere que el efecto *scarring* en salarios puede afectar a todos los individuos, sea cual sea su nivel educativo. Respecto a los efectos *scarring* sobre el empleo, aunque la evidencia no es clara para EE.UU, sí se encuentra evidencia para otros países como Reino Unido, Noruega o Japón. Las diferencias obtenidas entre países suelen justificarse en función de factores institucionales característicos de cada economía como la mayor o menor flexibilidad del mercado de trabajo, el funcionamiento de su sistema educativo, el

funcionamiento de la selección de personal por parte de las empresas, calidad de los empleadores, etcétera”.

Así, la renta media anual de los menores de 25 años en los inicios del siglo XXI era en torno a 1.000-1.200 euros menor que la de la población adulta. Durante esos años se puede observar cómo el salario medio en España tuvo un incremento constante y continuo que hizo que los jóvenes alcanzasen su máximo histórico en 2009 con 14.192 euros, es decir, casi el doble que a comienzos de esta década. Sin embargo, tras el inicio de la crisis y ante las dificultades económicas, se adoptaron una serie de medidas que tenían como fin mejorar la competitividad de la economía española, entre las que destacó la devaluación salarial de los trabajadores.

De este modo, el salario medio en España comenzó a caer hasta situarse en 2015 en 12.968 euros, la cantidad más baja en los últimos 10 años. En el caso del sector juvenil fue similar, ya que la renta media de este grupo cayó hasta los 10.961 euros, una cifra que supuso la pérdida de 3.000 euros en tan solo seis años y el retorno a niveles anteriores al inicio de la crisis. Estas circunstancias han hecho que la brecha salarial entre los menores de 25 años y los trabajadores adultos haya crecido hasta los 2.300 euros de diferencia.

Gráfico 3.8. Renta media total y de menores de 25 años en España (1995-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

Además, a pesar de que en muchas ocasiones los jóvenes tienen mejor formación educativa reciben remuneraciones más bajas que los trabajadores adultos, ya que la importante temporalidad de los trabajos que desempeñan les resta fuerza de negociación

a la hora de pactar mejores condiciones laborales y porque, además, anteponen la garantía de la continuidad en el empleo (Gentile y Valls, 2015). A esto Arrazola *et al.* (2018, p. 67) añaden que “como consecuencia de la existencia de persistentes y elevadas tasas de paro juvenil, las condiciones laborales y salariales que se ven obligados a aceptar los jóvenes suelen ser malas en términos relativos. El desempleo juvenil y la precariedad laboral están detrás de uno de los círculos viciosos en el que se pueden ver atrapados muchos jóvenes durante largos períodos de tiempo: al existir elevadas tasas de desempleo juvenil resulta complicado encontrar un empleo y, cuando lo encuentran, es un empleo muy precario (con bajo salario y temporal), en el que el aprendizaje de habilidades específicas para la actividad productiva es pequeño y en el que reciben poca o ninguna formación, lo que a su vez favorece que la situación de precariedad se perpetúe”.

De hecho, en los últimos años estos altos niveles formativos también están siendo un factor explicativo de la tasa de desempleo juvenil, especialmente en aquellos jóvenes con estudios superiores. Y es que en el sistema educativo español se ha producido una demanda creciente de formación universitaria, lo que ha ocasionado un desajuste entre la demanda de trabajo cualificado y la oferta del mismo en el mercado laboral dando lugar a importantes tasas de desempleo juvenil con niveles formativos superiores. Y no solo eso, sino que en muchos casos se ha producido la expulsión del mercado de trabajo de aquellos jóvenes que no disponen de la formación adecuada.

Estas características, junto con otros problemas de la educación en España como el abandono escolar, indican que el sistema educativo al que acceden los jóvenes también explica parte de los problemas que más tarde encuentran los jóvenes en las transiciones desde el ámbito educativo al mundo laboral.

### 3.2.1. El desempleo juvenil y el sistema educativo en España

Uno de los factores que determinará el futuro laboral inmediato y, sobre todo, a largo plazo no solo del sector juvenil sino también de la población en general es el sistema educativo al que acceden y la eficacia del mismo a la hora de facilitar la transición desde el ámbito educativo al mundo laboral (Dolado *et al.*, 2000; García López, 2011; Moreno



Mínguez, 2008). De este modo, las posibles deficiencias del sistema educativo que dificulten el paso de la educación al trabajo pueden reforzar, por sí mismas, la persistencia del desempleo.

Entre los problemas que presenta la educación en España sobresalen por encima de todos el abandono escolar temprano, el desajuste entre la oferta y la demanda laboral según el nivel educativo y la casi ausencia de mecanismos que permitan combinar acciones formativas con empleo (García López, 2014).

Sin duda, en España el abandono escolar ha sido históricamente una de las cuestiones más problemáticas en el ámbito educativo. Este fenómeno se puede considerar como un indicador que permite valorar en qué medida el sistema educativo retiene a los jóvenes para que puedan desarrollar sus habilidades y reciban una formación que facilite, a posteriori, su incorporación al mercado de trabajo (Moreno Mínguez, 2015).

El abandono prematuro de la educación reglada, primordialmente antes de finalizar la enseñanza secundaria, obstaculiza en gran medida las trayectorias laborales de los jóvenes al impedirles desarrollar las habilidades necesarias y alejarlos de la formación continua que exige cada vez más el mercado de trabajo. Este hecho genera efectos negativos que pueden extenderse y reproducirse a lo largo de la carrera laboral del trabajador, como periodos de desempleo de mayor duración, inestabilidad debido a contratos temporales o escasas remuneraciones (Serrano y Soler, 2015). Y no solo afecta al ámbito laboral, sino que también a otras esferas de la vida, como indican Ruíz y de las Olas (2018, p. 44): “la preocupación por esta cuestión se explica por sus previsibles efectos negativos sobre la inserción en el mercado de trabajo y la carrera laboral futura de las personas que abandonan la formación, pero también por las consecuencias que genera en términos de salud, esperanza de vida, calidad de vida, criminalidad, difusión y prevalencia de los valores democráticos o participación social”.

Así, se puede observar cómo España en 1992 tenía un porcentaje de abandono escolar superior al 40%, unos niveles que ayudan a explicar la poca cualificación que históricamente ha caracterizado a la mano de obra española. Los distintos procesos de modernización que atravesó el país junto con un amplio desarrollo de las infraestructuras

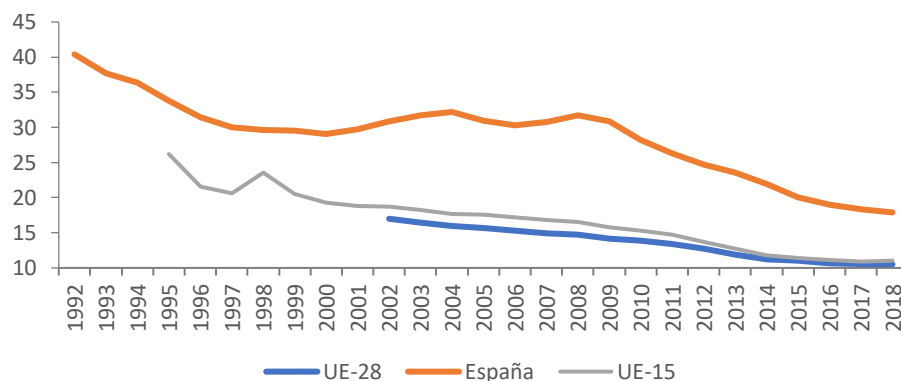
de bienestar en aquellos años influyeron en el cambio de tendencia, que se vuelve descendente a un ritmo constante hasta que se estabiliza en 1997 en torno al 30%.

Durante la década de los noventa la brecha respecto a los valores medios de la Unión Europea ya era considerable. Pero, sin duda, este distanciamiento se agrandó a principios del siglo XXI cuando el abandono escolar en la UE seguía descendiendo año tras año, mientras que España tuvo un repunte en los jóvenes que dejaban la educación de manera temprana.

Esto fue consecuencia de que en los años previos a la crisis económica la situación cíclica de la economía influyó sobre la decisión de los jóvenes de abandonar el sistema educativo e incorporarse al mercado laboral. La razón de ello fue que se redujo el coste de oportunidad de dejar los estudios debido a los elevados salarios que tenían algunos trabajos pocos cualificados, relacionados principalmente con la construcción, que no requerían formación previa, lo que atrajo hacia el mundo laboral a un importante número de jóvenes que no habían completado sus etapas educativas (García Montalvo, 2008).

Nuevamente en 2009 comienza a descender el porcentaje de abandono escolar hasta alcanzar su mínimo histórico en 2018 con un 17,9%. A pesar de estas mejoras sigue existiendo un distanciamiento considerable con la Unión Europea de casi siete puntos porcentuales, lo que indica que, aunque este problema ha disminuido en España en la última década, sigue siendo una cuestión sin resolver.

Gráfico 3.9. Porcentaje de abandono temprano de la educación y la formación entre los jóvenes de 18 a 24 años en España y en la Unión Europea (1992-2018)



Fuente: Eurostat; elaboración propia.

En cualquier caso, en los últimos años este fenómeno se ha reducido debido, fundamentalmente, a dos procesos relacionados con la crisis económica y la importante expulsión del mercado laboral que sufrió la población joven durante la recesión: por un lado, la dificultad de encontrar trabajo hizo que un número importante de jóvenes dilatasen sus periodos de estudios; y, por otro lado, esta situación provocó que muchos de aquellos jóvenes que dejaron prematuramente la educación reglada para incorporarse al mercado laboral volvieran a retomar la formación abandonada con anterioridad. En este sentido, Gentile y Valls (2015, p. 112) afirman que “con la crisis del mercado laboral en general, y con la “crisis del ladrillo” en particular, vuelven a las aulas muchos jóvenes que habían estado trabajando en los sectores que más se beneficiaron del ciclo económico expansivo y que menos cualificación precisaban para ejercer sus ocupaciones”.

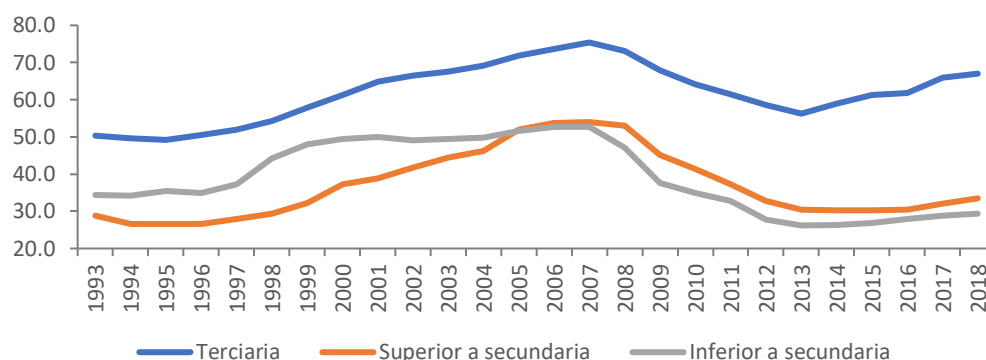
Serrano y Soler (2015) calculan que desde 2007 un 60% del descenso de la tasa de abandono escolar se explica por la fase recesiva del ciclo económico y las imposibilidades de poder trabajar. Estas circunstancias, según Eurostat (2009), han hecho que la educación se revalorice y se posicione como un baluarte más importante que en las décadas pasadas.

Sin embargo, la precariedad laboral junto con las convulsiones y transformaciones que ha experimentado el mercado laboral en los últimos años pone en duda la idea preconcebida de que una mejor formación y preparación por parte de los jóvenes les brindará mayores posibilidades de integración y mejores condiciones laborales. De este modo, se puede comprobar en el Gráfico 3.10 cómo, actualmente, el desempleo de los menores de 30 años que tienen educación terciaria se sitúa cerca del 70%, es decir, 7 de cada 10 jóvenes que tienen un título superior y que están buscando empleo no encuentra trabajo en España. En cambio, son los individuos con menos formación los que menos niveles de desempleo experimentan con un 29,4%, una diferencia de casi 40 puntos porcentuales.

Además, desde el inicio de la crisis económica de 2008 se observa una tendencia constante según la cual los jóvenes menos formados tienen mayor probabilidad de encontrar empleo. Esto permite intuir que el deterioro de las condiciones laborales de estos años ha hecho que las personas menos cualificadas acepten trabajos con

remuneraciones más bajas y con peores condiciones; mientras que los individuos con mayores niveles de formación, ante el complicado panorama laboral, han seguido en el sistema educativo para acceder a un mejor trabajo posteriormente o, simplemente, para esperar que el mercado laboral ofrezca ofertas de empleo más ajustadas a sus intereses. A esto añade García López (2014, pp. 12-13) que “el éxito de la transición del sistema educativo al mercado de trabajo se encuentra condicionado por la formación recibida, pero también por la situación y perspectivas del empleo y por la calidad prevista del emparejamiento laboral, las cuales, a su vez, pueden afectar a la decisión de prolongar (o no) los estudios”.

Gráfico 3.10. Tasa de desempleo en menores de 30 años según nivel educativo en España (1993-2018)

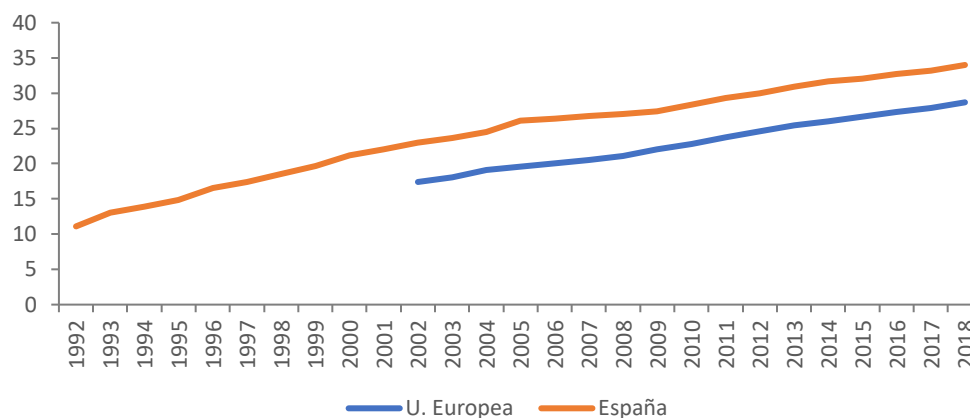


*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

En definitiva, los datos anteriores demuestran que el mercado laboral español después de la crisis económica no ha tenido capacidad para absorber a los jóvenes cualificados (Martínez, 2013; Pérez y Hernández, 2013). Y no solo eso, sino que antes de la recesión el hecho de tener un nivel educativo superior no aseguraba una protección reforzada a los jóvenes frente a la inestabilidad laboral (García Montalvo, 2008). Este hecho apunta a otro de los problemas característicos del sistema educativo y del mercado laboral en España: el desajuste entre la oferta y la demanda laboral según el nivel educativo.

Una de las principales razones de ese desajuste es que en los últimos años se ha producido una polarización muy importante en el sistema educativo español hacia la formación universitaria, lo que ha ocasionado un desajuste entre la demanda de trabajo cualificado y la oferta del mismo en el mercado laboral, dando lugar a importantes tasas de desempleo entre los jóvenes con niveles formativos superiores (García López, 2014). Al respecto, Gentiles y Valls (2015, p. 112) afirman que “el perfil del logro educativo en España presenta una distribución bimodal: el sistema educativo expulsa a un volumen ingente de menores de edad en etapas tempranas del itinerario formativo reglado, pero paradójicamente luego incorpora a la universidad a una proporción considerable de veinteañeros. El resultado es que tanto el número de abandonos escolares prematuros como el número de titulados universitarios se sitúan en niveles superiores (sobre todo, el primer indicador) a los registrados de media en la Unión Europea”.

Gráfico 3.11. Porcentaje de la población que tiene educación terciaria en España y en la Unión Europea (1992-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

Así, a principios de la década de los noventa alrededor de un 11% de la población española tenía formación superior. Desde ese momento este porcentaje comenzó a crecer de manera constante y continuada, lo que ha supuesto que en solo veinticinco años la proporción de personas con estudios superiores haya aumentado 23 puntos porcentuales hasta situarse en un 34% de la población total. A pesar de que esta tendencia ha corrido

paralela a la media de la Unión Europea, en todo momento España se ha mantenido en torno a unos seis puntos porcentuales por encima de los valores europeos.

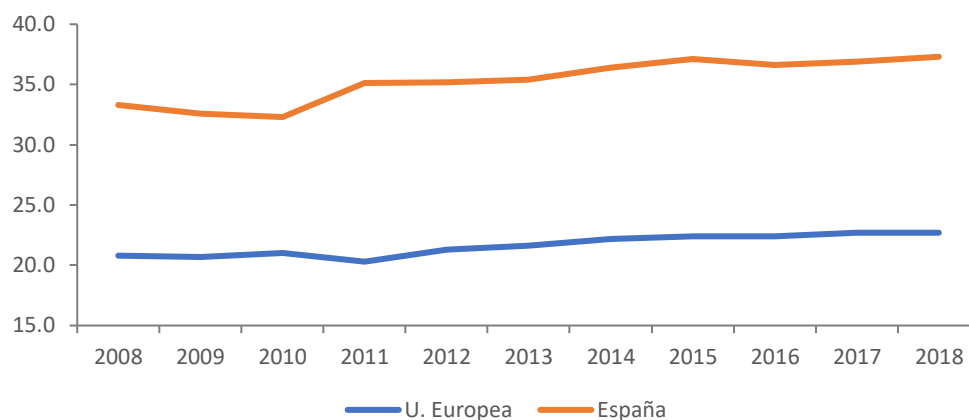
De esta forma, la importante expansión del acceso a los niveles educativos superiores en España, al no haber sido acompañada por transformaciones estructurales en el mercado laboral, parece indicar que actualmente la posesión de un título universitario no garantiza ni protege el ascenso social en este país (Martínez Celorrio y Marín, 2010). Sobre esta cuestión García Montalvo (2008, p. 2) manifiesta que “el aumento del nivel educativo de los trabajadores españoles durante los últimos 30 años ha sido espectacular. El incremento de los universitarios entre la población activa es especialmente importante. Sin embargo, el cambio en el modelo productivo y los requerimientos de formación de los puestos de trabajo no parecen haber avanzado al mismo ritmo. Por este motivo el tema de la sobrecualificación de los recursos humanos en España ha sido un aspecto recurrente del análisis de los efectos de la educación”.

Las investigaciones de los efectos de la educación sobre la situación en el mercado laboral de los individuos en España han generado resultados confrontados. Algunos autores, como Dolado *et al.* (2000), Rahona (2004) o Fernández (2006), afirman que disponer de un nivel de estudios mayor aumenta las posibilidades de encontrar empleo. Carabaña (2004) en su trabajo concluye que la posesión de un título universitario iguala las oportunidades de acceder al mercado laboral por parte de toda persona que haya alcanzado este nivel de estudio. Navarro (2013), en su estudio regional sobre este aspecto en Cataluña, y de manera menos taxativa, también apoya la afirmación de Carabaña sobre el hecho de que ante el mismo nivel formativo el origen social de la persona disminuye su importancia e iguala las oportunidades de los individuos. Por el contrario, Cachón (2008) y Recio (2009) destacan el origen social como un factor determinante y, en cambio, manifiestan que no existe una relación causal y clara entre tener una cierta formación y la situación en el mercado laboral. También Blázquez (2005) indica que existe una conexión negativa entre disponer de demasiada formación educativa y la probabilidad de tener una trayectoria estable en el mercado de trabajo o, más recientemente, Malo y Cueto (2010) afirman que tener estudios superiores no garantiza no entrar en los segmentos más inestables del mercado laboral cuando eres joven.

De este modo, actualmente ni siquiera la sobreeducación garantiza un empleo estable y acorde con el nivel formativo alcanzado por la persona, ya que la segmentación del mercado laboral hace que los jóvenes queden atrapados en trayectorias inestables durante importantes periodos de tiempo (Verd y López-Andreu, 2016). Además, esta sobrecualificación que están experimentando muchos jóvenes españoles hace que cuando consiguen acceder a un empleo presenten unas capacitaciones y unos conocimientos demasiados elevados para el trabajo que realizan, lo que a su vez produce el desplazamiento o incluso la expulsión de aquellos jóvenes que disponen de formaciones inferiores. En este sentido, Gentile y Valls (2015, p. 118) afirman que “aunque el nivel de estudios influya positivamente en la posibilidad de encontrar un empleo y de ascender en la escala laboral, una dinámica extendida de nuestro mercado de trabajo es la de expulsar a los jóvenes con baja cualificación y posicionar a los que disponen de una preparación académica en empleos que necesitan una formación inferior. Teniendo en cuenta este mecanismo de sustitución a la baja, un alto nivel de estudios no es garantía de una inserción laboral segura, inmediata y estable ni tampoco de una carrera profesional coherente con los estudios realizados”.

En 2018, en España un 37% de la población con estudios superiores consideraba que estaba sobrecualificado para el puesto de trabajo que tenía. Estas cifras son significativas para el caso español, ya que parece seguir una corriente distinta a lo que exponen algunas teorías sobre la sobrecualificación. Lo que argumentan dichas teorías es que durante las fases expansivas del ciclo económico la sobrecualificación tiende a disminuir, mientras que en las fases recesivas sucede lo contrario (García Montalvo *et al.*, 2006). Sin embargo, se puede constatar que, a pesar de las mejoras económicas iniciadas en 2014, este fenómeno no se ha reducido en España, lo que hace intuir que las personas, y especialmente los jóvenes, deciden seguir formándose ante un mercado laboral que ofrece pocas opciones reales de acceder a un empleo estable que cumpla con sus expectativas.

Gráfico 3.12. Porcentaje de población sobrecualificada para el puesto de trabajo que desempeña con estudios superiores en España y en la Unión Europea (2008-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

Otro de los aspectos que dificulta la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo, a pesar de tener cualificación más que suficiente, es la falta de experiencia laboral previa que caracteriza a la mano de obra juvenil en España, lo que suele complicar la transición de la educación al mercado laboral debido a la falta del conocimiento y la práctica que requiere el correspondiente empleo (Dolado *et al.*, 2013).

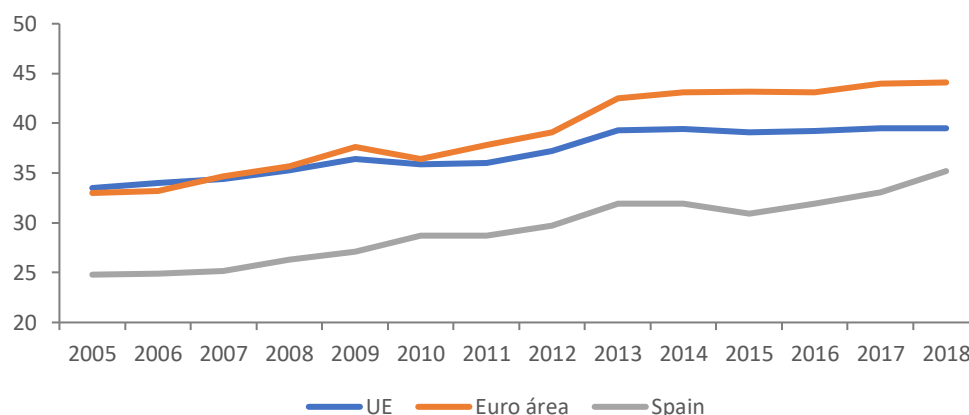
En los países del modelo socialdemócrata sobre todo, y en menor medida en los del corporativista, este problema se solventa mediante la temprana combinación entre trabajo y estudios. Esta política está facilitada y apoyada por las instituciones públicas, y lo que se pretende conseguir es que mientras que los jóvenes se forman educativamente puedan estar desarrollando capacidades y habilidades profesionales que les proporcionarán experiencia laboral. El fin perseguido es facilitar la transición del ámbito educativo al mercado de trabajo y, además, proporcionarles en muchos casos unos ingresos económicos que, de manera paulatina, les irán otorgando mayores niveles de autonomía.

No obstante, este recurso no ha sido muy empleado en España (Gentile, 2013). Así, se puede observar que en España, a pesar de tener una tendencia generalmente ascendente desde hace diez años, el porcentaje de personas menores de 25 años que alternan simultáneamente estudios con trabajo es casi 10 puntos porcentuales más bajo que la Eurozona y un 4% menor que en la UE. Además, al contrario de lo que ocurre en los



países nórdicos o en Alemania, no existe un sólido entramado institucional que posibilite ni fomenta esta herramienta entre los jóvenes. Esta ausencia de facilidades por parte de las administraciones públicas hace que en muchas ocasiones los jóvenes que tienen empleo y al mismo tiempo pueden estudiar enfrenten numerosos problemas, entre los que destaca la disponibilidad de horarios o la no coordinación entre empleo y formación educativa (Fernández Enguita *et al*, 2010); o que incluso el trabajo que desempeñan no guarde ningún tipo de relación con la formación educativa y solo lo estén realizando para conseguir ingresos económicos.

Gráfico 3.13. Porcentaje de personas menores de 25 años que trabajan y estudian en España, en la Unión Europea y en la Euro área (2005-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

De este modo, en la mayoría de las ocasiones los jóvenes en España no pueden subsanar esta falta de experiencia laboral hasta pasado unos años desde su incorporación al mercado de trabajo. Esta cuestión, junto con otros problemas del sistema educativo y del mundo laboral, como el abandono temprano de la formación o el fracaso escolar, puede generar un escollo casi insalvable en la inserción laboral de los jóvenes que a la larga los empuja a un desánimo constante y a una disminución de las esperanzas de poder encontrar un empleo (García López, 2014). En este sentido Dolado *et al.* (2013, p. 11) manifiestan que “una de las diferencias más notables con los países de referencia es la baja proporción de jóvenes en España que combinan empleo con educación / formación.

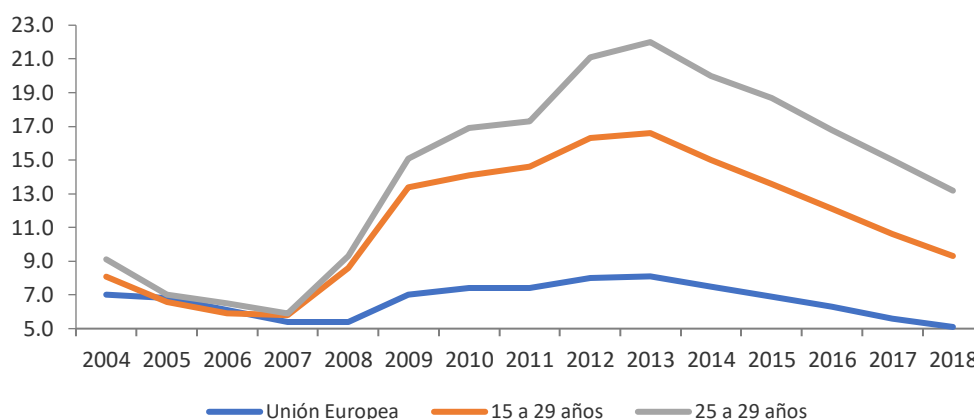
Estas diferencias siguen siendo grandes incluso en edades más avanzadas. Dado que la posibilidad de combinar estudio y trabajo facilita las transiciones de la escuela al trabajo, el alto porcentaje de jóvenes españoles que no lo hacen puede ser uno de los determinantes más importantes de las altas tasas de *ninis* de adolescentes y jóvenes en este país”.

El hecho de no tener trabajo ni tampoco estar estudiando ha recibido el nombre de jóvenes “*ninis*”, aunque existe cierta controversia sobre el uso de este término que ha hecho que distintos investigadores critiquen el carácter peyorativo y despectivo que conlleva este término y que puede acabar por estereotipar al sector joven e invisibilizar el hecho de que muchos de ellos no se encuentran en esta situación por voluntad propia o por carecer de ganas de estudiar y/o trabajar como suele insinuarse. Sobre esta cuestión Cabasés *et al.* (2017, p. 749) manifiestan que “si bien el concepto *ni-ni* surgió para denunciar el desajuste existente entre el sistema educativo y el mercado laboral, hoy es una etiqueta peyorativa que victimiza a las personas jóvenes y que se ha convertido en categoría (...). Es decir, hay una tendencia a estereotipar el colectivo juvenil como forma de denuncia social, pero que resulta perjudicial cuando se toma la parte por el todo y los efectos por las causas (...). Es necesario reivindicar el carácter dinámico tanto del empleo como de la educación y de su interrelación, por lo que muchas personas jóvenes se mueven, en cuestión de días, entre experiencias laborales o educativas de diferentes niveles y existen muchas formas de actividad que, por su carácter, no aparecen en las estadísticas. La categoría estadística NEET no debería servir para etiquetar un colectivo homogéneo y estático, que no existe, sino para describir la precariedad e inseguridad en la que se encuentran muchas personas jóvenes de diferentes perfiles si, en un momento determinado de su vida, se encuentran sin empleo y no recibiendo ningún tipo de formación”.

Este fenómeno se disparó de manera muy significativa tras la crisis económica y la posterior recesión. En el Gráfico 3.14 se puede ver cómo España antes de 2008 tenía unos valores similares a los de la Unión Europea pero, sin embargo, después del estallido de la burbuja inmobiliaria y sus graves consecuencias se abrió una brecha entre los datos de este país y la media europea. En 2013, un 16,6% de los jóvenes españoles menores de 30

años no trabajaba ni estudiaba, con las graves consecuencias que esto puede acarrear para sus vidas laborales. Pero aún es más preocupante lo que ocurre en el tramo de 25 a 29 años que alcanzó el 22% para ese año, ya que este grupo por norma general ha finalizado sus estudios y debería, en la mayoría de los casos, ser parte activa y dinámica del mercado laboral. No obstante, desde 2013 el porcentaje de jóvenes que no estudia ni trabaja se ha reducido de manera considerable, aunque España sigue manteniendo una diferencia significativa respecto a la media europea.

Gráfico 3.14. Porcentaje de jóvenes menores de 30 años que no trabajan ni estudian en España y en la Unión Europea (2004-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

Además, distintos investigadores señalan que uno de los grandes problemas de esta situación es que ha afectado, sobre todo, a jóvenes que tienen poca formación lo que dificulta en gran medida su inserción laboral. En este sentido, Serrano y Soler (2015, p. 100) afirman que “estos jóvenes tienen un verdadero problema de inserción laboral, puesto que alrededor del 70% de ellos únicamente han completado los estudios obligatorios y apenas un 20% ha realizado estudios secundarios posobligatorios; es decir, el 90% de los jóvenes parados que no realizan ningún tipo de formación ha alcanzado como máximo nivel de estudios el de secundarios posobligatorios. Estos parados, pese a tomar la iniciativa de buscar empleo activamente, no están realizando ningún tipo de formación complementaria. Uno de los problemas de los ninis es precisamente la

dificultad asociada a encontrar un trabajo, dada la dramática coyuntura laboral a la que se enfrentan los jóvenes, con elevadísimas tasas de desempleo, especialmente entre los menos formados, y cómo estos problemas pueden persistir en su trayectoria laboral”.

Todo esto evidencia el gran problema que tiene España con el desempleo juvenil, una cuestión que no es nueva pero que no ha sido solucionada en las últimas décadas y que, además, se agravó más aún como consecuencia de la crisis económica de 2008. Estas dificultades para conseguir suficiencia económica por parte de los jóvenes suponen un importante obstáculo a otros procesos de la transición a la vida adulta, como la emancipación residencial, por lo que a lo largo de los años, y especialmente durante los últimos, ha sido uno de los principales temas que ha ocupado el debate político y hacia el cual han estado orientadas ciertas medidas públicas para intentar corregir este problema (Cavas Martínez, 2016).

Las políticas de empleo aplicadas tradicionalmente han sido clasificadas en dos grupos: por un lado, las políticas pasivas de empleo que son medidas de contención para mantener estables las rentas de los beneficiados que tienen como objetivo proporcionar un subsidio a las personas desempleadas o facilitar la jubilación anticipada (Hörisch *et al.*, 2014); y, por otro lado, las políticas activas de empleo son aquellas acciones que intervienen directamente en el mercado laboral para crear empleo, fomentar el trabajo entre grupos específicos de trabajadores o facilitar la reincorporación de los desempleados, entre otras actuaciones (García Serrano, 2007).

El último grupo de medidas se presenta como clave para la empleabilidad de la población activa en general. En este sentido, Martínez Valverde (2014, p. 6) las describe como un “conjunto de herramientas de las que disponen las distintas administraciones a nivel estatal y autonómico para contribuir a la reducción de los desajustes existentes entre la oferta y demanda de trabajo”.

La Estrategia de Activación para el empleo 2017-2020 es el actual marco normativo mediante el que se organizan, coordinan y ejecutan las políticas activas de empleo en España. En este plan de acción se hace especial referencia a la población joven y es que, indudablemente, estas actuaciones son determinantes en un sector como el juvenil debido a la poca formación que presenta al principio de su trayectoria laboral, a la falta de

experiencia en comparación con la de los adultos y a las pocas prestaciones por desempleo a las que tiene acceso.

No obstante, el alcance de las políticas públicas sobre este grupo generalmente ha sido poco eficaz debido al escaso gasto público destinado a ellas y a la adopción de medidas que no han tenido los efectos esperados, junto con la dificultad de movilizar a este segmento de la población (García López, 2014).

Sin embargo, a pesar de ello, las políticas de empleo se siguen considerando como la mejor herramienta disponible por parte de las administraciones públicas para remediar las complicadas trayectorias laborales de los jóvenes.

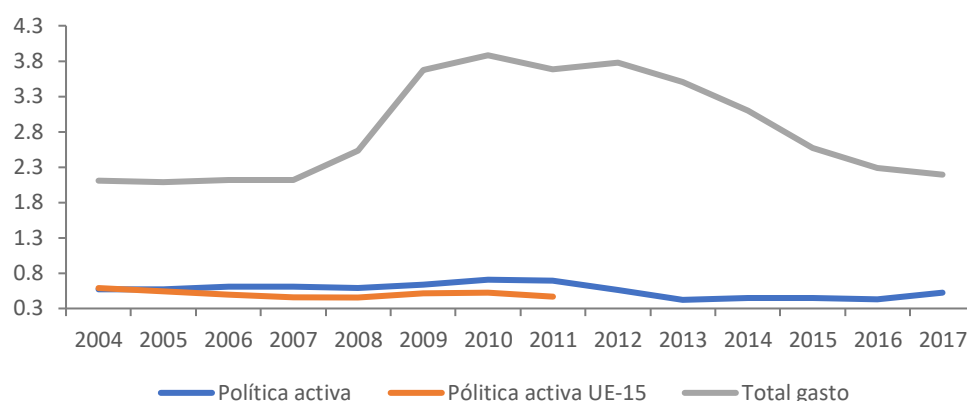
Entre los programas más utilizados en España destacan los incentivos al empleo privado, principalmente los estímulos a las empresas para que realicen contrataciones indefinidas, ya sea de manera directa o mediante la conversión de contratos temporales en fijos. Otra acción que tiene bastante peso son los planes de formación, que suelen suponer el 25% del gasto en políticas activas; mientras que los programas de intermediación que facilitan la búsqueda de empleo entre los solicitantes mediante acuerdos y convenios con las empresas privadas, la creación directa de empleo público y la inserción de sectores vulnerables absorben una menor partida de gasto (De la Rica, 2015).

No obstante, en España la mayor proporción de la partida presupuestaria destinada a políticas de empleo se dirige principalmente al subsidio por desempleo y a los planes de jubilación anticipada, es decir, a las políticas pasivas de empleo. En el Gráfico 3.15 se puede observar que el gasto en políticas activas de empleo supone un escaso porcentaje en comparación con el presupuesto destinado a las políticas de empleo en general.

Además, aunque durante la crisis el gasto público en empleo aumentó, este incremento estuvo muy lejos de las necesidades del mercado laboral durante aquellos años. Y no solo eso sino que, mientras que el gasto total en políticas de empleo creció en más de un 50%, el porcentaje destinado exclusivamente a las políticas activas pasó de un 0,59% en 2008 a un 0,7% en 2010 para, a partir de ese momento, comenzar a descender y situarse por debajo de los valores previos a la crisis económica. Por lo tanto, las políticas activas de empleo durante estos años no han tenido la capacidad de acción suficiente para

subsanan las graves consecuencias que produjo la crisis económica de 2008 sobre las ya de por sí precarias trayectorias laborales que presenta el sector juvenil.

Gráfico 3.15. Gasto público en porcentaje del PIB en política de empleo en España y en la UE-15 (2004-2017)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

De este modo, los pocos recursos destinados a las políticas activas de empleo y la combinación y la aplicación de los programas correspondientes, que en muchas ocasiones no han tenido los resultados esperados, han hecho que la incidencia de estos planes sobre el desempleo juvenil haya sido reducida, produciendo generalmente resultados ineficientes (García López, 2014).

Ante esta situación, en muchas ocasiones los jóvenes adoptan la decisión de retrasar el momento de abandonar el hogar familiar, habitualmente respaldados económicamente y psicológicamente por sus progenitores. Este hecho se presenta como una estrategia que tiene como fin ampliar sus formaciones educativas, buscar trabajos cualificados durante un periodo de tiempo más dilatado según sus niveles educativos o ahorrar dinero para tener recursos suficientes y seguridad económica que les garantice mejores condiciones y mayores facilidades a la hora de formar su propio hogar (Moreno Mínguez, 2013; Emmanuel, 2013).

En este sentido, el Observatorio de Jóvenes de la Vivienda en España afirmó que, a partir de 2010, la emancipación residencial se dilató como consecuencia de la expulsión de los jóvenes del mercado de trabajo y del fuerte incremento de la temporalidad, que no

permite alcanzar al sector juvenil la independencia económica para emprender con éxito este proceso (OBJOVI, 2014).

Estas características del mercado de trabajo al que acceden los jóvenes son determinantes para la explicación del patrón de emancipación residencial juvenil y su retraso, ya que la experiencia de los jóvenes ante la precariedad del mercado laboral juvenil es un factor central en la modelación de las expectativas a la hora de establecer la ruta de salida del hogar familiar (Mills *et al.*, 2005; Furlong y Cartmel, 2007). Por esta razón, la expulsión del mercado de trabajo de los jóvenes españoles tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el agravamiento de las generalmente precarias condiciones laborales ayudan a entender el aumento del problema que viene sufriendo la emancipación juvenil desde el inicio de la crisis económica.

### **3.3. El sistema residencial de España: un obstáculo para la emancipación juvenil**

El parque de vivienda y la configuración del mercado inmobiliario de un país son claves para determinar la emancipación y las formas de convivencia. Por esta razón, a lo largo de este apartado se analizarán las características más importantes de estos elementos y se examinarán las opciones de las que disponen los jóvenes para abandonar el hogar familiar, desde la propiedad como principal régimen de tenencia en España, pasando por el alquiler privado como alternativa o la reducida oferta de vivienda social.

Independientemente de la forma que escojan para independizarse de sus progenitores, generalmente los jóvenes españoles tienen grandes dificultades para acceder al mercado laboral como se ha podido ver en la sección anterior, lo que les complica conseguir la autonomía económica necesaria para completar el proceso de la transición juvenil a la vida adulta. Este obstáculo para que obtengan recursos económicos suele ser decisivo a la hora de que se independicen residencialmente de sus familias, ya que este proceso requiere importantes desembolsos económicos.

En España este aspecto adquiere, si cabe, mayor transcendencia debido a su singular sistema residencial. Una de las razones de esto es que tiene un modelo residencial desequilibrado en el que la forma más común de acceder a una vivienda es mediante la

compra en detrimento de otras opciones, lo que precisa de unos amplios ahorros previos que posibiliten acometer esta acción con garantías, algo que raramente suele coincidir con los bajos ingresos y la alta inestabilidad laboral del sector juvenil.

De este modo, el modelo residencial español contrasta con los desarrollados, especialmente, en los países norte y centroeuropeos. El sistema residencial de esos países está caracterizado, generalmente, por un fuerte mercado de alquiler, tanto social como privado, y por ayudas públicas dirigidas a garantizar el acceso a una vivienda, entre los que suelen ser destinatarios comunes los jóvenes. Estas acciones han paliado en cierto grado, no en todos los casos, la mercantilización de la vivienda, a la vez que han supuesto obstáculos a la hora de tratarla como un producto de inversión directa de los hogares y no como un bien de primera necesidad, lo que facilita, entre otros procesos, la emancipación juvenil.

Históricamente, el sistema residencial español no ha tenido siempre estas características. Se puede observar que en el año 1950 la propiedad no era la principal vía de acceso a una vivienda en España, siendo el alquiler el que tenía un mayor peso entre las formas de acceso. Sin embargo, a partir de esa década la tendencia comenzó a cambiar progresivamente debido, sobre todo, a la aplicación de una serie de políticas públicas que fomentaron la construcción de nuevas viviendas libres; un hecho que años más tarde dio lugar a que la vía de acceso principal a una vivienda fuese mediante la propiedad (Betrán Abadía, 2002).

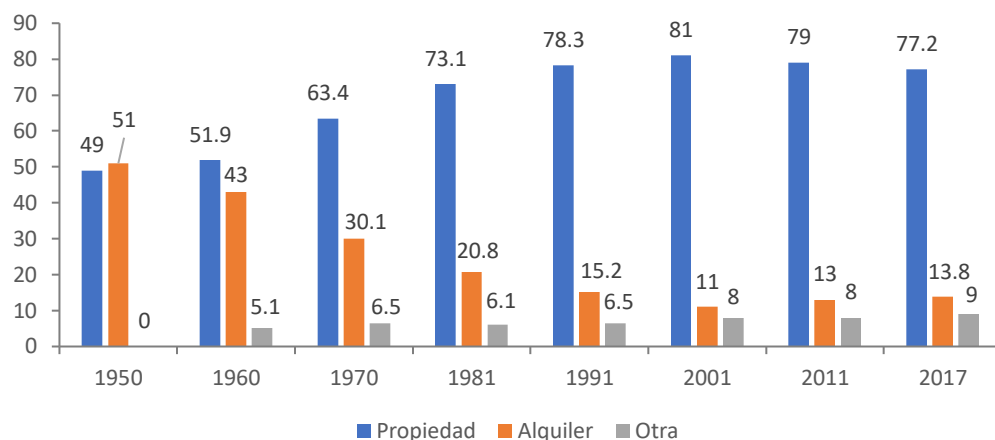
La tónica de los siguientes años fue similar, o incluso más pronunciada, dando lugar a un crecimiento constante de los hogares que tenían una vivienda en propiedad. Así, las acciones que se desarrollaron durante esas décadas hicieron que en España el porcentaje de familias propietarias de una vivienda alcanzase su máximo histórico en 2001 con un 81% (Universidad de Málaga, 2015).

A partir de la crisis económica de 2008 esta dinámica se estancó. Se puede comprobar cómo en 2011 el porcentaje de hogares que tenían una vivienda en propiedad disminuyó respecto a 2001, y del mismo modo ocurre en 2017. No obstante, aunque estos hechos han ido generando más espacio a otras formas de acceso a la vivienda en los últimos años, las evidencias muestran que, a pesar de los graves acontecimientos que se



desarrollaron durante la recesión, el modelo inmobiliario español parece que no se ha alterado como se hubiera esperado y que la propiedad sigue siendo, con un amplio margen de distancia sobre otra modalidad, la forma más habitual de tenencia de una vivienda por parte de los hogares.

Gráfico 3.16. Evolución de la tenencia de los hogares en España (1950-2017)



*Fuente:* Censo 1950; 1960; 1970; 1981; 1991; 2001; 2011; Pittini *et al.*, 2017; elaboración propia.

El crecimiento de la vivienda en propiedad que tuvo lugar en España produjo una serie de consecuencias directas sobre su sistema residencial, entre las que destacan el escaso fomento del alquiler o un parque de vivienda social prácticamente inexistente. Al mismo tiempo, Inurrieta (2007) señala que al reducido parque de alquiler español hay que añadirle el deterioro que este sufre y que se encuentra dominado por propietarios que establecen unos precios similares a las cuotas hipotecarias que ofrece el mercado de venta de vivienda, lo que hace poco atractivo el mercado de alquiler. A estas conclusiones también llegan Borgia y Delgado (2009), quienes señalan la inexistencia de un parque de vivienda en alquiler que facilite el acceso a la vivienda a determinados sectores de la población según sus necesidades económicas o sociales.

De este modo, el acceso de los jóvenes españoles a una vivienda suele verse obstaculizado por el reducido parque de alquiler y, además, esto en muchas ocasiones los conduce a que dicho acceso a una vivienda se produzca vía compra.

El gran problema de ello es que la adquisición de una vivienda suele ser uno de los mayores esfuerzos económicos que realizarán a lo largo de su vida, un hecho que en las últimas décadas en España ha sido, si cabe, un factor más determinante aún en la emancipación residencial del sector juvenil que en otros países debido a dos factores interrelacionados: a los altos precios que la vivienda alcanzó durante los años de la burbuja inmobiliaria y al escaso crecimiento proporcional de los salarios respecto a dichos precios (Poggio, 2008; Moreno Mínguez, 2013).

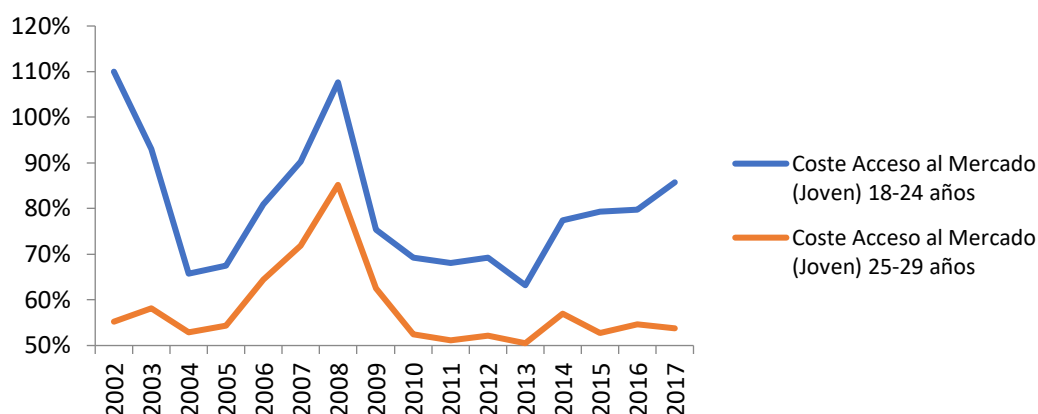
Un indicador clave para comprender el esfuerzo económico que tienen que realizar los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad es el coste/esfuerzo de acceso al mercado de vivienda, ya que relaciona el precio de la misma con la renta de la persona, es decir, la proporción de sus ingresos mensuales destinados a pagar la cuota hipotecaria. Es importante tener presente que el ratio/endeudamiento considerado óptimo por las instituciones financieras es del 30%, a partir de este porcentaje la operación es considerada de riesgo (Cortés, 1995; Rodríguez, 2010; Consejo Económico Social, 2012; Gracia y López, 2017). Sobre este factor Echaves (2017, p.141) concluye que “el esfuerzo de acceso a la vivienda es un elemento fundamental para valorar el problema de la población joven y la vivienda, ya que dicho esfuerzo, como indicador, está relacionando dos aspectos (el precio de la vivienda y el poder adquisitivo o renta de individuos y hogares) que quizá constituyan de los principales escollos que están obstaculizando (...) el abandono del hogar de los padres para trasladarse a una vivienda propia y formar un hogar”.

Después de la crisis económica y de la caída del precio de la vivienda, este indicador descendió de manera considerable. Así, el esfuerzo para acceder a una vivienda comenzó a disminuir en 2009 tras situarse este ratio en 2008 en valores por encima del 100% para los jóvenes menores de 25 años, lo que significaba que tenían que destinar al pago de la cuota hipotecaria más de su salario mensual íntegro (Echaves, 2016).

Sin embargo, aunque el esfuerzo para acceder a una vivienda se ha reducido en los últimos años la tasa de emancipación no ha mejorado. Y es que al riesgo de sobreendeudamiento con el que se encontraban los jóvenes durante el auge económico hay que añadirle la complicada situación del mercado laboral descrita con anterioridad,

lo que ha hecho que la brecha entre la capacidad adquisitiva y los precios que ofrece el mercado siga siendo muy amplia a pesar del descenso de los mismos (Alguacil Denche, 2017). Además no solo eso, sino que el esfuerzo a realizar para acceder a una vivienda libre en propiedad ha aumentado desde 2014 para los jóvenes menores de 25 años hasta situarse en 2017 en un 86%.

Gráfico 3.17. Coste/esfuerzo de acceso al mercado de vivienda (2002-2017)



*Fuente:* OBJOVI; elaboración propia.

De hecho, el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España en su informe del primer semestre de 2017<sup>4</sup> concluyó que una vivienda en propiedad para una persona menor de 30 años asalariada requería su sueldo íntegro durante 14,2 años, lo que supone un incremento respecto a los años previos a la crisis económica de 2008, cuando el Consejo Económico Social (2002) estimó que en 2001 un joven asalariado menor de 30 años necesitaba 13,2 años de su sueldo completo para pagar totalmente una vivienda libre en propiedad.

Y es que en los últimos quince años ha sido prácticamente imposible que una persona joven haya podido comprar una vivienda libre de manera individual sin tener que destinar como máximo el 30% de su sueldo neto al pago de la mensualidad de una hipoteca y, por tanto, no exponiéndose a operaciones hipotecarias arriesgadas (Echaves,

<sup>4</sup> <http://www.cje.org/descargas/cje7255.pdf>

2017). A esta situación hay que añadirle, además, el endurecimiento de los requisitos de acceso a la financiación hipotecaria después de la crisis.

Es por esto que los jóvenes se encuentran con dos obstáculos primordiales relacionados con el sistema residencial para poder acceder a una vivienda: la incapacidad económica para adquirir una vivienda en propiedad en un contexto social de extensión de este régimen y la reducida oferta de vivienda en alquiler que presenta el mercado residencial (Valenzuela, 2013). Sobre este hecho Espínola (2010, p. 299) manifiesta que: “el mercado residencial no proporciona una respuesta a la demanda de primer acceso de los jóvenes y, en el mejor de los casos, se restringe al ámbito de la vivienda protegida, por ello la autonomía económica tiene como principal objetivo el acceso a la vivienda. Asimismo, en el supuesto de optar por una vivienda en alquiler, que resulta una vía de acceso que requiere mucho menos ahorro previo, se encuentran con la escasez de dicho parque y con que la mayor parte de la oferta son viviendas privadas”.

Todo esto viene a fortalecer la afirmación de que España posee un parque de viviendas en propiedad sobredimensionado y que carece de otros tipos de régimen de acceso que facilitarían la emancipación de los jóvenes.

### 3.3.1. El alquiler como opción residencial para el sector juvenil después de la crisis

La cultura de la propiedad tradicionalmente ha calado entre los más jóvenes, por lo que entienden la compra de una vivienda como una inversión de futuro que tras el esfuerzo de pagarla año tras años les otorgará una propiedad y un activo seguro de valor estable; mientras que consideran que vivir de alquiler es malgastar el dinero puesto que no les proporcionará estabilidad y seguridad de cara a los años posteriores (Castles y Ferrera, 1996; Poggio, 2008; Moreno Mínguez, 2013; 2017b).

Sin embargo, la vulnerabilidad económica de los jóvenes y de sus familias y la dificultad de acceso a una vivienda libre en propiedad han provocado en el sector juvenil un cambio de dinámica en los últimos años y el cambio de percepción sobre la tenencia

en régimen de alquiler<sup>5</sup>. Esta decisión también está influenciada por el cambio cultural que se está produciendo en la sociedad española respecto a la movilidad geográfica a la que muchas personas se ven obligadas para encontrar buenas oportunidades de trabajo o simplemente en los dilatados procesos de educación: una vivienda en alquiler no implica un apalancamiento situacional como lo puede suponer una en propiedad (Módenes *et al.*, 2013).

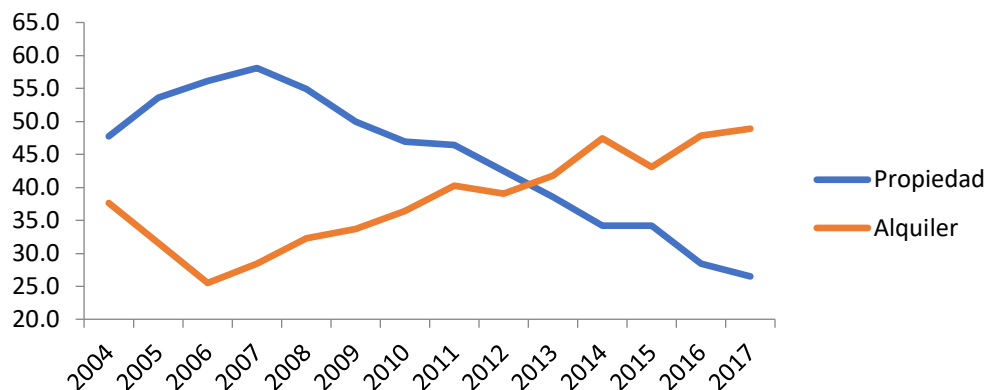
Así, tras el inicio de la crisis de 2008, para emanciparse residencialmente de sus familias los jóvenes optan mayoritariamente por el alquiler y no por la propiedad, algo que no ocurría desde hacía casi 20 años (Gentile, 2013; Gracia y López, 2017). De esta manera, se puede comprobar en el Gráfico 3.18 que en los años previos al inicio de la crisis crecía la propiedad como modo de acceso a una vivienda entre los jóvenes españoles, alcanzando en 2007 su máximo con un 58,1%. Es decir, en España casi 6 de cada 10 menores de 30 años tenían una vivienda propia. El alquiler, en cambio, seguía la tendencia inversa, llegando al mínimo de la serie analizada en 2006 con tan solo un 25,5%.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria esta tendencia se invertiría. Desde ese momento el alquiler entre el sector juvenil comienza a crecer como forma de acceso a la vivienda, hasta convertirse en 2013 en su principal opción por encima de la propiedad. En 2017 esta elección ha seguido creciendo hasta situarse en un 48,91%, lo que amplía el distanciamiento entre un régimen de tenencia y otro. Por el contrario, entre los jóvenes la propiedad como opción de acceso a una vivienda no ha aumentado y desde 2007 ha disminuido un 31,6%, lo que ha hecho que alcance valores mínimos en 2017 con un 26,5%.

---

<sup>5</sup> No obstante, distintos investigadores, como Módenes y López-Colás (2014) o Fuster *et al.* (2019), afirman que aún es demasiado pronto para saber si el sistema residencial español está cambiando o si, por el contrario, una vez mejorado el nivel económico, la tendencia de este comportamiento volverá a ser la misma que en años previos.

Gráfico 3.18. Evolución del alquiler y de la propiedad entre los jóvenes menores de 30 años en España (2004-2017)



Fuente: INE; elaboración propia.

Sin embargo, aunque los jóvenes están optando por la opción del alquilar a la hora de emanciparse del núcleo familiar, se encuentran con una oferta reducida de viviendas en régimen de alquiler. Al mismo tiempo, la tipología y la calidad de las viviendas en alquiler no responden a las demandas de los solicitantes y, aún así, los precios son muy elevados a pesar del descenso que sufrieron al comienzo de la crisis (Módenes y López-Colás, 2014; Módenes y Botelho Azevedo, 2017).

A ello está colaborando en los últimos tiempos un importante uso de la vivienda residencial como alquiler vacacional, fomentado mayoritariamente por la aparición de nuevas plataformas digitales como *Airbnb*, que está acaparando una parte considerable de la oferta de alquiler privado y presionando los precios al alza principalmente en las ciudades españolas más turísticas como Barcelona, Madrid o Málaga (López-Rodríguez y De los Llanos, 2019).

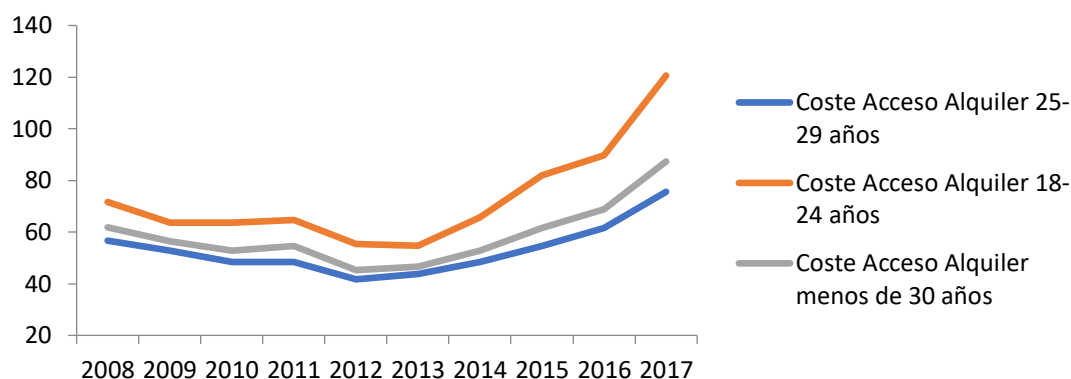
En efecto, la emancipación residencial de los jóvenes españoles se ve afectada de manera directa por el débil y escaso parque de alquiler (Jurado Guerrero, 2006; Espínola Orrego, 2010; Echaves, 2016).

Estos motivos reflejan la nueva problemática que está experimentando la población española a la hora de acceder a una vivienda y especialmente el sector juvenil: un exceso de demanda de alquiler y una oferta escasa (Alguacil Denche, 2017).

La situación descrita está provocando que los precios solicitados por los

arrendadores hayan aumentado en estos últimos años y que lo que parecía una alternativa para los jóvenes a la hora de emanciparse se haya convertido en otro camino intransitable (Alguacil Denche, 2017; Gracia y López, 2017).

Gráfico 3.19. Coste/esfuerzo acceso al alquiler en menores de 30 años en España (en porcentaje) (2008-2017)



*Fuente:* OBJOVI; elaboración propia.

Así, se puede ver en el Gráfico 3.19 cómo a partir de 2008 el esfuerzo que debía realizar una persona menor de 30 años para acceder a una vivienda en alquiler comenzó a descender hasta 2012. Para ese año los jóvenes tenían que destinar el 45,27% de su salario a pagar el alquiler. Sin embargo, a partir de ese momento la tendencia cambia y el esfuerzo al que deben hacer frente es mayor año tras año hasta situarse en un 87,5% en 2017, llegando incluso en el caso de los menores de 25 años al 120,7%. Estos datos, junto con la oferta tan reducida del parque de vivienda de alquiler que posee España, indican que a día de hoy este régimen de tenencia no supone una alternativa asequible y real que permita la emancipación y la autonomía de los jóvenes españoles (Echaves, 2017; Alguacil Denche, 2017).

Además, si se comparan estos valores con el esfuerzo que realizan los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad (Gráfico 3.17) se puede extraer que el sector juvenil es empujado por el contexto hacia la propiedad como régimen de tenencia principal, ya que no difieren en muchos puntos porcentuales el esfuerzo que deben hacer, incluso llegando a superar en estos últimos años los costes de acceso del alquiler a los de la

propiedad (Jurado Guerrero, 2006; Sánchez Galán, 2017). Es decir, a la valoración social positiva que se atribuye en España al hecho de ser propietario, hay que añadirle una oferta que altera las preferencias al existir una pequeña diferencia entre los costes de alquiler y compra, lo que hará que los jóvenes en un ejercicio de racionalidad económica prefieran la propiedad por el hecho de que el desembolso es similar al que deberían hacer para acceder a una vivienda en alquiler; además de que lo consideran una forma de inversión y de ahorro para el futuro (Trilla y López, 2005; Jurado Guerrero, 2006; Gaviria, 2007; Echaves, 2017).

Y no solo esto, sino que las políticas públicas que se han desarrollado en España han fomentando la propiedad mediante acciones directas, como incentivos fiscales, y acciones indirectas, como el abandono y el escaso fomento que se le da al parque de alquiler; a la vez que las ayudas a los jóvenes para la transición a la vida adulta han sido prácticamente eliminadas (Allen *et al.*, 2004; Pareja-Eastaway y Sánchez-Martínez, 2014; Gracia y López, 2017; Sánchez Galán, 2017).

En definitiva, tras la crisis se ha producido una reorientación hacia una situación más equilibrada entre el alquiler y la propiedad en el sector juvenil, ya que la juventud española está optando por un acceso más tardío a la propiedad y comenzando su emancipación residencial mediante el alquiler (Módenes y López-Colás, 2014; Módenes y Botelho Azevedo, 2017). Sin embargo, este escenario no está consolidado debido al aumento de precios que está sufriendo el mercado de alquiler y que imposibilita a la juventud española acceder a la vivienda por esa vía.

### 3.3.2. Los problemas de la vivienda social en España

En aquellos países en los que la emancipación juvenil se lleva a cabo a edades más tempranas, su sistema residencial suele presentar un considerable porcentaje de vivienda social. Este modo de tenencia es una alternativa decisiva a la hora de que los grupos sociales más desfavorecidos de la población tengan una trayectoria de vivienda estable.

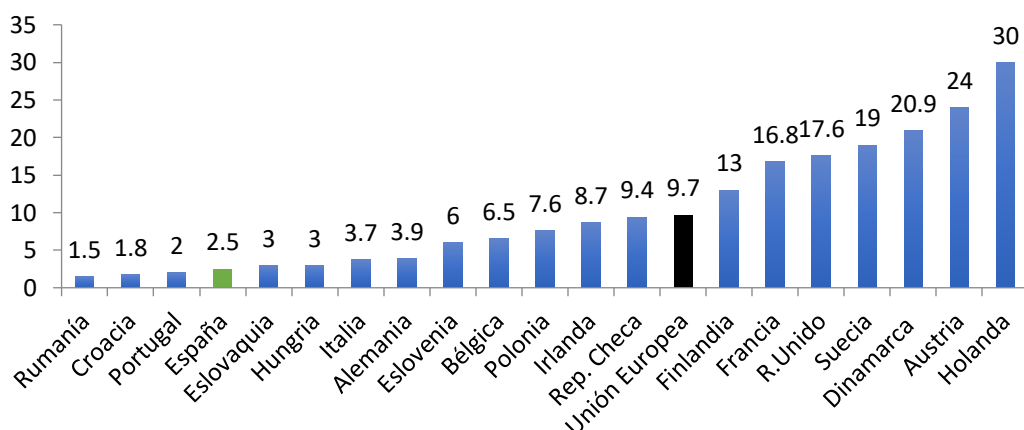
En este sentido, un informe de la Universidad de Málaga (2015, p. 1) manifiesta que “la denominada vivienda social es un instrumento fundamental para asegurar acceso



universal a la vivienda. Esto es así porque el objetivo de la vivienda social es el de proporcionar vivienda a aquellos colectivos y segmentos poblacionales que enfrentan mayores dificultades para acceder a la vivienda en el mercado libre”; sin embargo, en España el uso de este régimen de tenencia ha sido muy residual.

Además, el caso español tiene una peculiaridad añadida que lo distingue de otros países europeos, y es que la vivienda social está enfocada casi en su totalidad a la compra y venta, marginando la dimensión del alquiler social. Mientras que en España existe un 2,5% de vivienda en alquiler social, la media europea se aproxima al 10%, es decir, más de siete puntos porcentuales por encima del caso español (Gráfico 3.20). La diferencia es aún más llamativa cuando se considera el caso del parque de vivienda social en alquiler de algunos países. Así, España se sitúa al respecto muy lejos de Holanda (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20,9%). Sobre este hecho Inurrieta (2007, p. 25) afirma que “la vivienda social, y en especial el alquiler, es escasa en España a diferencia de los países de nuestro entorno. El escaso interés de las Administraciones Públicas, en parte por los problemas de gestión, el fiasco de algunas experiencias con agentes sociales, la baja rentabilidad y la ausencia de empresas dedicadas íntegramente o mayoritariamente a este segmento, explican las exiguas cifras. Las cifras reales, como casi siempre en este mercado, son discutibles, pero según la UE en España el porcentaje de vivienda social en 2006 apenas representaba el 2% del total de viviendas existentes”.

Gráfico 3.20. Porcentaje de vivienda en alquiler social en la Unión Europea (2017)

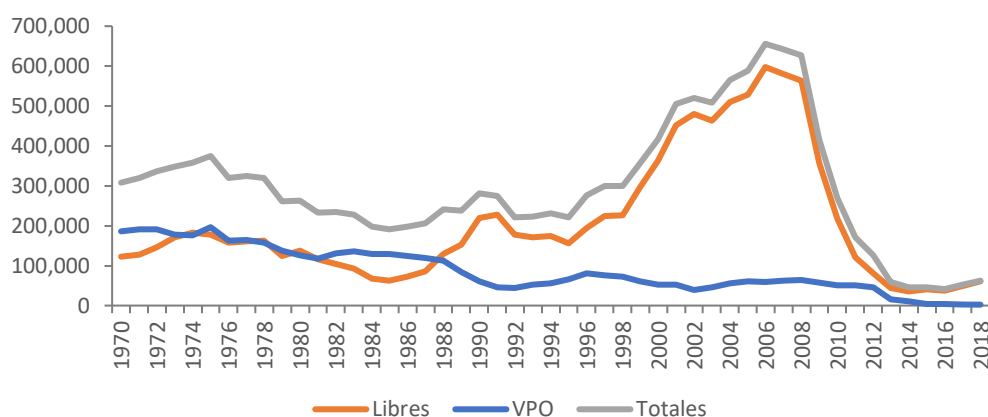


Fuente: Pittini *et al.*, 2017; elaboración propia.

El escaso parque de vivienda social español es un buen reflejo de la evolución que ha seguido su modelo inmobiliario durante las últimas décadas. Así, hacia finales de los años ochenta el número de viviendas protegidas construidas en España se mantuvo por encima del de las viviendas libres; a partir de ese momento esa dinámica se modificó y comenzó una divergencia a favor de la vivienda libre que se amplió año tras año y que se mantuvo hasta prácticamente unos años posteriores al inicio de la crisis económica de 2008.

Uno de los motivos que explican el cambio de tendencia fue la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de la que se beneficiaban las viviendas de protección oficial tras la aprobación de una nueva Ley de Haciendas Locales en 1998, que anulaba algunos beneficios fiscales en tasas y contribuciones. De este modo, la construcción de viviendas libres comenzó a aumentar hasta alcanzar su máximo en 2006, con 655.889 edificaciones nuevas.

Gráfico 3.21. Evolución de la construcción de viviendas protegidas, libres y totales en España (1970-2018)



*Fuente:* Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente; Ministerio de Fomento; elaboración propia.

Consecuentemente el peso de la vivienda protegida en España ha sido residual y tan solo ha tenido algunos repuntes en momentos puntuales, aunque estas actuaciones han

sido muy limitadas ya que de las 5.853.471 viviendas construidas entre 1995 y 2007 solo un 13,37% corresponden a VPO.

Y no solo eso, sino que a esto se añade que en los años posteriores a la crisis de 2008 las administraciones públicas casi no optaron por la promoción de viviendas protegidas a pesar de los problemas de vivienda que tuvo una amplia proporción de la población española durante estos años. De este modo, si en el periodo de bonanza del ciclo económico no se prestó especial atención a solucionar la falta de parque de vivienda social en España, más tarde con los problemas económicos que atravesó el país tampoco se apostó por esta política pública de vivienda.

Tabla 3.1. Variaciones respecto al año anterior de la construcción de viviendas protegidas, libres y totales en España (2006-2018)

	Numero de Viviendas Construidas			Variación respecto al año anterior		
	Protegidas	Libres	Totales	Protegidas	Libres	Totales
<b>2006</b>	58.257	597.632	655.889			
<b>2007</b>	62.607	579.665	642.272	7,5%	-3%	-2,1%
<b>2008</b>	63.990	563.631	627.621	2,2%	-2,8%	-2,3%
<b>2009</b>	58.143	356.555	414.698	-9,1%	-36,7%	-33,93%
<b>2010</b>	50.479	218.572	269.051	-13,2%	-38,7%	-35,1%
<b>2011</b>	50.485	121.043	171.528	0,0%	-44,6%	-36,3%
<b>2012</b>	46.463	80.083	126.546	-8,%	-33,8%	-26,2%
<b>2013</b>	15.685	43.230	58.915	-66,2%	-46%	-53,5%
<b>2014</b>	10.145	35.382	45.527	-35,3%	-18,2%	-22,7%
<b>2015</b>	4.424	41.541	45.965	-56,4%	17,4%	0,1%
<b>2016</b>	3.812	37.512	41.324	-13,8%	-9,7%	-10,1%
<b>2017</b>	2.618	49.336	51.954	-31,3%	31,5%	25,7%
<b>2018</b>	2.737	59.931	62.668	4,6%	21,5%	20,6%

*Fuente:* Ministerio de Fomento; elaboración propia.

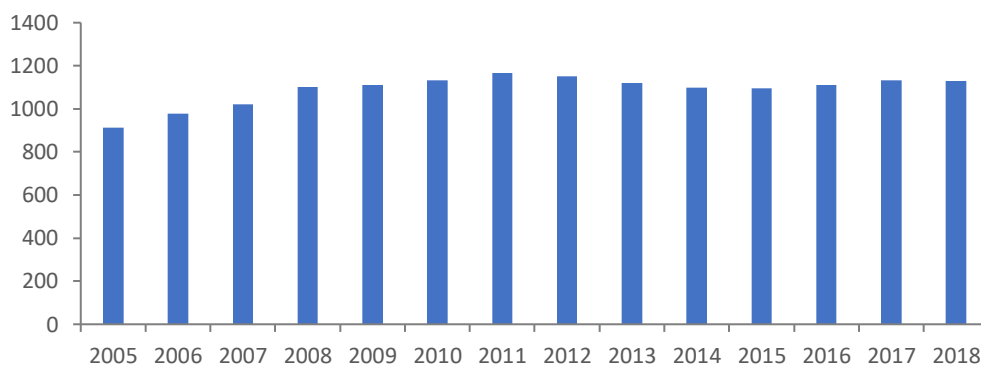
Los datos de los años más recientes evidencian que la situación de este tipo de construcción no ha mejorado en España. Se observa que desde 2011 el número de nuevas viviendas protegidas ha seguido disminuyendo año tras año hasta alcanzar los valores

más bajos en las últimas cinco décadas, lo que ha supuesto que incluso se edifiquen menos viviendas protegidas que durante la época de la posguerra civil, cuando en 1950 se construyeron unas 14.000 unidades. Y es que, aun cuando el sector de la construcción mostró indicios de recuperación en 2014 estos síntomas de mejoría no han supuesto en ningún momento un mayor número de proyectos de vivienda de protección oficial en España a excepción de 2018.

Asimismo, al casi inexistente parque de vivienda protegida que posee España hay que añadir que, realmente, los precios son elevados para el perfil socioeconómico de las personas a las que deberían estar dirigidas. Es decir, no solo existe un problema derivado de que sus potenciales beneficiarios tengan que cumplir con unos requisitos económicos y sociales muy restringidos sino que también existe un problema de accesibilidad vía precios.

Es más, el precio del metro cuadrado no ha experimentado una caída de valor en paralelo con el que experimentó el de la vivienda libre cuando estalló la burbuja. Para 2014 el metro cuadrado fue tasado en torno a los 1.098 euros, una leve caída acumulada de un 5,7% desde 2011; mientras que para ese mismo año el precio del metro cuadrado de la vivienda libre estuvo alrededor de los 1.240 euros, lo que constituyó un descenso del 39,35% respecto a los valores de 2008 (momento en que el precio de la vivienda comenzó a caer en España).

Gráfico 3.22. Evolución del precio de la vivienda protegida m<sup>2</sup> (2005-2018)

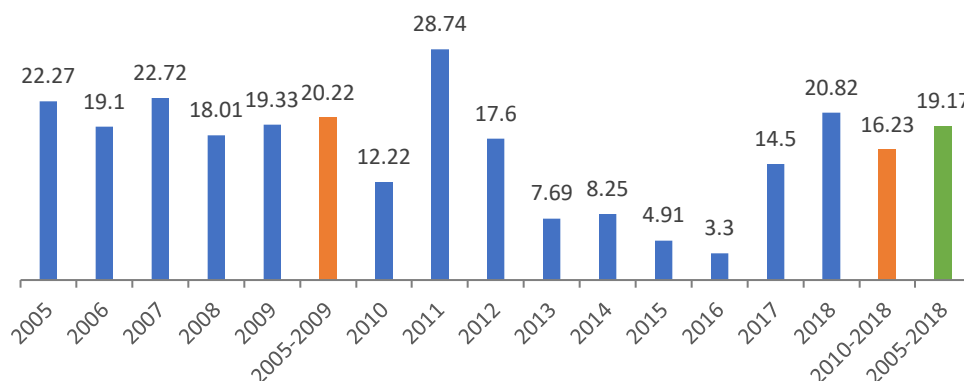


*Fuente:* Ministerio de Fomento; elaboración propia.

Este hecho pone en duda tanto la accesibilidad a una vivienda protegida como el cumplimiento de su función como política de vivienda. Al respecto Pareja-Eastway y Sánchez (2015, p. 163) manifiestan que “algunos demandantes de VPO en propiedad a los que les ha sido asignada una vivienda por sorteo se han visto incapaces de conseguir la hipoteca dadas las condiciones del sistema bancario, dejándoles fuera de una provisión protegida de vivienda al haber optado por la propiedad y no el alquiler. El devenir de los hechos está dando la razón a muchos autores que defendían un cambio necesario en el enfoque de las políticas de vivienda hacia el alquiler social”.

Además, a los escasos proyectos nuevos desarrollados en los últimos tiempos y a los precios de las viviendas de protección oficial se une el hecho de que en España la promoción social de vivienda ha sido utilizada muchas veces como una herramienta para reforzar el régimen de tenencia de propiedad en el mercado inmobiliario. De este modo, los datos aportados por el Ministerio de Fomento señalan que el peso de la vivienda protegida en alquiler no llega al 20% sobre el total de las viviendas protegidas construidas entre 2005-2018.

Gráfico 3.23. Porcentaje de vivienda de protección social en alquiler sobre el conjunto de las viviendas protegidas (según calificación provisional) (2005-2018)



*Fuente:* Ministerio de Fomento; elaboración propia.

En definitiva, puede afirmarse que a lo largo de los años la estructura del sistema residencial de España ha dificultado la emancipación juvenil según el Observatorio Joven

de Vivienda. A esto ha colaborado el hecho de que la vivienda social, como posible solución a los problemas residenciales de los más jóvenes, no ha sido una opción real debido a que se trata de un régimen de tenencia poco fomentado en España y que, por ende, el parque de vivienda pública del que se dispone para tal fin es muy residual. Además, en el caso español tiene una peculiaridad añadida que lo distingue de otros países europeos, y es que la vivienda social está enfocada casi en su totalidad al régimen de tenencia en propiedad, dejando de lado el alquiler social; un hecho que dificulta aún más la emancipación juvenil.

Un factor explicativo de la configuración del parque de vivienda español es la política pública de vivienda que se ha aplicado en este país y que, además, no se ha usado como una posible herramienta para facilitar la independencia residencial de los jóvenes españoles.

Y es que en España la política pública de vivienda no ha seguido las líneas por las que han optado otros países europeos, sino que ha estado orientada especialmente a dinamizar el sector de la construcción y a fomentar la compra entre la población. Esto ha hecho que sea parte participe de la configuración de un sistema de vivienda donde la propiedad no solo es que sea el régimen de tenencia dominante, sino que, además, se presenta como la mejor opción posible para las personas debido a las circunstancias examinadas anteriormente que se han generado alrededor de ella como el abandono del parque de alquiler, cuotas hipotecarias similares al precio del arrendamiento, aspectos sociológicos como la cultura de propietarios, etcétera (Pareja-Eastway y Sánchez, 2015).

Para ello ha resultado clave la apuesta mayoritaria a lo largo de los años que se ha hecho por las ayudas indirectas o fiscales orientadas hacia la propiedad y con un marcado carácter generalista y que prácticamente todas las personas, sin importar niveles de ingresos u otras particularidades, han podido beneficiarse de ellas; mientras que, por el contrario, se han dejado de lado las acciones directas, que tienen mayores efectos redistributivos que las anteriores al existir una determinada progresividad y estar habilitadas, normalmente, para los sectores más desfavorecidos, aunque si bien también han tenido una marcada tendencia a favorecer la compra de una vivienda y no a facilitar otras alternativas de acceso como es el alquiler (Sánchez Martínez, 2005).

De hecho, Sánchez Martínez (2002) manifiesta que las ayudas fiscales favorecen especialmente a los hogares con ingresos medios y altos, puesto que son los que mayores posibilidades tienen no solo de comprar una vivienda, sino también de invertir en ella y ser bonificados por esta acción. El objetivo de estas ayudas es que las instituciones públicas influyan en la disminución de la carga fiscal de los hogares mediante el ofrecimiento de ventajas fiscales de las que se puedan beneficiar las personas a través de una serie de acciones.

Por este motivo, para contabilizar la incidencia del gasto público indirecto se han considerado los beneficios fiscales a la vivienda que vienen establecidos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas<sup>6</sup>, ya que la deducción por la compra de una vivienda ha sido uno de los instrumentos de política de vivienda más importantes y con mayor interés económico y social en España (Pareja-Eastway y Sánchez, 2012). En este sentido, Leal y Martínez del Olmo (2017, p. 29) afirman que “la desgravación fiscal por adquisición de vivienda permanente ha sido uno de los principales instrumentos de la política de vivienda y el que mayor presupuesto ha requerido. Esta desgravación fiscal viene inicialmente impulsada por las políticas de fomento de la expansión inmobiliaria residencial, fundamentalmente en tiempos de crisis, constituyendo un incentivo potente para el desarrollo de la demanda que influye sobre la producción de viviendas (...) hasta el punto de que en los años ochenta incluso se extendió esta desgravación por un número limitado de años a las viviendas secundarias, con el objeto de aumentar la producción de viviendas e impulsar la actividad económica y el incremento del empleo”.

En la Gráfico 3.24 se observa que en los primeros años del inicio del siglo XXI el gasto público indirecto tenía un importante peso sobre el porcentaje del PIB, ya que en España fue un instrumento clave tanto en la promoción de la propiedad como en la dinamización de la economía mediante la estimulación del sector de la construcción durante los años de la burbuja inmobiliaria. De este modo, hasta el inicio de la crisis

---

<sup>6</sup> Se ha decidido utilizar el ámbito estatal ante la imposibilidad de gestionar la complejidad de las políticas fiscales de vivienda a niveles locales y autonómicos, como pueden ser instrumentos orientados hacia la desgravación del IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales entre otros.

económica el gasto público indirecto en vivienda supuso una media del 0,60% del PIB. En 2007 ya hubo un descenso en los beneficios fiscales en torno a esta herramienta, lo que mostraba síntomas de ralentización en la economía española, pero es a partir de 2009 cuando se comienzan a sentir los efectos de la crisis económica y de las complicaciones que estaban experimentando las finanzas de los hogares españoles. A partir de ese momento tanto el valor absoluto del gasto público indirecto como el del valor relativo al PIB han estado en continuo descenso hasta alcanzar su mínimo en los datos más recientes de los que se disponen (cuando se han redactado estos resultados la memoria de la Administración Tributaria de 2017 todavía no había sido publicada).

Desde que la desgravación por la compra de una vivienda comenzó a descender en 2009, el alquiler ganó un mayor peso hasta 2014 lo que indica que, durante estos años de complicaciones económicas y ante la imposibilidad de acceder a una vivienda vía compra, los hogares españoles optaron en mayor proporción por el alquiler que en periodos anteriores (Observatorio Vasco de la vivienda, 2017).

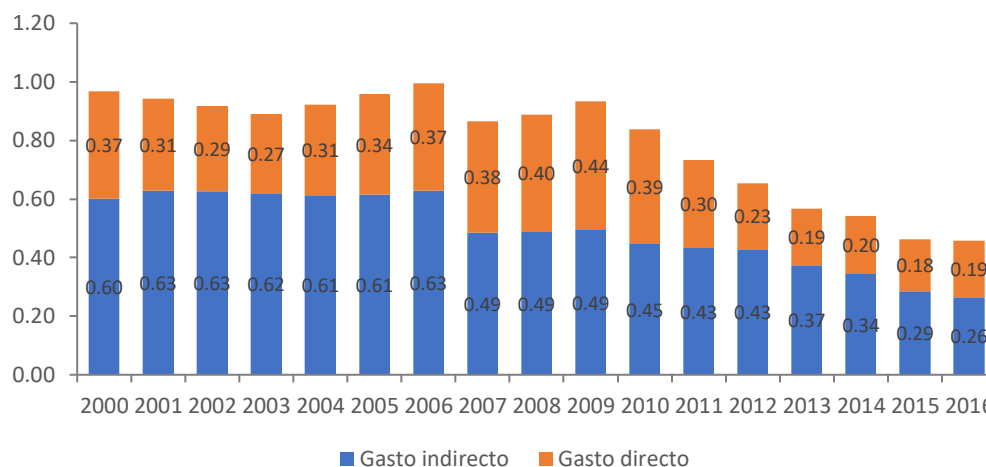
A pesar de las diferencias que existen entre las distintas comunidades autónomas, en España el gasto público indirecto en la política de vivienda ha tenido un mayor peso que las ayudas directas como se señaló con anterioridad. Esta preferencia se manifiesta particularmente en los años previos a la crisis económica, cuando el porcentaje del PIB que se destinaba a las ayudas indirectas era prácticamente el doble que en el caso del gasto directo. En el momento previo a la ruptura de la burbuja inmobiliaria se observa un ligero cambio de tendencia que ha ido reduciendo esta diferencia poco a poco, pero que, sin duda, este hecho está relacionado con la disminución del presupuesto público total asignado a la política de vivienda que se viene produciendo desde 2010.

Esto ha supuesto que en los últimos años ni siquiera se destine un 0,50% del PIB, lo que sitúa este gasto lejos de otros que se realizan en el país, como en educación, pensiones o sanidad; una circunstancia que muestra la gravedad del asunto y que, a su vez, deja entrever la poca capacidad de alcance que tienen actualmente las políticas públicas de vivienda en España al tratarse de los menores gastos públicos en materia de vivienda de las últimas décadas. En este sentido, Leal y Martínez del Olmo (2017, p. 17) manifiestan que “la falta de interés político por conseguir esa base para la garantía del



derecho a la vivienda ha llevado a primar otras inversiones lo que lleva a la conclusión de que la vivienda es la hermana pobre del estado de bienestar español con reducciones en su presupuesto de más del 50% en términos relativos con referencia al Producto Interior Bruto”.

Gráfico 3.24. Gasto público total en vivienda en España (2000-2016)



*Fuente:* Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas; Memorias de la Administración Tributaria; elaboración propia.

A esto se ha unido en los últimos tiempos la restricción presupuestaria que no permite cumplir, más aún si cabe, los objetivos de garantizar el acceso a una vivienda. Esto sucede porque la política de vivienda en España tiene un marcado componente contra cíclico, es decir, cuando los hogares muestran mayores problemas para poder acceder a una vivienda es en el momento en el que menos gasto público se destina a solucionar este hecho, como se observa primero antes de 2003, cuando la economía española mostró síntomas de agotamiento, y actualmente a partir de 2010. Al respecto, Pareja-Eastway y Sánchez (2012, p. 22) manifiestan que “las actuaciones de política de vivienda actúan de forma contra-cíclica, se produce menos vivienda protegida en los períodos en que el mercado presenta mayores problemas de accesibilidad a la vivienda para aquellos hogares jóvenes de nueva creación y para aquellos colectivos con un menor nivel de recursos. Mientras el mercado se encuentra en un proceso expansivo, la

construcción de vivienda libre se dispara, al igual que sus precios, y la vivienda protegida deja de ser rentable y atractiva para los promotores. Una vez finalizado el período de auge, la caída del inicio de viviendas libres se empieza a compensar con la producción de VPO”.

Para el sector juvenil todas estas cuestiones son primordiales, ya que tradicionalmente ha recibido pocas ayudas que le facilite la emancipación residencial y a las que ha tenido acceso han estado claramente orientadas hacia su incorporación al mercado inmobiliario. Además, al haber sido las ayudas fiscales el grosor del gasto público en vivienda muestra que no se ha tenido entre los objetivos el favorecer la inclusión residencial de los jóvenes, ya que por lo general al tener una trayectoria laboral precaria y unos ahorros previos normalmente bajos no han podido favorecerse de este tipo de ayudas al no poder comprar una vivienda. Así, Bosch Meda (2015, p.121) afirma que “en materia de vivienda, ante la generalizada disminución de la intervención pública en este campo es de prever que sigan aumentando las dificultades de las personas jóvenes en el mercado residencial. No obstante, la significativa correlación estadística entre emancipación y determinados instrumentos de política de vivienda, como las ayudas al pago del alquiler o la vivienda social, no da lugar a dudas acerca de cuál es la base sobre la que debe descansar cualquier política dirigida a facilitar la emancipación juvenil. Resulta evidente la necesidad de llevar a cabo un proceso de desmercantilización (como mínimo parcial) de la vivienda que restituya un cierto equilibrio entre los costes residenciales y la reducida capacidad económica de la juventud. Según el análisis estadístico, la vivienda social parece el instrumento más adecuado, aunque, por la complejidad y escala del problema, lógicamente no debería ser el único”.

En definitiva, a lo largo de los años el parque de vivienda y las políticas que se han llevado a cabo en torno a él han repercutido en el retraso de la edad de emancipación juvenil y la formación de un hogar propio. Esto junto con los factores analizados en los apartados anteriores ha hecho que España tenga una de las mayores tasas de coresidencia de padres e hijos de toda la Unión Europea. Un hecho que, además, tras la crisis económica de 2008 se ha visto potenciado como consecuencia del deterioro del mercado

laboral, del sistema residencial y de la reducción de las partidas presupuestarias en políticas públicas.

### **3.4. El abandono del hogar familiar por parte de los jóvenes en España**

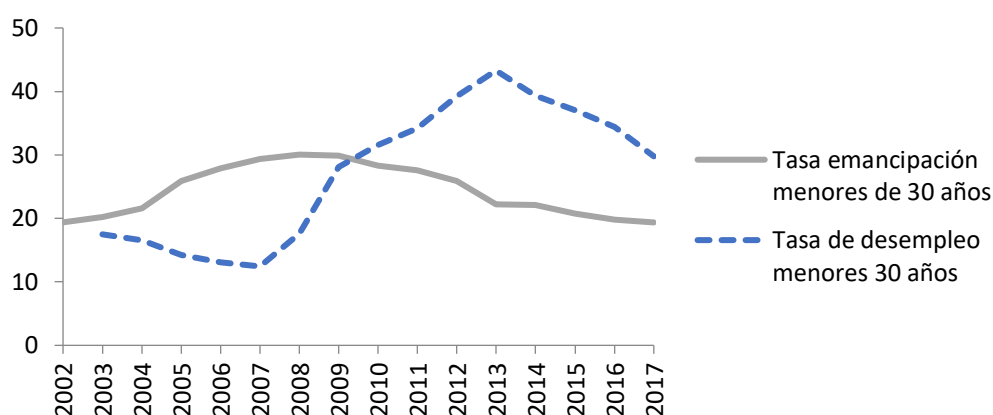
Todos los elementos expuestos a lo largo de este apartado configuran el contexto de emancipación de los jóvenes españoles y ayudan a comprender los distintos factores que han afectado a lo largo de los años a la independencia residencial de este grupo poblacional. En este sentido, el Observatorio Joven de Vivienda en España afirma que las oportunidades entre los jóvenes de abandonar el hogar familiar y comenzar un proyecto de vida propio están condicionadas, como se ha visto en las secciones anteriores, por el precario mercado laboral al que acceden, por los desequilibrios que presenta el parque de vivienda español y por ciertos problemas institucionales del país.

Además, estos factores ganaron aún mucha más importancia tras la crisis económica de 2008 y las graves consecuencias que produjo sobre el sector juvenil, ya que hay cierto consenso en la literatura sobre el hecho de que las condiciones económicas, tanto generales como individuales, moldean las pautas de formación de nuevos hogares, por lo que las recesiones pueden ocasionar retrasos en el proceso de emancipación juvenil (Lee y Painter, 2013). Así, Sánchez Galán (2017, p. 51) también manifiesta que “influiría la incertidumbre y la imprevisibilidad del futuro más inmediato en un momento de cambios económicos y crisis global: precios de la vivienda o el alquiler, etc. En el caso de la población joven española, el problema se acentúa por un mercado de trabajo excesivamente rígido que prima la estabilidad en el empleo a los trabajadores adultos, dificultando la incorporación de los más jóvenes; también la estructura del mercado inmobiliario, con viviendas caras y poca oferta de viviendas en alquiler, sería otra causa de la emancipación tardía y por tanto la tardanza en asumir la responsabilidad de un hogar. Por último, el modelo de estado de bienestar en España, con pocas o ninguna ayuda a la emancipación juvenil, favorece la dependencia de las generaciones jóvenes respecto de los padres”.

De este modo, el porcentaje de los jóvenes españoles emancipados comenzó a incrementarse a partir de 2002, a pesar de la subida del precio de la vivienda, hasta alcanzar en 2008 su tasa máxima histórica, con un 30,05%. Sin embargo, después del estallido de la burbuja inmobiliaria y las graves consecuencias económicas que esto supuso para el sector juvenil, la dinámica cambió y la tasa de emancipación empezó a disminuir. Por lo tanto, el aumento de la tasa de emancipación coincidió con la caída en la tasa de desempleo juvenil, es decir, las mayores oportunidades de trabajo que tenían los jóvenes españoles durante los años previos a la crisis favorecieron los procesos de emancipación; mientras que el incremento del desempleo juvenil tras la crisis corre en paralelo a la caída en la tasa de emancipación.

Si bien es cierto que en los primeros años de la crisis la bajada no fue tan pronunciada como cabía esperar debido al importante aumento de las tasas de desempleo, sí se ha producido una caída acumulada desde 2009 de más de 10 puntos (Moreno Mínguez, 2016). Estas cifras suponen el retorno a los valores de 2002 con una tasa de emancipación del 19,36%, lo que significa que en estos momentos en España 8 de cada 10 jóvenes menores de 30 años siguen en el hogar familiar.

Gráfico 3.25. Tasa de emancipación menores de 30 años y tasa de desempleo de menores de 30 años (2002-2017)

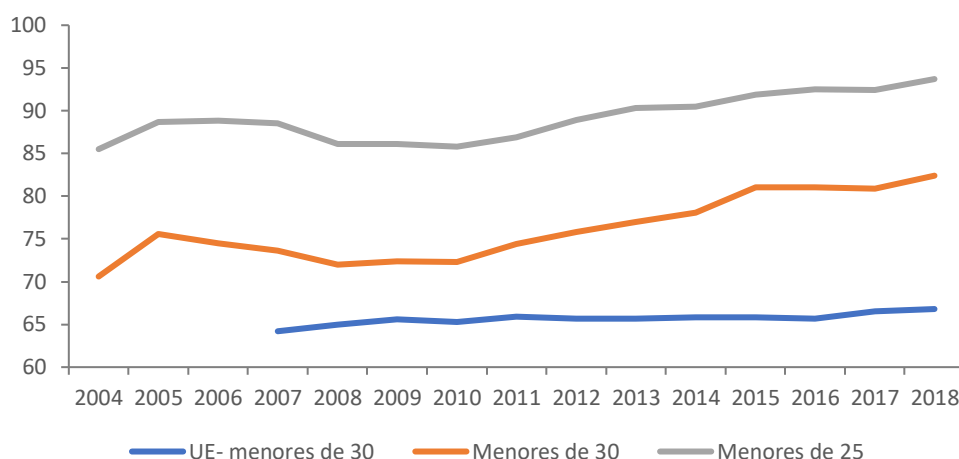


*Fuente:* INE; OBJOVI; elaboración propia.

La resultante es que España tiene una de las mayores tasas de coresidencia entre hijos y padres de toda la UE con un 82,4%. La media de la UE se sitúa por encima del

65%, a lo que hay que añadir que este valor no se incrementó de forma significativa como consecuencia de la crisis económica. Sin embargo, en el caso español los efectos de la recesión sí se han notado en la tasa de coresidencia, que venía reduciéndose desde 2005 y ha llegado a crecer más de 10 puntos porcentuales en estos últimos años. En los menores de 25 años la magnitud de este problema es aún más grande, ya que para 2018 nueve de cada diez jóvenes por debajo de esta edad seguían viviendo con sus padres, una cifra que no ha parado de aumentar desde 2010.

Gráfico 3.26. Tasa de coresidencia entre padres e hijos menores de 30 años en España y en la Unión Europea (2004-2018)



*Fuente:* Eurostat; elaboración propia.

A modo de conclusión, se señalan a continuación los principales factores que han incidido sobre este retraso en la emancipación de los jóvenes españoles y que han sido desarrollados a lo largo de este capítulo.

a) Un estado de bienestar relativamente reciente y poco desarrollado en comparación con el resto de los países de Europa occidental, lo que determina en gran medida que la política social y de bienestar que lleva a cabo se encuentre generalmente en una fase inmadura respecto a la de los países más avanzados. A esto se añade que existe un sesgo considerable en el sistema de transferencias sociales hacia las pensiones en comparación con las prestaciones familiares y de juventud, dejando el Estado las cuestiones familiares y juveniles fuera de su área de influencia directa y quedando

dominada por la lógica mercantil la satisfacción de las necesidades que se generan en esos ámbitos; unas circunstancias que hacen que la emancipación juvenil sea un proceso determinado casi exclusivamente por la persona implicada y por su familia (Gutiérrez, 2014).

b) La familia como institución adquiere gran relevancia actuando como complemento en la provisión de todos los servicios sociales que las administraciones públicas no ofertan y reduciendo la necesidad de acudir al mercado para satisfacerlos. Así, la familia se configura como un importante sostén socioeconómico que se encarga del cuidado de niños y/o ancianos, de apoyar económicamente a los jóvenes durante amplios periodos de tiempo o de facilitarles el acceso a una vivienda entre otras cuestiones, por lo que se presenta como un factor decisivo en la emancipación juvenil.

c) Un sistema educativo que presenta problemas estructurales que afectan al tránsito hacia el mercado laboral. Entre los problemas que presenta la educación en España sobresale el abandono escolar temprano o la casi ausencia de mecanismos que permitan combinar acciones formativas con empleo. Además, en los últimos años se ha producido una polarización muy importante en el sistema educativo español hacia la formación universitaria, lo que ha ocasionado un desajuste entre la demanda de trabajo cualificado y la oferta del mismo en el mercado laboral dando lugar a importantes tasas de desempleo juvenil con niveles formativos superiores. A su vez, este hecho se retroalimenta con la sobrecualificación de muchos jóvenes que, cuando consiguen acceder a un empleo, presentan unas capacitaciones y unos conocimientos demasiados elevados para el trabajo que realizan, lo que a su vez produce el desplazamiento o incluso la expulsión de aquellos jóvenes que no disponen de la formación adecuada.

d) Un mercado laboral marcado por la elevada temporalidad y la dualidad, en el que existe un grupo formado por trabajadores con puestos estables y buenas condiciones laborales y otro formado por trabajadores con empleos precarios y baja protección social. Los jóvenes españoles se encuentran, por lo tanto, con una doble restricción en su acceso al mercado de trabajo: por un lado, la elevada tasa de desempleo que sufren y, por otro lado, el hecho de que una vez que ingresan al mercado de trabajo sus condiciones laborales suelen ser muy precarias, siendo la temporalidad uno de los elementos que en

mayor medida refuerzan esa precariedad. Además, las deterioradas trayectorias profesionales que presentaba el sector juvenil se han agravado como consecuencia de la crisis económica iniciada en 2008, lo que ha ocasionado que España tenga una de las mayores tasas de desempleo juvenil de la Unión Europea. A esto se une el hecho de que la recesión también ha aumentado la temporalidad del sector juvenil, las trayectorias discontinuas que alternan largos periodos de desempleo con trabajos esporádicos y la disminución de los salarios lo que, indudablemente, afecta a sus posibilidades de emancipación.

e) Un modelo inmobiliario desequilibrado en el que la forma más común de acceder a una vivienda es mediante la compra en detrimento de otras opciones. Esta opción supone la necesidad de disponer de ahorros previos que posibiliten acometer esta acción con garantías y que son difíciles de acumular dados los bajos ingresos y la alta inestabilidad laboral del sector juvenil. En los últimos quince años ha sido prácticamente imposible que una persona joven haya podido llevar a cabo la compra de una vivienda libre de manera individual sin tener que destinar como máximo el 30% de su sueldo neto al pago de la mensualidad de una hipoteca y, por tanto, no exponiéndose a operaciones hipotecarias arriesgadas. A esto se une un reducido parque de viviendas en alquiler privado y un inexistente parque de alquiler social que facilite el acceso a la vivienda, lo que obstaculiza los primeros movimientos de los jóvenes en el mercado inmobiliario; a ello han colaborado unas políticas públicas de vivienda que han estado orientadas a fomentar la propiedad y no han favorecido el alquiler. Además, a la práctica inexistencia de la vivienda social en España se une el hecho de que la vivienda en este tipo de régimen de tenencia está enfocada casi en su totalidad a la compra y venta, dejando de lado el alquiler social. Todas estas particularidades del sistema residencial español también han incidido en el atraso de la emancipación juvenil en este país.

De este modo, en el siguiente capítulo se analizará empíricamente la incidencia del mercado de trabajo y del mercado de vivienda sobre la decisión de abandonar el hogar familiar por parte de los jóvenes españoles tras la crisis económica de 2008. Esto permitirá determinar qué variables han tenido una mayor capacidad de modificación en

el patrón de emancipación y, a su vez, distinguir cuáles de ellas han tenido influencia en el corto plazo y cuáles a largo plazo.

Por último, el modelo econométrico aportará evidencias sobre si el impacto negativo se produjo de manera inmediata o posteriormente. A partir de estas cuestiones se podrá determinar si pasado los años los niveles de emancipación retornan a los valores previos o si, por el contrario, los efectos del shock económico son permanentes entre los jóvenes españoles.



## **Capítulo 4**

### **Los efectos de la crisis económica de 2008 en la emancipación juvenil y en la formación de nuevos hogares: un análisis empírico**

Este capítulo está formado por un total de cuatro epígrafes diferentes que se corresponden con cuatro artículos científicos elaborados a lo largo de estos años de investigación, y que tienen la intención de analizar empíricamente distintas temáticas relacionadas con el proceso de la emancipación juvenil.

El primer apartado hace referencia al principal objeto de estudio de este trabajo: la independencia residencial de los jóvenes en España. Se trata de un análisis empírico que investiga cómo la crisis económica de 2008 ha podido influir en los patrones de emancipación de los jóvenes españoles y qué incidencia han podido tener, sobre todo, la vivienda y el mercado laboral sobre los mismos. Además, aporta evidencias sobre si la dilatación temporal del proceso de emancipación que ya se venía produciendo en las últimas décadas en España se ha podido ver afectado o no por las graves consecuencias socioeconómicas de 2008 y los años posteriores.

En el segundo apartado, con el fin de complementar y reforzar la anterior sección, se investigan los efectos de la crisis económica en la formación de hogares de España. La razón de ello es que, dado que la emancipación de los jóvenes tiene una relación directa con la formación de hogares (puesto que se trata del grupo de población con mayor potencial de cara a la creación de uno nuevo) se considera fundamental comprobar también cómo los efectos de la crisis económica han influido en este proceso. Esto, además, permite analizar el fenómeno de manera completa sin limitarse a un margen de edad como en el primer apartado, incluyendo el tramo de 25 a 40 años que puede ser clave en el caso de la población española debido a la elevada edad media de emancipación de este país.

El tercer apartado es similar al anterior, aunque en esta ocasión se analiza la formación de hogares en el caso de Portugal. El objetivo es comprobar si en otro país del modelo mediterráneo, que comparte ciertos elementos estructurales similares con España,

la crisis económica ha afectado de la misma forma a la formación de hogares. Además, se han elegido dos países que, por ser fronterizos, deberían presentar dinámicas similares.

Finalmente, se ha puesto especial énfasis en la evolución del precio de la vivienda tras la crisis económica de 2008. La razón de ello es que en España durante los años previos a la burbuja inmobiliaria hubo un incremento del precio de la vivienda desconocido hasta el momento, un hecho que pudo influir en el retraso de la independencia residencial juvenil. De este modo, se trata de un factor estructural que en los últimos años ha sido determinante en la emancipación de los jóvenes españoles y que, por lo tanto, en el futuro podría volver a incidir de manera decisiva sobre dicho proceso. Por este motivo se ha considerado profundizar en ello.

Por último, es necesario destacar que los tres primeros apartados comparten método econométrico, un modelo de vectores autorregresivos, razón por la que en algún momento puede existir cierta similitud en algún subapartado como en las correspondientes metodologías empleadas. No obstante, con el fin de facilitar la interpretación del texto se ha decidido mantener la estructura original del artículo a pesar de que la lectura pudiera resultar reiterada en algunos momentos.

### **Metodología común utilizada**

Con independencia de que el interés esencial de la investigación se centra en determinar qué impacto tiene la tasa de desempleo sobre la formación de hogares y qué incidencia tiene también esta variable y la precariedad en el empleo (medida a través de la tasa de temporalidad que padece la contratación de los jóvenes menores de 25 años) sobre la emancipación, también se han incorporado al modelo una serie de variables que, según la literatura, pueden tener efectos sobre la evolución de dichos procesos.

Así, siguiendo a Choi y Painter (2015), junto a la tasa de desempleo y la variación del número de hogares se han incorporado al análisis la evolución del precio de la vivienda, la de las viviendas iniciadas, la de la población, la renta media de los hogares y los tipos de interés hipotecario.

Y en el caso de la emancipación se han incorporado al análisis la evolución del precio de la vivienda, la de la población menor de 25 años, la renta media de los menores de 25 años -que puede considerarse otro indicador de precariedad- y los tipos de interés hipotecario.

Estas variables se dividen en cuatro variables endógenas y tres exógenas con la intención de identificar aquellos factores que pudieran influir sobre las fluctuaciones en el número de jóvenes emancipados a largo plazo. Las cuatro variables endógenas son<sup>7</sup>: el cambio en el número de jóvenes emancipados, la tasa de desempleo de los menores de 25 años, la tasa de temporalidad de los menores de 25 años y el precio de la vivienda. Mientras que, por su parte, se incluyen en el modelo como variables exógenas los cambios en la población menor de 25 años, el tipo de interés del mercado hipotecario y la renta media de los jóvenes menores de 25 años.

La elección de las mismas se ha realizado sobre la base del supuesto de que, si bien es probable que estas variables exógenas puedan afectar a las decisiones de emancipación de los jóvenes o a la formación de hogares, es más improbable que estos dos procesos tengan algún tipo de impacto sobre ellas.

Por su parte, el orden en el que se recogen las variables endógenas dentro del VAR puede afectar a sus resultados y, por lo tanto, se requiere de algún tipo de justificación teórica que dote de sentido a la ordenación de las variables. Teóricamente, la primera variable debiera ser aquella que no tuviera un impacto contemporáneo sobre el resto de las variables endógenas pero que sí se viera afectada contemporáneamente por estas; a continuación, la segunda variable solo debería afectar a la primera variable y verse afectada, a su vez, por el resto de variables que se sitúan por debajo de ella y así sucesivamente. Por lo tanto, y a fin de superar la falta de una justificación teórica

---

<sup>7</sup> Las variables endógenas en el caso de la formación de hogares (sección 2 y 3) son: número de hogares, la tasa de desempleo, el precio de la vivienda y los cambios en el número de viviendas iniciadas. Y las tres variables exógenas son: los cambios en la población, el tipo de interés del mercado hipotecario y la renta media de los hogares.

consolidada se ha recurrido a la intuición económica para resolver la cuestión de la ordenación de las variables.

A tal efecto, se han ordenado las variables de forma que el VAR trate de reflejar el impacto que las condiciones económicas pueden tener sobre la emancipación y, a partir de ahí, cómo esta y la presión sobre el mercado de la vivienda, por la vía de la demanda de nuevas viviendas, incide sobre su precio. Así, el orden de las variables elegido es el siguiente: desempleo, temporalidad, cambio en el número de jóvenes emancipados y precio de la vivienda.

Mientras que para el caso de la formación de los hogares el orden sería: a) la tasa de desempleo afecta contemporáneamente al cambio en el número de hogares (variable por el lado de la demanda de viviendas), al cambio en el número de viviendas iniciadas (variable por el lado de la oferta de viviendas) y al precio de la vivienda; y b) el cambio en el número de hogares se supone que afecta contemporáneamente al cambio en el número de viviendas iniciadas y estas variables se encuentran condicionadas por el nivel de precios de la vivienda.

En cualquier caso, y ante la carencia de respaldo teórico que justifiquen dichas ordenaciones, se ha sometido a las mismas a un análisis de robustez consistente en la estimación de otro VAR invirtiendo la ordenación de las variables intermedias, esto es, el inicio del número de emancipados (el número de hogares en el caso de la sección 2 y 3) y el número de viviendas iniciadas sin que los resultados se vean significativamente alterados en ese VAR alternativo.

### *El modelo de Vectores Autorregresivos*

Para analizar la relación existente entre la emancipación juvenil o la formación de hogares con el resto de variables endógenas se ha estimado un modelo de vectores autorregresivos.

Los modelos de vectores autorregresivos tienen una estructura bien definida y permiten identificar las relaciones entre las series temporales de las variables endógenamente relacionadas. De hecho, en el modelo VAR, cada variable se expresa

como una función lineal tanto de sus valores pasados, como del resto de variables (endógenas y exógenas) y de un término estocástico de error.

En concreto, en esta investigación hemos utilizado la siguiente especificación del modelo VAR:

$$Y_{it} = \alpha + \Phi_i \sum_1^n Y_{it-1} + \beta_{it} X_{it} + \varepsilon_{it}$$

en donde  $Y$  es el vector que representa las cuatro variables endógenas y  $X$  es el vector de variables exógenas y variables ficticias que se han utilizado para corregir un problema de normalidad del modelo inicial.

Para estimar el VAR se ha procedido previamente a analizar la estacionariedad de cada una de las series temporales para ver si existe o no raíz unitaria en las mismas. A tal efecto se ha aplicado el test de Dickey-Fuller ampliado para determinar si las variables son o no estacionarias.

En cualquier caso, y siguiendo a Choi y Painter (2015), no se han diferenciado en ninguno de los casos las variables que lo requerían para hacerlas estacionarias y todas se han incorporado en niveles. De esa forma, combinando variables estacionarias y no estacionarias, según Sims *et al.* (1990), mejora la precisión de las estimaciones del VAR al no perderse información. Evidentemente, ello tiene el inconveniente de que no se puede proceder a estimar un Modelo de Vectores de Corrección de Error al combinarse en el análisis series estacionarias y no estacionarias.

#### **4.1. El mercado de trabajo y sus efectos en la emancipación de los jóvenes españoles<sup>8</sup>**

A lo largo de los anteriores capítulos se ha analizado la existencia de una serie de factores estructurales que explican el retraso relativo que sufre la emancipación juvenil en España. A su vez, durante la exposición de estos factores se ha destacado la delicada situación financiera que atravesó la mayoría de los países de Europa tras el inicio de la crisis en 2008 y las posibles consecuencias que esto pudo tener sobre la transición a la vida adulta; además, en el caso de España, el problema reviste dimensiones agravadas en la medida en que es uno de los países en los que la emancipación de los jóvenes se produce de forma más tardía, casi cuatro años más tarde que la media de la Unión Europea.

Con el fin de analizar cómo ha influido la crisis económica sobre la emancipación de los jóvenes en España a lo largo del siglo XXI se ha utilizado un modelo de vectores autorregresivos similar al que Choi y Painter (2015) usan para el caso de los Estados Unidos, aunque modificando alguna de las variables que se utilizan en dicha investigación para estudiar con mayor detenimiento el impacto de las variables relacionadas con el mercado de trabajo.

El análisis de las funciones de impulso y reacción y la descomposición de la varianza permitirá identificar cuál es el impacto temporal que un incremento de la tasa de desempleo o de la tasa de temporalidad ejercen sobre la emancipación de los jóvenes españoles y durante cuánto tiempo se extiende dicho impacto.

Asimismo, se podrá estimar cuál es la contribución de otras variables que también se supone que inciden sobre la variación del número de jóvenes emancipados, como puede ser el precio de la vivienda, tanto en el corto como en el largo plazo.

##### **4.1.1. Metodología y datos**

A pesar de que, como se ha señalado, la edad media de emancipación en España se sitúa en los 29,5 años en este estudio se ha decidido analizar la cohorte formada por los

---

<sup>8</sup> Artículo enviado en su versión inglesa para su evaluación a la revista *Panoeconomicus*.

menores de 25 años por una serie de motivos. El primero es que Eurostat utiliza ese grupo de edad para definir el desempleo juvenil. El segundo motivo es que la edad media a la hora de abandonar el hogar familiar en la Unión Europea es de 26 años y en el resto de modelos de emancipación diferentes al mediterráneo, con excepción de los países de Europa Oriental, la salida del hogar se produce antes de los 25 años, por lo que desde los objetivos de esta investigación resulta de interés saber qué impacto tiene el deterioro de las condiciones económicas sobre este grupo de edad para el caso específico de España en comparación con otros países europeos. Y, por último, debido a que otros estudios que se han realizado sobre esta temática, como el de Ahn y Sánchez (2017), han analizado grupos de edades más amplios y no han desagregado la información concreta para esta cohorte de años por lo que resulta de interés un análisis específico de la misma

Para analizar qué variables influyen sobre la emancipación juvenil en España se han recopilado datos nacionales para el periodo comprendido entre 1995 y 2017. El periodo temporal no ha podido extenderse más atrás en el tiempo debido a que algunas de las series temporales de las variables utilizadas en el análisis no van más allá del año 1995, por lo que se ha tomado este como año inicial por ser el primero para el que hay datos disponibles para todas las variables.

En cuanto a las series temporales, el principal problema es la disponibilidad de datos y la desigual frecuencia temporal con la que los mismos se presentan. En la Tabla 4.1 se recogen las fuentes de los datos y su periodicidad. Tanto las series mensuales como las anuales se han trimestralizado utilizando el programa JDemetra+ de la Comisión Europea<sup>9</sup> siguiendo el método de Chow-Lin.

---

<sup>9</sup> El software JDemetra+ es el programa recomendado por la Comisión Europea para la realización de ajustes estacionales y de calendario. Puede descargarse en la siguiente página web: [https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/software-jdemetra\\_en](https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/software-jdemetra_en)

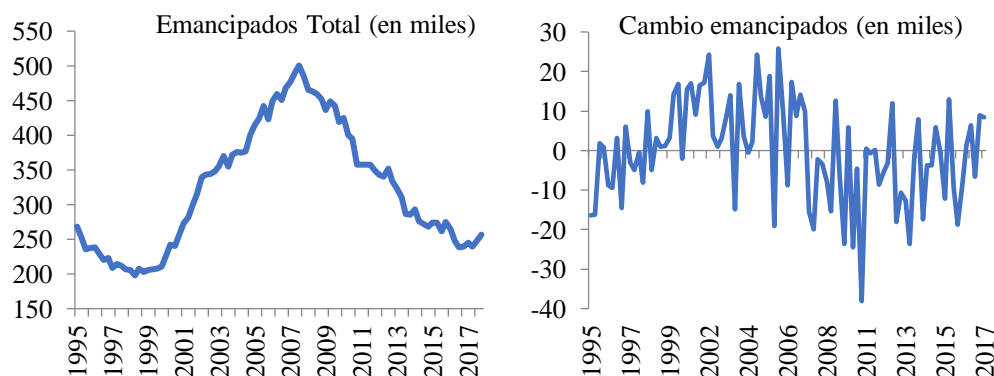
Tabla 4.1. Fuente y periodicidad temporal de las series (1995-2017)

Serie de Datos	Periodo	Fuente
Número de emancipados menores de 25 años	Anual	Instituto Nacional de Estadística
Precio real de la vivienda	Trimestral	OECD
Tasa de desempleo menores de 25 años	Trimestral	Instituto Nacional de Estadística
Población menor de 25 años	Anual	Instituto Nacional de Estadística
Renta menores de 25 años	Anual	Eurostat
Tipo de interés hipotecario	Mensual	Banco de España
Tipo de interés a largo plazo	Mensual	OECD
Tasa de temporalidad menores 25 años	Trimestral	Instituto Nacional de Estadística

En el Gráfico 4.1 se representan tanto la evolución del número de jóvenes emancipados en términos absolutos (panel de la izquierda) como la del cambio en el número de jóvenes emancipados a lo largo del periodo (panel de la derecha) y que constituye la variable clave del análisis.

Como puede apreciarse, la evolución de la emancipación juvenil corre paralela a la evolución del ciclo económico, ascendiendo durante su fase expansiva y cayendo con la misma celeridad durante su fase recesiva lo que permite suponer intuitivamente que existe una relación de causalidad relevante entre dichas variables.

Gráfico 4.1. Evolución del número de emancipados en valor absoluto (1995-2017)

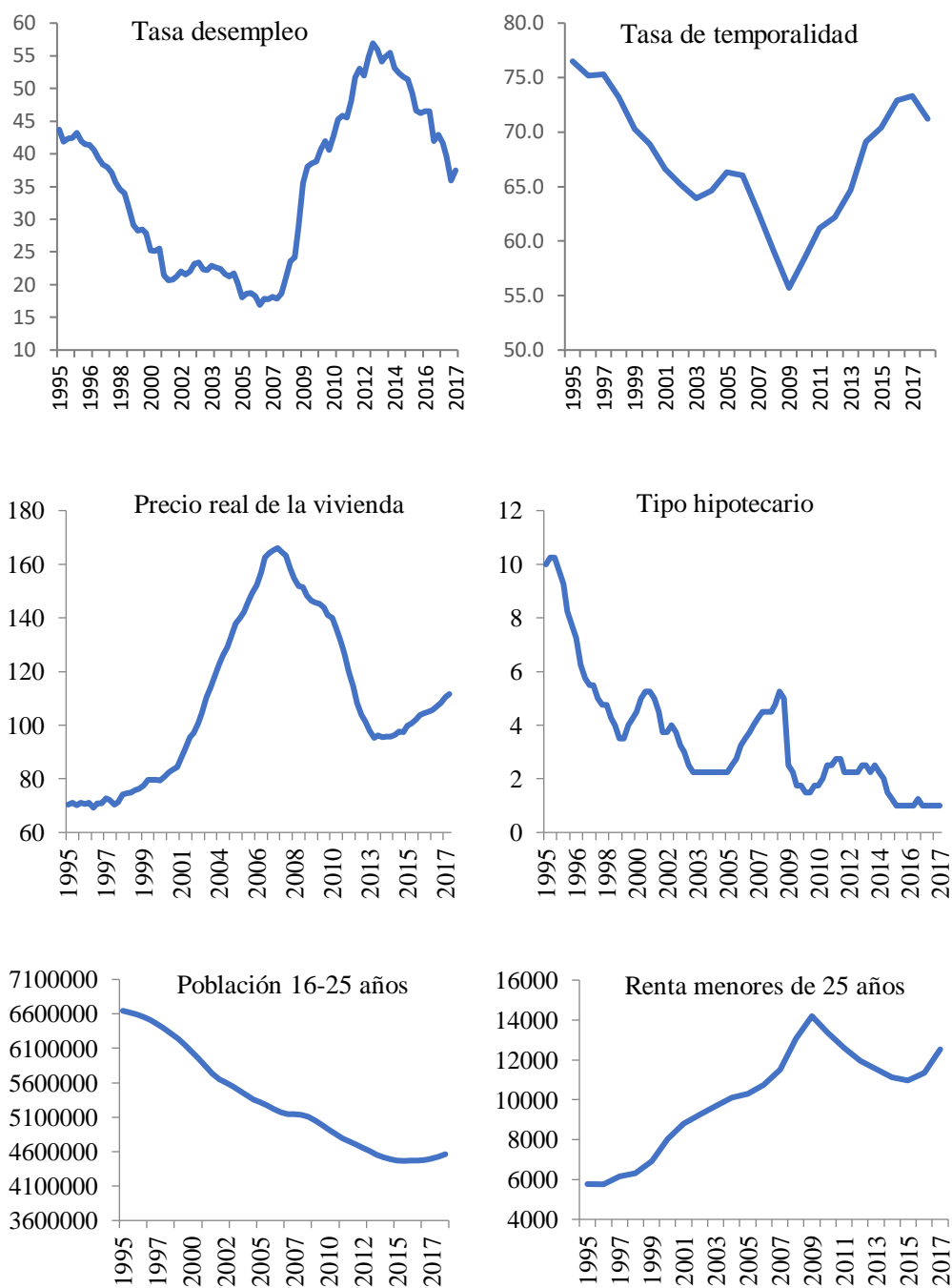


Fuente: INE; elaboración propia.



Por su parte, en los Gráficos 4.2 se recogen la evolución del resto de variables empleadas en el modelo.

Gráfico 4.2. Cambios en las variables analizadas (1995-2017)



Fuente: ver Tabla 4.1.

Nuevamente, se constata la relación aparente entre la evolución de las tasas de desempleo y de temporalidad de los menores de 25 años con respecto a la evolución del número de jóvenes emancipados. Tanto el ciclo económico, expresado a través de la evolución de la tasa de desempleo, como las condiciones estructurales del mercado de trabajo, expresadas a través de la evolución de la tasa de temporalidad en la contratación de los jóvenes menores de 25 años o la evolución de su renta media, parece que guardan una relación directa con la evolución de la emancipación.

Por otra parte, el ciclo económico también se refleja en la evolución de los factores considerados determinantes en los procesos de emancipación en España como son el precio de la vivienda y el coste de la financiación necesaria para acceder a ella, esto es, los tipos de interés hipotecario. Sin embargo, la caída del precio de la vivienda y el abaratamiento de su financiación aparentemente no se han traducido en una mejora en las condiciones para la emancipación, lo que es lógico si se tiene en cuenta que dicha caída se producía al tiempo que crecía el desempleo y se agudizaba la temporalidad en la contratación de los jóvenes.

Finalmente, hay que constatar una tendencia demográfica que también tiene una repercusión significativa sobre el fenómeno que se está analizando: la caída continuada de la población menor de 25 años. En poco más de 20 años, la misma ha descendido en términos absolutos en casi dos millones de jóvenes, lo que es significativo del cambio acusado en la pirámide de población y de la incidencia de dicho cambio en numerosos procesos sociales, incluido el de la emancipación.

#### *4.1.1.1. El modelo de Vectores Autorregresivos*

Para analizar la relación existente entre la emancipación juvenil y el resto de variables endógenas se ha estimado un modelo de vectores autorregresivos.

Todas las variables son estacionarias en niveles, tal y como aparece recogido en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Test de raíces unitarias para las series individuales

	Desempleo	Temporalidad	$\Delta$ Emancipados	Precio
	<25	<25	<25	vivienda
ADF-GLS (niveles)	-2,585*	-2,010	-3,273**	-2,371
ADF-GLS (1ª dif.)	-1,631	-2,510	-9,614***	-2,863*

ADF-GLS es el estadístico del test aumentado de Dickey-Fuller con GLS DETRENDING.

\*\*\*, \*\*, \* indican significación al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Como puede apreciarse, la tasa de desempleo y el incremento en el número de jóvenes emancipados son estacionarias en niveles al 10% y 5%, respectivamente. Mientras que el precio de la vivienda es estacionaria en primeras diferencias al 10% y la tasa de temporalidad solo es estacionaria en segundas diferencias.

Finalmente, y tras ordenar las variables endógenas según el criterio enunciado en la metodología en común, se ha procedido a elegir el número óptimo de retardos a utilizar para las variables endógenas.

Tabla 4.3. Criterios de selección del orden del VAR

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1752,588	NA	1,39E+13	41,614	42,074	41,799
1	-1358,315	714,331	1,90E+09	32,713	33,632*	33,083
2	-1334,576	40,775	1,59E+09	32,531	33,911	33,086
3	-1308,980	41,555	1,28E+09	32,305	34,145	33,045
4	-1279,207	45,536	9,44E+08	31,981	34,280	32,906
5	-1256,009	33,296	8,19E+08	31,812	34,571	32,922
6	-1228,539	36,8416*	6,50E+08*	31,54210*	34,761	32,836*

\* indica el orden de retardo seleccionado por el criterio

Los acrónimos significan LR: Ratio de verosimilitud, FPE: Error de predicción final Final; AIC: Criterio de información de Akaike; SC: Criterio de información de Schwarz; HQ: criterio de información de Hannan-Quinn.

En la Tabla 4.3 se recogen los retardos óptimos para las variables endógenas según los diferentes criterios usados. Estos oscilan entre los 6 retardos sugeridos por el criterio

de selección de Akaike y el de Hannan-Quin y un único retardo sugerido por el criterio de Schwartz. Ante la coincidencia por 6 retardos en dos de los criterios de información usados, se ha optado por dicha opción.

#### 4.1.2. La emancipación juvenil en España: principales resultados

En la Tabla 4.4 se muestran los principales resultados del VAR construido a partir de las variables endógenas y exógenas seleccionadas.

Como ya se ha señalado, el modelo incluye cuatro variables endógenas (la tasa de desempleo y de temporalidad de los menores de 25 años, el cambio en el número de jóvenes emancipados y el índice de precios de la vivienda) y tres variables exógenas (el cambio en la población menor de 25 años, el tipo de interés del mercado hipotecario y la renta media de los jóvenes menores de 25 años).

Tabla 4.4. VAR para las variables endógenas

	Desempleo -25	Temporalidad	Emancipación	Precio
Desempleo -25(-1)	0,787*** (0,155)	-0,008 (0,148)	452,975 (1625,02)	0,129 (0,192)
Desempleo -25 (-2)	-0,133 (0,183)	0,247 (0,174)	-1017,713 (1919,89)	-0,069 (0,227)
Desempleo -25 (-3)	0,207 (0,185)	-0,192 (0,176)	-1400,271 (1939,16)	0,259 (0,230)
Desempleo -25 (-4)	-0,063 (0,192)	0,350*** (0,182)	1245,794 (2007,04)	-0,442* (0,238)
Desempleo -25 (-5)	-0,228 (0,196)	-0,216 (0,187)	887,532 (2054,69)	0,685*** (0,243)
Desempleo -25 (-6)	0,213 (0,133)	-0,026 (0,127)	-951,878 (1394,31)	-0,580*** (0,165)
Temporalidad (-1)	0,026 (0,149)	0,619*** (0,142)	-1323,192 (1562,47)	0,089 (0,185)
Temporalidad (-2)	0,024 (0,151)	-0,031 (0,144)	3059,636** (1582,64)	0,233 (0,187)
Temporalidad (-3)	-0,027 (0,107)	-0,015 (0,102)	-765,653 (1124,79)	-0,107 (0,133)
Temporalidad (-4)	-0,460*** (0,107)	0,919*** (0,102)	1052,465 (1122,68)	0,088 (0,133)
Temporalidad (-5)	0,046 (0,155)	-0,589*** (0,147)	1807,709 (1626,17)	0,228 (0,192)

Temporalidad (-6)	0,026 (0,143)	0,008 (0,135)	-2931,630** (1495,21)	-0,214 (0,177)
Emancipación (-1)	-1,56E-05 (1,20E-05)	7,37E-07 (1,20E-05)	-0,117 (0,129)	1,85E-05 (1,50E-05)
Emancipación (-2)	-1,41E-05 (1,30E-05)	-5,46E-06 (1,20E-05)	-0,011 (0,136)	3,40E-06 (1,60E-05)
Emancipación (-3)	-1,71E-05 (1,20E-05)	5,00E-06 (1,20E-05)	0,013 (0,130)	1,58E-05 (1,50E-05)
Emancipación (-4)	-1,75E-05 (1,20E-05)	8,02E-06 (1,20E-05)	0,021 (0,130)	1,20E-05 (1,50E-05)
Emancipación (-5)	-2,32E-05** (1,30E-05)	1,32E-05 (1,20E-05)	0,002 (0,131)	3,20E-05** (1,60E-05)
Emancipación (-6)	-1,53E-05 (1,30E-05)	3,40E-05*** (1,20E-05)	-0,164 (0,134)	3,03E-05** (1,60E-05)
Precio (-1)	-0,144 (0,096)	-0,077 (0,091)	399,894 (1010,26)	1,403*** (0,119)
Precio (-2)	0,020 (0,167)	0,258* (0,159)	1129,455 (1754,25)	-0,298 (0,208)
Precio (-3)	-0,074 (0,165)	-0,031 (0,157)	-3355,594** (1729,41)	0,027 (0,205)
Precio (-4)	0,049 (0,168)	-0,218 (0,160)	2004,433 (1759,58)	0,011 (0,208)
Precio (-5)	-0,065 (0,169)	0,343** (0,161)	-834,875 (1770,99)	-0,242 (0,210)
Precio (-6)	0,190* (0,109)	-0,273*** (0,103)	491,977 (1141,47)	0,084 (0,135)
C	41,972*** (11,433)	-0,968 (10,871)	-46119,98 (119529,)	-20,924 (14,176)
Tipo_hipotecario	-0,112 (0,175)	0,012 (0,166)	198,838 (1831,93)	-0,358* (0,217)
Renta	-0,001*** (2,2E-04)	3,13E-05 (2,1E-04)	2,578 (2,312)	2,56E-04 (2,7E-04)
Población 16-25	5,27E-05*** (1,40E-05)	-1,70E-05 (1,30E-05)	-0,102 (0,147)	-1,83E-05 (1,80E-05)
R-squared	0,995	0,977	0,469	0,997
Adj, R-squared	0,992	0,966	0,217	0,998
Número de obs.	85	85	85	85

\*\*\*, \*\*, \* indican significación al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

La inclusión de seis retardos para las variables endógenas permite eliminar la autocorrelación de los residuos para cada una de las ecuaciones y refuerza la estabilidad del VAR, permitiendo que todas las raíces se encuentren dentro del círculo unitario y que, por lo tanto, se satisfaga la condición de estabilidad que es necesaria para que los resultados de la función de impulso y respuesta sean válidos.

Además, se han analizado los residuos para comprobar el grado de estabilidad del modelo y no presenta problemas de autocorrelación ni de heterocedasticidad. Tampoco presenta problemas de normalidad en ninguna de las ecuaciones ni en el modelo en prueba conjunta.

A pesar de que los coeficientes estimados del VAR no tienen un significado económico relevante y, por lo tanto, no pueden realizarse interpretaciones sobre los mismos y de que la existencia de colinealidad entre las variables explicativas también dificulta la interpretación de los estadísticos  $t$ , en la Tabla 4.4 se exponen los resultados de la estimación de los coeficientes de las diferentes ecuaciones para cada una de las variables endógenas. A efectos de esta investigación la más relevantes es, evidentemente, la ecuación de la emancipación de los jóvenes menores de 25 años.

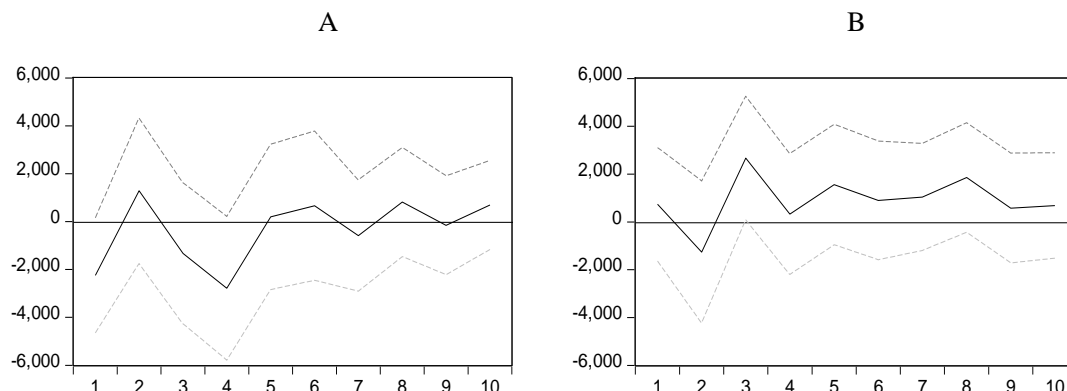
Como puede apreciarse, no pueden extraerse conclusiones relevantes ni de las variables que son estadísticamente significativas ni del signo de las mismas, en general. Esto no supone ningún problema por cuanto, como se acaba de señalar, el significado y significancia de los coeficientes estimados del VAR es irrelevante y la información relevante hay que extraerla tanto de las funciones de impulso-respuesta como de la descomposición de la varianza.

#### *4.1.2.1. Funciones de impulso respuesta*

A partir del análisis de las funciones de impulso-respuesta derivadas del modelo VAR se puede determinar la velocidad del impacto de un shock económico negativo sobre los cambios en la emancipación de los jóvenes en España. De hecho, esta es una de las aplicaciones fundamentales de los modelos VAR y la realmente relevante para esta investigación.

A tal efecto, se ha estimado el impacto que un incremento equivalente a una desviación estándar de la tasa de desempleo y en la tasa de temporalidad tienen sobre la emancipación de los jóvenes (Gráfico 4.3).

Gráfico 4.3. Funciones de impulso respuesta de la emancipación ante un shock de una desviación estándar en la tasa de desempleo (A) y en la tasa de temporalidad (B)



*Fuente:* elaboración propia.

Se puede apreciar que el impacto de un shock negativo en la tasa de desempleo sobre los cambios en la emancipación de los jóvenes menores de 25 años no se produce de forma inmediata sino que sus efectos negativos se dejan sentir a partir del segundo trimestre y durante al menos tres más; a partir de ahí, el efecto se difumina y retorna a su nivel inicial en torno al cual se mantiene sin prácticamente cambios durante todo el periodo considerado (10 trimestres).

En relación con la tasa de temporalidad la evidencia es menos clara: el número de jóvenes emancipados desciende en un primer momento, a continuación crece y luego se mantiene en torno al valor de referencia. La explicación de este comportamiento puede obedecer a que, aunque crezca la contratación temporal, la incorporación al mercado de trabajo estimularía los intentos por abandonar el hogar familiar, si bien la inseguridad laboral acabarían normalizando la situación y produciendo el retorno de algunos de esos jóvenes a dicho hogar. Este resultado estaría en línea con el estudio de Barceló y Villanueva (2018), en el que concluyen que el incremento del 1% de los contratos de trabajo indefinidos aumenta en un 1,2% las posibilidades de formar un hogar, lo que confirma que existe una importante relación entre la estabilidad laboral y la creación de nuevos hogares.

#### 4.1.2.2. Descomposición de la varianza

El análisis de descomposición de la varianza permite aportar algunas evidencias empíricas adicionales en relación con las variables que inciden en la emancipación juvenil.

Como puede apreciarse en la Tabla 4.5, en la que se recoge la descomposición de la varianza del cambio en el número de jóvenes emancipados, la principal variable que explica la evolución de dicho cambio son sus propios retardos, con aportaciones inicialmente muy débiles del precio de la vivienda o de la tasa de temporalidad y algo más relevantes de la tasa de desempleo.

Tabla 4.5. Descomposición de la varianza para los cambios en la emancipación juvenil

Periodo	S.E.	Desempleo -25	Temporalidad	Emancipación -25	Precio
1	11179,87	4,040	0,434	95,524	0
2	11410,46	5,155	1,637	92,999	0,207
3	11994,38	5,891	6,437	84,167	3,503
4	12531,24	10,339	5,966	77,458	6,235
5	12643,25	10,181	7,389	76,094	6,334
10	13311,82	10,286	10,134	72,145	7,433
20	13759,4	9,865	12,466	68,444	9,223
30	14986,36	8,532	19,250	59,531	12,685

En cualquier caso, si se tiene en cuenta la evolución a largo plazo de las variables y la incidencia que las mismas acaban ejerciendo sobre la emancipación juvenil se constatan varios hechos relevantes.

En primer lugar, que el precio de la vivienda ejerce una influencia muy reducida en el corto plazo y, sin embargo, a medio y largo plazo esa incidencia se incrementa hasta niveles que superan ampliamente los que puede alcanzar la tasa de desempleo, por ejemplo.

Ello es indicativo, a nuestro entender, de la relación que existe en España entre emancipación y adquisición de una vivienda en propiedad y que constituye uno de sus rasgos diferenciales con respecto a las vías de emancipación de los jóvenes en otros lugares de Europa.



Así, en España encontramos que conforme el horizonte temporal se alarga, el precio de la vivienda adquiere un peso creciente en la decisión de emancipación de los jóvenes españoles.

En segundo lugar, la tasa de temporalidad es otra variable que va adquiriendo relevancia conforme pasa el tiempo, llegando a explicar hasta casi un 20% de las decisiones de emancipación llegado el trigésimo trimestre. Este dato también es relevante por cuanto expresa que la persistencia en la temporalidad dificulta la posibilidad de la emancipación, al negar a los jóvenes un horizonte de estabilidad y certidumbre que les permita consolidar el proceso de emancipación del hogar familiar. De hecho, a partir del segundo trimestre, la tasa de temporalidad explica en mayor grado que la tasa de desempleo las decisiones de emancipación y esa tendencia se mantiene y se incrementa la brecha a medio y largo plazo. La conclusión es clara: la elevada tasa de temporalidad de los contratos que firman los jóvenes españoles constituye un serio obstáculo para su emancipación.

Y, en tercer lugar, la tasa de desempleo mantiene una incidencia relativamente reducida sobre las decisiones de emancipación, lo que sería indicativo de que incide en mayor medida el tipo de empleo y contrato que se tiene que el estar desempleado. O, dicho de otra forma, que la situación de desempleo constituye un obstáculo importante en la medida en que la emancipación ni siquiera se plantea cuando no se dispone de un puesto de trabajo.

#### 4.1.3. Conclusiones

La edad de emancipación de los jóvenes del hogar familiar se ha retrasado en la mayor parte de Europa durante las últimas décadas. Las razones a las que obedece ese retraso son variadas: algunas de ellas son de naturaleza estructural y están relacionadas con las diferencias entre los distintos regímenes de bienestar existentes en Europa; otras son de naturaleza coyuntural y apuntan al impacto que las perturbaciones económicas tienen sobre el nivel de desempleo y las características del empleo al que estos jóvenes tienen acceso.

Es por ello que resulta relevante conocer cuál ha sido el impacto que el deterioro de la situación económica provocado por la reciente crisis económica y el consiguiente incremento de las tasas de desempleo y temporalidad han podido tener sobre los procesos de emancipación de los jóvenes españoles. La razón es que, más allá de las repercusiones sobre el conjunto de la economía que tiene un incremento del desempleo y/o una precarización de las relaciones laborales, esos fenómenos también repercuten sobre variables sociales que afectan a las formas y condiciones de vida de la población y, singularmente, de la población joven.

A tal efecto, se ha utilizado un análisis del impacto que pudieran tener determinadas variables económicas sobre la dinámica de emancipación de los jóvenes españoles y se han encontrado los siguientes resultados.

En primer lugar, hay que distinguir entre las variables que tienen una mayor influencia a corto plazo, entre las que destacaría la tasa de desempleo y aquellas que lo tienen en el medio y largo plazo como son, fundamentalmente, la tasa de temporalidad de los jóvenes y el precio de la vivienda.

En segundo lugar, mientras que la tasa de desempleo tiene una mayor influencia que la tasa de temporalidad en el corto plazo, conforme se alarga el horizonte temporal considerado la segunda pasa a adquirir una mayor importancia y a superar a la primera. Ello es indicativo de que los procesos de emancipación dependen no tanto de la entrada al mercado laboral sino de las condiciones de permanencia en el mismo: alta temporalidad y rotación en el empleo condicionan en mayor medida la decisión de emanciparse o no que el propio acceso al mercado laboral.

Y, en tercer lugar, la evidencia nos indica que el impacto negativo sobre la emancipación del incremento en las tasas de desempleo o temporalidad no se produce de forma inmediata sino que tarda un promedio de dos trimestres en generar sus efectos; a partir de ahí, el retorno a la situación anterior se produce de forma acelerada y en el plazo de un año los efectos prácticamente se han difuminado.

## 4.2. Los efectos de la crisis económica en la formación de hogares en España<sup>10</sup>

España experimentó una de las mayores burbujas inmobiliarias de toda Europa durante los inicios del siglo XXI; una burbuja que afectó tanto al precio de la vivienda como al número de ellas.

En este sentido, el análisis del caso de España permite estudiar qué influencia ejercen sobre el proceso de formación de hogares tanto la mejora de las condiciones económicas generada en un contexto de expansión de la oferta de viviendas, como las consecuencias derivadas del empeoramiento de dichas condiciones una vez que estalla la crisis.

A tal efecto se ha utilizado un modelo de vector autorregresivo. El objetivo es analizar, a través de las funciones de impulso y reacción y la descomposición de la varianza, cuál es el impacto que un incremento de la tasa de desempleo ejerce sobre la creación de nuevos hogares y durante cuánto tiempo se extiende dicho impacto. Asimismo, esta metodología permite estimar cuál es la contribución de cada una de las variables endógenas del modelo a la variación en el número de nuevos hogares, tanto en el corto como en el largo plazo.

### 4.2.1. Creación de nuevos hogares y condiciones económicas en España (1995-2017)

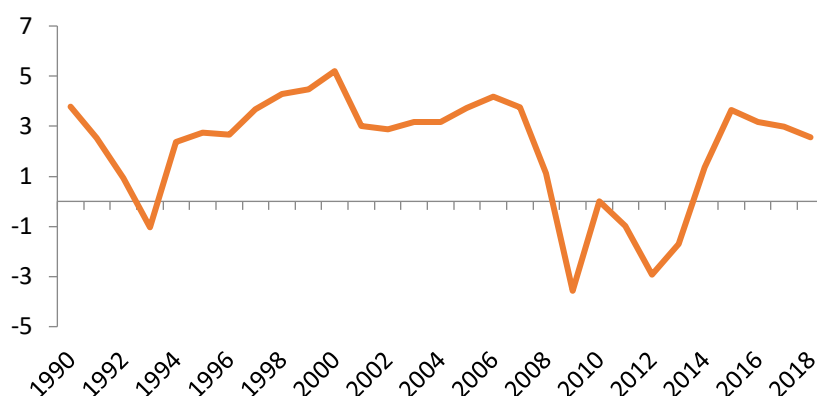
A finales de 2007 la explosión de la crisis de las hipotecas *subprime* en Estados Unidos produjo una sequía de los circuitos monetarios internacionales que afectó a numerosas economías europeas y dio paso a una larga crisis económica (Arestis y González-Martínez, 2016).

En el caso de España, tras más de 10 años de tasas positivas de crecimiento del PIB, la crisis de 2008 supuso un abrupto punto de quiebra en esta tendencia y la aparición de tasas negativas de crecimiento que se prolongaron durante los siguientes años hasta el inicio de la recuperación a partir de 2012, tal y como puede apreciarse en el Gráfico 4.4.

---

<sup>10</sup> Artículo enviado en su versión inglesa para su evaluación a la revista *Review of Economics of the Household*.

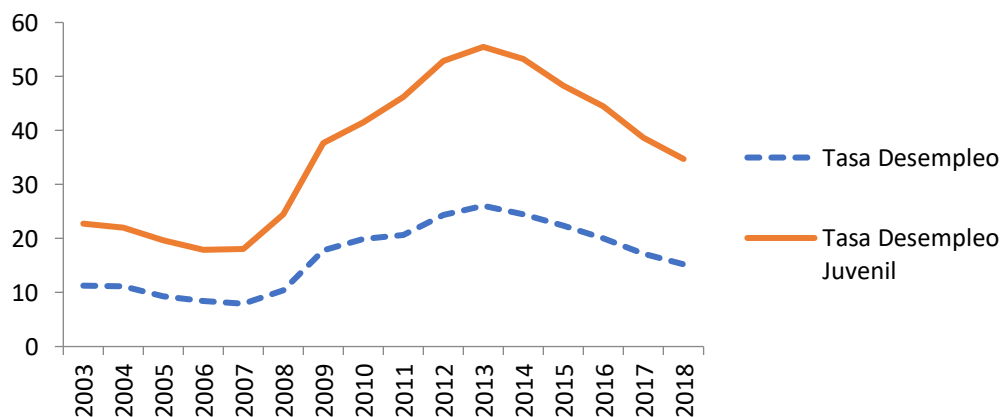
Gráfico 4.4. Tasa de crecimiento anual del PIB en España (1990-2018)



*Fuente:* OECD; elaboración propia.

Una de las variables que se vio más afectada por la crisis económica fue el empleo. La desaceleración de la economía provocó un fuerte aumento de la tasa de desempleo que llegó a alcanzar en 2013 el valor máximo de las últimas décadas, tanto para el conjunto de la población (26,06%) como para el caso específico de los jóvenes (55,48%), según se aprecia en el Gráfico 4.5. A partir de 2014 se produce un cambio de ciclo y la tasa de desempleo descende; aunque la recuperación del empleo, como señala Barroso (2017), se ha producido al tiempo que tenía lugar un importante deterioro de las condiciones laborales de los españoles y el estancamiento de los salarios reales.

Gráfico 4.5. Tasas de desempleo total y juvenil (<25 años) de España (2003-2017)

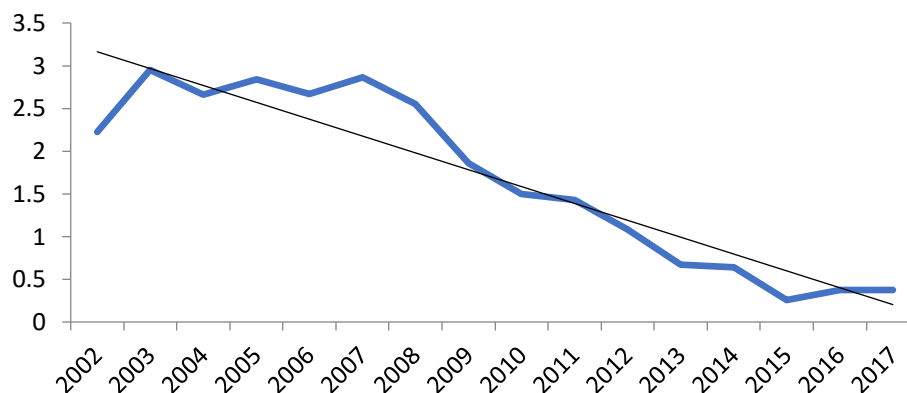


*Fuente:* INE; elaboración propia.

Tanto el incremento de la tasa de desempleo total como específicamente la de los jóvenes induce a pensar que la creación de hogares ha podido sufrir un retraso en los últimos años en España debido a la falta de recursos económicos, ya que las decisiones de consumo de un hogar, y especialmente las del acceso a una vivienda, están influenciadas en gran medida por los ingresos familiares. Por lo tanto, una situación de desempleo o la expectativa de perder el empleo repercutirán negativamente sobre las decisiones de emancipación y formación de nuevos hogares (Becker *et al.*, 2010; Barceló y Villanueva, 2018).

De hecho, y tal como se recoge en el Gráfico 4.6, la tasa de crecimiento de nuevos hogares en España durante los primeros años del siglo XXI alcanzó su nivel máximo de los últimos 20 años, en torno al 3%, y es tras el inicio de la crisis de 2008 cuando comenzó a descender pronunciadamente y de manera constante coincidiendo con las menores tasas de crecimiento del PIB y el incremento progresivo del desempleo.

Gráfico 4.6. Tasa de crecimiento de los hogares en España (2002-2017)

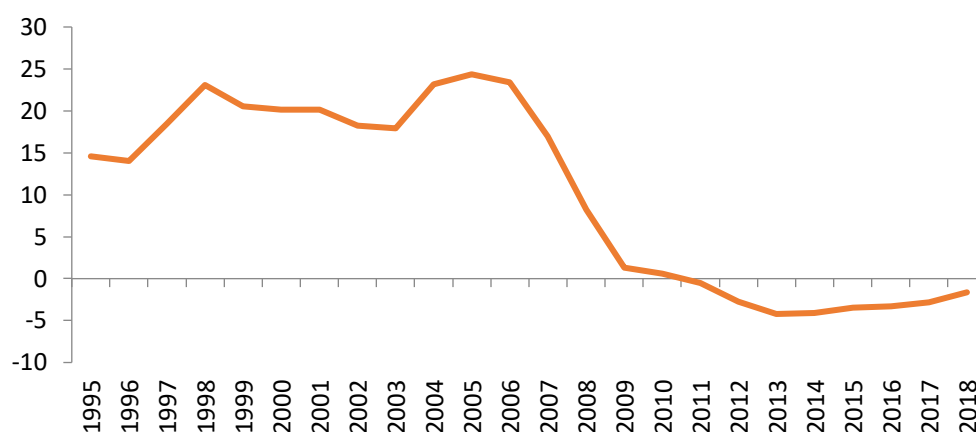


Fuente: INE; elaboración propia.

Por otra parte, junto a la incidencia que ejercen las variables relacionadas con el mercado laboral, la literatura académica también señala la influencia de las condiciones financieras y, más concretamente, del acceso a la financiación de cara a la formación de nuevos hogares (Lee y Painter, 2013). Esa influencia es tanto más relevante cuanto mayor es la propensión de la población a la adquisición de la vivienda en propiedad frente a la opción del alquilar como vía de emancipación.

En este sentido, la crisis supuso una reducción de la oferta de préstamos hipotecarios y el establecimiento de requisitos y condiciones más exigentes para la aprobación de los mismos debido a la restricción monetaria que experimentó el sistema bancario español (Ahn y Sánchez-Marcos, 2017). Y, como se acaba de señalar, esta limitación del crédito no puede obviarse porque en España, como en el resto de países del sur de Europa, el acceso al mercado de la vivienda suele producirse por la vía de la adquisición y, por tanto, depende del acceso a préstamos hipotecarios (Poggio, 2008).

Gráfico 4.7. Tasa de crecimiento de los préstamos hipotecarios en España (1995-2018)



*Fuente:* Banco de España; elaboración propia.

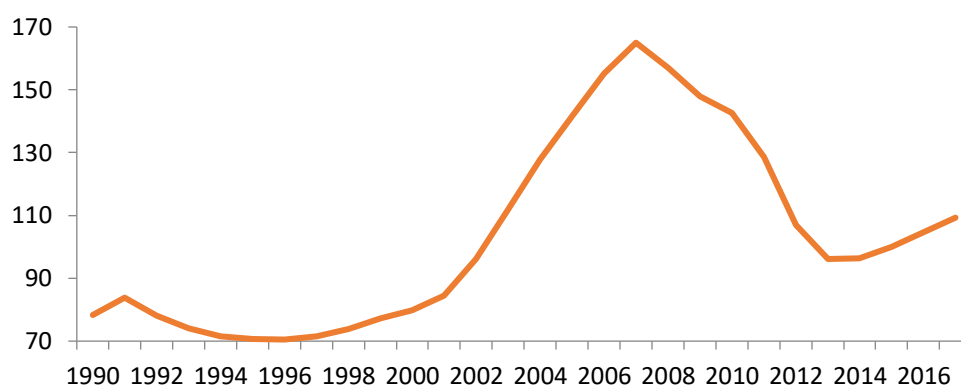
De esta forma, y como puede comprobarse en el Gráfico 4.7, España tuvo altas tasas de crecimiento de los préstamos hipotecarios hasta 1999, cuando se produce la entrada en el euro y se estabiliza en esos valores elevados. La razón fundamental es que la inversión residencial aumentó considerablemente en un contexto de bajas tasas de interés e importantes flujos de inmigración. Evidentemente, la crisis, dado que su desencadenante fue de naturaleza financiera, repercutió inmediatamente sobre el préstamo hipotecario y su tasa de crecimiento descendió rápidamente a valores negativos a partir de 2011.

Sin embargo, este proceso fue acompañado de un rasgo común a la mayor parte de los países periféricos europeos que sufrieron la crisis: el sobreendeudamiento de las familias. Así, entre 1996 y 2006, los hogares españoles vieron como sus niveles de

endeudamiento pasaron de representar en torno a un 25% del PIB a más del 90% en 2006 (Carballo-Cruz, 2011).

Por último, también hay que tener en cuenta cuando se analiza el proceso de formación de nuevos hogares en los países del modelo de mediterráneo la evolución de los precios de la vivienda dado que aquél se produce habitualmente por la vía de la propiedad en lugar de por la del arrendamiento (Giannelli y Monfardini, 2003; Ahn y Sánchez-Marcos, 2017).

Gráfico 4.8. Índice de precios real de la vivienda en España (2015=100) (1990-2017)



*Fuente:* OECD.

Así, España tuvo un crecimiento explosivo anual del precio de la vivienda desde 1999 hasta 2008, cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria y el crecimiento acelerado que experimentaba cambió bruscamente de tendencia y comenzó a caer. No será hasta 2014 cuando la recuperación de la economía española se traslade al mercado inmobiliario, los precios se estabilicen y vuelvan a recuperarse aunque a una tasa de crecimiento más moderada.

Como puede apreciarse, son numerosos los factores que inciden sobre la formación de nuevos hogares; sin embargo, la literatura académica económica al respecto es relativamente reducida (Lee y Painter, 2013). Además, la investigación sobre el impacto que el deterioro de las condiciones económicas tiene sobre la formación de nuevos hogares es aún menor.

#### 4.2.2. Metodología y datos

Con el objetivo de analizar qué variables influyen sobre la formación de hogares en España se han recopilado datos nacionales para el periodo comprendido entre 1995 y 2017. El periodo temporal no ha podido extenderse más atrás en el tiempo debido a que algunas de las series temporales de las variables utilizadas en el análisis no están disponibles más allá del año 1995.

En la Tabla 4.6 se recogen las fuentes de los datos y su periodicidad. Tanto las series mensuales como las anuales se han trimestralizado utilizando el programa JDemetra+ de la Comisión Europea.

Tabla 4.6. Fuente y periodicidad temporal de las series (1995-2017)

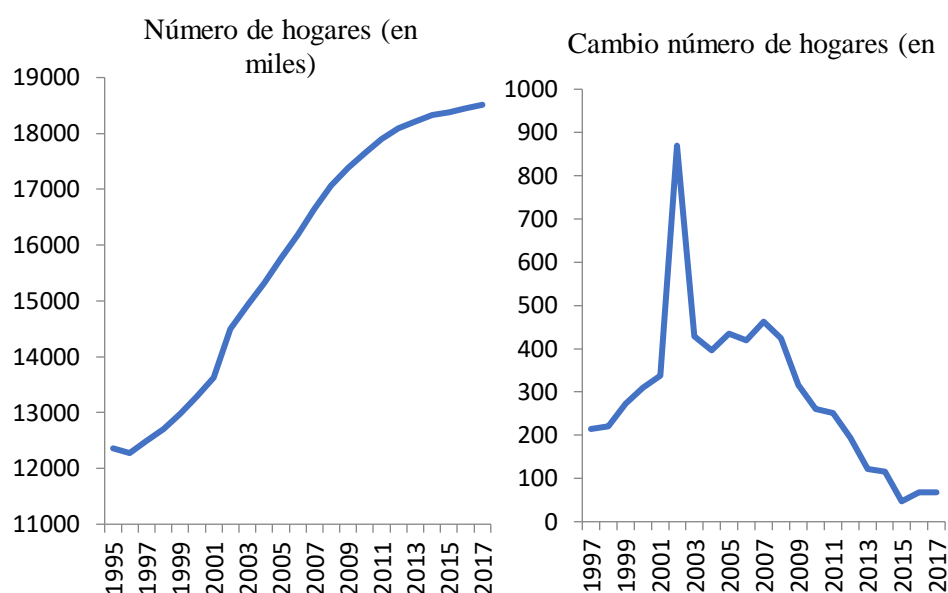
<b>Serie de Datos</b>	<b>Periodo</b>	<b>Fuente</b>
Número de hogares	Anual	Banco Central Europeo
Precio real de la vivienda	Trimestral	OECD
Tasa de desempleo	Trimestral	Instituto Nacional de Estadísticas
Población	Semestral	Instituto Nacional de Estadísticas
Ingresos por hogar	Anual	Eurostat
Tipo de interés hipotecario	Trimestral	Banco de España
Tipo de interés a largo plazo	Mensual	OECD
Viviendas iniciadas	Anual	Ministerio de Fomento

En el Gráfico 4.9 se muestra gráficamente tanto la evolución del número de hogares en términos absolutos (panel de la izquierda) como la del cambio en el número de hogares a lo largo del periodo muestral (panel de la derecha). Como puede apreciarse, el ritmo de crecimiento, que crecía de forma exponencial durante los años del boom económico vinculado a la burbuja inmobiliaria, se frenó bruscamente con el estallido de la misma y



aunque ha seguido manteniendo una pendiente positiva, esta se ha suavizado mucho. De hecho, la tendencia durante los años de crisis ha sido una progresiva reducción del número de nuevos hogares que se creaban cada año y aunque el saldo neto nunca ha llegado a ser negativo, sí que el descenso fue muy acusado entre el año 2008 y 2014 cuando se estabilizó a un nivel muy reducido y desde ahí ha comenzado a recuperarse lentamente.

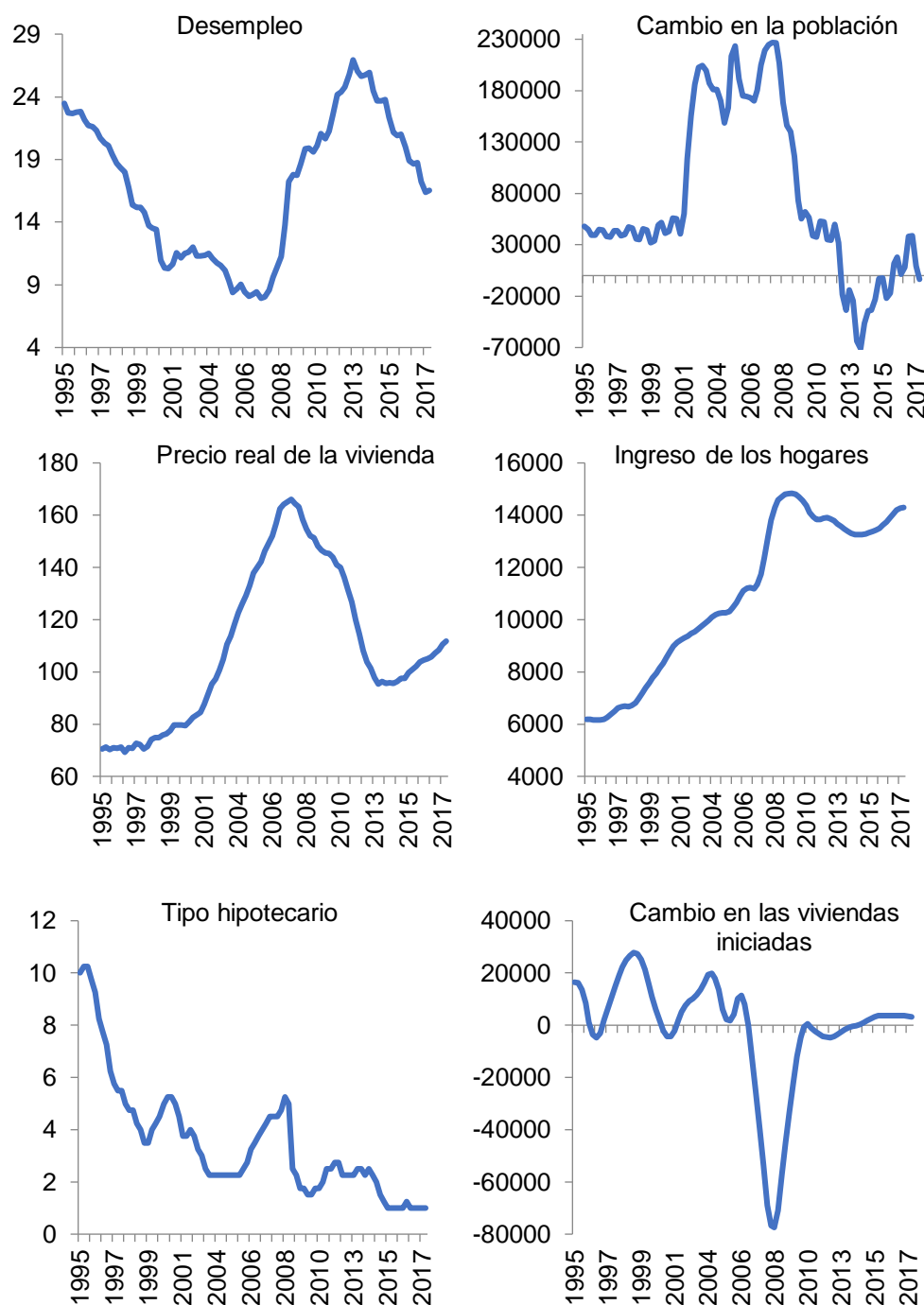
Gráfico 4.9. Formación de nuevos hogares en España (1995-2017)



*Fuente:* Banco Central Europeo; elaboración propia.

Por su parte, en los Gráficos 4.10 se recogen la evolución del resto de variables empleadas en el modelo.

Gráfico 4.10. Cambio en las variables analizadas (1995-2017)



*Fuente:* ver Tabla 4.6; elaboración propia.

Se observa que la evolución de la tasa de desempleo sigue un patrón muy acusado y vinculado a la evolución del PIB y a la construcción de nuevas viviendas: desciende la

tasa cercana al 24% en 1995 hasta niveles históricamente bajos en 2005 y 2006 y, a partir de ahí, y con la crisis y el hundimiento del sector de la construcción residencial, vuelve a escalar por encima del 25%. No será hasta 2012 cuando la misma comience a reducirse aunque aún se encuentra muy lejos de una situación que pueda ser sostenible para la economía española.

La evolución de la tasa de desempleo fue acompañada de una evolución en paralelo de la renta media con un fuerte incremento de la misma conforme caía el desempleo hasta llegar a su punto máximo en 2007 y, a partir de ahí, se produce un ligero retroceso y, aunque ha recuperado la senda del crecimiento, lo hace aún a un ritmo menor al previo a la crisis.

Por su parte, y a pesar del fuerte incremento de la construcción de viviendas nuevas, el precio de las mismas fue en aumento durante los años del boom inmobiliario y se desploma a partir de 2007, volviendo a niveles de principios de siglo. Este proceso fue alimentado parcialmente por el abaratamiento del crédito inmobiliario, desde un tipo de interés hipotecario en 1995 de casi el 10% hasta el 2% en los años previos al estallido de la burbuja. Pero, además, como un factor explicativo del precio hay que considerar a la evolución de la población, ya que desde finales de la década de los noventa tuvo una dinámica de crecimiento positiva y constante como consecuencia, en gran parte, del aumento de la inmigración, lo que impulsó a la demanda e incidió en los precios; sin embargo, después del inicio de la crisis las cifras de población sufren un estancamiento e incluso a partir de 2012 se produce una caída en términos netos de la misma coincidiendo con los peores años de la crisis explicable por el incremento de la emigración.

#### *4.2.2.1 El modelo de Vectores Autorregresivos*

Para estimar el VAR se ha procedido previamente a determinar la estacionariedad de cada una de las series temporales para ver si existe o no raíz unitaria en las mismas a partir del test de Dickey-Fuller. Los resultados aparecen recogidos en la Tabla 4.7.

Tabla 4.7. Test de raíces unitarias para las series individuales

	Desempleo	Precios	$\Delta$ Viviendas	$\Delta$ Hogares
ADF-GLS (niveles)	-2,684*	-2,371	-2,310	-1,196
ADF-GLS (1ª diferencias)	-2,329	-2,863*	-5,2996***	-3,386**

ADF-GLS es el estadístico del test aumentado de Dickey-Fuller con GLS DETRENDING.

\*\*\*, \*\*, \* indican significación al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Como puede apreciarse, solo la tasa de desempleo es estacionaria en niveles, el resto de variables (el nivel de precios, la variación en el número de viviendas nuevas y la del número de hogares son estacionarias) en primeras diferencias al 10%, 1% y 5%, respectivamente.

Finalmente, y tras ordenar las variables endógenas según el criterio enunciado en la metodología en común, se ha procedido a elegir el número óptimo de retardos para las variables endógenas.

Tabla 4.8. Criterios de selección del orden del VAR

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-2367,079	NA	5,15E+19	56,739	57,202	56,926
1	-1957,592	740,974	4,41E+15	47,371	48,297	47,743
2	-1804,366	262,674	1,69E+14	44,104	45,493	44,662
3	-1753,976	81,583	7,53E+13	43,285	45,137*	44,029
4	-1741,245	19,398	8,29E+13	43,362	45,678	44,293
5	-1717,592	33,790	7,11E+13	43,181	45,959	44,297
6	-1683,109	45,978	4,77E+13	42,741	45,982	44,043
7	-1627,801	68,476*	1,98E+13*	41,805*	45,509	43,293*

\*indica el orden de retardo seleccionado por el criterio.

Los acrónimos significan LR: Ratio de verosimilitud, FPE: Error de predicción final Final; AIC: Criterio de información de Akaike; SC: Criterio de información de Schwarz; HQ: criterio de información de Hannan-Quinn

En la Tabla 4.8 se recogen los retardos óptimos para las variables endógenas según los diferentes criterios usados. Estos oscilan entre los 3 retardos del criterio de

información de Schwarz a los 7 de los criterios de Akaike y Hannan-Quinn. Es por ello que se ha seleccionado el uso de 7 retardos para cada una de las variables endógenas.

#### 4.2.3. La formación de nuevos hogares en España: principales resultados

En la Tabla 4.10 se presentan los resultados del VAR estimado para la muestra considerada.

El modelo incluye cuatro variables endógenas (el cambio en el número de hogares, la tasa de desempleo, el índice de precios de la vivienda y el cambio en el número de viviendas iniciadas) y tres variables exógenas (el cambio en la población, el tipo de interés del mercado hipotecario y la renta media de los hogares).

Tabla 4.9. VAR para las variables endógenas

	Desempleo	Dif. Hogares	Dviviendas iniciadas	Precio
Desempleo (-1)	0,712*** (0,139)	-5087,856*** (1005,40)	-485,436 (394,089)	-0,481 (0,358)
Desempleo (-2)	-0,197 (0,188)	2781,117** (1358,82)	-261,394 (532,617)	0,672 (0,484)
Desempleo (-3)	0,138 (0,176)	-1033,008 (1278,50)	718,350 (501,137)	0,004 (0,456)
Desempleo (-4)	0,384** (0,164)	-2970,548*** (1186,21)	44,331 (464,960)	0,095 (0,423)
Desempleo (-5)	-0,281 (0,181)	7295,874*** (1309,69)	53,522 (513,362)	0,435 (0,467)
Desempleo (-6)	-0,130 (0,209)	-4958,748*** (1513,81)	475,652 (593,369)	-0,744 (0,540)
Desempleo (-7)	0,446*** (0,147)	3319,500*** (1069,19)	-481,732 (419,092)	-0,010 (0,381)
Dhogares (-1)	1,01E-05 (1,5E-05)	2,224*** (0,107)	-0,004 (0,042)	1,02E-04*** (3,8E-05)
Dhogares (-2)	-2,59E-05 (3,0E-05)	-2,012*** (0,215)	0,038 (0,084)	-1,77E-04** (7,7E-05)
Dhogares (-3)	3,07E-05 (2,9E-05)	0,839*** (0,209)	-0,047 (0,082)	3,84E-05 (7,5E-05)
Dhogares (-4)	-9,76E-06 (2,4E-05)	-0,762*** (0,173)	-0,028 (0,067)	6,45E-05 (6,2E-05)
Dhogares (-5)	1,67E-06 (2,6E-05)	1,615*** (0,185)	0,088 (0,072)	7,73E-05 (6,6E-05)

Dhogares (-6)	-1,04E-05 (2,5E-05)	-1.573*** (0,184)	-0,048 (0,072)	-1,66E-04*** (6,6E-05)
Dhogares (-7)	1,66E-05 (1,2E-05)	0,637*** (0,089)	0,002 (0,035)	6,73E-05** (3,2E-05)
DViviendas inic.(-1)	2,90E-05 (4,7E-05)	0,248 (0,336)	2,233*** (0,132)	2,11E-04* (1,2E-04)
DViviendas inic. (-2)	-1,19E-05 (1,1E-04)	-0,571 (0,787)	-1,686*** (0,308)	-2,22E-04 (-2,8E-04)
DViviendas inic. (-3)	-5,19E-05 (1,2E-04)	0,681 (0,888)	0,327 (0,348)	1,91E-04 (3,2E-04)
DViviendas inic. (-4)	-5,32E-05 (1,2E-04)	-0,494 (0,858)	-0,157 (0,336)	-4,24E-04 (3,1E-04)
DViviendas inic. (-5)	1,68E-4 (1,2E-04)	-0,299 (0,849)	0,614** (0,333)	4,813-04 (3E-04)
DViviendas inic. (-6)	-1,23E-04 (9,9E-05)	0,704 (0,715)	-0,632** (0,280)	-3,61E-04 (2,6E-04)
DViviendas inic. (-7)	1,40E-05 (4,1E-05)	-0,431 (0,294)	0,234** (0,115)	1,96E-04* (1,1E-04)
Precio (-1)	-0,003 (0,048)	153,221 (350,541)	-215,963 (137,402)	1,191*** (0,125)
Precio (-2)	-0,122* (0,073)	-400,912 (528,16)	26,903 (207,024)	-0,008 (0,188)
Precio (-3)	0,005 (0,071)	-551,516 (515,462)	152,511 (202,046)	0,088 (0,184)
Precio (-4)	0,0129 (0,071)	-68,588 (516,660)	-23,328 (202,516)	0,078 (0,184)
Precio (-5)	-0,020 (0,069)	-180,359 (501,139)	-230,982 (196,432)	-0,272 (0,178)
Precio (-6)	0,129* (0,071)	-426,977 (518,907)	429,795** (203,397)	-0,241 (0,185)
Precio (-7)	0,003 (0,053)	1439,114*** (387,370)	-174,808 (151,838)	0,145 (0,138)
C	-3,737* (1,749)	11816,71 (12644,3)	7691,908 (4956,21)	-2,712 (4,511)
Ingresos	6,50E-06 (1,1E-04)	-0,106 (0,774)	-0,321 (0,303)	4,01E-04 (2,8E-04)
Interés hipotecario	0,005 (0,124)	143,302 (902,951)	-818,866** (353,931)	0,203 (0,322)
Dpoblación	1,23E-05*** (4,7E-06)	0,084*** (0,033)	0,016 (0,013)	-2,59E-06 (1,2E-05)
R-squared	0,995	0,996	0,997	0,998
Adj. R-squared	0,993	0,994	0,996	0,998
Número de obs.	85	85	85	85

\*\*\*, \*\*, \* indican significación al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Como se ha señalado, se han incluido siete retardos para cada una de las variables endógenas basándonos en el número de retardos óptimos sugerido por el criterio de información de Akaike (Tabla 4.8). La elección de los siete retardos permite eliminar la autocorrelación de los residuos en cada una de las ecuaciones y refuerza la estabilidad del VAR y permite que todas las raíces se encuentren dentro del círculo unitario y que, por lo tanto, se satisfaga la condición de estabilidad, lo que le da robustez tanto a las funciones de impulso y respuesta como al análisis de la varianza. Igualmente, el modelo no presenta tampoco problemas de heterocedasticidad.

Con todas las salvaguardas señaladas, hay que advertir que la variación en el número de hogares se ve ampliamente influenciada por la tasa de desempleo y, evidentemente, por la tendencia que sigue la propia formación de hogares en trimestres anteriores. Estos resultados hay que tomarlos con cautela porque los signos de cada una de las variables son diferentes según el trimestre, indicando que no hay un patrón definido y que, por lo tanto, no se puede confirmar, como ya se ha advertido, que dicha relación sea robusta y no espuria. Por otro lado, y en contra de lo que pudiera esperarse, la renta no ejercería ningún tipo de influencia sobre la formación de nuevos hogares, algo que resulta contraintuitivo; el precio de la vivienda solo lo haría a partir del séptimo trimestre y sí que influiría el cambio en la población, en este caso, sí que con el signo esperado.

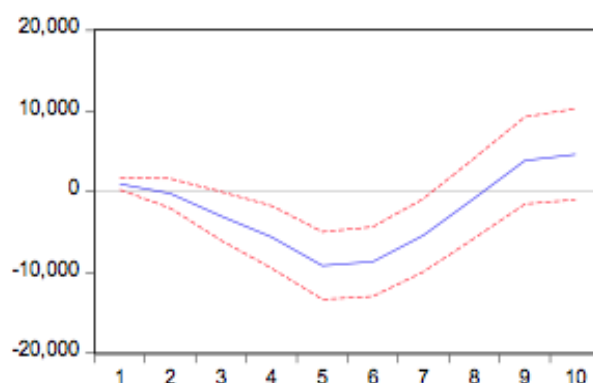
En todo caso, y habida cuenta de que, tal y como se ha señalado, el significado y significancia de los coeficientes estimados del VAR es hasta cierto punto irrelevante, procederemos a analizar las funciones de impulso-respuesta y, seguidamente, el análisis de la descomposición de la varianza que es de donde se pueden extraer conclusiones relevantes en relación a la formación de nuevos hogares en España durante el periodo muestral analizado.

#### *4.2.3.1. Funciones de impulso y respuesta*

A partir del análisis de las funciones de impulso-respuesta derivadas del modelo VAR se puede determinar la velocidad del impacto de un shock económico negativo sobre los cambios en la formación de nuevos hogares.

A tal efecto, en primer lugar, se ha estimado el impacto que un incremento equivalente a una desviación estándar de la tasa de desempleo tiene sobre la formación de nuevos hogares a largo plazo (Gráfica 4.11).

Gráfico 4.11. Función impulso respuesta del cambio de hogares ante un shock de una desviación estándar en la tasa de desempleo



*Fuente:* elaboración propia.

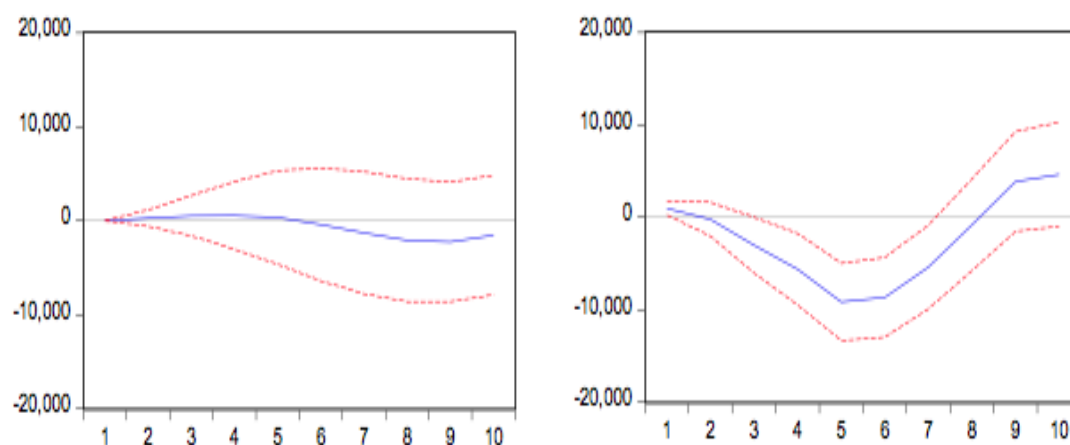
Como puede apreciarse, el impacto de un shock negativo en la tasa de desempleo sobre la creación de nuevos hogares en España se extiende a lo largo de dos años y presenta un perfil muy pronunciado con dos etapas diferenciadas. Durante los primeros cinco trimestres el efecto del incremento de la tasa de desempleo es muy pronunciado en sentido negativo sobre la formación de nuevos hogares, alcanzando su máximo en ese punto, estabilizándose y recuperándose a partir de entonces para terminar por anularse en el octavo trimestre.

La evidencia es entonces robusta en relación con el impacto que tiene un empeoramiento de las condiciones económicas (expresadas a través de un incremento de la tasa de desempleo) a corto plazo y la prolongación de sus efectos en el tiempo hasta que los mismos se anulan. Este resultado se alinea con la evidencia empírica que se ha encontrado para otras economías occidentales y que se expusieron con anterioridad.



Por otra parte, en la Gráfica 4.12 se recoge el impacto del cambio en el número de viviendas iniciadas (gráfica de la izquierda) y de la evolución del precio de la vivienda (gráfica de la derecha) sobre la formación de nuevos hogares.

Gráfico 4.12. Función impulso respuesta del cambio de hogares ante un shock de una desviación estándar en el número de viviendas iniciadas (izquierda) y ante un shock de una desviación estándar en el precio de la vivienda (derecha)



*Fuente:* elaboración propia.

En estos casos, la evolución de la formación de nuevos hogares ante un cambio en el parque de viviendas es prácticamente nula. De aquí se infiere que el aumento en la oferta de vivienda no ejerce efecto sobre la formación de hogares o, dicho de otra forma, que no existe una restricción derivada de la carencia de vivienda para la formación de nuevos hogares.

Este resultado es interesante si se analiza conjuntamente con el efecto que ejercen los precios de la vivienda. En este caso sí que se produce un efecto sobre la formación de nuevos hogares derivado del incremento del precio de la vivienda que, aunque no se aprecia en el corto plazo, a partir del cuarto trimestre comienza a manifestarse, provocando una caída en el número de nuevos hogares que se constituyen y que no se anula hasta casi el décimo trimestre.

En consecuencia, del análisis de las funciones de impulso respuesta se concluye que el efecto más intenso temporalmente sobre la formación de nuevos hogares es el derivado de la situación económica, expresado a través de un shock en la tasa de desempleo. Asimismo, la evolución del mercado inmobiliario influye sobre la misma pero no a través de la oferta de vivienda disponible, que parece suficiente, sino a través de su precio.

#### 4.2.3.2. Descomposición de la varianza

La descomposición de la variabilidad observada de las variables endógenas ante shocks en cada una de las variables proporciona una medida de su importancia relativa en la determinación de la dinámica conjunta del VAR.

En este sentido, el análisis de descomposición de la varianza permite aportar algunas evidencias empíricas más en relación con las variables que inciden en la creación de nuevos hogares.

Tabla 4.10. Descomposición de la varianza para el cambio en el número de hogares

Periodo	S.E.	Desempleo	Dif. Hogares	Viviendas iniciadas	Precios reales
1	3424,331	7,988	92,011	0,000	0,000
2	8001,193	1,546	98,285	0,120	0,048
3	12734,15	6,223	93,530	0,220	0,024
4	16726,09	14,938	84,759	0,239	0,062
5	19758,16	32,244	67,249	0,202	0,303
10	24510,16	44,487	48,892	2,390	4,229
20	29392,40	43,714	36,615	9,811	9,858
30	32053,37	39,166	34,979	16,150	9,704

Como puede apreciarse en la Tabla 4.10, en la que se recoge la descomposición de la varianza del cambio en el número de hogares, el resultado más relevante es que, en el corto plazo, son los valores retardados de la propia variable los que explican su evolución en el tiempo lo que supone que estamos ante una variable que presenta cierta persistencia. Sin embargo, esta persistencia se va diluyendo progresivamente en el tiempo y da paso a un peso creciente de la tasa de desempleo a partir del primer año desde que se produce el shock; desde ese momento, la misma pasa a explicar casi un tercio en la variación de la

formación de nuevos hogares y su peso sigue creciendo a lo largo del tiempo mientras que disminuye la persistencia. Por su parte, la variación en el mercado inmobiliario, tanto de oferta de nuevas viviendas como de precios, tiene una incidencia marginal, siendo mayor la de los precios que la de la nueva oferta, como se constataba en las funciones de impulso respuesta.

En cualquier caso, teniendo en cuenta la evolución de las variables a largo plazo y la incidencia que las mismas terminan ejerciendo sobre la creación de nuevos hogares se constata cómo la construcción de nuevas viviendas -y, por lo tanto, la ampliación del parque inmobiliario- tiene una incidencia menor sobre la formación de hogares, si bien crece de forma continuada en el tiempo, al igual que ocurre con el precio de la vivienda. De esta forma, en el último de los periodos considerados, entre el precio y la oferta de vivienda nueva se explica en torno al 25% de la variabilidad de la creación de nuevos hogares en España en el largo plazo.

#### 4.2.4. Conclusiones

El caso de España constituye uno de los episodios en los que los efectos de la crisis financiera se vieron agravados por su contribución al estallido de la burbuja inmobiliaria que venía experimentando el país desde los primeros años del siglo XXI.

En este sentido, este trabajo trata de analizar cuál es el impacto que un deterioro de la situación económica del país y el consiguiente incremento de la tasa de desempleo tiene sobre la creación de nuevos hogares. El objetivo de la investigación es profundizar en el conocimiento de los efectos que un shock sobre el empleo puede tener sobre variables sociales que afectan a las formas y condiciones de vida de la población y, singularmente, de la población más joven.

A tal efecto, se ha utilizado un modelo de vectores autorregresivos para conocer cuál es el impacto de un shock económico sobre la formación de hogares y durante cuánto tiempo se prolonga dicho efecto. Los principales resultados que se han encontrado son los siguientes.

En primer lugar, el resultado más relevante es que, en el corto plazo, son los valores retardados de la formación de nuevos hogares los que explican su evolución en el tiempo lo que supone que estamos ante una variable que presenta cierta persistencia. Sin embargo, esta persistencia se va diluyendo progresivamente en el tiempo y da paso a un peso creciente de la tasa de desempleo a partir del primer año desde que se produce el shock; desde ese momento, la misma pasa a explicar casi un tercio en la variación de la formación de nuevos hogares y su peso sigue creciendo a lo largo del tiempo mientras que disminuye la persistencia.

En segundo lugar, el impacto de un shock negativo en la tasa de desempleo sobre la creación de nuevos hogares en España se extiende a lo largo de dos años y presenta un perfil muy pronunciado con dos etapas diferenciadas. Durante los primeros cinco trimestres el efecto del incremento de la tasa de desempleo es muy destacado, en sentido negativo, sobre la formación de nuevos hogares, alcanzando su máximo en ese punto, estabilizándose y recuperándose a partir de entonces para terminar por anularse en el octavo trimestre.

Y, en tercer lugar, la evolución de la formación de nuevos hogares ante un cambio en el parque de viviendas es prácticamente nula a corto plazo; por su parte, el precio de vivienda sí que tiene efectos sobre la formación de nuevos hogares y aunque no se aprecian en el corto plazo, a partir del cuarto trimestre comienzan a manifestarse, provocando una caída en la formación de nuevos hogares.

### 4.3. La formación de hogares tras la crisis económica: el caso de Portugal<sup>11</sup>

Portugal, frente al resto de otros países que integran el modelo mediterráneo de bienestar, no experimentó una burbuja inmobiliaria en el origen de la crisis que sufrió a partir de 2008 y, sin embargo, igualmente tuvo que ser rescatado en 2011 por parte de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional (De Oliveira Tavares *et al.*, 2014). El hecho de que Portugal, al contrario de lo ocurrido en España, no sufriera una burbuja inmobiliaria permite comparar la influencia que han podido tener factores relacionados con el mercado de la vivienda -singularmente, el precio de esta- sobre la creación de nuevos hogares. Además también ayuda a enfocar el análisis sobre el impacto que el deterioro de las condiciones económicas –sintetizadas en la tasa de desempleo-, han podido ejercer sobre el ritmo de creación de nuevos hogares en sendos países.

Otra de las razones para analizar el caso de Portugal en esta investigación es que, más allá de conformar la Península Ibérica junto a España, estos dos países se unieron a la Unión Europea en 1986 y llevaron a cabo la transición e incorporación al euro en el mismo año. Además, entre 1970 y 2013 sus ciclos económicos e inmobiliarios mostraron cierta coincidencia, con la diferencia de que Portugal no experimentó una burbuja inmobiliaria en el origen de la crisis que sufrió a partir de 2008 como sí ocurrió en el caso de España (Fradique y Rodrigues, 2014).

Además, en lo que respecta a la literatura sobre la constitución de hogares para Portugal, con la excepción del trabajo de Martins y Villanueva (2009), que analiza la importancia del acceso a los préstamos hipotecarios por parte de los jóvenes para constituir una vivienda independiente, la mayor parte de estudios proviene del ámbito de la sociología y se han centrado en estudiar la transición a la edad adulta desde los cambios de los cursos de la vida (Pais, 2001; Guerreiro y Abrantes, 2005; Machado y Silva, 2009;

---

<sup>11</sup> Artículo publicado en la *Revista Galega de Economía* como: Torres Téllez, J. y Montero Soler, A. (2020). Tasa de desempleo y formación de hogares en Portugal. *Revista Galega De Economía*, 29 (1), 1-19.

Nico, 2017). De hecho, Nico (2011) indica en su trabajo que la esfera residencial suele ser la más olvidada en las investigaciones sobre las transiciones juveniles en Portugal.

A esto se añade el hecho de que hay una bibliografía aún más reducida sobre el efecto de la última recesión económica en la formación de hogares para este país hasta el punto de que solo se encuentra alguna referencia al caso portugués en estudios de conjunto (Aassve *et al.*, 2013; Arundel y Ronald, 2015; Lennartz *et al.*, 2016).

De este modo, con el fin de analizar cómo ha influido sobre la creación de nuevos hogares el deterioro de la evolución económica de Portugal a lo largo del siglo XXI se ha utilizado un modelo de vector autorregresivo similar al usado previamente en los dos artículos anteriores.

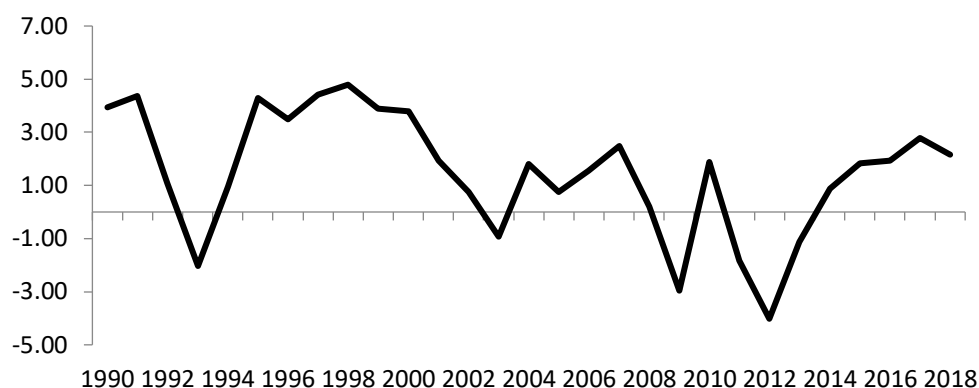
#### 4.3.1. Creación de nuevos hogares y condiciones económicas en Portugal (2003-2017)

A finales de 2007 la explosión de la crisis de las *subprime* en Estados Unidos produjo una sequía de los circuitos monetarios internacionales que afectó a numerosas economías europeas y dio paso a una larga crisis económica.

En el caso de Portugal, la tendencia decreciente de la tasa de crecimiento del PIB ya se había iniciado con el ajuste que se produjo en su economía durante el proceso de convergencia para incorporarse al euro.

Tras ese proceso de ajuste, la crisis de 2007 se produce en el marco de una ligera recuperación de la economía portuguesa y muestra, como en el caso de otras economías periféricas europeas, un perfil en W que, tras el proceso de rescate que tiene lugar en 2011, da paso a una cierta estabilización de su tasa de crecimiento, tal y como puede apreciarse en el Gráfico 4.13.

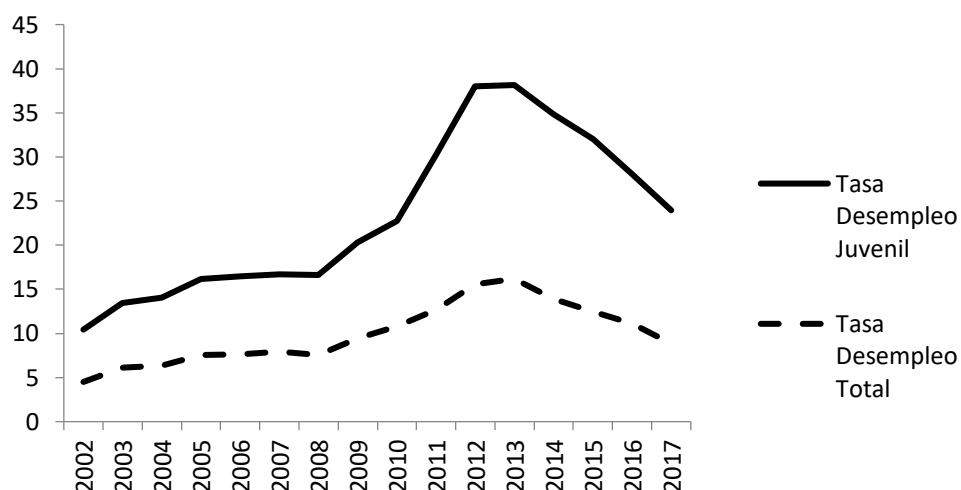
Gráfico 4.13. Tasa de crecimiento anual del PIB real en Portugal (1990-2018)



*Fuente:* OECD; elaboración propia.

Una de las variables que se vio más afectada por la crisis económica fue el empleo. La desaceleración de la economía provocó un fuerte aumento de la tasa de desempleo que llegó a alcanzar en 2013 el valor máximo de las últimas décadas, tanto para el conjunto de la población (16,2%) como para el caso específico de los jóvenes (38,1%), según se aprecia en el Gráfico 4.14. A partir de 2014 se produce un cambio de ciclo y la tasa de desempleo descende, una tendencia que, de momento, se mantiene en el tiempo.

Gráfico 4.14. Tasa de desempleo total y juvenil en Portugal (2002-2017)

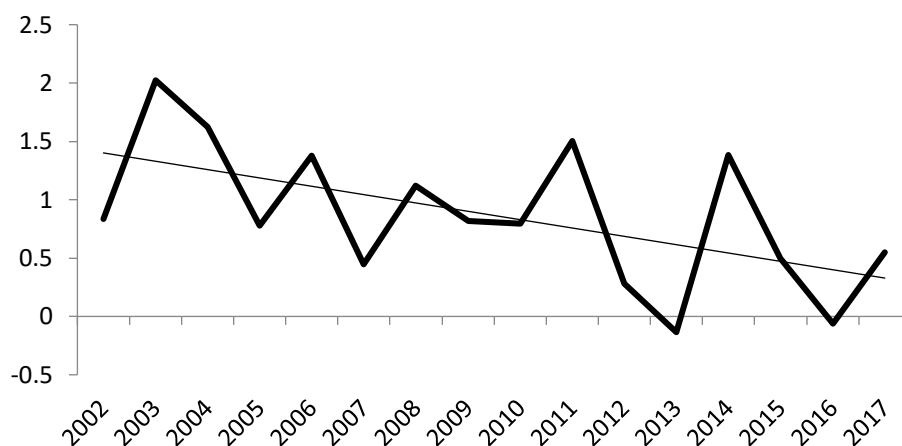


*Fuente:* Banco Mundial; elaboración propia.

Estas cifras de desempleo inducen a pensar que la creación de hogares ha podido sufrir un retraso en los últimos años en Portugal debido a la falta de recursos económicos, ya que las decisiones de consumo de un hogar, y especialmente las del acceso a una vivienda, están influenciadas en gran medida por los ingresos familiares (De Oliveira Tavares *et al.*, 2014). En este sentido, una situación de desempleo o la expectativa de poder perder el empleo repercuten negativamente sobre las decisiones de emancipación y formación de nuevos hogares (Becker *et al.*, 2010; Barceló y Villanueva, 2018).

De hecho, y tal como se recoge en el Gráfico 4.15, la tasa de crecimiento de nuevos hogares ha mantenido una tendencia decreciente desde inicios del siglo XXI, coincidiendo con las menores tasas de crecimiento del PIB y el incremento progresivo del desempleo.

Gráfico 4.15. Tasa de crecimiento de los hogares en Portugal (2002-2017)



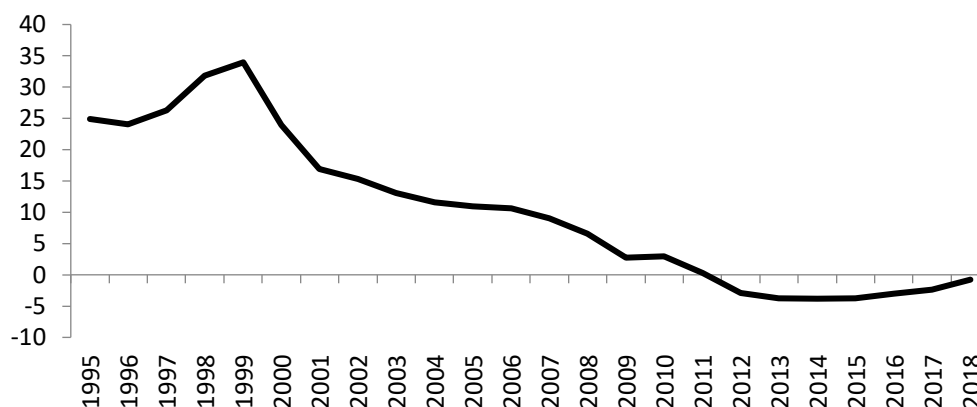
*Fuente:* Instituto Nacional de Estatística; elaboración propia.

Pero, además, a estas dificultades derivadas del mercado laboral hay que añadir la reducción de la oferta de préstamos hipotecarios<sup>12</sup> y el establecimiento de requisitos y condiciones más exigentes para la aprobación de los mismos debido a la restricción monetaria que experimentó el sistema bancario portugués (Correia *et al.*, 2014).

<sup>12</sup> En este sentido, el trabajo de Martins y Villanueva (2009) confirma que el acceso a un préstamo hipotecario en Portugal es un factor clave para la formación de nuevos hogares entre los jóvenes.



Gráfico 4.16. Tasa de crecimiento de los préstamos hipotecarios en Portugal (1995-2018)



*Fuente:* Banco de Portugal.

Como puede comprobarse en el Gráfico 4.16, la entrada en el euro supuso una caída continua de la tasa de crecimiento anual de los préstamos hipotecarios, alcanzando niveles negativos a partir de 2011. En cualquier caso, el promedio de crecimiento anual de este indicador entre mediados de los años noventa y el año previo al estallido de la crisis fue aproximadamente de un 16% como consecuencia de los préstamos a bajos tipos de interés que ofrecían los bancos y de las mejoras de las rentas de los hogares (Fradique y Rodrigues, 2014).

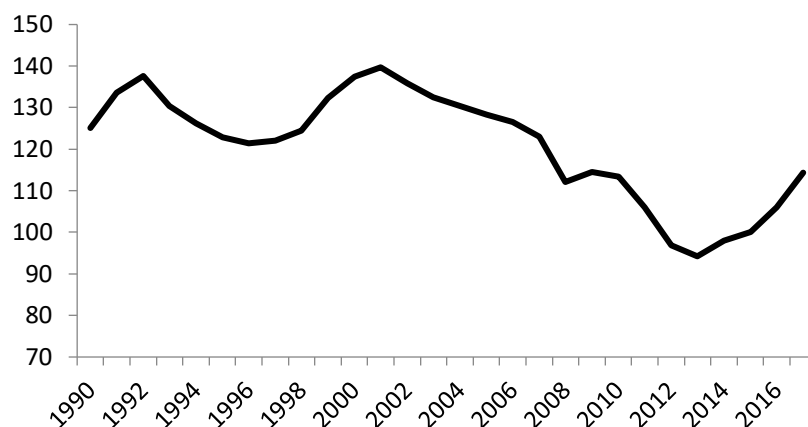
Sin embargo, este proceso fue acompañado de un rasgo común a la mayor parte de los países periféricos europeos que sufrieron la crisis: el sobreendeudamiento de las familias. Así, entre 1996 y 2006, los hogares portugueses vieron como su tasa de endeudamiento pasó de en torno un 25% a más del 90% (Fradique y Rodrigues, 2014).

Y, por último, y a pesar de que Portugal no sufriera una burbuja inmobiliaria cuyo estallido hubiera contribuido a agravar la situación económica general (Correia *et al.*, 2014), es preciso igualmente tener en cuenta cuál fue la evolución del mercado inmobiliario dado que, en el modelo mediterráneo, la formación de nuevos hogares se produce habitualmente por la vía de la propiedad.

En el caso de Portugal, los precios de la vivienda mantuvieron tasas de crecimiento negativo desde prácticamente la incorporación de Portugal a la Eurozona y solo comenzaron a repuntar a partir del año 2013, cuando el rescate de la economía portuguesa

ya se había consolidado y comenzaba un proceso de recuperación sostenido (Gráfico 4.17).

Gráfico 4.17. Índice de precios real de la vivienda en Portugal (2015=100) (1990-2017)



*Fuente:* OECD.

En todo caso, existe poca literatura sobre los efectos del mercado de trabajo y del mercado de vivienda sobre la decisión de formar nuevos hogares, especialmente tras la última recesión y, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, este tema no se había analizado nunca para el caso de Portugal.

#### 4.3.2. Metodología y datos

Para analizar qué variables influyen sobre la formación de hogares en Portugal se han recopilado datos nacionales para el periodo comprendido entre 2003 y 2017. El periodo temporal no ha podido extenderse más atrás en el tiempo debido a que algunas de las series temporales de las variables utilizadas en el análisis no van más allá del año 2003, por lo que se ha tomado este como año inicial por ser el primero para el que hay datos disponibles para todas las variables.

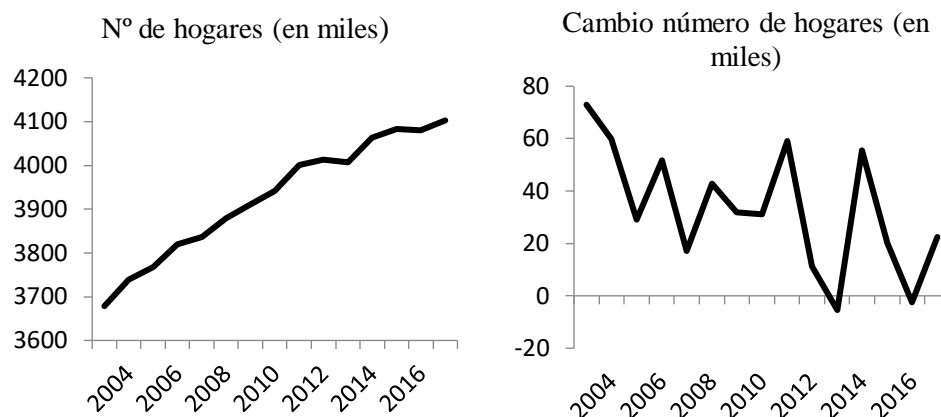
En la Tabla 4.11 se recogen las fuentes de los datos y su periodicidad. Tanto las series mensuales como las anuales se han trimestralizado utilizando el programa JDemetra+ de la Comisión Europea.

Tabla 4.11. Fuente y periodicidad temporal de las series (2003-2017)

Serie de Datos	Periodo	Fuente
Número de hogares	Anual	Instituto Nacional de Estadística
Precio real de la vivienda	Trimestral	OECD
Tasa de desempleo	Mensual	Instituto Nacional de Estadística
Población	Anual	Instituto Nacional de Estadística
Ingresos medios por hogar	Anual	Eurostat
Tipo de interés hipotecario	Mensual	Banco de Portugal
Tipo de interés a largo plazo	Mensual	OECD
Viviendas iniciadas	Anual	European Central Bank

En el Gráfico 4.18 se muestra gráficamente tanto la evolución del número de hogares en términos absolutos (panel de la izquierda) como la del cambio en el número de hogares a lo largo del periodo muestral (panel de la derecha) y que constituye la variable clave del análisis. Como puede apreciarse, el ritmo de crecimiento ha ido decayendo y la tendencia durante los años de crisis ha sido una progresiva reducción del número de nuevos hogares que se creaban cada año. Es más, hubo años en el que el incremento neto de nuevos hogares fue negativo, es decir, el número de hogares disminuyó con respecto al año anterior.

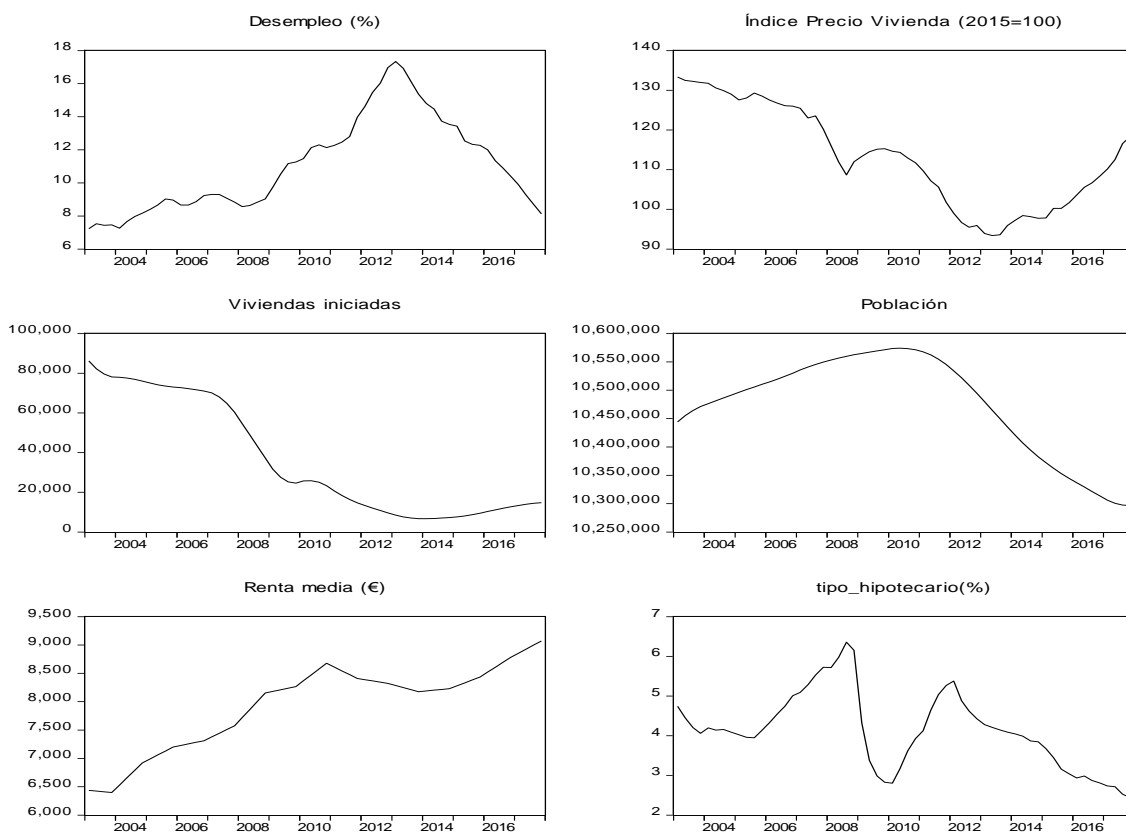
Gráfico 4.18. Formación de nuevos hogares en Portugal (2004-2017)



*Fuente:* Instituto Nacional de Estatística; elaboración propia.

Por su parte, en el Gráfico 4.19 se recoge la evolución del resto de variables empleadas en el modelo.

Gráfico 4.19. Cambios en las variables analizadas (2003-2017)



*Fuente:* ver Tabla 4.11; elaboración propia.

Como puede apreciarse, la evolución de la tasa de desempleo es ascendente desde inicios de la crisis, hasta llegar al máximo de un 17% entre 2012 y 2013; a partir de ese momento, y con la recuperación económica, vuelve a descender hasta prácticamente los niveles previos a la crisis. Por su parte, y como se ha señalado más arriba, el precio de la vivienda fue cayendo hasta después del rescate financiero al que se vio sometida la economía portuguesa en 2011, repuntando a partir de entonces pero encontrándose a finales del periodo muestral aún muy lejos del nivel anterior a la crisis. Esa falta de tensión en el índice de precios del mercado inmobiliario se refleja también sobre la oferta de nuevas viviendas, en donde se aprecia una caída continuada durante todo el periodo hasta llegar a una fase de estancamiento tras estabilizarse la economía. Pero, además, como un factor explicativo a la falta de tensión sobre el mercado inmobiliario hay que considerar la evolución de la población, con una caída en términos netos de la misma coincidiendo con los peores años de la crisis explicable por el incremento de la emigración. Además, tampoco puede desdeñarse el impacto que la crisis tuvo sobre la renta media de los hogares, que venía creciendo de forma acentuada y que sufrió un retroceso significativo; es destacable, además, que aunque ha recuperado la senda del crecimiento, lo hace aún a un ritmo menor que el previo a la crisis. Finalmente, los tipos de interés del mercado hipotecario también se vieron afectados por la crisis y han mantenido una tendencia descendente desde el rescate financiero de Portugal en 2011.

#### *4.3.2.1. El modelo de Vectores Autorregresivos*

Para estimar el VAR se ha procedido previamente a determinar la estacionariedad de cada una de las series temporales para ver si existe o no raíz unitaria en las mismas. A tal efecto se ha aplicado el test de Dickey-Fuller ampliado para determinar si las variables son o no estacionarias e incluido componentes determinísticos (constante y tendencia) cuando eran estadísticamente significativos. Los resultados aparecen recogidos en la Tabla 4.12.

Tabla 4.12. Test de raíces unitarias para las series individuales

	Desempleo	Precios	$\Delta$ Viviendas	$\Delta$ Hogares
ADF test (niveles)	-0,442	0,112	-3,286**	-1,325
ADF test (1ª diferencias)	-3,242*	-3,990**	-3,425**	-6,733***
KPSS test (niveles)	0,1659**	0,1763**	0,1153	0,0526
KPSS test (1ª diferencias)	0,1572**	0,1681**	0,0632	0,0268

ADF es el estadístico del test aumentado de Dickey-Fuller y KPSS es el test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin. En ambos casos se realizan los test con constante y tendencia.

\*\*\*, \*\*, \* indican significación al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Como puede apreciarse, la tasa de desempleo, el cambio en el índice de precios de la vivienda y el cambio en el número de hogares contienen una raíz unitaria y son estacionarias en primeras diferencias al 10%, 5% y 1%, respectivamente. Por su parte, el cambio en el número de viviendas iniciadas es estacionaria en niveles y en primeras diferencias al 5%.

Para darle mayor robustez al contraste de raíces unitarias se ha aplicado también el test KPSS sobre las series con componentes determinísticos (constante y tendencia). Los resultados aparecen recogidos en la Tabla 4.12 y muestran que tanto la tasa de desempleo como el índice de precios de la vivienda son no estacionarios al 5% tanto en niveles como en primeras diferencias, mientras que los cambios en el número de hogares y en el número de viviendas iniciadas son estacionarias en niveles y primeras diferencias.

Finalmente se ha procedido a elegir el número óptimo de retardos para las variables endógenas.

Tabla 4.13. Criterios de selección del orden del VAR

Lag	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	NA	2.79e+08	30.793	31.669	31.132
1	269.255	1273301.	25.392	26.852	25.956
2	65.904	470204.9	24.366	26.410*	25.157
3	18.053	545264.7	24.460	27.088	25.476
4	22.907	532794.5	24.348	27.559	25.590
5	49.891*	195816.9*	23.209*	27.005	24.677*

\* indica el orden de retardo seleccionado por el criterio

En la Tabla 4.13 se recogen los retardos óptimos para las variables endógenas según los diferentes criterios usados. Estos oscilan entre los dos retardos que sugiere el criterio de información de Schwarz y los cinco que señalan el resto, incluido el de Akaike, es por ello que se ha seleccionado el uso de cinco retardos para cada una de las variables endógenas.

#### 4.3.3. Principales resultados en relación con la creación de nuevos hogares en Portugal

En la Tabla 4.14 se presentan los resultados del VAR para la muestra considerada.

Tabla 4.14. VAR para las variables endógenas

	DESEMPLEO	HOGARES	VIVIENDAS	PRECIOS
Desempleo (-1)	1,109*** (0,154)	-3,213* (1,850)	236,966 (216,357)	0,324 (0,650)
Desempleo (-2)	-0,267 (0,267)	2,171 (3,215)	22,664 (375,884)	-0,232 (1,129)
Desempleo (-3)	0,134 (0,283)	0,661 (3,408)	-277,300 (398,474)	-1,706 (1,197)
Desempleo (-4)	0,177 (0,261)	0,517 (3,131)	129,105 (366,043)	2,384** (1,099)
Desempleo (-5)	-0,422** (0,203)	3,966* (2,435)	42,997 (284,727)	-1,156 (0,855)
Cambiohogares (-1)	0,042* (0,014)	0,431* (0,165)	22,390 (19,265)	-0,047 (0,058)
Cambiohogares (-2)	-0,010 (0,015)	0,032 (0,177)	-7,492 (20,667)	-0,003 (0,062)
Cambiohogares (-3)	0,027** (0,014)	0,049 (0,168)	3,736 (19,689)	-0,010 (0,059)
Cambiohogares (-4)	-0,006 (0,014)	-0,204 (0,167)	-3,135 (19,584)	0,028 (0,058)
Cambiohogares (-5)	0,008 (0,012)	0,269** (0,147)	-2,038 (17,238)	-0,160*** (0,052)
DCambioviviendas (-1)	1,28E-04 (1E-04)	-4,77E-04 (1,24E-03)	1,054*** (0,144)	1,108E-03*** (4,3E-04)
DCambioviviendas (-2)	-4,98E-05 (1,8E-04)	3E-04 (2,12E-03)	-0,238 (0,248)	-9,353E-04 (7,4E-04)
DCambioviviendas (-3)	-1,35E-04 (1,8E-04)	-0,002 (2,11)	-0,061 (0,247)	1,3E-04 (7,4E-04)
DCambioviviendas (-4)	2,33E-04 (1,6E-04)	4,33E-04 (1,94E-03)	-0,454** (0,227)	3,89E-04 (6,8E-04)
DCambioviviendas (-5)	-1,46E-04* (8,6E-05)	-6,69E-04** (1,03E-03)	0,477*** (0,121)	-5,18E-05 (3,6E-04)

Precios (-1)	0,028 (0,043)	-0,112 (0,518)	-66,474 (60,582)	1,034*** (0,182)
Precios (-2)	-0,053 (0,049)	0,611 (0,591)	103,190 (69,111)	-0,239 (0,207)
Precios (-3)	0,016 (0,054)	0,055 (0,647)	-18,245 (75,670)	-0,566*** (0,227)
Precios (-4)	-0,091* (0,054)	-0,128 (0,657)	23,521 (76,912)	0,449** (0,231)
Precios (-5)	0,067* (0,039)	0,870** (0,478)	-16,761 (55,952)	0,110 (0,168)
C	3,450 (5,116)	-225,119*** (61,454)	1716,807 (7184,11)	49,834** (21,583)
Tipo hipotecario	0,263* (0,138)	-2,867 (1,665)	-766,389* (194,725)	-1,631*** (0,585)
Renta	2,01E-04 (1,5E-04)	5,548E-03* (0,002)	-0,437 (0,214)	-1,561E-03* (6,5E-04)
Dcambiopoblación	-3,98E-05 (2,9E-05)	-1,45E-04 (3,5E-04)	-0,021 (0,041)	2,07E-04** (1,2E-04)
Dummyviviendas	0,137 (0,175)	-2,705 (2,098)	57,896 (245,288)	-0,623 (0,737)
Dummysprecios	-0,298 (0,247)	-1,718 (2,966)	10,512 (346,788)	3,372* (1,041)
R-squared	0,995	0,830	0,982	0,996
Adj. R-squared	0,992	0,684	0,968	0,992
Número de obs.	55	55	55	55

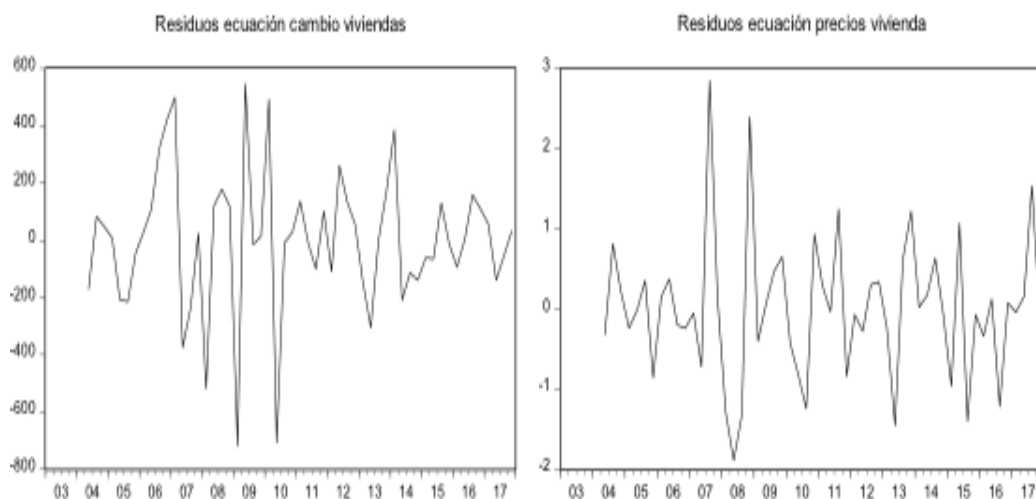
\*\*\*, \*\*, \* indican significación al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Igualmente, se han introducido dos variables ficticias para solventar la existencia de algunos datos anómalos en la serie de precios de la vivienda y en la de viviendas iniciadas que afectaban a la normalidad conjunta del VAR. En concreto, y como puede apreciarse en el Gráfico 4.20, el análisis de los residuos de ambas variables muestra la existencia de algunos valores anómalos para los años de la crisis que han sido corregidos introduciendo variables ficticias<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Se ha introducido una variable ficticia para el caso del cambio en viviendas buscando corregir los valores anómalos que se presentan para 2007Q1, 2009Q1 y 2009Q2, 2010Q1 y 2010Q2 y otra para el caso de los precios de la vivienda buscando corregir los valores anómalos 2007Q3, 2008Q2 y 2008Q4. Todos ellos provocados por el estallido de la crisis económica en 2007.



Gráfico 4.20. Residuos de las ecuaciones de cambio de viviendas iniciadas y de precios inmobiliarios



*Fuente:* elaboración propia.

Por otra parte, y como se ha señalado, se han incluido cinco retardos para cada una de las variables endógenas basándonos en el número de retardos óptimos sugerido por el criterio de información de Akaike (Tabla 4.13). La elección de cinco retardos permite eliminar la autocorrelación de los residuos en cada una de las ecuaciones y refuerza la estabilidad del VAR y permite que todas las raíces se encuentren dentro del círculo unitario y que, por lo tanto, se satisfaga la condición de estabilidad, lo que le da robustez tanto a las funciones de impulso y respuesta como al análisis de la varianza.

Igualmente, se han analizado los residuos para comprobar la estabilidad del VAR estimado y se ha encontrado que el modelo no presenta problemas de normalidad en prueba conjunta<sup>14</sup>; tampoco muestra problemas de autocorrelación ni de heterocedasticidad.

A pesar de que los coeficientes estimados del VAR no tienen un significado económico relevante y, por lo tanto, no pueden realizarse interpretaciones sobre los mismos y de que la existencia de colinealidad entre las variables explicativas también

---

<sup>14</sup> El VAR sí que presenta problemas de normalidad en la tercera de las ecuaciones, esto es, la del cambio de viviendas.

dificulta la interpretación de los estadísticos  $t$ , en la Tabla 4.14 se exponen los resultados de la estimación de los coeficientes de las diferentes ecuaciones para cada una de las variables endógenas. A efectos de esta investigación la más relevantes es, evidentemente, la ecuación del cambio de hogares.

Como puede apreciarse, y con todas las salvaguardas señaladas, hay que advertir que tanto la tasa de desempleo del trimestre anterior como la de un año antes inciden sobre el cambio de hogares del periodo actual. Sin embargo, mientras que el signo del coeficiente de la tasa de desempleo del trimestre anterior es el esperado, en el caso de la tasa de desempleo del año anterior el signo es positivo. Por su parte, igualmente resultan significativos los coeficientes del cambio en el número de hogares del periodo anterior y el de un año antes; en este caso, ambos coeficientes presentan el signo esperado. La incidencia del cambio en el número de viviendas iniciadas y en los precios del mercado inmobiliario también se manifiesta con un retardo temporal de un año y en ambos casos los signos resultan invertidos con respecto a lo que sería esperable intuitivamente: el de cambio de viviendas es negativo y el de precios positivo. Por último, es destacable que sí que resulta significativa la renta media del hogar y que lo hace con el signo esperado, en positivo.

A continuación se procede a analizar las funciones de impulso-respuesta y, seguidamente, al análisis de la descomposición de la varianza que es de donde se pueden extraer conclusiones relevantes en relación a la formación de nuevos hogares en Portugal durante el periodo muestral analizado.

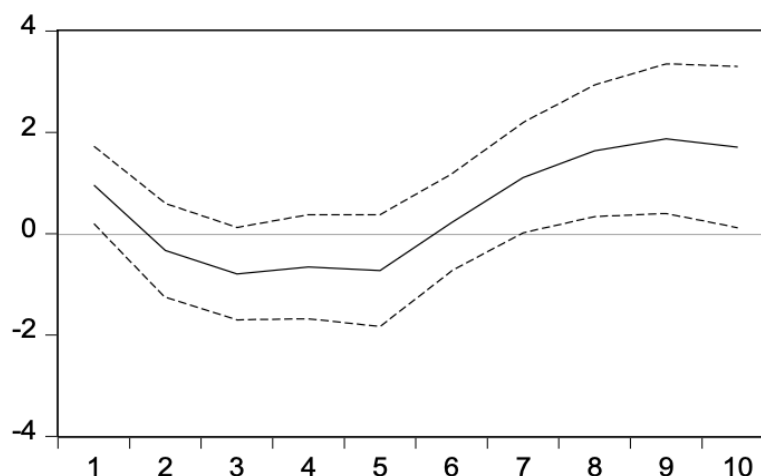
#### *4.3.3.1. Funciones de impulso respuesta*

A partir del análisis de las funciones de impulso-respuesta derivadas del modelo VAR se puede determinar la velocidad del impacto de un shock económico negativo sobre los cambios en la formación de nuevos hogares.

A tal efecto, se ha estimado el impacto que un incremento equivalente a una desviación estándar de la tasa de desempleo tiene sobre la formación de nuevos hogares

a largo plazo usando el método de la descomposición de Choleski para la definición de dicho impulso (Gráfico 4.21)<sup>15</sup>.

Gráfico 4.21. Función impulso respuesta del cambio de hogares ante un shock de una desviación estándar en la tasa de desempleo



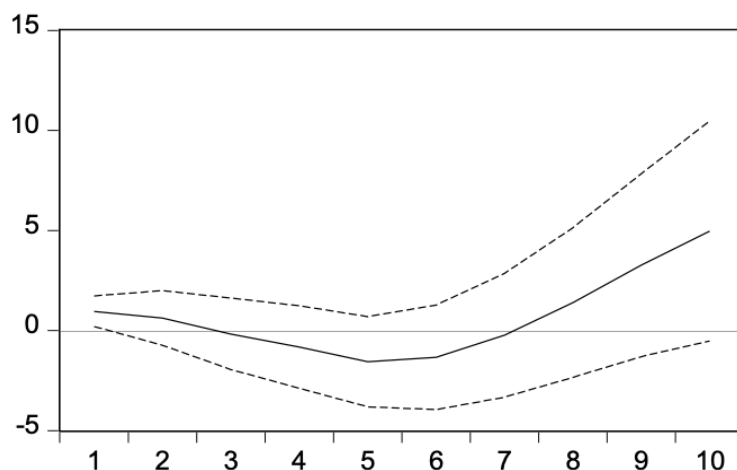
*Fuente:* elaboración propia.

Como puede apreciarse, el impacto de un shock negativo en la tasa de desempleo sobre la creación de nuevos hogares en Portugal se extiende a lo largo de seis trimestres, para comenzar a repuntar a partir del séptimo trimestre y alcanzar el nivel inicial a los dos años (ocho trimestres).

En el Gráfico 4.22 se recoge el impacto acumulado de la formación de hogares ante el shock en la tasa de desempleo. Se observa que el número de hogares comienza a caer a partir del tercer trimestre y esa caída se extiende durante tres trimestres más; a partir de ahí comienza a recuperarse y retorna a los valores iniciales alrededor del segundo año tras haberse producido el shock, es decir, tiene un impacto prolongado en el tiempo.

<sup>15</sup> Las respuestas son similares cuando el impulso se define mediante métodos alternativos al de Choleski.

Gráfico 4.22. Efecto acumulado del cambio de hogares un shock de una desviación estándar en la tasa de desempleo



*Fuente:* elaboración propia.

La evidencia es, por tanto, robusta en relación con el impacto a medio plazo que un empeoramiento de las condiciones económicas (sintetizadas en la evolución de la tasa de desempleo) ejerce sobre la creación de nuevos hogares en Portugal; si bien también cabe destacar que, aunque no se produzcan cambios en el resto de variables analizadas, el proceso de formación de hogares vuelve a su nivel original por sí mismo.

#### 4.3.3.2. Descomposición de la varianza

El análisis de descomposición de la varianza permite aportar algunas evidencias empíricas más en relación con las variables que inciden en la creación de nuevos hogares.

Como puede apreciarse en la Tabla 4.15, la principal variable que explica la evolución de dichos cambios son sus propios retardos, con aportaciones muy débiles del precio de la vivienda o la oferta de nuevas viviendas y con un impacto destacable de la tasa de desempleo. Estos resultados confirmarían los que ofrece el propio VAR estimado acerca de las variables que inciden sobre la creación de nuevos hogares.

Tabla 4.15. Descomposición de la varianza para los cambios en el número de hogares

Periodo	S.E.	Desempleo	Cambio Hogares	Viviendas Iniciadas	Precios
1	2,909	10,811	89,189	0,000	0,000
2	3,144	10,393	89,219	0,281	0,106
3	3,286	15,348	82,338	1,051	1,262
4	3,528	16,786	71,464	5,889	5,859
5	3,851	17,702	65,469	6,948	9,879
10	5,972	36,350	34,551	12,356	16,741
20	7,062	29,667	29,830	11,497	29,003
30	7,844	29,921	26,305	11,453	32,319

En cualquier caso, si se tiene en cuenta la evolución a largo plazo de las variables y la incidencia que las mismas acaban ejerciendo sobre la creación de nuevos hogares se constata cómo la construcción de nuevas viviendas -y, por lo tanto, la ampliación del parque inmobiliario- tiene una incidencia menor sobre aquélla, manteniéndose estable prácticamente a partir del segundo año (ocho trimestres). Por lo tanto, la respuesta de la creación de nuevos hogares a las condiciones de oferta del mercado inmobiliario es muy pequeña.

Por su parte, sí que va creciendo la importancia del precio de la vivienda para explicar la creación de nuevos hogares, hasta el punto de que a largo plazo acaba por explicar con mayor intensidad que la tasa de desempleo la variabilidad de la creación de nuevos hogares. En todo caso, entre ambas variables -tasa de desempleo y precio de la vivienda- se consigue explicar el 61% de la variabilidad de la creación de nuevos hogares en Portugal en el largo plazo.

#### 4.3.4. Conclusiones

A pesar de que la crisis de la economía portuguesa de 2008 no derivó de una burbuja en su mercado inmobiliario, como ocurrió en otras economías periféricas europeas, la repercusión de esa crisis sí que afectó a la tasa de creación de nuevos hogares y, con ello, a la demanda de nuevas viviendas por parte de aquellas personas que se emancipaban del

hogar familiar para crear su propio núcleo familiar profundizando la tendencia a la baja que se manifiesta a lo largo de todo el periodo.

Igualmente, resulta relevante conocer cuál es el impacto que un deterioro de la situación económica y el consiguiente incremento del desempleo pueden tener sobre la creación de nuevos hogares. La razón es que, más allá de las repercusiones sobre el conjunto de la economía que tiene un incremento del desempleo, este también repercute sobre variables sociales que afectan a las formas y condiciones de vida de la población y, singularmente, de la población joven.

A tal efecto, se ha utilizado un análisis del impacto que pudieran tener determinadas variables económicas sobre la creación de nuevos hogares y se han encontrado los siguientes resultados. En primer lugar, la variable que en mayor medida explica la creación de nuevos hogares a medio plazo es la tasa de desempleo: el empeoramiento de las condiciones económicas provoca el retraso en la emancipación del núcleo familiar y esto tiene especial incidencia sobre los jóvenes portugueses que son quienes se ven afectados en mayor medida por el desempleo. En segundo lugar, el impacto de un shock económico que se traduce en un incremento permanente de la tasa de desempleo tiene efectos sobre la creación de hogares durante casi dos años, hasta que esta recupera su nivel inicial. Y, en tercer lugar, a largo plazo, las variables determinantes para explicar la variabilidad de la creación de nuevos hogares son, fundamentalmente, la tasa de desempleo y el precio de la vivienda.

#### *4.3.4.1. Conclusiones en comparación con España*

El análisis de los factores que inciden sobre la formación de hogares y el comportamiento diferencial que hubieran podido tener los mismos en las dos economías que integran la Península Ibérica es de singular relevancia si se tiene en cuenta que ambas sufrieron con gran virulencia los efectos de la crisis económica, hasta el punto en que tuvieron que ser rescatadas financieramente desde instancias europeas; sin embargo, la crisis respondió a causas diferentes en uno y otro país, un hecho que ha generado un efecto diferencial sobre la creación de hogares.

En primer lugar, el impacto de un shock económico expresado a través de un incremento permanente de la tasa de desempleo tiene efectos diferenciales sobre la creación de hogares en ambas economías: mientras que el caso portugués el impacto es casi inmediato y se prolonga durante seis trimestres, en España el impacto más grande se manifiesta precisamente a partir de ese momento, es decir, con un lapso de tiempo importante entre el momento en el que se produce el shock y en el que se empiezan a sentir sus efectos sobre la formación de hogares. En consecuencia, puede afirmarse que hay una mayor y más rápida sensibilidad de la formación de nuevos hogares a la evolución de la tasa de desempleo en Portugal que en España.

En segundo lugar, también se constata cómo la formación de nuevos hogares en Portugal presenta una mayor sensibilidad a las condiciones de oferta en el mercado inmobiliario que en España. De hecho, en el caso de España las variaciones en la oferta de nueva vivienda no muestra un efecto negativo sobre la formación de nuevos hogares a lo largo del tiempo; por su parte, el precio de vivienda sí que tiene efectos sobre la formación de nuevos hogares y aunque no se aprecian en el corto plazo, a partir del cuarto trimestre comienzan a manifestarse, provocando una caída en la formación de nuevos hogares.

Y, en tercer lugar, a largo plazo, también se constata un comportamiento diferenciado entre España y Portugal en término de las variables que explican la variabilidad de la creación de nuevos hogares. Mientras que, en España, el peso de las variables relacionadas con el mercado inmobiliario puede llegar a explicar más del 60% de esa variabilidad, en Portugal la tasa de desempleo y el precio de la vivienda son las que adquieren una mayor relevancia.

#### **4.4. El precio de la vivienda en España tras el inicio de la crisis económica de 2008: un análisis empírico<sup>16</sup>**

La hipertrofia en la construcción de viviendas que tuvo España en la primera década del siglo XXI fue de la mano de una evolución desconocida en la historia reciente del precio de la vivienda en la mayor parte de economías occidentales. De este modo, los precios de la vivienda desde 1999 hasta 2008 tuvieron un importante crecimiento anual, lo que fue determinante para que en 20 años la vivienda se revalorizase en España en términos reales en un 232%, e incluso hay autores que cifran este aumento del precio en más de un 300% (Inurrieta, 2015).

Sin embargo, a finales de 2007 la situación tocó techo. La explosión de la crisis de las hipotecas *subprimes* en Estados Unidos provocó una fuerte corrección del sector, el cual no empezó a mostrar síntomas de recuperación hasta principios de 2014. Desde ese año la inversión real en vivienda ha tenido un crecimiento acumulado de un 45% (Alves y Urtasun, 2019). Y no ha sido el único síntoma de la tendencia alcista que tendría el sector, ya que igualmente en estos últimos seis años las transacciones de viviendas se han recuperado y han experimentado un incremento de un 59% en valores acumulados, lo que las ha situado en torno a las 550.000 transacciones anuales (Alves y Urtasun, 2019).

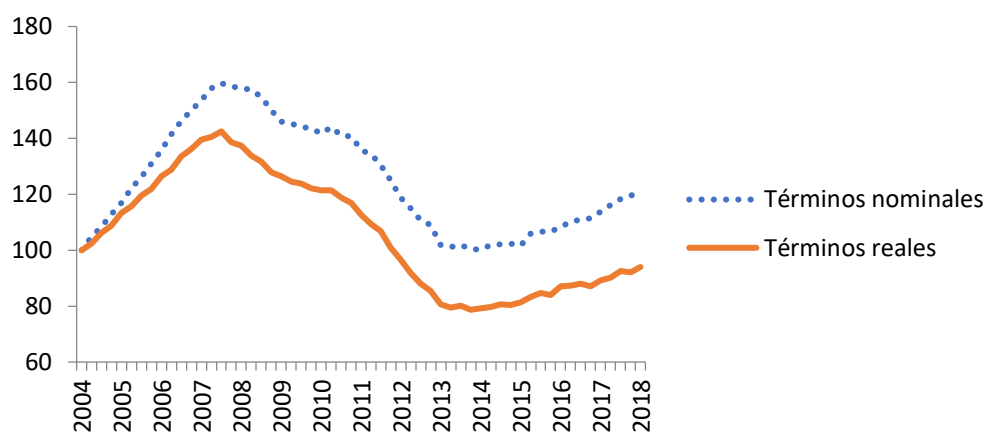
También el precio de la vivienda en España comenzó una dinámica positiva y constante en el primer trimestre de 2014 tras una caída acumulada del 60% en términos nominales que comenzó a finales de 2007 y que hundió el precio hasta los niveles más bajos de las dos últimas décadas. El crecimiento acumulado desde el momento del inicio de la recuperación del precio hasta 2018 alcanza el 27% en términos nominales, aunque sigue siendo un valor que está relativamente lejos de la sobrevaloración que alcanzó la vivienda en los años de la burbuja inmobiliaria.

---

<sup>16</sup> Artículo aceptado para su publicación en *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*.



Gráfico 4.23. Índice del precio real de la vivienda en España (1T 2004=100) (2004-2018)



*Fuente:* Alves y Urtasun, 2019.

Así, en un contexto de mejora del mercado de vivienda y con un comportamiento alcista del precio que se mantiene en los últimos años, esta investigación tiene como objetivo identificar determinados factores que pudieran haber influido en la evolución del precio de la vivienda en España durante los últimos años, tanto los de crisis como los de la posterior recuperación. Para ello se ha analizado un panel de datos con efectos fijos para las regiones españolas que comprende el periodo 2008-2016 y que incluye tanto elementos desde el lado de la demanda como del lado de la oferta de vivienda.

#### 4.4.1. Estado de la cuestión

El precio de la vivienda ha sido un tema central de estudio en todos los países occidentales debido a los incrementos que ha experimentado en las últimas décadas y, sobre todo, por la crisis económica que tuvo lugar en 2007 tras la explosión de las hipotecas *subprimes*.

La mayor parte de los estudios han explicado el análisis de los precios de la vivienda a partir de la influencia que ejercen factores de demanda y de oferta en el mercado de la vivienda.

Entre los factores más determinantes por el lado de la demanda están los ingresos de la población y la evolución demográfica (Case y Shiller, 2003). En la literatura existe consenso sobre que las fluctuaciones de los ingresos hacen variar en la misma dirección

a la demanda y a los precios (Capozza *et al.*, 2002; Gattini y Hiebert, 2010; Maattanen y Tervio, 2010).

Sin embargo, hay cierta controversia sobre la influencia de la población en los precios de la vivienda. Entre los estudios que defienden una correlación positiva destacan los de Jud y Winkler (2002), Catte *et al.* (2004) o Terrones y Otrok (2004). Mientras que hay otras investigaciones que afirman que el factor demográfico no es determinante, como Hilbers *et al.* (2008), Cvijanovic *et al.* (2010), o los trabajos de Glaeser *et al.* (2008) y Davidoff (2013) que señalan que para que esta variable sea decisiva es necesario que exista una oferta inelástica de vivienda.

Por el lado de la oferta también se ha desarrollado una importante literatura. Distintos trabajos concluyen que el incremento de la oferta en dinámicas alcistas del mercado de vivienda puede conducir a la estabilización de sus precios (Glaeser y Gyourko, 2006; Grimes y Aitken, 2010; Caldera y Johansson, 2013).

Otras investigaciones han analizados los efectos de diferentes componentes de la oferta sobre el precio de la vivienda, como la influencia del suelo urbanizable (Gyourko *et al.*, 2008; Quigley *et al.*, 2008), el impacto de las políticas de vivienda (Murray, 1999; Whitehead, 2003), o la sensibilidad de los precios a los tipos de interés (Iacoviello y Minetti, 2003; Himmelberg *et al.*, 2005; Adams y Füss, 2010; Agnello y Schuknecht, 2011).

Para el caso español también se han examinado los determinantes de los precios de la vivienda tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Díaz Fernández *et al.* (2018) han analizado las relaciones entre el ciclo de la vivienda y la población y concluyen que existe un equilibrio a largo plazo entre estas dos variables. También Taltavull (2003) y Taltavull y White (2012) han determinado la existencia de una correlación positiva entre el precio de la vivienda y una serie de factores como la evolución demográfica o los ingresos para las principales ciudades españolas y para el caso comparativo entre España y Reino Unido, respectivamente. Además, el efecto positivo de los ingresos sobre el precio de la vivienda también ha sido confirmado por Fernández-Kranz y Hon (2006), Martínez y Maza (2003), Manrique y Ojah (2003) o Arestis y González Martínez (2019) entre otros.

Desde el lado de la oferta Taltavull (2014) y Taltavull y Gabrielli (2015) han analizado qué papel juega esta en el precio en las regiones españolas y concluyen que existe una respuesta elástica de 2,5 entre estas dos variables. La influencia de otros componentes de la oferta sobre el precio de la vivienda también han sido examinada para este país: García Montalvo (2010) ha investigado la incidencia del suelo en el precio de la vivienda y concluye que el aumento de los precios de lo terrenos urbanizables es una consecuencia y no una causa del incremento del precio de la vivienda; Martínez y Maza (2003) parten de los elementos crediticios y afirman que tanto el tipo de interés nominal como el crecimiento del crédito a la vivienda explican una parte importante del aumento de los precios; o Cuestas (2017) que ha analizado los resultados de la entrada de capital extranjero y concluye que existe una retroalimentación entre estos y los precios de la vivienda.

#### 4.4.2. Datos y modelo

Para analizar qué factores influyen en el precio de la vivienda en España, esta investigación ha empleado un panel de datos balanceado con observaciones anuales para 17 regiones que comprende el periodo 2008-2016<sup>17</sup>. Las series temporales no se han podido extender a los años 2017 y 2018 porque no se han publicado aún las cifras oficiales de algunas series para esas fechas.

Al utilizar datos a niveles regionales las unidades transversales que pueden ser objeto de estudio aumentan y, a su vez, los análisis pueden brindar relaciones más sólidas y estrechas entre las variables analizadas y el precio de la vivienda, como han evidenciado otros estudios (Quigley, 2007; Ball *et al.*, 2010).

De esta forma, la variable dependiente empleada en esta investigación es el precio de la vivienda, que ha sido calculado como un índice de precios con base 2004 a partir del valor de las transacciones hechas cada año en las diferentes regiones de España.

---

<sup>17</sup> Se han excluido las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta debido a la inexistencia de información sobre determinadas variables que emplea el estudio.

En lo que respecta a las variables explicativas seleccionadas este estudio sigue la metodología de Wang y Kang (2014) y pone el foco en determinados factores del lado de la demanda y de la oferta. La Tabla 4.16 recoge todas las variables incorporadas al análisis de este trabajo.

Tabla 4.16. Variables empleadas en la investigación

<b>Nombre</b>	<b>Definición</b>	<b>Unidad</b>	<b>Fuente</b>
Precio vivienda	Valor transacciones anuales	Índice Base=2004	MIR
Ingresos	PIB per cápita	Euros	INE
Población	Población residente a 1 de enero	Personas	INE
Inversión	FBCF en Construcción	Euros	Eurostat
Precio M <sup>2</sup>	Precio medio de 1m <sup>2</sup>	Euros	MIR
Transacciones M <sup>2</sup>	Área de venta anual	M <sup>2</sup>	MIR

Así, las variables que más inciden en las pautas del comportamiento de la demanda en el modelo neoclásico y que han sido seleccionadas son: los ingresos disponibles de las personas y la evolución demográfica (Case y Shiller, 2003).

Por un lado, se asume que la población influye en los precios de la vivienda ya que un aumento de habitantes conllevará a la formación de un mayor número de hogares que presionará a la demanda de vivienda y, además, producirá una reducción de los recursos necesarios y disponibles que repercutirá sobre el costo de la misma (Jud y Winkler, 2002).

Este factor fue muy importante por el lado de la demanda durante los años de la formación de la burbuja inmobiliaria debido al incremento de residentes que tuvo España y que supuso mayores requerimientos de vivienda (Taltavull, 2012). Es por ello que se considera necesario incluir este elemento en la investigación con el fin de analizar los efectos que tiene actualmente sobre el precio de la vivienda.

La capacidad adquisitiva de la sociedad española ha sido representada por el PIB per cápita. Esto es debido a que el precio de la vivienda en España ha estado relacionado con el ciclo económico en las últimas décadas, es decir, cuando el PIB per cápita ha tenido

un comportamiento alcista el precio de la vivienda ha mantenido la misma dinámica, mientras que cuando se ha producido el empeoramiento de las condiciones económicas ha sido cuando los precios de la vivienda han caído (Fernández-Kranz y Hon, 2006). Además, la variación de los ingresos de la población puede suponer cambios en sus pautas de consumo y, por ende, afectar a la demanda, ya que muchos no propietarios de una vivienda, ante una mejora de sus rentas, pueden acudir al mercado con la intención de comprar una, a la vez que para las personas que ya son propietarias puede inducir el cambio a otra vivienda con mejores características, a la adquisición de una segunda residencia o a la inversión en bienes raíces (Wang y Kang, 2014).

Mientras que por el lado de la oferta se han elegido las siguientes variables: la formación bruta de capital fijo (FBCF) en construcción, el precio del metro cuadrado y el total del área en las transacciones.

La FBCF representa la inversión en construcción que se produce en cada región. Esta variable refleja, en gran parte, el estado del mercado de la vivienda a la vez que es la principal precursora de su desarrollo, ya que determina el ciclo de construcción, la velocidad del mismo y los costes necesarios para llevarlo a cabo (Wang y Kang, 2014).

En este estudio se considera que este factor representa mejor el estado de la oferta del mercado de la vivienda español que el número de viviendas iniciadas, por ejemplo, ya que debido a la hipertrofia de la oferta en la época de la burbuja inmobiliaria los inicios de residencias personales han tenido un ligero retraso durante la recuperación del sector (Alves y Urtasun, 2019). Además, hay que tener en cuenta que el proceso de construcción de una vivienda responde de una manera más lenta al estado del mercado debido a una serie de factores como el tiempo necesario entre el comienzo de una obra y acabarla, la información incompleta de la que se suele disponer sobre la situación del mercado y los requisitos financieros necesarios (Taltavull y Gabrielli, 2015).

El precio del metro cuadrado hace referencia al suelo urbanizable. Este factor influye en los costos de la vivienda incrementando los costes de construcción y su escasez, derivado en parte de la dificultad para convertir terrenos no urbanizables en edificables, puede limitar la oferta de vivienda, lo que produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda variando los precios de la vivienda (Gyourko *et al.*, 2008). La

relación esperada, por lo tanto, es que el precio del metro cuadrado de suelo urbanizable esté relacionado positivamente con los precios de la vivienda (Altuzarra y Esteban, 2011).

Por último, los metros cuadrados totales de las transacciones realizadas cada año en las distintas regiones de España son utilizados como indicador de la circulación del mercado de vivienda puesto que refleja la demanda real del mismo. Esto se debe a que esta variable puede recoger en ocasiones mejor las fluctuaciones que experimenta el mercado de la vivienda que los precios, ya que al estar relacionado directamente con la oferta de vivienda un cambio en la demanda puede suponer una modificación en la provisión de viviendas (Wang y Kang, 2014).

#### *4.4.2.1. Especificación del modelo*

Todas las variables descritas con anterioridad han sido analizadas usando un panel de datos con efectos fijos. La elección de este modelo se plantea de una manera más eficaz y razonable que el uso de otros métodos, como pueden ser los conjuntos de datos convencionales de secciones transversales o series de tiempo, debido a las características que presenta esta metodología (Hsiao y Sun, 2000).

Entre las ventajas de seleccionar este modelo destaca la mayor capacidad informativa de los datos de panel, ya que permiten controlar la heterogeneidad individual de los datos, tener más grados de libertad y disminuir la colinealidad entre las variables explicativas, lo que proporciona estimaciones econométricas con mayor precisión (Hsiao, 2003). De esta manera, estas propiedades posibilitan supervisar en el modelo las diferencias existentes entre cada región de España como puede ser el tamaño poblacional, la inversión o el precio del suelo, lo que puede proporcionar relaciones estadísticas más sólidas y significativas.

Además, los paneles de datos tienen mejor disposición a la hora de identificar y medir efectos que no son detectables en secciones únicamente transversales o temporales (Baltagi, 2005). Gracias a esta singularidad al introducir estimaciones de efectos fijos en el panel de datos permite incluir las características diferentes y particulares inobservables de cada región que no varían en el tiempo y controlar los posibles cambios que son

estables a lo largo de los años, como pueden ser las modificaciones en la legislación urbanística. De esta forma, la ecuación empleada es la siguiente:

$$y_{it} = \sum_{i=1}^n a_t + \sum_{i=1}^n \delta_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

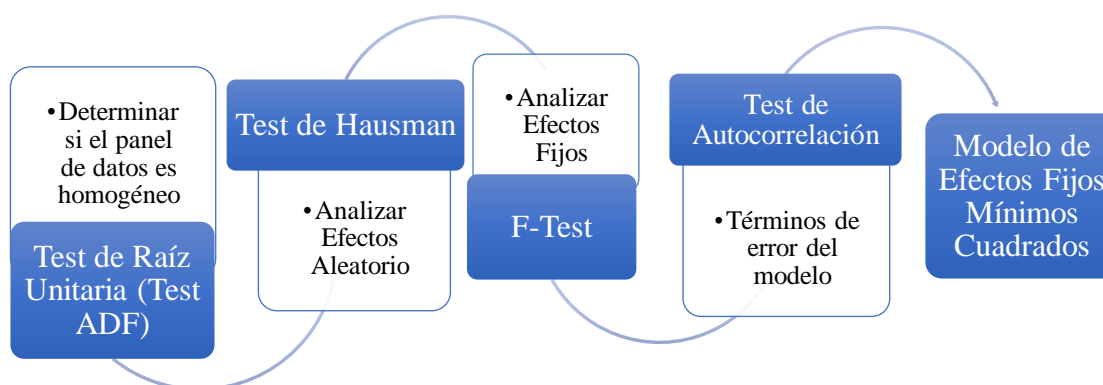
donde el índice  $i$  y  $t$  corresponden a la región y al año,  $y_{it}$  es el precio de la vivienda,  $a_t$  es el efecto fijo del año,  $\delta_i$  es el efecto fijo de la región,  $X_{it}$  son las variables explicativas descritas y  $\varepsilon_{it}$  es el término error.

De este modo, insertando las variables empleadas en el estudio en dicha ecuación se obtiene (2):

$$\text{Precio}_{it} = \sum_{i=1}^n a_t + \sum_{i=1}^n \delta_i + \text{Población}_{it} + \text{Ingresos}_{it} + \text{Inversión}_{it} + \text{Área de transacciones}_{it} + \text{Precio del suelo}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Antes de estimar la ecuación se ha comprobado que el modelo está correctamente calibrado y que es estable. Con este fin se han seguido las siguientes fases de la hoja de ruta que se recoge en este diagrama:

Diagrama 1. Proceso de la derivación del modelo



Fuente: elaboración propia.

El primer paso que se ha realizado ha sido aplicar el test de raíz unitaria ADF para confirmar que todas las variables empleadas en el estudio forman un panel de datos homogéneo.

Tabla 4.17. Resultados del Test ADF

Variable	Método	Estadístico	Prob.
Índice Precios	ADF - Fisher Chi-cuadrado	103,896	0,000
	ADF - Choi Z-estadística	-6,716	0,000
Transacciones m <sup>2</sup>	ADF - Fisher Chi-cuadrado	103,678	0,000
	ADF - Choi Z-estadística	-5,782	0,000
Precio m <sup>2</sup>	ADF - Fisher Chi-cuadrado	66,109	0,001
	ADF - Choi Z-estadística	-3,828	0,001
PIB per Cápit	ADF - Fisher Chi-cuadrado	89,344	0,000
	ADF - Choi Z-estadística	-5,847	0,000
Población	ADF - Fisher Chi-cuadrado	59,345	0,005
	ADF - Choi Z-estadística	-3,548	0,001
Inversión	ADF - Fisher Chi-cuadrado	117,914	0,000
	ADF - Choi Z-estadística	-7,470	0,000

Nota: ADF, aumentado Dickey-Fuller.

En la segunda etapa se ha efectuado el test de Hausman para evaluar si en la regresión debían incluirse los efectos fijos o aleatorios del término error y de este modo comprobar si el modelo estadístico empleado se corresponde con los datos, ya que la inclusión de uno u otro componente puede dar resultados significativamente distintos (Wooldridge, 2002).



Tabla 4.18. Test de Hausman

Resumen del test	Chi-Cuadrado. Estadístico	Chi-Cuadr. d.f.	Prob.
Sección-transversal aleatoria	0,000	5	1,000
Periodo aleatorio	0,000	5	1,000
Sección-transversal y periodo aleatorio	0,000	5	1,000

\* El test de varianza para la sección transversal no es válida. La estadística de Hausman es establecida en 0

\* El test de varianza para el periodo no es válida. La estadística de Hausman es establecida en 0.

La hipótesis nula de este test es que el uso de los efectos aleatorios es más correcto que el de los efectos fijos, por lo que un  $p\text{-valor}=1$  parece indicar que se debe emplear el modelo aleatorio ya que no se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, el test tanto para el periodo como para la sección transversal es 0 debido a que la prueba para la varianza es inválida. Estos resultados significan que no existen evidencias de efectos aleatorios individuales en los datos tanto en la sección transversal como en la temporal a pesar que los valores de  $p\text{-valor}$  puedan hacer pensar lo contrario.

Wooldridge (2002) señala que ante estos resultados muchos investigadores optan por el empleo de los efectos aleatorios, pero afirma que se puede estar cometiendo un error de Tipo II, es decir, no se puede rechazar el supuesto efectos aleatorios cuando este es falso.

En otros trabajos ante esta situación, como Strat *et al.* (2016), rechazan la hipótesis nula del test de Hausman y emplean un modelo de efectos fijos que es más consistente tras realizar un  $F\text{-test}$ , ya que el test de Hausman no proporciona un resultado definitivo sobre qué modelo ha de emplearse.

De esta forma, se ha aplicado un  $F\text{-test}$  para probar la importancia de las estimaciones de los efectos fijos y comprobar si la inclusión de los mismos es correcta.

Tabla 4.19. F-Test

Test de efectos	Estadístico	d.f.	Prob.
Sección-transversal F	17,488	(16,123)	0,000
Sección-transversal Chi-cuadrado	181,504	16	0,000
Periodo F	16,923	(8,123)	0,000
Periodo Chi-cuadrado	113,569	8	0,000
Sección-transversal /Periodo F	25,269	(24,123)	0,000
Sección-transversal /Periodo Chi-cuadrado	272,359	24	0,000

Como se puede comprobar en el Tabla 4.19 los valores obtenidos confirman que ni los efectos fijos individuales ni los temporales son redundantes, así como tampoco lo es la combinación de estos dos elementos. De esta forma, se ratifica que el empleo de los efectos fijos es más preciso que el uso de mínimos cuadrados ordinarios a la hora de considerar el término error en el modelo de regresión lineal de panel (Min y Choi, 2009).

En la última fase se ha realizado el test de autocorrelación para el modelo de panel de datos de efectos fijos que se ha decidido emplear, y se ha detectado un problema de autocorrelación de orden 1. Sin embargo, Min y Choi (2009) afirman que los modelos de efectos fijos no se ven afectados por la existencia de autocorrelación de orden 1 en el término de error, por lo que finalmente se confirma el uso de la ecuación (2) que se plasmó al inicio de este apartado.

#### 4.4.3. Resultados

Las estimaciones obtenidas tras aplicar el modelo de efectos fijos al panel de datos indican que cuatro de las cinco variables explicativas han tenido influencia en los precios tras el inicio de la crisis económica de 2008 (Tabla 4.20).

Tabla 4.20. Incidencia de los factores sobre la variable dependiente

Variable Dependiente: Índice Precios		
Inversión	0,001	[0,001]**
PIB per Cápita	0,004	[0,002]*
Población	4,03E-05	[1,71E-05]*
Precio m <sup>2</sup>	-0,0129	[0,024]
Transacciones m <sup>2</sup>	0,008	[0,003]*
R <sup>2</sup>	0,9	
Número de obs.	153	

*Notas:* SEs entre paréntesis. SEs robustos a heterocedasticidad y autocorrelación (Arellano, 1987). \*\*\*, \*\* y \* indican significación al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Los resultados por el lado de los factores de la demanda son claros y tanto la población como los ingresos tienen una relación positiva y significativa al 1% con los precios de la vivienda, lo que estaría en línea con los resultados de otras investigaciones (Case y Shiller, 2003).

En el caso de la población el incremento de precios se produce debido a que al aumentar el número de hogares el equilibrio en el modelo de oferta y demanda se desplaza a un punto de la oferta agregada que se encuentra a niveles de precios superiores. De este modo, durante los primeros años de la crisis la población española se mantuvo constante e incluso llegó a descender; además los problemas económicos derivados de la crisis dificultaban la formación de nuevos hogares, una situación que coincidió con la caída de los precios (Gráfico 4.23). Será a partir del momento en que el número de habitantes comience a aumentar y se deje sentir la mejora económica cuando la demanda de vivienda se recupere e incida sobre los precios, incrementándolos.

También se constata para el caso de España que el nivel de precios de la vivienda se ha movido en la misma dirección que las modificaciones de los ingresos de la población tras la recesión económica ya que, según las estimaciones obtenidas, un

aumento del PIB p.c. afecta positivamente al precio de la vivienda. La explicación a esta correlación reside en que el precio de la vivienda no solo reacciona al número de personas que pueden acceder al mercado, sino que también es primordial que el nivel de ingreso de los hogares sea suficiente como para poder hacer frente a la financiación necesaria para adquirir una vivienda (Taltavull, 2003). Además, cuando el nivel de renta aumenta las personas demandarán viviendas de mayor calidad y se facilita el acceso a la vivienda a un mayor número de ellas, como pueden ser jóvenes o inmigrantes, que ante una mejor perspectiva laboral y/o de ingresos se plantean acudir a él, lo que repercutirá sobre su precio (Taltavull, 2003).

De esta forma, la situación económica de la población española empeoró durante los primeros años de la crisis lo que impidió a una gran parte de las familias acudir al mercado de vivienda, trasladándose esta disminución de la demanda a los precios. Sin embargo, en 2013 el PIB per cápita tuvo un crecimiento positivo tras media década de disminución y es justamente al año siguiente cuando el precio de la vivienda muestra síntomas de mejoría (Gráfico 4.23). En los años posteriores la renta de los hogares españoles ha seguido mejorando, al igual que el precio de la vivienda sigue con una dinámica alcista desde 2014, lo que confirmaría la estrecha relación entre ambos.

En lo que respecta a las variables por el lado de la oferta también existe una relación positiva y significativa en el caso de la inversión y de las transacciones, mientras que el precio del suelo no tiene una correlación estadísticamente significativa con el precio de la vivienda.

Los resultados muestran que el aumento de las transacciones en el mercado de vivienda español ha supuesto un incremento del precio de este activo en los últimos años. Esto puede deberse a las expectativas de los participantes en el mercado que, ante la posibilidad de conseguir mayores beneficios económicos derivado de su transacción, tratan la compra de viviendas como una inversión esperando sacar rentabilidad a medio plazo (Capozza y Seguin, 1996). De esta manera, la incorporación al mercado de las expectativas de mejores precios en el futuro supone un efecto potenciador de retroalimentación de los precios (Martínez Pagés y Maza, 2003). Además, a esto se añadiría la aversión a las pérdidas de los propietarios que desean vender su vivienda para

acceder a una mejor o nueva (Mayer, 2001) y que ante un mercado en auge, debido al incremento de transacciones, establecen precios por encima del mercado provocando un ajuste más lento de los mismos.

También puede influir el hecho de que tras una mejora de los ingresos de la población después de un periodo de restricción de liquidez, como el ocurrido en España, aumente el volumen de las transacciones ante la posibilidad de cubrir la necesidad de nuevas viviendas de la población que no ha podido ser satisfecha en los últimos años debido a la situación de la economía. Esto hace que el precio crezca hasta que se equilibre la situación como consecuencia de la inelasticidad de la oferta a corto plazo y de las expectativas positivas del mercado de vivienda que transmiten confianza a los potenciales compradores a la hora de acudir a él (Arshanapalli y Nelson, 2008).

La otra variable por el lado de la oferta que presenta una correlación positiva y significativa con el precio de la vivienda para el periodo analizado es la inversión. Este resultado es contrario a lo esperado atendiendo a la teoría económica, ya que en un contexto de precios al alza el aumento de la inversión debería producir un descenso de los precios debido al incremento de la oferta. Sin embargo, la relación que presentan estas dos variables podría apuntar a que se estén dando las condiciones para el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria donde el incremento de la oferta no está repercutiendo sobre el precio. Esto podría ocurrir porque el rápido aumento de las ganancias derivadas de las operaciones de compra y venta en el mercado de vivienda en los últimos años hace más atractiva la inversión en este bien que en otros activos, por lo que el trasvase de un importante flujo de inversión hacia este mercado podría ayudar a que se formase una nueva burbuja de precios (Juárez Tárraga, 2016).

Por último, los resultados para el precio del suelo muestran que esta variable no tiene incidencia sobre los niveles de precios para el caso español, lo que coincidiría con la fase de expansión anterior cuando los crecimientos de los precios se debieron a otros factores y no a la evolución del precio del suelo (García Montalvo, 2010). La explicación sería que la demanda de suelo es una demanda derivada de la demanda de vivienda, por lo que el aumento de los precios de los terrenos urbanizables es una consecuencia y no una causa del incremento del precio de la vivienda (García Montalvo, 2010).

Este resultado apoyaría las conclusiones de la teoría ricardiana, según la cual el valor del suelo es mayor en localizaciones más atractivas y donde los compradores estarían dispuestos a hacer mayores desembolsos, por lo que al aumentar la demanda de vivienda en esas zonas el precio del suelo se ve afectado en la misma dirección (Ooi y Lee, 2006; Altuzarra y Esteban, 2011).

#### 4.4.4. Conclusiones

El mercado de vivienda en España está experimentando una notable mejoría en los últimos años, lo que ha supuesto la recuperación del precio de la vivienda tras un lustro de caída continuada. Esta investigación intenta examinar los efectos de los determinantes teóricos en los niveles de precios después del inicio de la crisis económica de 2008. Para ello, se ha utilizado un panel de datos con efectos fijos para 17 regiones españolas que comprende el periodo 2008-2016 y en el que se han analizado la incidencia de factores tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta sobre el precio de la vivienda.

De esta manera, se confirma que la demanda sigue siendo un importante impulsor del precio de la vivienda en España, como ya ocurrió en la anterior fase de crecimiento de precios, ya que estos mantienen una relación positiva con las dos variables de la demanda examinadas, la evolución demográfica y los ingresos de la población.

Los factores de la oferta examinados también presionan el precio al alza, ya que tanto la inversión como las transacciones mantienen una correlación positiva y significativa, pero, sin embargo, al contrario de lo que muchas veces se piensa, no ocurre lo mismo con el precio del suelo. Esto último también coincidiría con los años expansionistas de la primera parte del siglo XXI cuando el aumento de los precios se debió a otros factores y no al suelo, y confirmaría que el incremento del precio de los terrenos urbanizables es un resultado y no una causa del crecimiento del precio de la vivienda (García Montalvo, 2010).

La incidencia positiva de las transacciones puede deberse a la incorporación de las expectativas de mejores precios en el futuro lo que supone un efecto potenciador de retroalimentación, ya que los participantes en el mercado ante la posibilidad de conseguir

mayores beneficios económicos tratan la compra de la vivienda como una inversión esperando sacar rentabilidad a medio plazo.

Finalmente, la correlación obtenida para la inversión es preocupante, ya que siguiendo la teoría económica los resultados obtenidos deberían ser los contrarios, es decir, el incremento de la inversión en momentos en los que el precio está en una escalada positiva debería producir un descenso de los mismos debido a la existencia de una mayor disponibilidad de oferta. Sin embargo, esta relación no se cumple para el periodo analizado por lo que los valores obtenidos entre estas dos variables podrían señalar la existencia del inicio de una nueva burbuja de precios ya que el incremento de la oferta no repercutiendo en el precio.

## **Capítulo 5**

### **Políticas públicas que faciliten la emancipación juvenil en España**

A lo largo de esta investigación se ha señalado que la emancipación juvenil en España tiene un perfil diferencial al que presenta en el resto de la Unión Europea y que, además, como se ha podido comprobar en el capítulo 4, se vio afectada de manera directa por la crisis económica iniciada en 2008 y por los años posteriores de recesión.

La situación laboral y residencial a la que actualmente se enfrentan los jóvenes españoles dificulta en gran medida sus posibilidades de independizarse y el comienzo de un proyecto de vida fuera del hogar de sus progenitores. Esto, sin duda, produce graves efectos sociales, psicológicos y económicos sobre las personas jóvenes pero, a su vez, supone un deterioro de la cohesión social al obstaculizar uno de los procesos fundamentales que permiten la reproducción de las sociedades, como es el de la formación de nuevos hogares.

Por estas razones sería necesaria una estrategia de intervención pública que ofreciera respuestas a los distintos problemas que actualmente tiene la juventud española y que afectan a diferentes esferas de su transición a la vida adulta, como son el empleo o la educación, con el objetivo de facilitar su emancipación residencial. De hecho Gentile (2013, p. 43), por ejemplo, concluye que “en cada ámbito de la transición a la vida adulta es posible formular intervenciones políticas concretas, coordinando a los representantes de los sectores públicos y privados con la sociedad civil en una negociación basada en la colaboración mutua y en el perseguimiento de objetivos comunes”.

Las políticas de juventud han tenido distintas definiciones y han incidido en diferentes dimensiones de la misma según el momento histórico considerado. Hoy en día aparece desarrollada en el artículo 48 del capítulo III de la Constitución española como un principio rector de la política social y económica: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.

Para contribuir al debate sobre esta problemática de la juventud española, este trabajo analizará aquellas acciones públicas dirigidas a facilitar y fomentar una transición



a la vida adulta que les permita disfrutar de la ciudadanía plena mediante la mejora de sus condiciones de vida (Garrido y Requena, 1997; Casal, 2000; Benedicto y Morán, 2003; Casal *et al.*, 2006; Tezanos, 2007).

Para ello se ha partido de la definición que realiza Comas (2007, p. 14) sobre las políticas de juventud: “aquel conjunto de acciones cuya finalidad es la de promocionar el acceso a una plena ciudadanía por parte de los jóvenes, lo que implica mejorar su calidad de vida, sus derechos (y la interiorización cultural de sus deberes) a un empleo y una vivienda digna, así como su plena inserción en las dinámicas y en las prácticas sociales e institucionales de un sistema democrático. Son políticas, se dice, de transición porque apoyan a los jóvenes en su itinerario hacia la vida de los adultos, también se califican de emancipadoras, porque esta transición, este itinerario, se produce desde la dependencia (comenzando por la extrema dependencia biológica de la niñez) hasta la autonomía personal, es decir la consecución de un estatus de adulto emancipado”.

Esta línea es la seguida por la mayoría de los países europeos en los que la política de juventud se articula en torno a políticas sectoriales lo que la convierte en el resultado de la suma de las restantes políticas públicas, solo que con actuaciones adaptadas a las características del sector juvenil (Martín Castro, 2007).

De este modo, aunque sobre la emancipación juvenil inciden múltiples factores individuales y elementos estructurales, sin duda las políticas sectoriales que más pueden incidir de forma directa sobre ella y con resultados más inmediatos son aquellas dirigidas hacia la formación educativa, el trabajo y la vivienda (Bosch Meda, 2015). A conclusiones similares también llegan, por ejemplo, Soler y Comas (2015, p. 180) que afirman que “la finalidad de las políticas de juventud centradas en la transición a la vida adulta es la emancipación e independencia de los jóvenes de manera que abandonen esta categoría social y pasen a ser considerados adultos de pleno derecho. Para ello, las políticas de juventud han de articularse fundamentalmente a partir de aquellas cuestiones que más pueden ayudar a cambiar sus condiciones de vida: la educación, el trabajo, la vivienda y la salud”.

Además, las actuaciones públicas no solo deben de ser eficaces de forma inmediata como consecuencia del carácter urgente de la situación, sino que también es primordial

que sean diseñadas estableciendo objetivos a medio y largo plazo que garanticen la resolución de los problemas estructurales que lastran la emancipación juvenil en España.

Por estos motivos en este capítulo se llevará a cabo una revisión de políticas públicas desarrolladas a nivel nacional e internacional relacionadas con el trabajo, la educación y la vivienda con el objetivo final de proponer una serie de medidas y actuaciones sobre estos ámbitos que faciliten y mejoren las condiciones de emancipación juvenil en España.

### **5.1. Actuaciones y estrategias relacionadas con la educación y la formación de los jóvenes**

La escuela es el primer agente socializador diferente a la familia con el que las personas tienen contacto en su vida. En ella desarrollarán un sin fin de valores y pautas de conductas que les permitirá adaptarse a la sociedad e ir formando parte de ella (Caracul-Cáliz *et al.*, 2018).

Además de ser un elemento decisivo en la construcción de la identidad del individuo, la escuela proporciona un cúmulo de herramientas, conocimientos y habilidades de las que el individuo hará uso a lo largo de su vida y que le permitirá afrontar, con menor o mayor acierto, uno de los tránsitos claves de la vida adulta: el acceso al mercado de trabajo.

Sin embargo, la transición del ámbito educativo al laboral es un proceso continuo que no solo depende de cuestiones individuales, sino también del sistema educativo en el que se integran y del propio mercado laboral al que acceden (López Blasco, 2008). En este sentido, y como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 3, en España existen una serie de problemas en esos ámbitos que repercuten sobre la dinámica del proceso.

Por esta razón se propondrá a continuación una serie de actuaciones dirigidas a corregir algunos de los desequilibrios del sistema educativo español con el objetivo de modernizar las estructuras educativas para favorecer la inserción laboral de los jóvenes españoles.

### 5.1.1. El abandono escolar como gran problema de la educación

Uno de los grandes problemas de la educación en España es su elevado nivel de abandono escolar, un hecho que repercute directamente tanto sobre el nivel de cualificación de la mano de obra como sobre la dificultad de inserción laboral de los jóvenes. El abandono escolar prematuro, al margen de los problemas personales y laborales más evidentes que ocasionarán sobre el individuo a lo largo de su vida, implica para la sociedad un gasto en inversión social desaprovechado, una pérdida de ingresos para el Estado y la posible ruptura de la cohesión social al dejar atrás a un determinado grupo poblacional (Belfield, 2008).

Sin embargo, este problema no es una particularidad propia del sistema educativo español sino que también ha sido foco de atención en distintos países europeos. De hecho, a principios del siglo XXI la Comisión Europea (2001, p. 39) ya reflejó su preocupación sobre este asunto: “Hay un alto nivel de abandono escolar temprano (...). Esto podría dar lugar a un círculo vicioso intergeneracional entre la pobreza infantil, el bajo rendimiento educativo y la pobreza en la vida adulta”.

Años más tarde, el 28 de junio de 2011, el Consejo Europeo redactó una Recomendación sobre el tipo de políticas públicas a adoptar para la reducción de la tasa de abandono escolar. Las medidas fueron clasificadas según sus características en los siguientes tres grupos (Official Journal of the European Union, 2011):

- Medidas de prevención:** actuaciones focalizadas en los problemas estructurales que pueden producir el abandono escolar prematuro.

- Medidas de intervención:** acciones dirigidas a los estudiantes con altas probabilidades de abandonar la formación por sus circunstancias socioeconómicas y de aprendizaje.

- Medidas de contención:** programas orientados hacia las personas que ya se han incorporado al mercado laboral, pero que no han completado unos niveles mínimos de formación. El objetivo es ofrecer oportunidades para que obtengan diferentes titulaciones y certificados profesionales sobre sus aptitudes y habilidades y puedan subsanar sus problemas formativos.

Sobre estas acciones, el Marco Estratégico para la Cooperación Europea en Educación y Formación 2020 también indica que, debido a la complejidad de este fenómeno y de la cantidad de factores que influyen directamente sobre él, es necesario que las medidas de diferente naturaleza estén coordinadas entre sí y que se complementen mutuamente desde enfoques preventivos, con actuaciones que incidan en las edades más tempranas; desde un ámbito compensatorio, facilitando la reincorporación de las personas adultas desempleadas con bajos niveles formativos; o desde enfoques coordinativos, combinando la educación formal y la no reglada.

A esto, a su vez, se unen las recomendaciones de diferentes informes que señalan que en la consecución de la reducción del abandono prematuro de la educación es clave y fundamental un conocimiento profundo y completo sobre los sectores más desprotegidos de la población, y que sea acompañado de un sistema de detección temprana y de monitoreo continuado (RESL.eu, 2014). Y, sobre todo, indican que es esencial el hecho de que exista coordinación y colaboración entre todas las fases educativas que conduzca a un enfoque global y común.

#### *5.1.1.1. Las medidas de otros países europeos contra el abandono escolar*

A raíz de las constantes recomendaciones de las instituciones europeas sobre el abandono escolar, en los últimos años en muchos de los países miembros de la UE se han desarrollado distintas medidas y acciones que tienen como objetivo la reducción de este problema.

En este sentido, la parte flamenca de **Bélgica** lanzó en 2013 el “Plan de acción de Flandes sobre el abandono escolar” que pone un especial énfasis en las medidas de prevención, a partir de la recopilación de las distintas informaciones que aportan los centros educativos sobre los casos de abandono escolar y la elaboración periódica de informes sobre la situación y su evolución; de la creación de una base de datos para compilar información y mantener un seguimiento vía internet de los casos potenciales detectados; de la formación a los profesores sobre la manera de actuar ante este problema; o de la mejora y flexibilización de los itinerarios educativos, entre otras acciones.

Además, se ha constituido un grupo de trabajo intersectorial que se reúne 3 veces al año para la evaluación de las estrategias que se están llevando a cabo y para valorar la aplicación de otras posibles medidas, una cuestión que finalmente cuenta con el control y la verificación del gobierno central.

Otra acción que han efectuado ha sido la ampliación de su sistema de formación profesional, ofreciendo un mayor número de actividades que permitan certificar la obtención de un amplio abanico de conocimientos y habilidades.

También han implementado programas, como el proyecto “Aislamiento”, orientados a facilitar la finalización de la educación básica no solo de aquellos estudiantes que puedan abandonar próximamente el sistema educativo, sino también de los que ya lo han hecho sin haber obtenido los niveles mínimos exigibles (Eurydice y Cedefop, 2014).

Por su parte, **Austria** puso en marcha en 2012 la “Estrategia Nacional para Combatir el Abandono Escolar Temprano”<sup>18</sup> en la que se recogen medidas preventivas, de intervención y de compensación que se extienden a todas las etapas educativas, aunque sin duda el eje central de las actuaciones lo conforman las acciones de compensación. Para ello se aprobó el programa “Iniciativa para la educación de los adultos”, cuyo objetivo es ofrecer distintas herramientas y posibilidades de obtener cualificaciones profesionales certificadas a la población adulta que no haya completado la formación educativa mínima. Dentro de este programa también se brinda la oportunidad para que finalicen la educación obligatoria y así obtengan el título correspondiente. Igualmente tiene aspectos dirigidos a aquellas personas que sí tienen la educación secundaria pero que también decidieron abandonar la formación educativa, lo que ocasiona que muchas veces cuenten con formación insuficiente para el mercado laboral actual. A esto se suman las acciones orientadas a facilitar la finalización de los estudios básicos de aquellos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje y que están al borde del abandono escolar, como el proyecto “Preparado para la Formación”.

En el caso de **Holanda** la reducción del abandono escolar ha sido tradicionalmente un punto central muy importante en la elaboración de sus políticas educativas públicas.

---

<sup>18</sup> [http://www.ilo.org/dyn/youthpol/es/equest.fileutils.docHandle?p\\_uploaded\\_file\\_id=634](http://www.ilo.org/dyn/youthpol/es/equest.fileutils.docHandle?p_uploaded_file_id=634)

Una de las primeras medidas que se puso en marcha en 1993 fue la elaboración de una clasificación que permitiese categorizar con exactitud cuáles eran los niveles educativos mínimos necesarios para poder incorporarse al mercado laboral con trayectorias estables y seguras. También se decidió la ampliación de la educación obligatoria hasta los 18 años, que incluso en determinadas ciudades, como en Ámsterdam, en caso de no optar por estudios universitarios se obliga al estudiante a matricularse en un curso de formación profesional para poder recibir el título de educación preprofesional.

Esto ha sido acompañado de un monitoreo constante por parte de las instituciones educativas de los casos en los que existe o pueda aparecer el absentismo escolar, un recurso que les ha permitido contar con la información previa necesaria para llevar acabo intervenciones tempranas sobre esos alumnos. Los grupos a los que se les ha dado seguimiento están conformados por jóvenes con problemas de motivación y bajos niveles de aprendizaje, hijos de inmigrantes con diferencias culturales y lingüísticas que dificultan sus promociones en el sistema educativo e incluso permanecen activos en este registro los jóvenes que se incorporan de manera temprana al mercado de trabajo sin la cualificación necesaria (Crul *et al.*, 2013).

Todas estas cuestiones han sido posibles gracias a un enfoque integrador que ha permitido la colaboración constante entre los distintos agentes sociales, como las instituciones educativas básicas, los sectores empresariales o los organismos juveniles propios de las regiones y de los municipios. Para ello ha sido esencial la creación en el Ministerio de Educación de un grupo de trabajo formado por expertos y educadores encargado de buscar soluciones y de examinar las distintas medidas que se aplican a nivel regional a lo largo del país.

Estas actuaciones han hecho que Holanda tenga las herramientas más completas de la Unión Europea para reducir el abandono escolar, con un eje central basado en la detección temprana de este problema entre sus jóvenes para intervenir antes de que el problema se enquistase o condicione el resto de sus vidas formativas y laborales (RESL.eu, 2014).

Otros países como **Alemania, Irlanda, Polonia o Portugal** no han implementado medidas específicas sobre esta cuestión, pero sí han desarrollado un potente sistema

educativo y han llevado a cabo una serie de acciones dirigidas a garantizar la obtención de una gran variedad de certificados académicos en los distintos niveles educativos, un aspecto que reduce de manera indirecta el abandono escolar. Al respecto, el informe desarrollado por Eurydice y Cedefop (2014, p. 63) afirma que “aunque no exista una única estrategia global para abordar el problema del abandono temprano tal como se define a nivel europeo, estos países han desarrollado estrategias y planes de acción para garantizar que tanto los jóvenes como los adultos tengan la oportunidad de finalizar su educación y obtener la titulación que necesitan para tener éxito en el mundo laboral”.

Así, por ejemplo, **Alemania** aprobó en 2007 el programa “Progresar a través de la educación”, que tenía como objetivo la disminución del número de estudiantes que abandonaban el sistema educativo sin titulación de formación profesional. O en **Portugal** se implantó el programa “Proyecto de aprendizaje para jóvenes”, que tiene como fin ofrecer oportunidades y herramientas para que los jóvenes que corren el riesgo de abandonar prematuramente la educación, o aquellos que ya lo han hecho, puedan acabar la educación básica y/o desarrollen otras aptitudes profesionales de cara al mercado laboral (Eurydice y Cedefop, 2014).

#### *5.1.1.2. El abandono escolar en España*

España, a pesar de tener una de las mayores tasas de abandono escolar prematuro de la UE, carece de una estrategia específica al respecto. Y es que ni los planes educativos han servido indirectamente para reducir este fenómeno, ni las medidas específicas aplicadas sobre esta cuestión se han mantenido en funcionamiento durante el tiempo suficiente como para tener un impacto real y significativo.

De este modo, una vez que el abandono escolar se redujo a finales de la década de los noventa este fenómeno dejó de ser considerado por las administraciones públicas como un problema relevante. En cambio, se optó por orientar los esfuerzos públicos hacia el fomento de la incorporación al sistema universitario, lo que produjo dos resultados relacionados: por un lado, se desprotegeron las alternativas posibles de formación de aquellos jóvenes de 16 años que no tenían intención de acceder a la universidad, por lo

que se facilitó que abandonasen el sistema educativo una vez que acababan la secundaria; y, por otro lado, colaboró con el desajuste de oferta y demanda que muestra el mercado laboral español debido al importante crecimiento del porcentaje de la población con estudios superiores (Carrasco *et al.*, 2013).

Sin embargo, en 2007, y a raíz de las recomendaciones y de las peticiones de las instituciones europeas ante la elevada tasa de abandono escolar que tenía España, se elaboró el programa de cooperación territorial para la reducción del abandono temprano de la educación y la formación, que se encuadraba en el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica de Educación y que en 2011 pasó a ser un programa independiente. Al amparo de este proyecto se elaboraron convenios de actuación conjunta entre el Ministerio de Educación y las distintas comunidades autónomas que contemplaban los tres grupos de medidas aplicables que recomendaba el Consejo Europeo (Serrano y Soler, 2014).

Así, entre las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos tiempos para reducir el abandono escolar en España destacan: la inclusión en la formación del profesorado de instrumentos para detectar y actuar ante la aparición de este problema; un mayor desarrollo de la actividad orientativa en materia educativa y profesional por parte de los educadores; la aprobación del programa “Nuevas oportunidades” que permite a los jóvenes de 16 a 24 años sin formación educativa conseguir el título de la educación secundaria o el desarrollo de otras competencias profesionales; los Programas de Cualificación Profesional para atraer a los jóvenes sin la educación secundaria obligatoria; o proyectos dirigidos a sectores poblacionales especialmente desfavorecidos y con un alto índice de abandono escolar, como los inmigrantes o las minorías étnicas, y cuyo objetivo era el seguimiento y el apoyo para facilitar los procesos de aprendizaje.

No obstante, como consecuencia directa de la crisis económica, estas medidas que se estaban aplicando contra el fracaso escolar, el abandono prematuro y el absentismo de las aulas sufrieron importantes recortes en sus presupuestos. Y no solo eso sino que también experimentaron una importante centralización ya que el Estado central recuperó ciertas competencias al respecto. Esto ha dificultado, e incluso impedido, que las intervenciones de las escuelas y de los organismos regionales y locales alcanzasen sus



metas debido a que se modificaron los objetivos específicos hacia unos más genéricos que en ningún caso se adaptaban a las diferencias y realidades concretas de cada situación regional.

Todo esto ha provocado que el informe del RESL.eu (2014) manifieste que el desarrollo de las políticas educativas españolas y de las actuaciones que giran en torno a las mismas parezcan estar diseñadas contra las recomendaciones y objetivos de la Estrategia de Educación y Formación 2020 de la Unión Europea.

#### 5.1.2. Medidas y recomendaciones orientadas a reducir el abandono escolar prematuro en España

La RESL.eu y otros proyectos como INCLUD-ED proponen una serie de medidas y de recomendaciones orientadas a reducir la tasa de abandono escolar que han sido extraídas de las experiencias positivas de diversos países europeos. A continuación se expone una serie de acciones y actuaciones contra el abandono escolar que en algunos casos ya recogen las normativas educativas en España pero que, sin embargo, no se les ha dado la importancia necesaria o simplemente se han dejado de lado (Carrasco *et al.*, 2015):

**-Atención personalizada del alumno.** Actuaciones dirigidas a mejorar el clima escolar, especialmente entre los estudiantes vulnerables socioeconómicamente y aquellos que presentan bajo rendimiento y que les permitan sentirse parte de una comunidad. Esto se logra mediante la tutorización personalizada por parte de los profesores que permita el mantenimiento de una comunicación constante y fluida para la detección temprana de posibles problemas que den lugar a intervenciones preventivas.

**-Asesoramiento profesional y educativo.** Orientación sobre los niveles formativos más avanzados a los que accederán y proporción de información sobre el mercado laboral y distintas profesiones. Seguimiento continuado de todos los estudiantes mediante cuestionarios, charlas informativas y grupos de debates en los que se les facilitará información sobre sus futuras opciones.

**-Retrasar el *Tracking* y aulas inclusivas.** Acciones dirigidas a posponer la separación de los estudiantes según sus aptitudes y sus capacidades. A su vez, fomentar

la enseñanza inclusiva mediante actividades que desarrollen la empatía, la tolerancia y la comprensión por el diferente que no estigmatice ni excluya a aquellos alumnos con necesidades especiales o con problemas socioeconómicos.

**-Aumentar la flexibilidad y permeabilidad de los itinerarios educativos.** Estas actuaciones evitarán la creación de sentimientos de frustración y de desmotivación entre los estudiantes que no hayan contado con un buen asesoramiento y, sobre todo, entre aquellos que no han conseguido superar las evaluaciones mínimas y que presentan sensación de fracaso al no tener un importante abanico de oportunidades distintas a la universidad o la formación profesional.

**-Formación de grupos de estudios.** Agrupaciones de estudiantes con dificultades educativas guiadas por un profesional y que se centrarán en los temarios que presenten mayores dificultades y proporcionarán una ayuda extra a las cuestiones académicas que les permitan alcanzar las metas establecidas.

**-Monitoreo continuado mediante herramientas digitales.** Sistema informático que registre y actualice las situaciones de los potenciales estudiantes que pueden abandonar la educación prematuramente y, a su vez, establecer un registro de los que lo han hecho. Con esto se ejercerá una importante labor preventiva y facilitará las actuaciones tempranas en los posibles casos de abandono escolar. Además permitirá establecer un registro de las personas que han abandonado la educación sin cualificación alguna, lo que se utilizará para dirigir y ofertarles programas de incorporación y de desarrollo de capacitaciones profesionales.

**-Sistema modular.** Como complemento de la anterior medida esta pretende facilitar a las personas mayores de 18 años que abandonaron la educación secundaria la consecución de una serie de certificados que acrediten distintos cursos formativos. A su vez, mediante un proceso más inmediato de esfuerzo-recompensa pretende motivar a los estudiantes a seguir formándose gracias a un sistema más flexible que el de la educación tan formalizada que tiene actualmente España.

**-Desarrollo de un enfoque integrador.** Necesidad de la descentralización de las actuaciones en materia de abandono escolar prematuro debido a la diversidad de situaciones y circunstancias que varían según la comunidad autónoma. Para ello es

imprescindible establecer una cooperación con los estamentos educativos en todos los niveles, que vayan desde las asociaciones e instituciones locales, pasando por las autonomías y acabando en el Estado central que coordine y planifique las distintas actuaciones.

**-Apuesta por el sistema dual y la formación profesional.** Combinación recíproca y coordinada entre el ámbito educativo y el laboral, que permita la compatibilización de los estudios con el desempeño de trabajos que les proporcionen habilidades y conocimientos que sean certificados. Además, apostar por una formación profesional que garantice la inserción laboral mediante la colaboración entre el sistema educativo y las empresas y que favorezca la mejora del nexo investigación-modelo productivo-mercado de trabajo.

5.1.3. La formación profesional dual: una modalidad educativa para la reducción del abandono escolar y para la mejora de las trayectorias laborales de los jóvenes

Uno de los grandes problemas del mercado laboral español derivado de la situación del sistema educativo es el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo cualificados, tal y como se expresó en el capítulo 3. Una de las principales razones de ello es que en los últimos años se ha producido una polarización muy importante en el sistema educativo español hacia la formación universitaria. Esto ha ocasionado una paradoja en España: es uno de los países con mayor número de titulados universitarios y, al mismo tiempo, tiene también un alto nivel de abandono escolar prematuro (Echeverría y Martínez, 2018).

Una modalidad educativa distinta a las aplicadas tradicionalmente en España y que ha mostrado mejores resultados, tanto en aspectos de cualificación como de empleo en el sector juvenil, ha sido la formación profesional dual característica de países como Alemania o Austria, en los que entre el 40% y el 70% de los alumnos deciden continuar su formación mediante este tipo de enseñanza (Cámaras de Comercio, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Fondo Social Europeo, 2014). Este programa educativo

ha facilitado la incorporación de muchos jóvenes al mercado laboral y su empleabilidad (Consejo de la Juventud de España, 2014).

La formación profesional dual es una modalidad de enseñanza que permite al estudiante la combinación de actividades formativas, que recibe tradicionalmente en el aula, con la práctica laboral en un puesto de trabajo que les posibilita el afianzamiento de los conocimientos y habilidades adquiridas mediante la experiencia laboral. Para ello se establece un estrecho vínculo entre el sistema educativo y el sector empresarial, donde este último también tiene responsabilidades sobre la formación de los estudiantes y no se comporta meramente como un apéndice necesario para acumular las horas de prácticas que exigen obtener determinadas titulaciones. Además, los estudiantes, o “aprendices”, mantienen una modalidad especial de contrato que regula sus situaciones con las empresas a las que acceden que, generalmente, les proporciona una remuneración que es negociada de manera colectiva o establecida por la ley.

De este modo, los objetivos de la formación profesional dual se interrelacionan en tres dimensiones (Euler, 2013):

**-Dimensión individual:** conseguir que las personas tengan las capacidades y las competencias suficientes para que se incorporen al mercado laboral y superen los retos profesionales ante los que se encuentren mediante la autoeficacia y la motivación de la formación continua.

**-Dimensión social:** procurar una integración social de las personas que se incorporan al mercado laboral y garantizar, en la medida de lo posible, que tengan una trayectoria laboral estable y segura. De este modo, el diseño de la formación profesional dual debe orientarse a evitar el desequilibrio entre la oferta y la demanda para que se impida la aparición de situaciones de exclusión laboral.

**-Dimensión económica:** garantizar tanto el correcto funcionamiento de la economía general y de la actividad empresarial como de la individual. Con esto se pretende emplear y no desaprovechar la inversión hecha en capital humano mediante la correcta incorporación de la mano de obra cualificada al mundo laboral, tanto cualitativa como cuantitativamente. De manera implícita se evita el gasto que supone para una sociedad la formación académica de las personas y que luego no puedan ser incorporadas

al tejido productivo. Un objetivo extra de esta dimensión es la posible innovación de la economía mediante la investigación y el desarrollo.

En definitiva, con esta modalidad educativa lo que se pretende es la combinación de acciones formativas propias de un centro profesional con el desarrollo de una serie de conocimientos y habilidades en un puesto de trabajo que favorezca la especialización profesional. De esta forma, los jóvenes obtienen una experiencia laboral previa que les facilitará su posterior incorporación al mercado de trabajo y, además, les ofrece la oportunidad de conseguir cierta autonomía económica mediante un contrato remunerado con las empresas a las que se incorporan.

Asimismo, los distintos niveles de formación (formación profesional básica, grado medio y grado superior) permiten que la formación profesional dual sea tanto una alternativa a la universidad como una posible opción para aquellos casos en los que los jóvenes deciden abandonar el sistema educativo una vez que finalizan la secundaria o incluso antes de ello.

Cabe destacar que la formación profesional dual no es un elemento totalmente novedoso en España, aunque sí poco desarrollado. Este modelo de formación fue introducido en el sistema educativo español en 2012 con el objetivo de proporcionar una nueva herramienta que sirviese tanto para disminuir el desempleo juvenil tan elevado que tenía España después de la crisis económica de 2008, como para mejorar la transición de la educación al mercado laboral de los jóvenes.

Desde la puesta en funcionamiento de la formación dual profesional en España su crecimiento año a año ha sido considerable. Cuando esta modalidad arrancó las empresas que participaban en ella eran alrededor de unas 500, pero un lustro después son casi 10.000 las que forman parte de algún programa de formación dual. Y no solo eso, sino que los alumnos se han multiplicado por 5 en este periodo de tiempo (Bankia, 2019; Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019).

A pesar de la evolución positiva que está teniendo la formación profesional dual sigue suponiendo un escaso 3% de los estudiantes totales que han accedido a enseñanzas de formación profesional en España (Bentolila y Jansen, 2019), a lo que hay que añadir que la formación profesional ya de por sí en el sistema educativo español siempre ha

tenido una escasa repercusión sobre los estudiantes. Sobre este hecho un informe de Bankia (2019, p. 7) manifiesta que “a pesar de gozar de un gran reconocimiento a nivel europeo, y ofrecer una elevada inserción laboral tras los estudios, en España la formación profesional sigue siendo la hermana pobre del sistema educativo. La formación profesional no goza del reconocimiento social que merece y ello tiene distintas consecuencias dentro del propio sistema de formación profesional pero también en el mercado laboral”.

Además, algunos investigadores también apuntan a que la implementación de esta modalidad educativa se hizo de manera abrupta y sin gestionarse de manera correcta ni con la patronal ni con el sistema educativo, lo que puede provocar la ineficacia de estas acciones y las frustraciones no solo personales, sino también políticas y educativas ante la ausencia de importantes resultados (Marhuenda *et al.*, 2016).

## **5.2. Políticas públicas dirigidas a reducir el desempleo juvenil**

El mercado laboral es uno de los factores que más repercuten en la transición juvenil hacia la vida adulta al constituir la fuente del sustento económico necesario para encarar las distintas fases que confluyen en ese proceso, entre el que se encuentra la emancipación residencial. No obstante, las características del mercado de trabajo de España, como se analizaron en el capítulo 3, hacen que las oportunidades para que los jóvenes se incorporen al mismo sean reducidas y más aún para que lo hagan con buenas condiciones laborales, lo que supone un claro impedimento para la independencia residencial de los jóvenes españoles y, con ello, para su emancipación completa.

Una de las herramientas clave para corregir estos problemas en el sector juvenil son las políticas de empleo. Sin embargo, los pocos recursos destinados a las políticas activas de empleo y la aplicación desacertada en muchas ocasiones de los programas correspondientes han hecho que la incidencia de estas políticas sobre el desempleo juvenil haya sido reducida, produciendo generalmente resultados ineficientes (De la Rica, 2015).

Por esta razón, en esta sección se describirán algunas medidas que han adoptado otros países europeos en los últimos años contra el desempleo juvenil y, sobre todo, se

profundizará en la que actualmente es la medida principal para el fomento del empleo entre este sector en la UE: la Garantía Juvenil. El objetivo es identificar posibles actuaciones potenciales que sean de utilidad en España para, finalmente, realizar una serie de recomendaciones sobre las estrategias y acciones que pueden ser beneficiosas para el empleo de los jóvenes de este país.

#### 5.2.1. Algunas medidas aplicadas en otros países de la Unión Europea

El desempleo juvenil es un problema común del mercado laboral en una parte importante de los países de la Unión Europea, salvo alguna excepción como Alemania o Austria en los que la tasa de desempleo entre los jóvenes es baja.

Esta situación ha hecho que muchos países de la UE hayan puesto en marcha distintas medidas dirigidas a favorecer la inserción laboral de los jóvenes y de esta manera reducir el desempleo juvenil. En la siguiente tabla se agrupan los tipos de programas genéricos en los que se clasifican las medidas aplicadas según sus ventajas y desventajas.

Entre las ventajas más destacables de estos programas está el ofrecimiento de oportunidades que pueden proporcionar experiencia profesional a los jóvenes, como en los programas de formación de mercado de trabajo o subsidios de empleo.

Por su parte, entre las desventajas más comunes sobresale el hecho de que algunos de estos programas producen efectos temporales y que, sin embargo, a largo plazo los resultados que obtienen son escasos, como puede suceder con los planes de formación de mercado de trabajo, con el empleo intensivo de obras públicas o con los subsidios de empleo.

Tabla 5.1. Programas de empleo juvenil según sus ventajas y desventajas

Tipo de programa	Ventajas	Desventajas	Ejemplos
<b>Formación de mercado de trabajo</b>	Funciona mejor con habilidades vocacionales y empleabilidad que son demandadas, e incluyen experiencia profesional así como servicios de empleo.	Puede provocar soluciones temporales en lugar de soluciones sostenibles, y si no está bien dirigido puede beneficiar a quienes tienen mayor ventaja.	Formación Profesional Dual en Alemania y Austria
<b>Servicios de orientación laboral</b>	Puede ayudar a los jóvenes a tomar decisiones realistas de sus aspiraciones con las oportunidades de empleo y la formación, y mejorar la información sobre las perspectivas de empleo.	Puede crear expectativas poco realistas si no están vinculados a las necesidades del mercado. A menudo solo cubren las zonas urbanas y la economía formal.	Nuevo acuerdo para los jóvenes (Reino Unido) y el Programa Activo Mercado de Trabajo (Finlandia)
<b>El empleo intensivo de obras públicas y servicios comunitarios</b>	Ayuda a ganar a los jóvenes vinculación con el mercado laboral y, al mismo tiempo, mejora la infraestructura física y social y el medio ambiente.	Baja capacidad para la integración al mercado de trabajo, los trabajadores jóvenes pueden quedar atrapados en un círculo de programas de obras públicas.	El Programa de Empleo Temporal (Bulgaria)
<b>Subsidios de empleo</b>	Se puede crear empleo si son dirigidos a necesidades específicas (por ejemplo, para compensar la menor productividad inicial y la formación), para grupos de jóvenes desfavorecidos, etc.	Altas pérdidas y efectos de sustitución (si no son dirigidos); el empleo puede durar solamente mientras dura el subsidio.	Plan de Empleo (Bélgica). Programa de Subsidio Salarial (República Checa) y Programa de Intervención de Obras (Polonia)
<b>Promoción de emprendimiento</b>	Puede tener alto potencial de empleo y puede satisfacer las aspiraciones de los jóvenes (por ejemplo, la flexibilidad, la independencia).	Puede crear efectos de desplazamiento y puede tener alto porcentaje de fracasos, lo que limita su capacidad para crear empleo sostenible. Es a menudo difícil para los jóvenes desfavorecidos.	Programa de Trabajo Por Cuenta Propia (Bulgaria),
<b>Fuente: OIT, 2011; Adaptado de Rosas y Rossignotti (2005) y Betcherman et al. (2007)</b>			



Así, se observa que existen 5 tipos de programas. A continuación, se realizará un breve repaso a algunas de las medidas desarrolladas en otros países europeos según esta clasificación.

#### *5.2.1.1. Formación de mercado de trabajo*

Los programas de formación de mercado de trabajo son aquellos que ofrecen actividades formativas o de aprendizaje orientadas hacia el ámbito profesional para que las personas que accedan a ellos mejoren o aprendan distintas cualificaciones, conocimientos o aptitudes que les facilite su inserción laboral.

En este sentido, por ejemplo, destaca la formación profesional dual de **Alemania**. Estos programas de formación suelen tener una duración de 2 a 3 años, de los cuales el estudiante pasa dos tercios de ellos en el puesto de trabajo y el otro restante en el centro profesional (Kotthoff, 2011). La edad a la que pueden acceder a la formación profesional dual es a partir de los 16 años, una vez que han completado un período de escolaridad obligatoria similar al de España. Desde ese momento tienen a su alcance una amplia variedad de ofertas según los perfiles profesionales, llegando a alcanzar las 350 opciones distintas con capacidad para formar en más de 20.000 actividades y oficios distintos (Strauch, 2011).

Por su parte, en **Reino Unido** también se apuesta por las formaciones de aprendices (*Apprenticeship*). Por ejemplo, en Inglaterra<sup>19</sup> esta modalidad es parecida a la formación profesional dual de otros países y combina la formación educativa con prácticas en un empleo. Aunque la incorporación a estos programas no tiene límite de edad, uno de los objetivos principales es capacitar laboralmente a los jóvenes para que accedan a ocupaciones cualificadas. Está compuesto por tres niveles distintos según el grado de dificultad del aprendizaje, pero en ningún caso el periodo de formación tiene una duración menor a los 12 meses. Las horas de trabajo no deben ser inferiores a las 30 semanales,

---

<sup>19</sup> Se describe el caso concreto de Inglaterra, aunque las propiedades de estos modelos formativos-laborales en los otros países de R. Unido son muy similares. Para más información: <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki/countries>

aunque existen excepciones por las condiciones del empleo que pueden justificar que sean 16 horas. El aprendiz firma un contrato con el empleador que certifica que está realizando este tipo de formación por el que tendrá derecho a una asignación salarial independientemente si está en el puesto de trabajo o recibiendo formación educativa; mínimo serán 3,90 libras/h (en abril de 2019) en el caso de los jóvenes menores de 19 años durante el primer año, a partir de ese momento pasan a cobrar el salario mínimo interprofesional (SMI) correspondiente a su grupo de edad. Si la persona es mayor de 24 años tiene derecho al cobro del SMI desde el instante en que se formaliza el contrato de aprendiz. Durante todo este proceso estarán acompañados por un tutor que será el encargado de impartir la formación necesaria, ofrecer asesoramiento en aspectos laborales y evaluar el progreso de cada aprendiz<sup>20</sup>.

En **Suecia** destacaban los denominados *trainee jobs*, que estaban enfocados para jóvenes de 20 a 24 años con una determinada formación pero que habían estado desempleados durante 6 meses en el caso del sector de bienestar o 3 meses en aquellas ramas de producción en las que hubiese escasez de personal cualificado. El objetivo principal era el desarrollo de actividades formativas en el trabajo para aquellos jóvenes que ya tenían adquirida una cualificación alta pero que encontraban obstáculos para acceder al mercado laboral ante la falta de experiencia previa. La duración del contrato oscilaba entre los 12 y los 24 meses como máximo, y los empleadores podían ser bonificados hasta con el 85% del costo salarial del empleado (Government Offices of Sweden, 2016).

Esta medida fue sustituida en mayo de 2018 por los trabajos de introducción (*entry jobs*), que se tratan de una modalidad de empleo acordada entre el gobierno sueco y el sector empresarial privado. El planteamiento de este proyecto consiste en que aquellos jóvenes que se estén incorporando por primera vez al mercado laboral, o las personas desempleadas de larga duración, accedan a un contrato que les proporcione los conocimientos y la experiencia necesaria. Aquellos que sean contratados mediante esta iniciativa se comprometen a la asistencia de una serie de cursos cortos que fortalezcan

---

<sup>20</sup> <https://www.gov.uk/government/publications/a-guide-to-apprenticeships>

sus habilidades. El salario que reciben los trabajadores con estos contratos oscila en torno a las 8.500 coronas suecas (unos 775 euros) al mes en 2019, y los empleadores a su vez reciben pagos por parte del gobierno central por cada persona que tenga contratada con esta modalidad (Government Offices of Sweden, 2019).

#### *5.2.1.2. Servicios de orientación laboral*

Los programas de servicios de orientación laboral son aquellos que ofrecen apoyo a la inserción laboral y que facilitan la búsqueda de empleo. Para este fin proporcionan información, asesoramiento laboral y recomendaciones en torno al mercado de trabajo, como puede ser la elaboración de un CV, la enseñanza de cómo afrontar una entrevista o cómo gestionar la trayectoria profesional del individuo a partir de sus competencias y habilidades.

Así, **Francia** ha adoptado una serie de medidas dirigidas a que refuercen y mejoren la orientación laboral de los jóvenes, como la Ley sobre Orientación de la Enseñanza Superior y de la Investigación aprobada el 22 de julio de 2013 que tiene como objetivo guiar, informar y asesorar a los estudiantes que tienen la intención de acceder a la educación terciaria. O también la Ley relativa a la Formación Profesional al empleo, que determina la responsabilidad del Estado en la orientación de los jóvenes y que establece que serán los consejos regionales que dirigen el Servicio de Orientación Pública Regional los responsables de la orientación vocacional y de los aspectos relacionados con la formación profesional de los jóvenes franceses. Esto a su vez fue complementado con la implementación en 2014 del “Asesoramiento en Evolución Profesional”, que habilita el uso de este servicio público para ser aconsejado sobre la trayectoria laboral y las posibilidades a todas las personas que hayan comenzado su vida laboral.

En este sentido se han puesto en marcha programas como la plataforma *Parcoursup*, que tiene como objetivo la orientación de los jóvenes después de que finalicen el bachillerato para facilitarles una mejor información que les proporcione condiciones deseables de éxito en los cursos universitarios a los que acceden (Delair y Ritzenthaler, 2018). También destacan los establecimientos de integración laboral llamados

*Établissements Pour l'Insertion dans l'Emploi*, que se encargan de acompañar a los jóvenes menores de 26 años sin formación o con problemas de exclusión social en sus proyectos sociales y profesionales mediante asesoramiento individualizado y personalizado. Estos centros ofrecen residencia gratuita y un contrato de voluntariado durante 8 meses, que en ningún caso será superior a los 24 meses, por los que reciben una remuneración de 210 euros mensuales y en los que serán asesorados y se les ayudará a que adquieran distintas habilidades y conocimientos para su posterior integración en el mundo laboral.

Del mismo modo, en **Reino Unido** el programa *Youth Obligation* brinda asesoramiento y apoyo a los jóvenes de 18 a 21 años para que consigan una serie de competencias adaptadas a sus necesidades y a sus objetivos laborales, con la finalidad de que estas acciones les permitan el acceso a un puesto de trabajo. El apoyo empieza con un intensivo programa de actividades que se trata de talleres y ejercicios orientados hacia la reflexión por parte de los jóvenes sobre sus habilidades y sus objetivos laborales, que les permita la identificación de aquellas competencias que deben reforzar para que alcancen sus metas. Igualmente se les brinda asesoramiento para la elaboración y la mejora de sus CVs y sus cartas de presentaciones, a la vez que se les orienta sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo y sobre cómo buscar trabajo de manera efectiva. Una vez finalizados estos talleres de refuerzo tienen un seguimiento telefónico continuado por parte de sus orientadores laborales durante 6 meses, con el objetivo de que reciban apoyo y consejos sobre los procesos que conlleva la búsqueda de empleo. Entre las medidas que pueden adoptar sus orientadores destaca la solicitud de incorporación a otros programas, como las academias de trabajo sectoriales, para que sigan formándose<sup>21</sup>.

#### *5.2.1.3. El empleo intensivo de obras públicas y servicios comunitarios*

El tercer grupo, el denominado empleo intensivo de obras públicas y servicios comunitarios, hace referencia a la creación directa de puestos de trabajo por parte de las

---

<sup>21</sup><https://www.gov.uk/guidance/support-for-18-to-21-year-olds-claiming-universal-credit#sector-based-work-academies>

administraciones públicas con el objetivo de emplear a aquellos individuos que por sus características personales tienen dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo.

En este tipo de programa destaca en **Letonia** el *proyecto Workplaces with Stipend Emergency Public Works Programme* que se desarrolló entre 2009-2011. Este programa ofrecía a aquellos jóvenes que no estaban trabajando ni estudiando puestos de trabajos públicos a jornada completa que tenían una duración mínima de 2 semanas y una máxima de 6 meses. Generalmente las actividades que desempeñaban se trataban de servicios de limpieza o labores de mantenimiento de las zonas públicas.

Según la evaluación que llevó a cabo el Banco Mundial en 2012 sobre los efectos de este programa, se crearon más de cien mil puestos de trabajo y aquellos hogares que participaron incrementaron sus rentas hasta en un 37% respecto a los que no habían participado. Además, una vez que el proyecto finalizó hasta un 22% de los participantes encontraron un empleo (González-Blanch, 2017).

En **Hungría, Austria, Polonia, República Checa y Eslovaquia** también se han desarrollado programas de empleo público. En estos casos no han estado dirigidos exclusivamente al sector juvenil, sino que su capacidad de alcance se ha extendido a toda aquella persona desempleada que estuviese en riesgo de exclusión social o se considerase de un grupo vulnerable. La actividad principal que desarrollan los beneficiarios son trabajos físicos de baja cualificación relacionados con el mantenimiento de las infraestructuras públicas o servicios a la comunidad. El objetivo de estos programas es o bien mejorar la capacitación de los empleados o bien la facilitación de su reincorporación al mercado laboral. La duración máxima de estos contratos son de 12 meses, aunque en el caso eslovaco pueden extenderse hasta los 18 meses (European Commission, 2013)

#### *5.2.1.4. Subsidios de empleo*

El cuarto grupo, subsidios de empleo, ha sido una herramienta muy empleada en los países de la UE en los últimos años. Este tipo de programa está formado por aquellas acciones que tienen como fin incentivar a las distintas empresas a que contraten a determinados sectores poblaciones, a que creen nuevos puestos de trabajos mediante

subvenciones económicas o ayudas fiscales, o incluso para que mantengan en su trabajos a determinadas personas que son parte de algún grupo social desfavorecido, como pueden ser discapacitados, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, etc.

Por ejemplo, **Francia** en 2013 aprobó una medida por la que las empresas que incorporaran a sus plantillas a menores de 26 años mediante un contrato de duración indefinida, tanto jornada completa como parcial, se les conmutaría el seguro de desempleo correspondiente. El tiempo de exención de este impuesto dependería del número de trabajadores que tuviese la empresa beneficiaria de esta medida, siendo de 3 meses para aquellas con más de 50 empleados y de 4 meses en caso de disponer de un personal inferior a este número. Además, este descargo fiscal se podía acumular con cualquier otra medida mientras que la ley que regulase la otra disposición no estableciese lo contrario (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2015).

Ese mismo año, mediante la Ley nº 2013-185, fue aprobada la ayuda al contrato de generación, que tenía como objetivo facilitar la integración de los jóvenes en el empleo, promover la contratación y retención de trabajadores mayores y asegurar la transmisión de conocimientos entre una generación y otra. Es decir, esta medida tenía como fin beneficiar a aquellas empresas que contratasen a un binomio formado por un joven menor de 26 años y por un trabajador experimentado de al menos 55 años.

Otra de las medidas que aprobó Francia fue la modalidad denominada “empleos de futuro” que duró hasta 2018. Esta acción estaba dirigida a aquellos jóvenes menores de 26 años que tenían problemas de inserción laboral debido a su bajo nivel de cualificación académica. El objetivo de esta ayuda era facilitar que los jóvenes mientras trabajaban tuviesen acceso a una serie de programas de formación que les permitiese subsanar los obstáculos académicos que arrastraban. Para conseguir este fin el Estado francés se hacía cargo desde el 35% al 75% del salario mínimo interprofesional, dependiendo del sector productivo. La ayuda tenía una duración mínima de 12 meses y se podía prorrogar como máximo hasta los 36 meses.

Asimismo, en **Suecia**, el Estado, los gobiernos regionales y los municipales firmaron un acuerdo en 2014 para promover los trabajos para estudiantes (*Student employee Jobs*), que tienen como objetivo emplear a cualquier estudiante de educación

superior en un trabajo que esté directamente relacionado con los estudios que están cursando. La duración del contrato es variable y suponen de 10 a 15 horas de trabajo por semana. El objetivo de esta medida es que los jóvenes atesoren cierta experiencia cualificada relacionada con el campo de estudio al que se dedicarán, previsiblemente, el resto de sus vidas antes de finalizar la formación reglada y, de esta forma, facilitarles la transición del ámbito educativo al mercado laboral. Por su parte, los empleadores tienen la oportunidad de utilizar de un modo adecuado las habilidades que los jóvenes que están desarrollando en sus estudios de niveles terciarios y que, a su vez, les sirva como una manera de reclutar potenciales trabajadores para sus empresas (European Commission, 2018a).

En **Gales** se puso en marcha el programa *Jobs Growth* en 2012. El objetivo de esta medida es ofrecer puestos de trabajos por un periodo de 6 meses a jóvenes desempleados menores de 25 años que les permita adquirir experiencia laboral y que puedan llegar a ser contratados de manera permanente por la empresa a la que se incorporan con este programa. Durante este tiempo el empleado tendrá un contrato formal y trabajará como mínimo un total de 25 horas por semana, recibiendo un salario que mínimo debe ser igual al SMI. Es necesario que los jóvenes que pretendan incorporarse a este proyecto no estén inscritos en programas educativos a tiempo completo o en otros planes de empleo. Para el fomento de esta medida entre las empresas, el Gobierno galés se hace cargo del 50% de este salario y les facilita actuaciones dirigidas a facilitar el seguimiento y el asesoramiento administrativo<sup>22</sup>.

En **Portugal** se está estimulando a las empresas a que contraten a personal mediante el llamado *Contrato Emprego*, que ofrece apoyo económico a los empleadores a cambio de que contraten por periodos de 12 meses a desempleados que estén registrados en las agencias de empleo. Los recursos económicos que reciben las empresas por adherirse a esta medida aumentan en un 10% en caso de contratar a personas de grupos vulnerables, como madres solteras o alguien con algún tipo de discapacidad. Además, en caso de que el contrato pase a ser fijo recibirá beneficios extras. En aquellos empleos en los que sea

---

<sup>22</sup> <https://careerswales.gov.wales/getting-a-job/jobs-growth-wales>

necesario una formación específica para garantizar el correcto desempeño de la profesión, el empleador tiene la obligación de proporcionarla mediante un tutor en el propio puesto de trabajo o a través de la asistencia a cursos de formación certificada. Aunque esta modalidad de contrato no tiene límite de edad, las autoridades públicas afirman que son los jóvenes el principal objetivo de esta medida. Esto se puede comprobar, por ejemplo, en que para tener acceso a este plan los menores de 29 años tan solo necesitan estar 2 meses consecutivos inscritos en los servicios de empleo, mientras que las personas a partir de los 30 años deben llevar como mínimo 6 meses<sup>23</sup>.

Una medida similar se ha adoptado también en **Irlanda** con el programa *JobsPlus Youth*. Del mismo modo que en el caso portugués, se impulsa a las empresas mediante incentivos económicos a que contraten a desempleados menores de 25 años con importantes obstáculos socioeducativos para incorporarse al mercado laboral y que lleven 4 meses en el registro de los servicios de búsqueda de empleo.

#### *5.2.1.5. Promoción del emprendimiento*

Por último, la promoción del emprendimiento es una herramienta que cada vez se está empleando más y que está compuesta por aquellas actuaciones que tienen como fin fomentar el emprendimiento, el trabajo autónomo y facilitar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales para que posteriormente estos proyectos acaben generando nuevos puestos de empleo.

Así, por ejemplo, la **República Checa** durante el periodo 2015-2020 está proporcionando, a través de fondos de la UE, apoyo a los menores de 40 años que tengan intención de desarrollar una actividad empresarial relacionada con la agricultura. La ayuda económica es de 45 mil euros máximo (European Commission, 2018b).

**Suecia**, mediante la Junta de Agricultura (*Jordbruksverket*), también apoya económicamente y técnicamente a los menores de 40 años que tienen intención de gestionar una granja o una empresa relacionada con el campo. También el propio Servicio

---

<sup>23</sup> <https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/contratoempleo/descContratoEmprego.jsp>



Público de Empleo de este país proporciona ayudas financieras durante 6 meses a los jóvenes que tienen un buen proyecto de nueva empresa, pudiéndose extender este periodo en aquellos casos en los que la persona tenga alguna discapacidad (European Comission, 2018a).

En **Portugal** en 2009 se creó el programa *Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego* alrededor de dos objetivos principales: por un lado, proporcionar apoyo a la creación de nuevas empresas y, por otro lado, fomentar el autoempleo de los trabajadores desempleados. Uno de los grupos a los que va dirigido especialmente este proyecto es a los jóvenes menores de 35 años con educación secundaria mínima que buscan su primer trabajo. La financiación que ofrece va desde los 20 mil euros a los 100 mil, lo que va acompañado con asesoramiento individualizado durante un periodo de dos años (European Commission, 2014).

Además, en 2015 el Gobierno portugués reforzó esta medida con la aprobación del programa *Investe Jovem*, que en esta ocasión está dirigida exclusivamente para la población joven menor de 30 años. Nuevamente ofrece apoyo financiero tanto para la inversión inicial de la nueva empresa como para la posterior creación de empleo en ella, a la vez que proporciona ayuda técnica con el fin de mejorar la estructura del proyecto y su consolidación<sup>24</sup>.

En **Polonia** también se están desarrollando distintas medidas enfocadas al emprendimiento. Uno de los programas es el denominado *First Business-Start-up Support*, que otorga préstamos a jóvenes estudiantes de titulaciones superiores que estén en el último año o bien a graduados que hayan obtenido su titulación como máximo hace 4 años desde el momento en el que se solicita esta ayuda. A partir de 2019 la financiación que se proporciona a los jóvenes alcanza los 20.500 euros y tienen un periodo de reembolso de 7 años.

---

<sup>24</sup> <https://www.portaldosincentivos.pt/index.php/criacao-do-proprio-emprego>

### 5.2.2. La Garantía Juvenil como herramienta principal de la UE contra el desempleo juvenil

El aumento de la tasa de desempleo juvenil de manera generalizada en toda la Unión Europea a raíz de la crisis económica hizo que las instituciones europeas desarrollasen una serie de medidas y ayudas complementarias a las políticas públicas de empleo propias de cada país para que fuesen aplicadas por ellos, con el objetivo de combatir y reducir la precariedad laboral juvenil. Una de las iniciativas que se propuso fue la “Recomendación sobre el Establecimiento de la Garantía Juvenil”, que tenía como meta proporcionar una oferta de empleo con buenas condiciones o, en su defecto, una formación a las personas jóvenes menores de 30 años que llevasen 4 meses sin empleo o que acabasen de terminar sus estudios (Cabasés *et al.*, 2017).

La Garantía Juvenil es un concepto de política de activación que se puso en marcha en los años ochenta en los Estados nórdicos, siendo Suecia el pionero en aplicarla en 1984. Más tarde fue implementada en Noruega en 1993 y posteriormente en 1996 Dinamarca y Finlandia desarrollaron medidas similares (Mascherini, 2012).

Esta idea parte de la base de que son las propias sociedades de estos países las que reconocen que tienen un compromiso implícito con las nuevas generaciones para garantizarles la ciudadanía plena, por lo que para ello es preciso que las instituciones públicas proporcionen las oportunidades y las herramientas necesarias para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral al tratarse de un proceso que, generalmente, es problemático para el sector juvenil.

Por su parte, a raíz de los buenos resultados que obtuvieron los países nórdicos con esta acción y ante los problemas de desempleo juvenil que tenía la UE, la Comisión Europea en diciembre de 2012 aprobó la “Iniciativa de Empleo Juvenil” con el fin de que el Consejo Europeo elaborase el marco general en el que transcurriría la garantía juvenil de la UE para proporcionar una nueva herramienta contra el desempleo juvenil. Esta acción tuvo dos ideas principales: por un lado, recopiló aquellas políticas activas de empleo propias de los países miembros que habían tenido resultados positivos sobre sus

sectores juveniles; y, por otro lado, determinó las diferentes directrices a seguir por parte de aquellos Estados que incorporasen este programa.

De esta forma, la Comisión Europea estableció seis líneas generales de actuación que el Consejo Europeo no solo ratificó en 2013, sino que también instó a los países a su aplicación mediante una Recomendación. Sobre estas instrucciones generales deberían basarse los sistemas de Garantía Juvenil de cada país y, además, resaltó la importancia de atender tanto a las circunstancias propias a niveles nacionales, regionales y locales como de tener presente la diversidad de los jóvenes a los que se destinan estas medidas. Las seis directrices son las siguientes:

**-Adopción de enfoques basados en la asociación.** Deben garantizar la implicación de los distintos actores de la sociedad, tanto públicos como privados.

**-Intervención y activación temprana.** Implementación de actuaciones preventivas que eviten la aparición de problemas laborales futuros.

**-Medidas de apoyo para la integración en el mercado de trabajo.** Acciones dirigidas tanto a la mejora de las competencias de los jóvenes como a la disminución de los costos de su incorporación laboral para los empleadores.

**-Usos de los Fondos de la Unión Europea.** Petición de emplear los instrumentos de financiación de la política de cohesión durante el periodo 2014-2020 para facilitar la incorporación de los sistemas de Garantía Juvenil.

**-Evaluación y mejora continua de los sistemas.** Todas las acciones deben tener un seguimiento constante para la identificación y la mejora de las posibles deficiencias que supone la instauración de un sistema nuevo y tan ambicioso.

**-Aplicación de los sistemas de Garantía Juvenil.** Se insta a los Estados miembros a la implementación, en la medida de lo posible y cuanto antes, de los sistemas de Garantía Juvenil.

Así, el 22 de abril de 2013 el Consejo Europeo adoptó formalmente la Garantía Juvenil y en los últimos años se ha posicionado como la política de empleo que más apoyo ha recibido y por la que más se ha apostado entre los países de la UE. Para ello se alentó a los Estados de la UE mediante la “Iniciativa de Empleo Juvenil” con el objetivo de destinar una partida presupuestaria de 6 mil millones de euros entre 2014-2016 para

aquellos países que tuviesen un desempleo superior al 25% en 2012 (Bussi y Geyer, 2013).

Una de las razones de ello es que la Garantía Juvenil constituye, según sus objetivos, una reforma estructural importante. Es decir, las autoridades públicas aceptaron que existían una serie de problemas estructurales que dificultaban la inserción laboral de los jóvenes y que, por lo tanto, era necesario desarrollar una política que incidiese sobre las distintas dimensiones que configuran el mercado laboral juvenil, para lo que era preciso el apoyo económico por parte de las instituciones europeas.

Finalmente, los países miembros presentaron sus planes de implementación de la Garantía Juvenil entre finales de 2013 y a lo largo de 2014. El documento correspondiente a cada país recoge los grupos hacia los que están dirigidos las distintas actuaciones, que por norma general serán los menores de 25 años. No obstante, la normativa europea da potestad a los países de extender la edad hasta los 30 años en aquellos casos que tengan un desempleo juvenil superior al 20% (Escudero, 2016). A su vez establecen una serie de actuaciones que son diferentes según cada caso, aunque de manera general se pueden encuadrar en las siguiente seis categorías:

- Educación y formación para el empleo.
- Nivelación de estudios y abandono escolar temprano.
- Servicios de intermediación laboral.
- Generación directa de empleo.
- Subvenciones a la contratación.
- Apoyo al emprendimiento.

Prácticamente ha habido unanimidad entre los países en todas las categorías excepto en la creación directa de empleo y el apoyo al emprendimiento, que en varios Estados no se han desarrollado medidas que puedan clasificarse en estos grupos (Tabla 5.2).

Tabla 5.2. Principales acciones según los programas de Garantía Juvenil de cada país

<i>País</i>	<i>Educación y formación para el empleo</i>	<i>Nivelación de estudios y deserción escolar</i>	<i>Orientación laboral</i>	<i>Creación de empleo</i>	<i>Subvenciones a la contratación</i>	<i>Apoyo a emprender</i>
<i>Alemania</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✓
<i>Austria</i>	✓	✓	✓	✗	✗	✓
<i>Bélgica</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Croacia</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Dinamarca</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✗
<i>España</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Estonia</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✗
<i>Finlandia</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✗
<i>Francia</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✓
<i>Hungría</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✓
<i>Irlanda</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Italia</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✓
<i>Letonia</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✓
<i>Lituania</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✓
<i>Luxemburgo</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Países Bajos</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✗
<i>Polonia</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✓
<i>Portugal</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✓
<i>R. Checa</i>	✓	✓	✓	✗	✗	✗
<i>R. Unido</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Rumanía</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✓
<i>Suecia</i>	✓	✓	✓	✗	✓	✗
<i>Eslovenia</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Eslovaquia</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Chipre</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Grecia</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Malta</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Finlandia</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fuente: Escudero y López (2015); actualizado a 2020 según la Comisión Europea.

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en&intPageId=3347>

Por ejemplo, con respecto a la educación y a la formación para el empleo **Dinamarca** ha desarrollado el proyecto *Building Bridge to Education* que tiene como objetivo establecer cursos puentes para aumentar las posibilidades de que los jóvenes menores de 29 años sin estudios puedan incorporarse y finalizar satisfactoriamente formaciones dirigidas a desempeñar profesiones.

Un destacado programa de orientación laboral es el *Career Entry Support by Mentoring* en **Alemania**, que tiene como fin guiar a los jóvenes durante el proceso de transición de la secundaria a la formación profesional o al mundo laboral. Para ello ofrecen apoyo y asesoramiento relacionado con la obtención de certificados que habiliten sus competencias, orientación profesional mediante charlas informativas personalizadas donde les enseñen cómo hacer un currículum o cómo comportarse para que tengan éxito en una entrevista de trabajo, etc.

Son numerosos los programas recogidos en torno a la Garantía Juvenil que inciden sobre los jóvenes que no están estudiando ni están formándose, ya que uno de los objetivos principales desde un primer momento era actuar sobre este grupo. Se puede citar el plan que ha implementado **Malta** denominado *NEET Activation Scheme (NAS I and II)*, que facilita capacitación, tutorías individualizadas, apoyo y empleos con remuneración para los jóvenes que no tengan empleo ni estén formándose oficialmente. En el caso de que las personas que soliciten ser parte de este programa tengan un nivel educativo considerable, se puede trabajar con ellos mediante el servicio de búsqueda de empleo o incluso dirigirlos directamente a trabajos adecuados a sus características<sup>25</sup>.

Los planes dirigidos a fomentar el emprendimiento han sido algo menores, aunque también existen algunos casos. Por ejemplo, en **Letonia** ofrecen asesoramiento técnico y económico sobre los proyectos de creación de una empresa para los menores de 30 años, concediéndose ayudas económicas de 3.000 euros en los casos que los servicios públicos de empleo consideren que se tratan de planteamientos con potencial de éxito. Si la idea es puesta en funcionamiento se proporciona asesoramiento y acompañamiento durante

---

<sup>25</sup>A todos estos programas se pueden acceder en: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1327&langId=en>

un año, junto con un subsidio económico durante los primeros 6 meses (Escudero y López, 2014).

#### *5.2.2.1. Resultados de la Garantía juvenil*

Después de 6 años desde la puesta en funcionamiento de la Garantía Juvenil la Comisión Europea asegura que se trata de un concepto de política que es una realidad en toda la UE y que ha reportado resultados satisfactorios a millones de jóvenes. En este sentido afirma que desde 2014 se han inscrito en los planes de Garantía Juvenil más de 5 millones de jóvenes cada año, lo que ha derivado en que más de 3,5 millones de aquellos aceptaran una oferta de empleo, se incorporaran a actividades formativas fomentadas por los programas de Garantía Juvenil o accedieran a prácticas laborales. En estos años se han reducido en casi dos millones los jóvenes que no trabajan ni estudian, mientras que el desempleo juvenil, que en 2013 era un 24%, ha descendido en 10 puntos porcentuales hasta situarse en un 14% en 2019.

A la luz de estos resultados la Comisión Europea concluye con rotundidad que, aunque es cierto que el ciclo económico que actualmente atraviesa la Unión Europea beneficia a las oportunidades laborales de la población joven, la Garantía Juvenil ha sido un importante estimulador del mercado laboral y que, además, ha sido clave en impulsar reformas estructurales necesarias y en llevar a cabo acciones innovadoras. Por todo esto la Comisión Europea manifiesta su completo apoyo y compromiso por seguir apostando y promoviendo la instauración de los sistemas nacionales de Garantía Juvenil<sup>26</sup>.

A pesar de lo anterior, algunos investigadores, aunque consideran la iniciativa como necesaria y oportuna, también han señalado que el éxito de la Garantía Juvenil depende en gran medida de las estructuras propias de los países y de la capacidad de los mismos de adoptar una intervención temprana sobre los grupos vulnerables, lo que hace que los resultados positivos esperados puedan variar entre un Estado y otro (Bussi y Geyer, 2013; Escudero y López, 2017).

---

<sup>26</sup> <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en>

A esto se une un informe del Tribunal de Cuentas Europeo (2017) que analizó la implementación de la Garantía Juvenil en siete países de la UE y que, aunque consideró que esta política ha tenido efectos positivos sobre los jóvenes, estimó que los resultados obtenidos hasta el momento por esos Estados distaban de estar cerca de las expectativas puestas en este programa. Sobre este hecho el Tribunal de Cuentas (2017, pp. 71-72) afirmó que “aunque los siete Estados miembros habían efectuado progresos en la aplicación de la Garantía Juvenil y se habían logrado algunos resultados, la situación actual, más de tres años después de la adopción de la Recomendación del Consejo, no está a la altura de las expectativas iniciales creadas con la puesta en marcha de esta garantía (...). Los Estados miembros no han creado estrategias adecuadas con resultados intermedios y objetivos claros para llegar a todos los ninis y, de hecho, algunos de ellos no se dirigieron a todos los jóvenes, como solicitaba la Recomendación del Consejo, sino solo una subpoblación”.

### 5.2.3. Las políticas de empleo contra el desempleo juvenil en España

#### 5.2.3.1. *La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016*

La situación laboral en España tras la crisis económica y los años de recesión hizo que las autoridades públicas aplicasen y desarrollasen distintas políticas para luchar contra los elevados niveles de desempleo de este país. Uno de los grupos sobre el que se puso especial énfasis fue el de los jóvenes, al tratarse de uno de los sectores de la población más afectado tanto por la pérdida de empleo como por el deterioro de las condiciones laborales tras la crisis económica de 2008.

Ante esta situación, el 12 de marzo de 2013 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobó el plan denominado “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016” que tenía como objetivo poner en marcha una serie de medidas para mejorar y facilitar la inserción laboral de los jóvenes españoles. Además, en el documento de presentación de este plan se afirmaba que el acceso al mercado de trabajo por parte de los jóvenes también tenía desequilibrios estructurales que no eran consecuencia directa de la coyuntura económica por la que atravesaba el país, por lo que manifestaba que las



acciones que englobaban este programa tenían el objetivo de incidir tanto en un problema como en el otro. Para ello la partida presupuestaria destinada a este plan durante el periodo 2013-2016 alcanzó los 3.485 millones de euros, de los cuales 1.750 millones estaban dirigidos a medidas de choque a corto plazo.

Este plan de acción se ajustó a las directrices que la Unión Europea recomendaba adoptar que, como indican Rodríguez y Ramos (2016, pp. 9-10) “está inscrito, desde un punto de vista operativo, en las iniciativas comunitarias, y específicamente en el marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud 2010-2018 y en los cinco objetivos de la Estrategia Europa 2020, así como en su iniciativa emblemática Juventud en Movimiento (*Youth on the Move*), de la cual depende la Iniciativa de Oportunidades para la Juventud”.

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven estableció los siguientes objetivos en torno a los que se clasificaban las medidas propuestas: mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor. Para cumplir con ellos se desarrollaron 100 medidas diferentes que estaban divididas en 2 grupos: por un lado 15 actuaciones que buscaban un impacto inmediato y que, por tanto, tuviesen efectos a corto plazo con el fin de estimular la contratación, el emprendimiento y la formación; y, por el otro lado, las otras 85 acciones que pretendían buscar resultados a medio y largo plazo y que estaban dirigidas a incidir sobre los problemas estructurales que afectaban al empleo juvenil, como el desequilibrio de la oferta y de la demanda del mercado laboral.

Todas y cada una de estas acciones estaban orientadas alrededor de tres ámbitos de intervención que a su vez se subdividían en 10 líneas de actuación recogidas en la Tabla 5.3.

Tabla 5.3. Líneas de actuación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 según su ámbito de influencia

Perspectiva de la oferta	Perspectiva de la demanda	Perspectiva institucional
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Educación</li> <li>-Formación</li> <li>-Mejorar el conocimiento de idiomas y el manejo de herramientas tecnológicas</li> <li>-Fomento del emprendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Estímulos a la contratación</li> <li>-Flexibilidad en el empleo</li> <li>-Colaboración público-privada en la búsqueda de un puesto de trabajo</li> <li>-Igualdad de oportunidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gestión de las Administraciones Públicas</li> <li>-Orientación y acompañamiento</li> </ul>

*Fuente:* Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

Estas medidas estaban enfocadas de manera general sobre los menores de 30 años y que, en el caso en que presentasen un grado de discapacidad superior al 32%, podían ampliarse hasta los 35 años. Además, dentro del sector juvenil se identificaban cuatro grupos prioritarios sobre los que se ponía la máxima atención:

a) Aquellos jóvenes que se encontraban buscando empleo activamente y que no contaban con una experiencia laboral previa superior a los 3 meses.

b) El resto de desempleados menores de 30 años, especialmente los que ya habían finalizado sus etapas formativas y encontraban obstáculos para incorporarse al mercado laboral por la falta de experiencia.

c) Jóvenes subempleados, es decir, que trabajaban de forma temporal o con contratos de tiempo parcial y querían disponer de un contrato a jornada completa.

d) Jóvenes inactivos pero que se encontraban formándose.

Entre las actuaciones dirigidas a mejorar la educación y la formación para aumentar la empleabilidad de las personas, este plan contemplaba la instauración de acciones formativas que proporcionasen la certificación profesional de las competencias desarrolladas en los mismos. A estos talleres formativos también se les añadió un compromiso de contratación, por el cual garantizaban que como mínimo un 30% de los participantes acabara contratado en distintos puestos de trabajo durante al menos 6 meses.

Por otro lado, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven quiso poner remedio a las alertas de la UE sobre el hecho de los jóvenes que habían abandonado

prematuramente la educación y que no tenían la formación adecuada para incorporarse al mercado laboral. Por esta razón instaba a fomentar programas en los que los jóvenes sin empleo que no tuviesen el título de educación secundaria obligatoria lo obtuviesen. Además, una vez que consiguiesen este título tendrían la posibilidad, si así lo solicitaban, de incorporarse a cursos de formación profesional para seguir potenciando sus competencias que les permitiese reintegrarse en el mercado laboral.

Respecto a las medidas aplicadas al emprendimiento destacaba la “Tarifa plana para jóvenes autónomos”, que tenía como objetivo el impulso y el fomento de las actividades emprendedoras de los jóvenes españoles. Para ello se garantizaba a todos aquellos que comenzasen un negocio y tuviesen menos de 30 años una cuota reducida de 50 euros (un 80% menos de la general) correspondiente a la Seguridad Social durante los primeros 6 meses. A partir de ese momento y hasta el cumplimiento de un año natural, la reducción sobre la base mínima supondría el 50% de la cuota general; y después de los 12 meses el descuento pasaría a ser del 30% hasta cumplir el año y medio desde que el joven se dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Para poder ser beneficiario de esta ayuda era necesario no tener trabajadores contratados.

Esta apuesta por el autoempleo también se vio apoyada por la medida “Emprende con crédito”, que permitía a los jóvenes menores de 30 años la compatibilización del subsidio por desempleo, en caso de tener derecho a él, durante 9 meses con el inicio de una actividad por cuenta propia. La idea principal de esta acción era que las personas que tuviesen la intención de poner en marcha un proyecto de emprendimiento no se viesen condicionadas a no hacerlo por el hecho de perder lo que posiblemente fuese su único ingreso en ese momento y porque no tuviesen beneficios económicos durante los primeros meses de funcionamiento del proyecto.

Otra medida que tuvo un papel importante en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven fueron los estímulos a la contratación. Principalmente con estas acciones pretendían alcanzar a aquellos jóvenes que carecían de experiencia laboral previa y que esto les estaba suponiendo un obstáculo casi insalvable en un mercado laboral con altas tasas de desempleo. De esta manera, se desarrolló el denominado contrato “primer empleo joven” por el que se incentivaba a las empresas a que contratasen a menores de

30 años que no tuviesen una experiencia laboral superior a los 3 meses. Las ventajas para que los empleadores se adhiriesen a esta modalidad era que en caso de que convirtiesen estos contratos en indefinidos tendrían durante 3 años una bonificación anual en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros; o en el caso de las micropymes si contrataban de forma indefinida a un menor de 30 años se les reducía la cuota empresarial por contingencias comunes en un 100%.

En relación con la finalidad anterior también se buscó una posible solución para aquellos jóvenes que contasen con una considerable formación pero que tampoco tuviesen experiencia laboral, lo que dificultaba más aún el acceso a un trabajo cualificado. Para ello se estimuló a las empresas a que contratasen a menores de 30 años con un contrato en prácticas mediante una reducción del 50% de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes.

En definitiva, puede intuirse que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 tuvo un interesante potencial para luchar contra el desempleo juvenil y mejorar la situaciones de los jóvenes en el mercado laboral. De hecho, las autoridades públicas<sup>27</sup> a principios de 2017 confirmaron que se renovarían y prorrogarían este plan debido a su éxito, por lo que pasó a ser la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2017-2020 (aunque posteriormente tendría un escaso recorrido debido al cambio de gobierno en España).

No obstante, a pesar de que el Gobierno determinase que se trató de una experiencia exitosa y con importantes resultados positivos, no se ha encontrado ningún estudio cuantitativo que valore el impacto que pudo tener la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en la situación laboral juvenil en España. Sobre este hecho Florentino Felgueroso (2019) afirma que “el hecho es que, tal como suele ser demasiado habitual en nuestro país, no se conoce ninguna evaluación rigurosa (con criterios científicos mínimamente aceptables) del impacto global de este Plan, ni de cuántas, ni cuáles de las 100 medidas han llegado a ser efectivas. Así, podemos quedarnos con las afirmaciones

---

<sup>27</sup> <http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2958>

ministeriales, o simplemente, dudar que estas medidas fueran realmente eficaces, al menos hasta que tengamos una evidencia empírica consistente”.

Y es que la evaluación de los programas de políticas públicas no es un ejercicio muy común en España como indica De la Rica (2015, p. 20): “Así como en numerosos países de nuestro entorno, desde mediados de los 2000 la evaluación de los diferentes programas se ha convertido en una práctica más utilizada, en España todavía el número de estudios que abordan esta tarea es muy limitado. La razón fundamental hay que buscarla en la falta de datos microeconómicos adecuados que permitan identificar adecuadamente el programa para después evaluarlo”.

Sin embargo, sí existen algunas investigaciones que señalan algunos problemas de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, como es el caso de Rodríguez-Soler y Verd (2018) que afirmaron que la línea de actuación en torno al emprendimiento y el autoempleo no guardaba una estrecha relación con la realidad laboral de España ni con el colectivo de jóvenes con mayores dificultades hacia el que estaba dirigido; los trabajos de Morales Ortega (2013) y Gómez y Ordóñez (2014) que criticaban el hecho de que no se contó con todos los agentes sociales como recomendaban las instituciones europeas; o Miguélez *et al.* (2015) que aseguraban que las distintas medidas de incentivación o las fórmulas de contratación de las que disponía este plan podían producir un incremento de la precariedad laboral entre el sector juvenil. Finalmente, sobre esta última cuestión Cavas Martínez (2016) concluyó que el empleo entre los jóvenes creció en los últimos años, aunque destacaba el aumento de la precariedad laboral en contra de un trabajo estable y de calidad según promulgaba la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

#### *5.2.3.2. El Sistema Nacional de Garantía Juvenil*

El Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil se aprobó en España en diciembre de 2013, acorde a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 y conforme al marco normativo de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea 2014-2020. En él se establecieron las bases del Sistema Nacional de Garantía

Juvenil (SNGJ), que comenzó a funcionar en septiembre de 2014 y que actualmente no ha sufrido modificaciones considerables<sup>28</sup>.

En el documento normativo del SNGJ se explica en qué consiste la Garantía Juvenil de la siguiente forma:

*“La Garantía Juvenil presentará un enfoque integral, preventivo y de atención temprana de todas las instancias que pueden contribuir a facilitar la mejora de la empleabilidad y la inserción en el mercado de trabajo de los jóvenes, de forma que, tras el periodo de implantación:*

*-Se esté en disposición de ofrecer a los jóvenes menores de 25<sup>29</sup> años que ni trabajen ni reciban formación que soliciten, por los medios puestos al efecto, atención de la Garantía Juvenil, una buena oferta de empleo o acción formativa, educativa, de formación profesional continua, de aprendizaje o prácticas, antes de los cuatro meses desde la solicitud y, en todo caso, una vez que se completen los trámites de comprobación de la información aportada y, en su caso, de finalización del perfil del solicitante.*

*-Se disponga de medidas o programas de actuación complementarias dirigidas a los jóvenes menores de 25 años que no estudian ni trabajan y se encuentran más alejados del mercado de trabajo, promoviendo su activación en colaboración con las entidades y agentes implicados”.*

Este plan se articula en torno a dos directrices que han tenido un peso muy reducido en las anteriores medidas aplicadas en España: por un lado, las actuaciones deben ser flexibles y adecuadas a los perfiles y necesidades específicas de los jóvenes que estén inscritos en el sistema; y, por el otro, las acciones adoptadas deben dirigirse con especial

---

<sup>28</sup> Algunas modificaciones como la eliminación de la necesidad de inscribirse en la Garantía Juvenil para los jóvenes que son demandantes de empleo. También se ha suprimido la necesidad de estar los 4 meses anteriores sin trabajo o sin formación, pudiendo inscribirse cualquier joven a la Garantía Juvenil pasado un día natural desde su última actividad laboral o educativa.

<sup>29</sup> La normativa Europea da potestad a los distintos Estados ante la posibilidad de ampliar el margen de edad hasta los 29 años siempre y cuando cumplan los requisitos específicos de la Garantía Juvenil y el país tenga una tasa de desempleo por encima del 20% (Escudero, 2016).

énfasis a los jóvenes con menos recursos y que presentan situaciones sociolaborales más delicadas (Rodríguez-Soler y Verd, 2018).

Así, entre sus medidas genéricas destacan: las relacionadas con la intermediación que tienen como objetivo la optimización de la activación temprana, la mejora de la orientación profesional, información laboral, etc.; las acciones formativas que están dirigidas a la obtención de aptitudes y competencias profesionales; las iniciativas destinadas a apoyar la contratación de los jóvenes, ya sea mediante ayudas en la cotización a la Seguridad Social, contratos formativos o apoyo a la contratación por un periodo mínimo de permanencia; y, por último, las actuaciones que tienen como objetivo favorecer al emprendimiento mediante servicios de apoyo a la creación de la empresa, bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, etcétera (Escudero, 2016).

A pesar de este ambicioso plan y de la cantidad de actuaciones que pueden mejorar la situación de los jóvenes respecto al mercado laboral, algunos investigadores, como Felgueroso y Jansen (2015), argumentaron que previsiblemente estas acciones no tendrían efectos inmediatos en los países del sur de Europa como España. Estos dos autores consideraban que la alta tasa de desempleo juvenil era una consecuencia de los problemas estructurales del mercado laboral y del sistema educativo, como se explicó anteriormente, y que, por tanto, enmendar estas deficiencias precisa de un periodo de tiempo mayor y de otra serie de reformas que se escapaban del alcance de la Garantía Juvenil. A esto Escudero (2016) añadió que para que este Plan tuviese el éxito esperado era necesario que el gasto público destinado a las políticas activas de empleo recuperasen, como mínimo, los niveles previos a la crisis económica.

Otra de las razones que se esgrimen para la escasa capacidad de atracción que ha tenido este proyecto sobre los jóvenes en España parte de la logística debido, entre otros motivos, a la poca visibilidad y a la reducida información que se ha proporcionado a la población al respecto, que hace que en muchas ocasiones desconozcan de qué se trata la Garantía Juvenil y cómo funciona, a lo que tampoco ha ayudado la débil estructura administrativa de los Servicios Públicos de Empleo españoles (Moreno Mínguez, 2017a). En este sentido Baviera Puig (2017, p. 13) afirma que “con todo, se considera que el Sistema Nacional de Garantía Juvenil no está dando el resultado esperado y que el número

de solicitudes de registro sigue siendo bajo. Hasta febrero de 2015, se habían registrado 211.290 jóvenes, de los que se estima que 59.281 encontraron un trabajo. Entre las dificultades se encuentra el propio sistema informático de registro; la falta de mecanismos de divulgación (aparte de la colaboración con algunas ONG) para identificar a los «nini», de modo que se inscriban en el sistema; y que no queda claro el papel de los servicios públicos de empleo autonómicos”.

Además, Rodríguez-Soler y Verd (2018) señalaron que en España las medidas aplicadas en torno al marco del SNGJ distaban del carácter de flexibilidad y adecuación a los perfiles específicos de los jóvenes que se defienden en los principios generales que inspiran a la Garantía Juvenil europea. Este hecho estaría condicionando los potenciales efectos de las acciones que se están desarrollando, debido a la rigidez y a la práctica ausencia de medidas dirigidas a los sectores juveniles más vulnerables, lo que pone en duda la efectividad de este plan.

De hecho, los primeros datos sobre los resultados de esta política muestran que no está siendo todo lo eficaz que se esperaba que fuese y que, sobre todo, son los jóvenes más vulnerables los que menos han sentido una mejora en su inserción laboral (Moreno Mínguez, 2017a; Rodríguez-Soler y Verd, 2018). En este sentido, Cabasés *et al.* (2016, p. 700) afirman que “la Garantía Juvenil ofrece pocas medidas innovadoras; más bien, promueve la precariedad y la redistribución del empleo existente y no muestra el potencial necesario para crear nuevas oportunidades de trabajo de calidad. Aunque la creación de nuevos empleos es exigida por diferentes organizaciones y tanto la Recomendación como el Plan Nacional español mencionan la creación de empleo como un objetivo, existen razones para cuestionar la efectividad de las medidas establecidas (...). Por el momento, podemos concluir que la Garantía Juvenil en su forma actual ofrece pocas posibilidades de lograr sus objetivos y de mejorar las posibilidades de los jóvenes de seguir una carrera profesional que les permita desarrollar un proyecto de vida digno”.

Especialmente crítico se mostró el Tribunal de Cuentas Europeo (2017) con los resultados obtenidos en un informe sobre la aplicación de la Garantía Juvenil. Este órgano concluyó que en los países examinados, entre los que se encontraba España, el rendimiento de este programa estaba muy lejos de las expectativas iniciales. Además, en



el caso español destacó no solo que se trataba del país en el que se producía un menor porcentaje de salidas positivas para los jóvenes una vez que acababan los programas relacionados con la Garantía Juvenil a los que se incorporaban, sino que también era el país que en el que a los seis meses un mayor porcentaje de jóvenes volvían a estar sin empleo o inactivos. Además, también indicaban que después de 12 meses las salidas positivas eran las que menos porcentaje de éxito presentaban con un 45%, mientras que en el resto de Estados un 63% de los jóvenes mantenían esta condición. A todo esto se añade la reprobación a la calidad de los datos que dificultaba en gran medida una correcta evaluación y el seguimiento de los jóvenes tanto durante el proceso como una vez finalizado, lo que impedía sacar conclusiones claras sobre los efectos conseguidos sobre la inserción laboral.

Y es que, indudablemente, uno de los problemas que presentan todas y cada una de las medidas aplicadas a lo largo de los años en España es la falta de evaluación, seguimiento y control de los resultados obtenidos por las políticas públicas adoptadas. Ni la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven ni el Sistema Nacional de Garantía Juvenil incluyen la evaluación como un elemento clave, lo que en muchas ocasiones puede hacer que las medidas aplicadas estén vacías de contenido y no conduzcan a soluciones. Los aspectos de evaluación que se han incluido en estos planes han estado orientados a comprobar la correcta implementación de las medidas, pero no a conocer si han producido una mejora real en la inserción laboral de los jóvenes españoles.

#### *5.2.3.3. El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021*

Finalmente, es preciso hacer una breve referencia al último programa de políticas activas de empleo dirigidas especialmente al sector juvenil que se ha puesto en funcionamiento en España: el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. Este conjunto de medidas fue aprobado a finales de 2018 y supuso la finalización de la prórroga de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, aunque es necesario destacar que ha tenido un escaso recorrido debido al adelanto electoral y a la posterior formación de un nuevo gobierno,

unos hechos que, al menos de momento, han paralizado su aplicación en todo el territorio español.

Este último plan de actuación está conformado por 50 nuevas medidas de políticas activas, para las que se destina un gasto total de 2.000 millones de euros, y establece ocho objetivos que se pretenden lograr mediante la aplicación de las distintas actuaciones:

- Establecer un marco laboral de calidad.
- Hacer protagonistas a las personas jóvenes de su proceso de inserción laboral.
- Incrementar la cualificación e inserción laboral de los jóvenes.
- Fomentar un modelo económico basado en la productividad y el valor añadido.
- Dotar a los Servicios Públicos de Empleo de los medios y recursos necesarios.
- Desarrollar una formación específica en igualdad de oportunidades entre géneros.
- Combatir el efecto desánimo de las personas jóvenes que no buscan empleo.
- Especial atención a los colectivos vulnerables.

Para alcanzar estos objetivos se establecen seis ejes distintos de actuación que son: i) orientación, ii) formación, iii) oportunidades de empleo, iv) igualdad de oportunidades, v) emprendimiento y vi) mejora del marco institucional.

Entre las actuaciones que recoge este plan de empleo juvenil destaca el programa *Orientajoven*, que tiene como objetivo la creación de una red de 3.000 profesionales que asesoren laboralmente a los jóvenes con sesiones informativas tanto generales como personalizadas. Gracias a estas sesiones, los orientadores laborales podrán establecer rutas de inserción laboral acordes a las características y a las competencias de la persona que deriven o bien en la captación de ofertas de trabajo, o bien en cursos formativos para mejorar las habilidades profesionales de los jóvenes y que posteriormente tengan más facilidades a la hora de incorporarse al mercado laboral. Además, a este programa se unen otras iniciativas que la complementan y la completan, como el hecho de disponer de 110 mediadores juveniles mediante la red SIJ-INJUVE para que también realicen funciones similares a los orientadores, o actividades de refuerzo sobre orientación laboral focalizadas exclusivamente en los jóvenes vulnerables que están en riesgo de exclusión sociolaboral.

Del mismo modo que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, este plan de empleo juvenil también desarrolla medidas dirigidas a la reducción de los niveles de abandono escolar prematuro y a solucionar los problemas de cualificación de aquellas personas que dejaron la educación sin tener siquiera el título de secundaria. Para ello también incluye programas destinados a que individuos con escasa formación y sin empleo se reincorporen al sistema educativo mediante programas de segunda oportunidad que se ajustan al ritmo de aprendizaje y a las características particulares de cada uno. Ponen especial atención en los jóvenes sin empleo entre 18 y 30 años que quieran acabar la ESO, en aquellos que ya tengan este título pero deseen cursar algún Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior, o en los jóvenes que no tengan empleo y pretendan adquirir cualificaciones profesionales certificadas que incorporen a sus CVs y les permita tener acceso a determinados puestos de trabajo.

Por otro lado, el Plan de Choque por el Empleo Joven quiere seguir fomentando las modalidades que complementan la formación y el empleo, ya sea mediante convenios propios con las empresas o ya sea potenciando la formación profesional dual. Sobre esta cuestión destaca la modalidad de contratación llamada “relevo generacional”, que es similar a la que se aplica en Francia. Tiene como objetivo garantizar la transmisión de conocimientos específicos por parte de los trabajadores que estén en situación de jubilación parcial hacia los jóvenes que sean contratados con este tipo de contrato. Además, pretende reducir la contratación temporal y los contratos a media jornada en los jóvenes, y regular mediante un estatuto las prácticas no laborales para evitar que se abuse de esta relación contractual y, al mismo tiempo, garantizar su carácter formativo, una protección social adecuada y el apoyo económico para los jóvenes que tengan un contrato en prácticas no laborales.

Pero, sin duda, uno de los aspectos más interesantes, y seguramente necesarios, son las medidas dirigidas a mejorar el marco institucional del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Este Plan valora como fundamental e indispensable esta herramienta para la situación laboral juvenil, pero afirma que es clave la implementación de una serie de modificaciones que reorienten el funcionamiento del SNGJ para asegurar mejores

resultados que los obtenidos, ya que considera que tiene un potencial mucho mayor que el mostrado hasta este momento.

De este modo, insta a llevar a cabo una simplificación del registro centralizado del SNGJ que facilite la inscripción de los jóvenes y permita una mejor coordinación administrativa entre los agentes que participan en ello. Además, esto está enlazado con otras acciones dirigidas a mejorar la participación de los interlocutores sociales para que realmente exista una sinergia entre todos los actores, un hecho que se presenta como clave en el programa original de la Garantía Juvenil y que recomiendan las instituciones europeas.

No obstante, unas actuaciones destacables y novedosas que recoge este Plan están dirigidas hacia una de las críticas más importantes que se le ha hecho a la Garantía Juvenil de todos los países miembros y especialmente a la de España: la falta de disponibilidad de datos y el escaso seguimiento posterior de los participantes y la evaluación de los resultados. Con este fin establece que la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del SNGJ se reúna como mínimo 1 vez al trimestre, y se contempla la creación de una agenda coordinada entre la Comisión y los interlocutores sociales. Además, para ello la medida 46 del programa pretende reforzar la coordinación interinstitucional entre las administraciones públicas incluidas en todo este proceso. Por último, plantea reforzar la periodicidad y la integridad de los datos que manejan las instituciones, para lo que también se establece la creación de distintos grupos de trabajo destinados al análisis de los datos obtenidos con el fin de identificar posibles problemas en la recopilación de los mismos y garantizar una total transparencia.

De este modo, todo parece indicar que las medidas que propone el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 responden a los problemas que presentan los jóvenes españoles en materia laboral. Ahora bien, aunque todas las actuaciones tienen cierto potencial, vuelven a adolecer de una evaluación sobre el posible impacto que puedan tener sobre las situaciones laborales juveniles, lo que dificulta el hecho de saber si se obtendrán o no los resultados esperados.

También es preciso indicar que muchas de las medidas que se explicitan en el documento son simples ideas que no explican cómo se desarrollarán ni cómo se

alcanzarán los objetivos propuestos más allá de las acciones genéricas que se describen. Sobre todo esto Felgueroso (2019) afirma que “sería más que deseable que, por primera vez, se evaluase su impacto de forma rigurosa, tanto en términos de eficacia como de eficiencia, en lugar de una mera recolección de indicadores poco útiles. De tal forma que el próximo Plan no se podría dejar de referir a la eficacia de estas medidas, y se podrían juzgar la nuevas medidas por su posible impacto, en lugar de por la buena intencionalidad. Por otra parte, ser más realista con los resultados de impacto esperados, también ayudaría a otorgar más credibilidad a estos planes, y valorar los logros alcanzados en su justa medida, es decir, debido a las medidas aplicadas, y no a las tendencias demográficas o al ciclo económico”.

En definitiva, después de las graves consecuencias de la crisis económica de 2008 la tónica común en toda la Unión Europea ha sido destinar importantes presupuestos para desarrollar programas con el objetivo de reducir los altos niveles de desempleo juvenil. Todos los países han aplicado distintas políticas activas de empleo que, además, han sido reforzadas desde la Unión Europea gracias al programa Garantía Juvenil.

España no ha sido menos, máxime teniendo en cuenta que actualmente tiene una de las mayores tasas de desempleo juvenil de toda Europa. Este hecho hizo que pusiese en marcha la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, incorporase a sus recursos la Garantía Juvenil tras la aprobación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para incidir sobre la situación laboral de los jóvenes españoles, prorrogase la anterior Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y más tarde se aprobase el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.

Sin embargo, las medidas aplicadas no han terminado de producir los resultados esperados e incluso en ocasiones han sido un factor colaborador del crecimiento de la precariedad laboral juvenil debido a la búsqueda de soluciones cortoplacistas que, en cambio, no producen ningún efecto concreto a largo plazo.

No obstante, no todas las acciones adoptadas para favorecer la inserción laboral juvenil han tenido resultados débiles o poco acertados. Por ejemplo, una de las medidas más oportunas por las que se ha apostado es sobre las acciones dirigidas a establecer contratos laborales que alternan la formación educativa con el desempeño de un empleo,

lo que ayuda a desarrollar habilidades y competencias específicas y, sobre todo, permite la adquisición de experiencia laboral a los jóvenes facilitando la inserción laboral de los mismo.

Además, es clave la apuesta por intentar lograr la cualificación de aquellos jóvenes que abandonan prematuramente la educación y que se encuentran con una formación insuficiente en un mercado laboral cada vez más exigente. De este modo, son convenientes todas las acciones destinadas a impulsar la reintegración al sistema educativo de aquellas personas que no tienen la educación secundaria obligatoria y que, posteriormente, se les anime a mejorar sus cualificaciones mediante ciclos formativos que favorezcan a su reincorporación laboral. Para todos estos casos la formación profesional dual puede resultar clave, como se explicó en las secciones anteriores.

#### 5.2.4. Recomendaciones en materia de política pública de empleo para el sector juvenil

Para finalizar este apartado, y enlazando con las conclusiones anteriores, se apuntan una serie de recomendaciones en torno a las actuaciones en materia de política de empleo juvenil sobre las que existe un consenso generalizado en la literatura académica:

- Los programas actuales para el fomento del empleo juvenil en España han sido víctimas de sus propias circunstancias y han puesto demasiado énfasis en posibles soluciones coyunturales más que en actuaciones que ajustasen los desequilibrios estructurales del mercado laboral español, a pesar de que en las exposiciones de motivos se afirmase lo contrario. Por esta razón es necesario la elaboración de medidas dirigidas a reducir la dualidad laboral que actualmente presenta el mercado de trabajo español y que afecta especialmente al sector juvenil

- Sobre la alta tasa de abandono escolar sí que se han adoptado medidas concretas en los últimos años, por lo que se considera una línea que se debe seguir con la idea de mejorar la cualificación general de la mano de obra española. Para ello hay que continuar desarrollando acciones que atraigan a los jóvenes desempleados sin formación a reincorporarse al sistema educativo.

-En conexión con lo anterior, se precisa que los programas que tienen como objetivo la reducción de la tasa de abandono prematuro de la educación no finalicen simplemente con la obtención de un título, sino que una vez acabados aprovechen la dinámica positiva que tienen los individuos y les ofrezcan cursos complementarios o de niveles superiores con la idea de que se mantengan en el sistema educativo y que tengan una formación continuada. Para que esto realmente funcione es necesario que exista una coordinación completa entre los distintos agentes sociales y económicos y las instituciones públicas.

-Sin duda, aunque se han desarrollado programas en la línea de los dos puntos anteriores, uno de los sectores más vulnerables y más difíciles de reincorporar tanto al sistema educativo como al laboral, y sobre el que no se ha puesto especial interés, son los jóvenes desempleados de larga duración. En el capítulo 3 se comprobó cómo en España un 26,5% de personas menores de 30 años llevan más de un año buscando trabajo, lo que en muchas ocasiones coincide con el hecho de no tener ni siquiera la educación secundaria obligatoria. Estos jóvenes suelen estar próximos a la exclusión laboral, ya que una desconexión temporal tan grande del mercado de trabajo junto con niveles formativos bajos los aleja más aún de las posibilidades de encontrar empleo y, a su vez, potencia el efecto desánimo. Por todo esto se hace especialmente importante diseñar medidas dirigidas a estimular a este sector vulnerable, ya sea a que mejoren su formación o a ofrecerles oportunidades laborales que les ayude a conseguir experiencia y recuperar la dinámica del mercado laboral.

-Uno de los grandes problemas que suelen tener los jóvenes a la hora de incorporarse al mercado laboral es la falta de experiencia previa, lo que en muchas ocasiones puede llegar a ser un círculo vicioso que se perpetúa. Por esta razón parece necesario diseñar programas que estén dirigidos a mejorar la experiencia laboral del sector juvenil y a ofrecerles la oportunidad que muchas veces se les niega.

-Un aspecto que parece fundamental es luchar contra la precariedad laboral creciente entre la población joven. Un elemento necesario a reducir son las bonificaciones a las contrataciones a tiempo parcial, siempre y cuando el uso de esta modalidad de contratación no esté justificada por la compatibilización con acciones formativas, y, en

cambio, proporcionar beneficios a aquellos empleadores que ofrezcan contratos estables y con buenas condiciones a los jóvenes.

-En lo que se refiere a la Garantía Juvenil parece primordial que las mejoras que propone el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 lleguen a cristalizar y a convertirse en una realidad, con el fin de que se saque el máximo provecho a esta herramienta. Para ello es necesario mejorar la personalización y la orientación laboral que se les ofrece a los jóvenes, o el desarrollo de potentes acciones informativas que den a conocer la Garantía Juvenil entre la población, ya que uno de los problemas que se le ha achacado en estos años es el escaso conocimiento que tiene sobre ella el sector juvenil.

-Por último, es fundamental incidir no solo sobre la necesidad, sino también la obligación de ofrecer herramientas de evaluación que permitan valorar el impacto, la eficacia y los resultados de las medidas aplicadas, algo que como se ha podido ver no es propio de España. Para ello es de vital importancia que se proporcionen datos completos y de calidad que no se limiten simplemente a ofrecer información sobre el éxito o no de la implementación de las acciones o de sus correctos desarrollo, sino que permitan mantener un seguimiento constante de las personas que son beneficiarias de las medidas y comprobar si realmente hay un efecto de mejora a largo plazo sobre la inserción laboral.

### **5.3. Políticas Públicas de vivienda para favorecer la emancipación juvenil**

Los programas orientados a facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes y, por ende, a favorecer la emancipación juvenil por lo general son escasos en la mayoría de los países europeos. Ante este hecho, esta sección se centra principalmente en la vivienda social como la solución más rápida y factible que tiene la administración pública para apoyar la independencia residencial de la población más joven.

No obstante, aunque son pocos sí que existen en determinados países algunos ejemplos de programas de vivienda destinados concretamente a favorecer el abandono del hogar familiar por parte de los más jóvenes. Por esta razón, primero se citarán brevemente algunos de estos planes con sus características más importantes y posteriormente se pasará al caso de la vivienda social.



### 5.3.1. Medidas aplicadas en la Unión Europea dirigidas a garantizar el acceso a la vivienda al sector juvenil

A pesar de que la vivienda social es una opción que debe dirigirse a sectores como el juvenil para garantizar su emancipación, el hecho de que otros colectivos también tengan derecho a acceder a una hace que en muchas ocasiones los jóvenes sean desplazados al mercado privado en caso de querer independizarse de sus familias. Esto ha hecho que en Francia, por ejemplo, más del 50% de los menores de 30 años actualmente haya tenido que acudir al sector privado de alquiler, mientras que las viviendas sociales solo son ocupadas por un escaso 10% y sigue disminuyendo año tras año (Pittini *et al.*, 2019). Las razones que este informe esgrime son la baja rotación que existe entre los inquilinos sociales, la mayor preferencia que tienen otros grupos para ser beneficiarios de una vivienda social, la falta de viviendas en lugares estratégicos como próximas a las urbes donde están las universidades o las mayores oportunidades de empleo, o la dificultad de gestionar un grupo con alta movilidad en una opción que tiene un carácter temporal más perenne.

Por esta razón, aunque las viviendas sociales pueden ser asignadas a los jóvenes, muchos países han desarrollado en los últimos años una serie de proyectos dirigidos a favorecer exclusivamente a este sector poblacional con opciones como viviendas únicamente para menores de 30 años, residencias juveniles, etc. Algunos de los proyectos que se han desarrollado son los siguientes (Pittini, 2018):

-**Troyes Habitat** (Francia). El municipio francés de Troyes estableció entre sus objetivos convertirse en una ciudad de referencia para los estudiantes universitarios. Para ello encargó un proyecto a la empresa pública de vivienda Troyes Habitat con el fin de que proporcionase viviendas asequibles y adaptadas para los jóvenes que facilitasen la instalación de estos en la ciudad. Entre las ventajas que ofrecen destacan las siguientes<sup>30</sup>:

- Alquileres adaptados a todos los presupuestos.
- Vivienda aprobada para obtener subsidio de vivienda o asistencia personalizada.

---

<sup>30</sup> <https://www.troyes-habitat.com/vous-etes-etudiant>

- Vivienda idealmente ubicada cerca de los centros de interés y transporte público.
- Todo el equipamiento doméstico necesario para una vivienda.
- El 50% de los alojamientos están completamente amueblados.
- Servicio de limpieza en caso de contratarlo.
- Posibilidad de alquilar plazas de garajes o aparcamiento.

-**Espacil Habitat** (Francia). Se trata de una empresa social francesa para la vivienda que fue fundada en 1956 y está encargada de construir viviendas sociales y de la gestión de sus alquileres. A principios de diciembre de 2019 contaba con 24.000 unidades repartidas por más de 276 municipios de Bretaña, Ile-de-France y Loire-Atlantique, de las cuales un 23% estaban reservadas para los jóvenes. Uno de sus proyectos es facilitar a los estudiantes y a los menores de 30 años que estén empleados una opción factible de independizarse a través de residencias. Estas residencias pueden ser exclusivas para estudiantes, solo aceptar a trabajadores o bien mixtas. Las viviendas son administradas en cada residencia por un equipo propio de la empresa social, y disponen de alojamientos de distintos precios y características según las necesidades de los jóvenes. El contrato que firman tiene una duración de un año para aquellos que estén llevando a cabo algún tipo de formación educativa y tienen el derecho a que se renueve al año siguiente si mantienen la condición de estudiante. Para los jóvenes trabajadores el contrato de arrendamiento que se firma tiene una duración de un mes que se irá prorrogando automáticamente hasta los 24 meses como máximo<sup>31</sup>.

-**Rochadle** (Holanda). Rochadle es un proveedor de vivienda social que facilita a las personas de bajos ingresos una vivienda en Ámsterdam. Uno de sus proyectos es el *Jongerenwoning* (hogar juvenil) que ofrece contratos de alquiler de 5 años de duración de casas asequibles de 50 metros cuadrados para las personas de 18 a 28 años. Además, para aquellos jóvenes que tengan entre 18 y 23 años se fija un límite del precio del alquiler que en ningún caso sobrepasa los 432 euros, mientras que a partir de los 24 años este tope desaparece. Para garantizar que todo el mundo tiene las mismas oportunidades se sortean estos hogares juveniles, por lo que la fecha de demanda de los solicitantes no es

---

<sup>31</sup> <https://www.espacil-habitat.fr/devenir-locataire/etudiants/>

determinante. Están dirigidas para jóvenes trabajadores y para estudiantes que reciben formación educativa con una duración superior al medio curso escolar<sup>32</sup>.

**-Alojamiento para estudiantes como parte de la regeneración urbana** (Reggio Emilia, Italia). En los últimos años esta localidad italiana ha elaborado un plan de rehabilitación para el casco histórico y, a su vez, para estimular la economía de esta ciudad. En línea con esto la empresa ACER, que es la encargada de la gestión de las viviendas públicas en esta localidad, ha desarrollado un programa internacional de oferta de hasta 400 alojamientos en residencias para estudiantes con la finalidad de impulsar la vida universitaria. Los precios del alquiler son bajos e incluyen todos los gastos comunes a cualquier vivienda particular. Esta acción ha repercutido en el mercado privado de alquiler que ha visto disminuir los niveles de precios. Además, también ha servido de estímulo para otras actividades empresariales que se han instalado alrededor de estas residencias, como restaurantes, bares o comercios, y que están en negociaciones con ACER para firmar convenios que favorezcan a los estudiantes.

**-Ospitalità Solidale** (Milán, Italia). Se trata de un proyecto realizado por la cooperativa DAR=CASA que tiene sus orígenes en 2014 y que está diseñado para facilitar el acceso a una vivienda a menores de 30 años que estudian o trabajan. Esta cooperativa reformó una serie de pisos que se encontraban vacíos en una comunidad en decadencia con el objetivo de alquilarlos a jóvenes a precios bajos a cambio de trabajos voluntarios en las zonas comunes. Hasta el momento se han alquilado 24 pisos a un total de 40 jóvenes y ha producido resultados positivos al vecindario, ya que los vecinos aseguran que desde que esta iniciativa se puso en marcha la sensación de seguridad ha aumentado y el sentimiento de comunidad ha experimentado un importante crecimiento gracias a las actividades que los nuevos jóvenes inquilinos han desempeñado con sus vecinos de edades más avanzadas.

**-JobbEtt** (Halmstad, Suecia). En 2014 la empresa municipal sueca de vivienda local HFAB diseñó el programa *JobbEtt* para los jóvenes de 18 a 26 años que no estuviesen empleados ni recibiendo ningún tipo de formación educativa ni profesional.

---

<sup>32</sup> <https://www.rochdale.nl/aanbod/overig-aanbod-huur/jongerenwoning>

El objetivo principal de este proyecto era capacitar a estos jóvenes, ayudarles a desarrollar autonomía personal y a facilitarles la independencia residencial para evitar las potenciales situaciones de exclusión social en las que pueden derivar estas circunstancias. El funcionamiento se basa en que un empleado del servicio público de trabajo localiza a jóvenes con estas características y les ayuda a encontrar empleo o a incorporarse a cursos de capacitación profesional. De este modo, se les ofrece un contrato de alquiler de 9 meses que posteriormente se puede extender su duración hasta convertirlo en un contrato estándar. Además, HFAB facilita un asesoramiento financiero personalizado, apoyo social y oportunidades de capacitación.

-**Homma Himaan** (Helsinki, Finlandia). Se trata de una iniciativa en colaboración entre el Departamento de Juventud de Helsinki y los proveedores de vivienda social de esa ciudad. Es un servicio digital que ofrece a los jóvenes de 18 a 26 años la oportunidad conjunta de acceder a una vivienda y tener un empleo a tiempo parcial en la comunidad donde está situado el alojamiento. Los jóvenes tienen un horario determinado y son durante esas horas en la que los residentes les encargan pequeñas tareas adaptadas a sus capacidades y que están relacionadas directamente con la comunidad, pudiendo ir desde actividades administrativas a ejercer de conserje de mantenimiento o a brindar ayuda a las personas mayores. De este modo se consiguen dos resultados: por un lado, se facilita la emancipación juvenil y, por otro lado, se propicia que los jóvenes sean colaboradores directos con el bienestar de la comunidad a la que se incorporan<sup>33</sup>. La idea es que esta iniciativa se extienda a todo el país.

-**El concepto Izidom** (Francia). La empresa francesa de viviendas Vilogia creó esta idea para proporcionar una solución a aquellos jóvenes que por sus características laborales o por sus estudios tienen una alta movilidad que les hace no pasar largas temporadas en una misma ubicación, una situación que muchas veces dificulta que encuentren alojamiento debido a contratos de alquiler pocos flexibles. De este modo, han puesto en funcionamiento una serie de residencias que cuentan normalmente entre 10 y

---

<sup>33</sup><https://kojamo.fi/en/news-releases/lumo-home-resident-in-roihuvuori-works-for-the-good-of-the-neighbourhood/>

40 habitáculos de unos 30 metros cuadrados completamente equipados, con todos los servicios necesarios y con una buena localización respecto a los centros urbanos. Se facilitan procedimientos administrativos sencillos, contratos flexibles y con precios asequibles. La duración del alquiler puede ir desde un mes hasta los dos años, y los precios varían dependiendo del área donde esté situada. La prioridad de entrada es definida por la propia empresa y se establece según el siguiente criterio: jóvenes de 18 a 26 años que acceden a su primer empleo, aprendices de la misma edad que tienen un contrato de prácticas a largo plazo, emprendedores de hasta 30 años y por último se considerarán también estudiantes que presenten dificultades económicas, no pudiendo en ningún caso ocupar más de un 20% de la capacidad total de la residencia<sup>34</sup>.

**-Solución cooperativa para la vivienda juvenil por la empresa Riksbyggen<sup>35</sup>** (Gotemburgo, Suecia). Este proveedor de vivienda sueco aprobó un proyecto de construcción de 250 apartamentos en el centro de Gotemburgo, cuya gran novedad es que por primera vez un programa así está dirigido exclusivamente a jóvenes de 18 a 30 años que no tengan suficiente solvencia económica para permitirse vivir en las zonas céntricas de esta ciudad. La financiación ha sido obtenida a través de un préstamo de un banco comercial, aunque las autoridades públicas han ofrecido una garantía de crédito. De este modo, los beneficiarios de esta medida que pasen a ser parte de la cooperativa tendrán que hacer un pago inicial en torno a los 20.000-30.000 euros, que será como una especie de paquete accionarial que les certifica que son parte de la cooperativa, y luego pagarán una mensualidad asequible. En el momento que decidan mudarse deberán vender este “paquete accionarial” a la cooperativa, con la idea de que estas viviendas no pierdan la función para la que se construyeron como podría ocurrir si fuesen vendidas en el mercado privado.

---

<sup>34</sup> <https://blog.vilogia.fr/logement-jeunes-izidom-studom/>

<sup>35</sup> <https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/about-us/>

### 5.3.2. La vivienda social como elemento favorecedor de la emancipación juvenil

Los sistemas residenciales de los países en los que la emancipación juvenil se produce a edades más tempranas están caracterizados generalmente por tener un elevado porcentaje de vivienda social. La razón de ello es que este modo de acceso a la vivienda es una alternativa decisiva a la hora de asegurar unos trayectos residenciales estables a los grupos sociales más desfavorecidos de la población.

El concepto de vivienda social en Europa difiere según la legislación de cada país. Por este motivo a lo largo de esta sección se considerarán como tales aquellas viviendas que hayan sido subsidiadas por el Estado, ya sea en modo de propiedad o de alquiler, que son incorporadas al parque de vivienda con precios inferiores a los establecidos en el mercado privado y a las que se accede mediante un contrato que proporciona seguridad y estabilidad a la persona beneficiaria.

Además, como se evidenció en el capítulo 1, los sistemas de vivienda social han evolucionado de manera distinta en Europa, mostrando diferencias de tamaño, de régimen de tenencia o de a qué grupos poblacionales están dirigidas este tipo de viviendas (Hegedüs *et al.*, 2013). Esto ha hecho que se conforme la siguiente clasificación sobre la vivienda social según sus características (Universidad de Málaga, 2015):

**-Vivienda social de tipo residual:** esta modalidad es característica de Reino Unido e Irlanda, y también está siendo el modelo típico de muchos de los países que se están incorporando en los últimos años a la Unión Europea, como Estonia, Chipre, Hungría o Letonia. El objetivo que establecen estos países es la satisfacción de vivienda para aquellos grupos sociales que están en riesgo de exclusión social, es decir, es tratada como el último recurso disponible para cubrir las necesidades de aquellas personas que por sí mismas no pueden acudir al mercado a proveerse de este bien necesario.

**-Vivienda social generalista:** se trata de una concepción más flexible que la anterior, ya que no está focalizada en determinados grupos y pone el foco de atención sobre todas las personas que no tienen los recursos económicos suficientes, no únicamente en colectivos excluidos. Las promociones de vivienda social suelen tener incidencia sobre la oferta de vivienda en el mercado inmobiliario, aunque su capacidad

de influencia está muy ligado al tamaño real del parque público que tenga cada país. Es característico de países como España, Alemania, Austria, Francia o Finlandia.

**-Vivienda social universal:** tiene como objetivo ser un sólido complemento del mercado general, puesto que toda la población tiene acceso a ella. Por esta razón también recibe el nombre de “vivienda no lucrativa de interés general”. En esta ocasión el Estado sí pretende influir de manera considerable sobre el mercado general de vivienda y corregir los desequilibrios que presenta al proporcionar una oferta de precios bajos que la mayoría de las veces guarda estrecha relación con el costo de la construcción y no con el precio del mercado. Al tener acceso a ella toda la población se establecen listas de espera en las que el orden suele establecerse mediante fecha de inscripción en el registro de demandantes. Esta es la modalidad típica de la vivienda social en Dinamarca o Suecia

Respecto a los criterios designados a la hora de poder acceder a una vivienda social, en la gran mayoría de las veces la norma general que se establece es el nivel de renta, aunque en algunas ocasiones, como Austria, los límites son muy altos por lo que la mayoría de hogares puede solicitar una.

A pesar de estas diferencias sí que existe una tendencia común en el parque de vivienda pública de todos los países de la Unión Europea, y es que aproximadamente desde 1980 se ha producido una contracción de la vivienda social de manera generalizada (Scanlon *et al.*, 2015).

En lo que respecta a España, este régimen de acceso a la vivienda nunca ha sido una apuesta real y su uso ha sido muy residual. Por esta razón, a continuación se realizará una revisión sobre las características de la vivienda social en España para contextualizar este régimen de tenencia en este país. Posteriormente se destacarán algunas medidas aplicadas en la Unión Europea que se han desarrollado para garantizar el acceso a la vivienda al sector juvenil, con el fin de identificar posibles opciones o parámetros a seguir por parte de las administraciones públicas españolas que puedan favorecer a la emancipación residencial de los jóvenes españoles.

### *5.3.2.1. La vivienda social en España*

El concepto de vivienda social en la legislación española no existe como tal, sino que son definidas como “viviendas protegidas” o “viviendas de protección oficial”. Para que una vivienda pase a ser catalogada bajo este concepto es necesario que cumpla una serie de requisitos específicos que establecen los planes de vivienda aprobados por el gobierno central. Normalmente, estas condiciones están relacionadas con que la vivienda tenga unos determinados parámetros de calidad, tamaño, precio o que vaya a ser la residencia habitual de la persona que accede a ella. Sobre esta cuestión las comunidades autónomas disponen de cierto margen para definir qué son viviendas protegidas y que no, aunque si bien es cierto que en ninguna región de España una vivienda social nunca será considerada como tal en aquellos casos que tenga una dimensión menor a los 90 metros cuadrados (Universidad de Málaga, 2015).

No obstante, una condición indispensable para la consideración de vivienda protegida es que el Estado haya subsidiado mediante préstamos la compra, la construcción o la renovación de la vivienda. Este hecho introduce otra de las particularidades de esta modalidad en España en comparación con sus homólogos europeos: una orientación marcada principalmente hacia la propiedad como régimen de tenencia de la vivienda social.

Sobre esta cuestión Pareja-Eastaway y Sánchez-Martínez (2017, p. 125) afirman que “tanto la dependencia del sistema de vivienda como la configuración de un conjunto de políticas que favorecen la propiedad en detrimento del mercado de alquiler, y especialmente de la renta social [vivienda], ha dado lugar a un escenario peculiar en el que la vivienda social se asocia tradicionalmente con la propiedad en lugar de los mercados de alquiler, ya sean públicos o privados. Por lo tanto, la provisión social de vivienda se entiende básicamente como la posibilidad de subsidiar la adquisición de una vivienda o la construcción de viviendas bajo ciertos requisitos a un precio regulado mediante un complejo conjunto de esquemas implementados a través de sucesivos planes de vivienda estatales y regionales”.



Todas las empresas, desde las constructoras privadas a asociaciones públicas u organizaciones sin ánimo de lucro, tienen acceso a las ayudas económicas que las instituciones públicas destinen para el desarrollo de proyectos de vivienda protegidas. El proyecto inicialmente es evaluado sobre los planos y se le otorga la clasificación provisional de protegida, pero hasta que no se ha finalizado por completo y las viviendas están disponibles para ser habitadas la entidad competente no dictaminará de manera oficial una resolución final sobre si es una vivienda protegida oficial o no. Una vez que la administración pública insta a elevar como definitiva la consideración de la vivienda como protegida, se ofertará en el mercado inmobiliario a un precio inferior al de la vivienda libre.

La financiación para estos proyectos queda establecida en el Plan Nacional de Vivienda, que a su vez puede verse reforzada por los presupuestos regionales en caso de que la comunidad autónoma correspondiente decida destinar gasto público a esta acción, llegando a existir la posibilidad de que el gobierno autonómico financie proyectos de viviendas protegidas de manera exclusiva con los fondos autonómicos. Además, el Estado también establece acuerdos con bancos comerciales para que las empresas recurran en caso de necesitarlo a préstamos de crédito privado con condiciones favorables, como laxitud en los periodos de pago, tasa de interés reducida, etc.

Respecto a quién tiene derecho a acceder a una vivienda protegida, en España la vivienda social se encuadra en la categoría generalista, por lo que se presta atención a los grupos más vulnerables y al nivel de ingresos que las instituciones públicas establecen como límite. A su vez, algunos grupos sociales tienen prioridad, como las personas con discapacidad, y nuevamente los gobiernos autonómicos tienen cierto margen para añadir requisitos de acceso, por lo que los criterios de asignación no son homogéneos en todo el territorio español. Lo que sí establece la normativa es que la persona demandante de una vivienda protegida no puede tener otra vivienda en propiedad o haber recibido financiación por parte del Plan de Vivienda en los últimos 10 años (Pittini *et al.*, 2012).

El plazo del régimen de protección de estas viviendas tiene una duración aproximada de 30 años, momento en el que pierden la condición de protegidas y pasan a ser tratadas como viviendas libres. Además, existen una serie de mecanismos

administrativos que en determinados casos permiten descalificar la vivienda protegida antes del cumplimiento de este periodo de tiempo. Y esto ha sido uno de los grandes problemas que ha lastrado a la vivienda social en este país, ya que las viviendas protegidas no constituyen un stock estable a lo largo de los años debido a que tarde o temprano estas viviendas se incorporan al mercado privado. Este hecho ha producido dos resultados claros que están correlacionados: una demanda muy superior a la oferta de vivienda social y la necesidad constante de construir nuevas viviendas protegidas (Pareja-Eastaway y Sánchez-Martínez, 2017).

Además, como consecuencia directa de la crisis económica se ha reducido más aún el parque social que tiene España. De esta manera, el gasto público destinado por las administraciones públicas al fomento de la vivienda social ha disminuido constantemente debido a la situación financiera por la que atravesaba el Estado y las comunidades autónomas. Pero, también, hay que añadirle la privatización que se ha producido de parte del parque social bajo la argumentación de las dificultades económicas que tenían las instituciones públicas, lo que ha dado lugar a la venta de un importante número de viviendas protegidas principalmente a empresas privadas (Pareja-Eastaway y Sánchez-Martínez, 2017).

Ante esta situación y los graves problemas relacionados con la vivienda que tuvo España durante esos años, como el considerable incremento de la exclusión residencial o el aumento de los lanzamientos hipotecarios, parece que la tendencia por fomentar la vivienda en protección oficial en propiedad cambió a favor de impulsar el alquiler social. De este modo, el Plan de Vivienda 2013-2016 por primera vez excluyó la promoción y la construcción de viviendas protegidas que fuesen a ser vendidas. Al mismo tiempo estableció un alquiler social máximo de 600 euros mensuales, a la vez que aprobó también un subsidio de ayuda directa al pago del alquiler para aquellas personas con especiales problemas socioeconómicos que llegaba a cubrir hasta el 40% de la mensualidad.

Y no solo eso sino que, además, este Plan planteó una serie de medidas dirigidas a estimular la construcción de viviendas de alquiler social en terrenos públicos a través de unos mecanismos coordinados de subsidios que encuadraban a empresas privadas y a organismos públicos. No obstante, Pareja-Eastaway y Sánchez-Martínez (2017)

manifestaron que aunque esto podía ser un punto de inflexión clave para el establecimiento de un parque social de vivienda sólido en España, estos esquemas de subsidios a la construcción presentaron problemas desde su aprobación debido a la falta de recursos económicos por la coyuntura de las finanzas españolas durante esos años, a la falta de experiencia por parte de los proveedores en esta modalidad de vivienda y a que la normativa española sobre vivienda social no estaba correctamente desarrollada para gestionar y administrar de manera óptima un stock de viviendas públicas.

El Plan de Vivienda 2013-2016 se prorrogó para que fuese efectivo también en 2017 mediante el Real Decreto 637/2016. Ya en 2018 se aprobó el actual Plan de Vivienda 2018-2021 por el Real Decreto 106/2018, que nuevamente confirmaba este giro en el enfoque de la vivienda protegida oficial como expresa textualmente en el apartado I: “Así, el Plan Estatal 2013-2016, prorrogado durante el ejercicio 2017 por el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, se centró en las ayudas al alquiler y la rehabilitación, sin fomentar con ayudas públicas la adquisición de viviendas ni la construcción de nuevas viviendas, salvo que se tratara de viviendas públicas en alquiler. Este planteamiento, en términos generales, fue compartido de forma unánime por todas las comunidades autónomas, los agentes y asociaciones profesionales del sector y la ciudadanía en su conjunto”.

De este modo, en el apartado II del texto original del Plan de Vivienda 2018-2021 se afirma que se mantiene firme la decisión del cambio de modelo ya iniciado con el anterior Plan de Vivienda y que, por tanto, se desarrollarán medidas dirigidas a fomentar el alquiler y la rehabilitación. En consonancia con este hecho, el nuevo Plan de Vivienda establece una serie de objetivos ambiciosos entre los que destaca el brindar ayuda a las personas que estén teniendo dificultades para pagar los préstamos hipotecarios de las viviendas protegidas.

Además, también en el artículo 20 de este Real Decreto se establece la constitución de los fondos de viviendas para alquiler social mediante convenios de colaboración público-privada. La idea principal de esta medida es que las entidades de crédito que sean propietarias de viviendas vacías las incorporen al parque público a través de un convenio marco suscrito con el Ministerio de Fomento. Principalmente están destinadas a ser

ocupadas por aquellas personas que sean objeto de lanzamiento hipotecario o desahucio de su vivienda habitual, ofreciéndoles un alquiler social de 3 años de duración con un precio inferior como mínimo a los 400 euros mensuales. A su vez, se proporcionará un subsidio de hasta el 100% de la renta de alquiler (80% el Ministerio de Fomento y 20% la comunidad autónoma correspondiente).

No obstante, aunque la finalidad de esta actuación está dirigida a la ampliación del parque público de vivienda del país, a la oferta de una alternativa habitacional a aquellas personas especialmente vulnerables que sufran un lanzamiento hipotecario y a dar una posible solución al importante número de viviendas vacías que tiene España, no deja claro cuáles serán las herramientas que tendrán a su disposición las administraciones públicas para que consigan que las entidades privadas de crédito cedan las viviendas en propiedad que tienen desocupadas. Esto hace pensar que esta medida pueda quedar vacía de contenido y que carezca de un alcance significativo debido a la dependencia casi exclusiva de la buena voluntad de la banca a la hora de transferir sus viviendas a estos fondos.

Por último, este Plan de Vivienda por primera vez destaca de manera explícita una especial atención a la situación residencial de los jóvenes y manifiesta que sus objetivos están orientados particularmente a este sector al tratarse de uno de los grupos sociales con más problemas de acceso a una vivienda como consecuencia, según argumentan, de que las dificultades del mercado laboral han hecho especial mella en el sector juvenil. Sobre esta cuestión expone explícitamente lo siguiente: “El nuevo Plan también se orienta de un modo particular a los jóvenes, atendiendo a la realidad social de los últimos años en la que un segmento de población joven ha sufrido con mayor intensidad el problema del paro y ha tenido y tiene mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo. En este contexto, el Plan Estatal 2018-2021 ofrece un programa específico cuyo objeto es ayudar a que los jóvenes puedan afrontar la emancipación y la formación de nuevos hogares y acceder a una vivienda que se ajuste a sus necesidades<sup>36</sup>”.

---

<sup>36</sup> <https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf>

En este sentido, en primer lugar, incluye un programa dirigido a facilitar la incorporación de los jóvenes a una vivienda mediante el alquiler que podrá llegar a cubrir hasta el 50% de la renta mensual siempre y cuando el contrato de alquiler no sea superior a los 600 euros, y un 30% en los casos que supere este valor hasta los 900 euros.

Por otra parte, ofrece una ayuda directa de hasta 10.800 euros a la compra de una vivienda a los menores de 35 años en aquellos municipios que tengan un censo inferior a los 5.000 habitantes. Y, por último, las ayudas destinadas a fomentar los planes de rehabilitación, eficiencia energética y sostenibilidad en vivienda se incrementarán en un 25% del importe original de la ayuda en los casos en que el beneficiario sea una persona joven.

Sin embargo, a pesar de que estos objetivos están dirigidos a apoyar la emancipación juvenil quedan algunas dudas sobre los posibles resultados que pueda obtener este Plan de Vivienda. Una de las razones es que el mercado de alquiler privado en España en los últimos años ha mostrado un importante desfase entre la demanda y la oferta, lo que ha hecho que el precio prácticamente en todas las ciudades españolas haya aumentado hasta niveles tan altos que aún con las ayudas públicas es complicado efectuar los pagos mensuales; por no hablar de la dificultad que conlleva el encontrar una vivienda en determinados municipios que imposibilita una emancipación estable o que los destina a alojamientos que en muchas ocasiones rozan la insalubridad.

Además, el segundo tipo de ayuda en cierta manera se aleja del fomento del alquiler ya que estimula la propiedad, aunque si bien es cierto que esta medida está correlacionada con el objetivo de luchar contra la despoblación que están sufriendo muchas localidades españolas. Y respecto a la última acción, aunque puede mejorar la habitabilidad de muchos alojamientos a los que acceden los jóvenes en cambio la incidencia que tiene sobre la emancipación juvenil es más reducida puesto que se trata de una medida posterior al hecho de independizarse.

A modo de conclusión, se puede determinar que la vivienda social en España no se presenta como una alternativa real para la población española lo que, sin duda, repercute negativamente de manera directa sobre la emancipación juvenil. Esto se ha producido porque nunca ha sido una apuesta real por parte de las autoridades públicas y se ha optado

por estimular el mercado de vivienda libre dejando de lado otros regímenes de tenencia. Además, a esto se une que cuando se han desarrollado proyectos de vivienda sociales han estado dirigidos principalmente a la propiedad, lo que ha hecho que el sistema residencial español no cuente con una herramienta que se muestra tan esencial en otros países, como es el alquiler social.

Además, destaca con claridad la ausencia de planes dirigidos a la población joven similares a los que se llevan a cabo en otros países, con la excepción en los últimos años de las ayudas directas a la compra de una vivienda o a subsidiar el pago del alquiler; un hecho que, unido al problema de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes, pone de manifiesto el abandono que a lo largo de los años ha experimentado este grupo social sobre esta materia.

No obstante, es cierto que en los últimos años ha existido cierta voluntad política por el desarrollo de acciones que aumenten el parque público de vivienda y que, a su vez, modifiquen el enfoque en el que la propiedad se sitúa como casi única opción. Sin embargo, aún es pronto para que se confirme si esta tendencia está produciendo realmente resultados considerables. De hecho, las últimas cifras sobre construcción de vivienda social no muestran una mejoría significativa, aunque es cierto que en los últimos tiempos se han llevado a cabo actuaciones encaminadas al fomento del alquiler a pesar de que los resultados no están siendo los esperados.

### 5.3.3. Recomendaciones sobre la vivienda social

Para finalizar este apartado, y enlazando con las conclusiones anteriores, es preciso enumerar una serie de recomendaciones en torno a las actuaciones en materia de política de vivienda sobre las que existe un consenso generalizado en la literatura académica:

**-Apuesta real por la vivienda social.** Es necesario que España reforme su parque de vivienda y aumente el porcentaje de vivienda social que tiene, puesto que está muy lejos de los niveles de aquellos países de su entorno que tienen mejores perspectiva de emancipación juvenil. Por eso es fundamental una planificación y un desarrollo estables que acaben con las actuaciones puntuales y esporádicas que las administraciones públicas

han efectuado en las últimas décadas. Sería deseable que a todas las expansiones urbanísticas se les exigiese que un porcentaje de las nuevas construcciones fuesen viviendas sociales, como ocurre en Francia o en Bélgica.

**-Necesidad de fomentar el alquiler social.** En consonancia con el anterior objetivo es primordial que en España se acabe con la orientación hacia la propiedad de la vivienda social, en favor de que se fomente el alquiler social. De nada sirve tener viviendas públicas si el esfuerzo económico necesario para acceder a una de ellas es muy elevado y no muestra en muchas ocasiones una diferencia considerable respecto al mercado privado.

**-Reforzar la normativa sobre protección de las viviendas públicas.** Se debe apuntalar y fortalecer la regulación sobre los plazos de recalificación de estas viviendas, con el fin de evitar que las viviendas públicas se incorporen al mercado privado antes de lo previsto y que, de este modo, se debilite el parque social.

**-Creación de empresas proveedoras de vivienda social.** Es muy importante incorporar estos organismos para que se encarguen de la promoción y la construcción de viviendas sociales. Además, se pueden destinar partidas presupuestarias a la formación de empresas públicas que tengan también esta misión y sean las encargadas de gestionar y administrar el parque social a nivel local, garantizando de este modo conocer de mejor manera las características y las necesidades de cada localidad. De esta forma, a la larga se subsanarían los problemas de falta de experiencia por parte de los proveedores en gestionar los esquemas de subsidios a la construcción de vivienda pública de alquiler.

**-Reincorporar las viviendas vacías o bien al parque social o al mercado privado.** Una medida para aumentar el parque de vivienda social sería la de destinar un importante montante de inversión pública a la compra del stock de viviendas vacías para destinarlo al alquiler social. Otra opción también es incentivar a los propietarios para que saquen sus viviendas al mercado de alquiler. Así, una primera medida que resultaría eficaz sería la aplicación de un incentivo fiscal a las personas que optasen por alquilar sus viviendas, al mismo tiempo que se emplearía otro para las personas que comprasen viviendas con la idea de ofertarlas como arrendadores. Con esto se conseguiría estimular la inversión privada en el mercado de alquiler.

**-Creación y actualización continua de un registro de viviendas vacías.** De esta manera se garantizaría el monitoreo y la vigilancia de los plazos que se pusiesen para adoptar una intervención u otra. Además, serviría para conocer constantemente la realidad y el alcance exacto de esta problemática.

**-Dirigir programas concretos de apoyo a la vivienda para los jóvenes.** Estas prácticas han sido muy poco comunes en España, con la excepción de la Renta de Emancipación que puso en marcha el Gobierno central en 2008 y que finalizó en 2011 como consecuencia de la reducción del gasto público a raíz de la crisis económica. En lo que se refiere a las viviendas sociales, normalmente los jóvenes conforman uno de los grupos que tiene derecho a ser beneficiario de una de ellas pero, si bien es cierto, no se han desarrollado proyectos concretos dirigidos a los menores de 30 años como han hecho otros países.



## Conclusiones finales

Desde la década de los ochenta del siglo pasado la transición juvenil a la vida adulta ha experimentado una serie de transformaciones en toda Europa. Esto ha hecho que los jóvenes de hoy en día no completen este proceso de forma lineal, como hicieron sus padres y que, como rasgo general, se haya producido un retraso en la edad de emancipación.

Las razones a las que obedece ese retraso son variadas: algunas de ellas son de naturaleza estructural y están relacionadas con las diferencias entre los distintos regímenes de bienestar existentes en Europa; otras son de naturaleza coyuntural y apuntan al impacto que las perturbaciones económicas tienen sobre el nivel de desempleo y las características del empleo al que los jóvenes tienen acceso.

Respecto a la cuestión de los regímenes de bienestar, los jóvenes de los países que forman parte del modelo socialdemócrata, como Suecia, Dinamarca o Finlandia, son los que disfrutan de un contexto de emancipación mucho más favorable que el resto de sus coetáneos europeos, por lo que su emancipación residencial y económica se produce a edades tempranas, entre los 19 y 21 años. A ello contribuye positivamente, entre otros factores, un sólido y generoso estado de bienestar que proporciona distintas ayudas sociales y económicas dirigidas a este fin y que, además, reconoce y defiende el derecho a la juventud; un sistema educativo que favorece la combinación de la formación educativa y laboral y que ha sido apoyado por potentes políticas activas de empleo juvenil; y, por último, la existencia de un parque de viviendas sociales sólido y desarrollado acompañado de políticas de vivienda dirigidas a facilitar la independencia residencial y la reducción de la exclusión habitacional.

Por su parte, los estados incluidos en el modelo corporativista se caracterizan por reconocer y apoyar también el derecho de los jóvenes a que se independicen, aunque la edad a la que se produce la salida del hogar de los progenitores es un poco más tardía que en el caso anterior y, generalmente, coincide con la finalización de los estudios superiores. Además, cabe destacar que las variaciones en las tasas de emancipación entre los propios países que conforman este modelo son justificadas por las disparidades

existentes en determinados elementos, como el gasto público en política de vivienda, los heterogéneos parques de viviendas que varían de un país a otro y la solidez del mercado laboral que repercute directamente en las tasas de desempleo juvenil de cada uno de estos países.

En cambio, en los países clasificados en el modelo liberal no se protege con la misma intensidad a la juventud, como ocurre en el régimen socialdemócrata o en el corporativista, sino que la transición a la vida adulta se entiende como un proceso que debe llevarse a cabo de la manera más rápida posible con el fin de que los jóvenes se incorporen cuanto antes a la esfera social y al mercado. Así, la emancipación se produce a edades similares a la del corporativista (en el Reino Unido a los 24,4 años). Esto obedece a dos razones: un mercado laboral que, aunque es precario para este sector de la población, no tiene grandes barreras para que los jóvenes accedan a él, por lo que desde edades tempranas y con escasa cualificación se adquiere una cierta independencia económica; y unas activas políticas de vivienda bajo la fórmula, por ejemplo, de ayudas directas al pago del alquiler. Además, a pesar de la continua privatización del parque de viviendas y del aumento de la propiedad como régimen de tenencia, la vivienda social sigue teniendo un peso importante, lo que facilita la independencia residencial de los jóvenes.

Finalmente, son los países del sur de Europa, enmarcados dentro del denominado modelo mediterráneo o rudimentario, los que tienen un contexto de emancipación más complicado que, además, en su caso se ha visto agravado especialmente por la crisis económica, lo que explica que se trate de los países en los que más se retrasa el abandono del hogar de los progenitores (a partir de los 29 años). El mercado laboral al que acceden los jóvenes es precario, lo que impide que tengan trayectorias estables y, por tanto, dificulta la consecución de la autonomía económica necesaria para que se independicen residencialmente de sus familias; a lo que se une una escasa dotación presupuestaria para políticas activas de empleo que subsanen sus dificultades laborales. Además, el sistema residencial de estos países supone un obstáculo para la emancipación juvenil debido al claro fomento de la propiedad como principal régimen de tenencia por parte de las autoridades políticas en el marco de un parque de viviendas caracterizado por una baja

proporción de vivienda social y de alquiler y por un importante peso de las viviendas secundarias. Esto hace que, ante la ausencia de alternativas y la debilidad de la política pública de vivienda, la familia adopte un papel decisivo en la independencia residencial de los jóvenes, tanto al apoyarlos mientras permanecen en el hogar familiar como al respaldarlos económicamente cuando se emancipan.

España se clasifica en el modelo mediterráneo y en 2018 era el sexto país de la UE en el que los jóvenes tardaban más en abandonar el hogar familiar, con 29,5 años de media, lo que ha hecho que España tenga una de las mayores tasas de coresidencia entre hijos y padres de toda la UE.

La literatura académica ha justificado esta situación haciendo referencia a aspectos culturales arraigados en un importante familiarismo, al sistema educativo, al mercado laboral, al sistema de vivienda que tiene el país o a distintos factores institucionales.

En lo que respecta a este último elemento, hay que señalar que en España tanto el estado de bienestar como la política social han estado históricamente poco desarrollados en comparación con otros países de su entorno. A esto se añade que el sistema de transferencias sociales está claramente orientado hacia las cuestiones que afectan a las personas mayores, especialmente las pensiones, dejando de lado los aspectos relacionados con la infancia o la juventud. Esto ha hecho que la emancipación juvenil no sea prácticamente apoyada desde las instituciones públicas y que, por lo tanto, se trate de un proceso gestionado y determinado casi en su totalidad por la persona implicada en el mismo y por su familia.

De esta forma, la familia se presenta como un elemento clave en la emancipación de sus hijos, ya que actúa como un complemento en la provisión de los servicios que las administraciones públicas no ofrecen y reduce la dependencia del mercado para la consecución de los bienes necesarios. Y no solo eso, sino que en España la familia, además de ser un sostén socioeconómico para los jóvenes durante importantes periodos de tiempo, también los apoya económicamente a la hora de que se emancipen residencialmente de ellos.

A este factor se unen las características propias del sistema educativo, que no se ha modernizado lo suficiente generando considerables dificultades en el tránsito del ámbito

educativo al laboral, lo que termina afectando a sus trayectorias en el mercado de trabajo. Sobre ello ha incidido la tradicionalmente elevada tasa de abandono escolar que ha tenido España, un factor clave que a su vez explica la baja cualificación de la mano de obra del país. Además, en los últimos años se ha generado un nuevo desequilibrio relacionado con el sistema educativo, puesto que se ha producido un incremento muy importante de la población con formación universitaria dejando de lado otras modalidades de estudio, como la formación profesional. Este hecho ha provocado dos problemas interrelacionados: por un lado, ha ocasionado un desajuste entre la demanda de trabajo cualificado y la oferta del mismo en el mercado laboral, dando lugar a importantes tasas de desempleo entre los jóvenes con niveles formativos superiores; y, por otro lado, cuando estos individuos con formación superior acceden al mercado laboral muchas veces presentan sobrecualificación para el puesto de trabajo al que se incorporan, y no solo eso, sino que también desplazan o incluso expulsan a aquellos jóvenes que tienen un nivel de formación inferior.

Además, los jóvenes se encuentran con una doble restricción cuando acceden al mercado laboral: la elevada tasa de desempleo que sufren y el hecho de que una vez que ingresan al mercado de trabajo sus condiciones laborales suelen ser muy precarias, siendo la temporalidad uno de los elementos que en mayor medida refuerza esa precariedad.

En el caso español, estas grandes dificultades que tienen los jóvenes españoles en sus trayectorias laborales adquiere mayor transcendencia debido al singular sistema residencial del país.

En efecto, el modelo inmobiliario en España está caracterizado por una sobredimensión de la vivienda en propiedad como principal régimen de tenencia, con un reducido fomento del alquiler y la ausencia de un sólido parque público de viviendas. De este modo, la forma más común de acceso a una vivienda es vía adquisición, lo que precisa de unos amplios ahorros previos que posibiliten esta acción con garantías y seguridad, un hecho que normalmente no es común entre los jóvenes y menos aún tras la crisis económica de 2008.

Así, en las últimas décadas las características de la estructura del sistema residencial han obstaculizado la emancipación juvenil ante la incapacidad económica de este grupo

de población para poder adquirir una vivienda en propiedad y por la ausencia de otras alternativas de tenencia que facilitasen este proceso. Y es que en los últimos quince años una persona joven no ha podido comprar una vivienda prácticamente sin exponerse a operaciones hipotecarias arriesgadas, ya que casi siempre han tenido que destinar más de un 30% de su sueldo neto al pago mensual del crédito solicitado.

Ello se ha visto reforzado por la ausencia de una política pública de vivienda que facilitará el acceso a una vivienda en un régimen distinto al de la propiedad, puesto que la misma ha estado orientada especialmente a dinamizar el sector de la construcción y a fomentar la compra entre la población.

La consecuencia es que la propiedad no solo es el régimen de tenencia dominante sino que, además, se presenta como la mejor opción posible debido a los incentivos que se han generado alrededor de ella, como ayudas enfocadas a la compra, cuotas hipotecarias similares al precio del arrendamiento, aspecto sociológicos como la cultura de propietarios, etcétera.

Además, estas cuestiones son primordiales para el sector juvenil puesto que tradicionalmente no ha sido objeto de ayudas directas para su emancipación residencial y las que ha recibido han tenido un enfoque que fomenta la adquisición en propiedad.

A esos factores estructurales hay que sumar la delicada situación financiera que atravesó España tras el inicio de la crisis en 2008, a lo que hay que añadir el incremento del desempleo hasta alcanzar uno de los porcentajes más altos, tanto general como juvenil, de la UE. Asimismo, la recesión también aumentó la temporalidad del sector juvenil, las trayectorias discontinuas que alternan largos periodos de desempleo con trabajos esporádicos y la disminución de los salarios lo que, indudablemente, ha afectado a sus posibilidades de emancipación.

Frente a esta inestabilidad económica y un mercado laboral deteriorado que padecen especialmente a los jóvenes, estos, en muchas ocasiones, y apoyados por sus padres, han adoptado como estrategia de defensa la ampliación del periodo de estancia en el hogar familiar, con el fin de mejorar sus formaciones educativas, de ahorrar el suficiente dinero como para completar la emancipación con cierta seguridad o, simplemente, de dilatar el tiempo de búsqueda de un empleo que se ajuste a sus pretensiones.

De hecho, durante los años del boom inmobiliario la tasa de emancipación en España creció a pesar de los desorbitados precios que tenía la vivienda, y fue en el momento en que la crisis económica de 2008 golpeó al mercado laboral, con especial énfasis en el sector juvenil, cuando la tasa de emancipación cambió la tendencia positiva que tenía en los últimos años. Es decir, mientras que la bonanza económica que atravesaba España proporcionaba oportunidades laborales, la emancipación creció a pesar de los precios de la vivienda.

Por lo tanto se confirmaría la hipótesis de partida que establecía que las características del mercado laboral y los ingresos que obtienen los jóvenes son más determinantes en la emancipación del sector juvenil en España que el sistema residencial al que acceden.

Es más, esta conclusión queda reforzada si se tiene en cuenta que la tasa de emancipación no mejoró a pesar de la caída del precio de la vivienda tras la crisis de 2008 y su impacto sobre el esfuerzo para acceder a una, como ocurrió por ejemplo en Irlanda, ya que al riesgo de sobreendeudamiento con el que se encontraban los jóvenes durante el auge económico hay que añadirle la complicada situación del mercado laboral descrita con anterioridad, lo que ha hecho que la brecha entre la capacidad adquisitiva y los precios que ofrece el mercado siga siendo muy amplia a pesar del descenso de los mismos. Además no solo eso, sino que el indicador que mide el esfuerzo que realiza un joven para acceder a una vivienda libre en propiedad ha aumentado desde 2014 para los menores de 25 años hasta situarse en 2017 en un 86% como consecuencia directa del deterioro de los salarios y del aumento de la inestabilidad de sus trayectorias laborales.

Así pues, también quedaría confirmada la hipótesis de que el esfuerzo para acceder a una vivienda en propiedad, aunque descendió tras el inicio de la crisis de 2008, sigue siendo elevado y afecta de forma directa a la independencia residencial de los jóvenes españoles.

Esto ha hecho que en España la tasa de coresidencia entre padres e hijos, que venía reduciéndose desde 2005, tras las convulsiones económicas iniciadas en 2008 haya crecido más de 10 puntos porcentuales en estos últimos años. La magnitud de este problema es aún más grande en los menores de 25 años, ya que en 2018 nueve de cada

diez jóvenes por debajo de esta edad seguía viviendo con sus padres, una cifra que también ha estado en constante aumento desde 2010.

Ante esta situación, esta investigación ha planteado que resulta relevante conocer cuál ha sido el impacto concreto que el deterioro de la situación económica provocado por la reciente crisis económica y el consiguiente incremento de las tasas de desempleo y temporalidad podría haber tenido sobre los procesos de emancipación de los jóvenes españoles. Para ello se ha realizado un análisis empírico partiendo de un modelo econométrico de vectores autorregresivos, que ha ponderado el impacto que determinadas variables económicas han tenido sobre la emancipación de los jóvenes españoles.

Los resultados obtenidos demuestran que a corto plazo el shock que se produjo en el desempleo afectó de manera considerable a la emancipación juvenil en España pero que, sin embargo, a largo plazo esta variable dejó de ser tan determinante y que, en cambio, la tasa de temporalidad de los jóvenes y el precio de la vivienda se tornaron fundamentales en la explicación de este proceso.

Estas conclusiones apuntan a que los procesos de emancipación dependen más de las condiciones laborales a las que acceden los jóvenes y su capacidad de mantenimiento en el mercado de trabajo que de la propia entrada a él.

La conclusión que se extrae de ello es clara: la persistencia en la temporalidad de los contratos que firman los jóvenes españoles y la rotación en el empleo dificultan la posibilidad de la emancipación, al negar a los jóvenes un horizonte de estabilidad y certidumbre que les permita consolidar el proceso de emancipación del hogar familiar; mientras que el desempleo constituye un obstáculo importante en la medida en que la emancipación ni siquiera se plantea cuando no se dispone de un puesto de trabajo.

Así, también se confirmaría la hipótesis inicial de que el aumento de la precariedad laboral y del desempleo juvenil son dos elementos directos que explican por qué se frenó la tendencia positiva y ascendente que tenía la tasa de emancipación en España desde principios del siglo XX y que, por lo tanto, la creciente vulnerabilidad laboral del sector juvenil como consecuencia de la crisis económica de 2008 ha supuesto un obstáculo y un retraso considerable en la emancipación juvenil de este país.

Además, se ha comprobado que el impacto negativo sobre la emancipación del incremento en las tasas de desempleo o temporalidad retorna a la situación anterior de forma acelerada en el plazo de un año, lo que apoya que la mejora de los indicadores económicos a corto/medio plazo paliarían las consecuencias del shock económico y que estas, por lo tanto, no perduran en el tiempo.

En lo que respecta a la influencia del precio de la vivienda, a pesar de que en el corto plazo no tuvo una incidencia importante, sin embargo a medio y largo plazo esa incidencia se incrementa hasta niveles que superan ampliamente a los efectos que pudo causar la tasa de desempleo. La explicación a este hecho reside en la relación que los jóvenes españoles establecen entre la acción de independizarse residencialmente y la adquisición de una vivienda en propiedad, una peculiaridad de la emancipación juvenil de los países del modelo mediterráneo y contraria en otros países de la Unión Europea.

Este retraso de la emancipación juvenil en España como consecuencia del shock económico de 2008 a su vez repercutió de manera directa en la formación de nuevos hogares, debido a que el sector juvenil es el grupo de población con mayor potencial de cara a la creación de uno nuevo. En este caso, la incidencia negativa de la tasa de desempleo sobre la creación de nuevos hogares en España es más pronunciada que en la emancipación juvenil, especialmente durante los primeros cinco trimestres y se extiende a lo largo de dos años que es cuando estos efectos se anulan.

Por su parte, la variación de los factores del mercado inmobiliario, tanto de oferta de nuevas viviendas como de precios, tienen una incidencia marginal, aunque es cierto que el nivel de precios a partir del cuarto trimestre comienza a provocar una caída en la formación de nuevos hogares como consecuencia del deterioro de la economía y de las dificultades para el pago de las mensualidades hipotecarias.

De este modo, se confirma que el shock económico supuso un claro frenazo a la formación de nuevos hogares en España que, de momento, no ha recuperado los niveles previos a la crisis de 2008.

En este punto la investigación retoma su enfoque institucional, desde el que se defiende que las estructuras de los países son también determinantes de la emancipación



y formación de hogares, para comprobar si los efectos del shock económico eran similares en otro país del modelo mediterráneo.

Para ello se ha analizado el caso de Portugal por varios motivos: el primero de ellos es que ambos países se unieron a la Unión Europea en 1986 y llevaron a cabo la transición e incorporación al euro en el mismo año; en segundo lugar, entre 1970 y 2013 sus ciclos económicos e inmobiliarios mostraron cierta coincidencia, con la diferencia de que Portugal no experimentó una burbuja inmobiliaria en el origen de la crisis que sufrió a partir de 2008 como sí ocurrió en España, lo que ha permitido comparar la influencia que han podido tener factores relacionados con el mercado de la vivienda sobre la creación de nuevos hogares; y en tercer lugar, las dos economías que integran la Península Ibérica sufrieron con gran virulencia los efectos de la crisis económica, hasta el punto en que tuvieron que ser rescatadas financieramente desde instancias europeas, aunque la crisis respondió a causas diferentes en uno y otro país, un hecho que pudo generar consecuencias dispares sobre la creación de hogares.

Los resultados obtenidos indican que existen efectos diferenciales sobre la creación de hogares según el país observado. En primer lugar, se ha encontrado que la formación de nuevos hogares en Portugal es más sensible, tanto en magnitud como en velocidad, a un impacto en la tasa de desempleo que en España. En el caso portugués la repercusión es prácticamente inmediata y se prolonga durante seis trimestres, mientras que en España el efecto más grande se manifiesta precisamente a partir de ese momento, es decir, con un lapso de tiempo importante entre el momento en el que se produce el shock y en el que se empiezan a sentir sus efectos sobre la formación de hogares.

En segundo lugar, también se han encontrado diferencias respecto a la oferta del mercado inmobiliario, ya que la formación de hogares en Portugal sí responde a la variación de las nuevas construcciones, mientras que en España este efecto es muy leve. Sin embargo, la evolución del precio de la vivienda tiene una incidencia mayor en España que la tasa de desempleo, algo que no ocurre en Portugal.

Y, en tercer lugar, a largo plazo también se ha constatado un comportamiento diferenciado entre España y Portugal en término de las variables que explican la variabilidad de la creación de nuevos hogares. Mientras que, en España, el peso de las

variables relacionadas con el mercado inmobiliario puede llegar a explicar más del 60% de esa variabilidad, en Portugal la tasa de desempleo y el precio de la vivienda son las que adquieren una mayor relevancia que explican el 61% de la variabilidad de la creación de nuevos hogares en Portugal en el largo plazo.

De este modo, se rechaza, al menos en el caso portugués, la hipótesis inicial que establecía que en aquellos países encuadrados en el mismo modelo de bienestar que España -esto es, en el mediterráneo o rudimentario- la crisis económica de 2008 habría tenido una incidencia parecida sobre la tasa de formación de hogares debido a que comparten elementos estructurales. Además, se constata que el impacto del shock económico dejaría de tener efectos en la creación de nuevos hogares a partir de los dos años, al igual que ocurre en España.

En resumen, la situación laboral y residencial a la que actualmente se enfrentan los jóvenes españoles dificulta en gran medida sus posibilidades de independizarse y el comienzo de un proyecto de vida fuera del hogar de sus progenitores. Esto, sin duda, produce graves efectos sociales, psicológicos y económicos sobre las personas jóvenes pero, a su vez, supone un deterioro de la sociedad y de la cohesión social al obstaculizar uno de los procesos fundamentales que permiten la reproducción de las sociedades como es la formación de nuevos hogares.

Ante esta situación, muchos jóvenes españoles, que a pesar de las dificultades económicas desean emanciparse, están optando por un acceso más tardío a la propiedad y comenzando su independencia residencial mediante el alquiler, por lo que están anteponiendo su aspiración de comenzar sus proyectos de vida de manera independiente al hecho de ser propietarios. Esto ha producido una reorientación hacia una situación más equilibrada entre el alquiler y la propiedad en el sector juvenil en España.

A esto se ha unido el que en los últimos tiempos ha cambiado un aspecto que no era muy típico entre la población española: un aumento de la movilidad territorial condicionada a la búsqueda de trabajo. Los más jóvenes, ante las pocas oportunidades laborales que encuentran en sus ciudades, deciden desplazarse hacia otras localidades donde sus posibilidades son mayores, por lo que el alquiler, por sus condiciones y porque no supone un importante afincamiento a una zona, se presenta como una opción más

viable que la compra de una vivienda.

No obstante, este escenario está en duda debido al reciente y considerable aumento de precios que está experimentando el mercado de alquiler, un hecho que también está imposibilitando a la juventud española el acceso a este régimen de tenencia de vivienda.

Asimismo, ha existido cierta voluntad política a favor de esta reorientación hacia otro régimen de tenencia de la vivienda, ya que se han desarrollado acciones dirigidas al aumento del parque público de vivienda. Sin embargo, las últimas cifras sobre construcción de vivienda social no terminan de mostrar una mejoría significativa a pesar del contexto de recuperación en el que se encuentra el mercado de vivienda en los últimos años.

Y es que, a pesar de los enormes efectos que tuvo la crisis económica de 2008 en España, la dinámica del mercado de la vivienda no ha experimentado grandes cambios y, por lo tanto, existen opciones reales de repetir errores del pasado. Por esta razón, esta investigación ha examinado los efectos de distintas variables económicas determinantes sobre los niveles de precios de la vivienda después del inicio de la crisis económica y ha confirmado que la demanda, representada por la evolución demográfica y los ingresos de la población, sigue siendo un importante impulsor del precio en España.

Además, a la influencia de la demanda en el precio de la vivienda se añade que los factores de la oferta, como la inversión o las transacciones, también tienen una correlación positiva con el incremento del precio de la vivienda. De este resultado se ha extraído una conclusión preocupante: la correlación positiva obtenida para la inversión. En efecto, según la teoría económica, esta relación debería ser la contraria, ya que un incremento de la inversión en una escalada positiva de los precios produciría una mayor oferta que contrarrestaría el exceso de demanda ocasionando un descenso del nivel de precios. Sin embargo, esta relación no se cumple para el periodo analizado por lo que los valores obtenidos entre estas dos variables podrían señalar la existencia del inicio de una nueva burbuja de precios, ya que el incremento de la oferta no está repercutiendo en el precio. Por este motivo, es necesario que futuras investigaciones profundicen y analicen en esta situación y complementen estas conclusiones.

En cualquier caso, estos resultados confirman la hipótesis inicial en la que se establecía que en un contexto de mejora del mercado inmobiliario y un comportamiento alcista de los precios, la demanda se seguiría presentando como un factor determinante en el aumento de los niveles de precio de la vivienda en España; mientras que, por su parte, la oferta no sería un elemento que frenase, como cabría esperar, el incremento de los precios.

Para concluir, todo lo expuesto hasta este momento muestra la necesidad de que las instituciones públicas intervengan mediante distintas estrategias y medidas dirigidas a solucionar esta problemática que actualmente tiene la juventud española, máxime teniendo en cuenta que hoy por hoy tienen una de las mayores tasas de desempleo juvenil de toda Europa. Estas dificultades, además, afectan a distintas dimensiones de la transición a la vida adulta que van desde el ámbito educativo, pasando por el laboral hasta el residencial.

De este modo, se han examinado las diferentes actuaciones políticas que se han desarrollado en el entorno europeo para facilitar la transición juvenil, poniendo especial énfasis en aquellas dirigidas al sistema educativo, al mercado laboral y a la vivienda ya que son las tres dimensiones fundamentales del paso de la juventud a la vida adulta. De ese repaso se infiere que es necesario la adaptación de medidas más ambiciosas dirigidas tanto al sistema educativo como al residencial, especialmente en este último, debido a que tradicionalmente el sector juvenil español ha recibido escasas ayudas dirigidas a facilitar su emancipación.

También se ha realizado un análisis de las actuaciones que España puso en marcha en materia laboral para la reducción de la alta tasa de desempleo juvenil, como la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, la incorporación de la Garantía Juvenil tras la aprobación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para incidir sobre la situación laboral de los jóvenes españoles, la posterior prórroga de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y el actual Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.

Sin embargo, las medidas implementadas generalmente no han producido los resultados esperados y, de hecho, en distintas ocasiones han sido parte responsable, ya

sea de manera directa o indirecta, del crecimiento de la precariedad laboral en el sector juvenil. Esto ha sido consecuencia de la aplicación de acciones que tenían como objetivo la consecución de resultados inmediatos y que dejaban de lado otras actuaciones con un horizonte temporal más a largo plazo que repercutiesen sobre los problemas estructurales que tiene la población juvenil en España. No obstante, no todas las medidas adoptadas en materia pública que han estado enfocadas al ámbito laboral han sido erróneas o poco acertadas, puesto que hay algunas que han estado correctamente dirigidas, como las iniciativas de compensación de la baja cualificación de la mano de obra en aquellos jóvenes que abandonaron de manera temprana la educación o la estimulación para que los empleadores contraten a jóvenes sin experiencia previa.

Pero, sin duda, en España uno de los grandes problemas que han tenido todas las medidas de políticas públicas en cada uno de los ámbitos que afectan directamente a la emancipación juvenil ha sido la ausencia de una evaluación de las mismas que determinase con claridad qué resultados han tenido sobre la población joven, lo que ocasiona una importante incertidumbre sobre si realmente estas acciones han sido eficaces o no.

## Conclusions

Since the 1980s, the transition from youth to adulthood has undergone significant transformations through all the European countries. This caused that young people cannot linearly complete this process as their parents did, and so, causing a delay in the average age of leaving the parental home. The main reasons that may explain this delay are varied: some of them are structural in nature and are related to the differences between the different welfare regimes existing in Europe. On the other hand, there are reasons of a temporary nature that mainly concerns the impact of the economic disruptions on the unemployment rate together with the characteristics of those employments which are accessible for young people.

According to the welfare regimes matter, young people from the Social Democrat countries, such as Sweden, Denmark, or Finland, are those which benefit from a fairer context in terms of emancipation comparing to their European neighbours. Thus, the economic and residential independence of these three Nordic countries occurs at an early age, between 19 and 21 years old. Among other aspects, this is caused because of three main factors: a solid welfare state that provides different social and economic benefits intended to defend young people's rights. Also, an educational system that helps to combine both academic and labour training, which has been greatly supported by strong youth employment policies. And, lastly, the existence of a solid housing stock together with housing policies whose main aim is to facilitate residential independence and to reduce housing exclusion.

For their part, those States which are included in the Corporativist model are also characterised by supporting the decision of young people when it comes to leaving their parental home, even though the average age is higher than in the previous group, but usually, it coincides with the completion of higher education. Also, it seems important to highlight that the different average ages between countries in terms of housing independence vary according to the disparities of certain features, such as public expenditure for housing policies, the heterogeneous housing parks that vary from a

country to another, and the strength of the labour market that impacts directly on unemployment among young people of any of these countries.

By contrast, in those countries that are classified as following a Liberal model, there is not such intensity when it comes to protecting young people, as it happens in the Social Democratic or the Corporativist regimes. The transition to adulthood is understood as a process that needs to be as soon as possible, so young people could join the social sphere and the market sooner. Thus, the average age getting residential independence in these countries is similar to the Corporativist ones, as in for example the United Kingdom, which is 24,4 years old. The two main reasons that account for this are: a labour market that possesses few boundaries for young people to gain access to, so from early ages and with scarce qualification, they can get certain economic independence; also, there are proactive housing policies that help young people to pay the rent throughout social benefits. Besides, despite the constant privatisation of the housing stock and the increase of property as a tenure status, social housing still plays an important part in the housing park of these countries, easing emancipation.

Finally, it is the Southern European countries, framed within the so-called Mediterranean or rudimentary model, which have a more complicated context of emancipation since, in their case, they have been particularly impacted by the economic crisis. Thus, this explains why these countries are the ones that delay the most leaving the parental homes (aged 29 and over). The labour market that young people access is precarious, which prevents them from having stable careers and, therefore, makes it difficult to achieve the economic autonomy necessary for them to become residentially independent from their families; to which is added a low budget allocation for active employment policies that overcome their labour difficulties. In addition, the residential system in these countries represents an obstacle to youth emancipation due to the clear promotion of property as the main tenure regime by political authorities within the framework of a housing stock, which is characterised by a low proportion of social housing and by the significant presence of a secondary dwelling.

This means that, in the absence of alternatives and the weakness of public housing policy, the family takes a decisive role in the residential independence of young people,

both by supporting them while they remain in the family home and by supporting them financially when they become independent.

Spain belongs to the Mediterranean model and in 2018, it was the sixth country in the EU in which young people took the longest to leave the parental home, with an average of 29.5 years, which has made Spain to have one of the highest rates of co-residence from all over the EU. The academic literature has justified this situation by referring to cultural aspects rooted in familism, the educational system, the labour market, the country's housing system, or different institutional factors.

Concerning this last element, it should be noted that in Spain both the Welfare State and the social policy have historically been underdeveloped compared to other neighbouring countries. Also, the social transfer system is clearly oriented towards issues that affect older people, especially retirement pensions, leaving aside aspects related to childhood or youth. This has meant that youth emancipation is practically not supported by public institutions and that, therefore, it is a process managed and determined almost entirely by the person involved in it and by their family.

In this way, the family is presented as a key element in the emancipation of their younger adults, since they act as a complement in the provision of services that public administrations do not offer and minimize the dependence on the market to obtain the necessary goods. The thing is that in Spain, not only is the family a socioeconomic support for young people during long periods, but parents also support them financially when the youngers decide to residentially emancipate themselves from their family.

This factor is compounded by the characteristics of the educational system, which has not been sufficiently modernised, generating considerable difficulties in the transition from education to work, which ends up affecting their careers in the labour market. This has been influenced by the high school dropout rate that Spain has typically had, a key factor that, in turn, explains the low qualification of the country's workforce. Besides, in recent years a new imbalance has been generated related to the educational system, since there has been a very important increase in the population with a university education, leaving aside other study modalities, such as professional or vocational training. This fact has caused two interrelated problems: on the one hand, it has caused a mismatch between



the demand for qualified work and the supply of it in the labour market, leading to significant unemployment rates among young people with higher educational levels. And, on the other hand, when these individuals with higher education enter the labour market, they are often overqualified for the job they are joining, and not only that, but they also displace or even expel those young people who have a lower level of education.

In addition, young people face a double restriction when they enter the labour market: the high unemployment rate they suffer and the fact that once they get a job, their working conditions are usually quite precarious and unstable, being temporality one of the elements that further reinforce this precariousness.

In the Spanish case, these great difficulties that young Spaniards have in their work careers acquire greater importance due to the country's unique residential system.

Indeed, the real estate model in Spain is characterized by oversized homeownership as the main tenure regime, with a reduced promotion of rent and the absence of a solid public housing stock. In this way, the most common way to access a house is through acquisition, which requires huge prior savings in order to be able to do this action with guarantees and security, a fact that is not normally common among young people and even less after the economic crisis of 2008.

Thus, in recent decades the characteristics of the structure of the residential system have hampered youth emancipation due to the economic inability of this population group to be able to acquire a house and due to the absence of other alternatives of tenure that facilitate this process. Over the past fifteen years, a young person has not been able to buy a home but being exposed to risky mortgage operations, since they have had to allocate around a 30% of their net salary to the monthly payment of the requested loan.

This has been reinforced by the absence of a public housing policy that facilitates the access to a home in a different regime to housing acquisition since it has been especially aimed at boosting the construction sector and promoting purchase among the population.

The consequence is that the property is not only the dominant tenure system but also is presented as the best possible option due to the incentives that have been generated

around it, such as benefits focused on the purchase, mortgage payments similar to the price leasing, sociological aspects such as the culture of owners, and so on.

In addition, these issues are essential for the youth sector, since traditionally it has not been subject of direct benefits for their residential emancipation, and those aids that they were able to receive, were mainly focused on encouraging property acquisition.

To these structural factors, it must be added the delicate financial situation that Spain went through after the crisis began in 2008. Besides, the increase in unemployment led Spain to have one of the highest percentages in the EU, both general and youth. Likewise, the economic downturn also increased the job temporality of the youth sector, by alternating long periods of unemployment with sporadic jobs and the decrease in wages, which, undoubtedly, has affected their possibilities of emancipation.

Given the economic instability and the deteriorated labour market that especially young people experience, most of them find themselves adopting as a defence strategy the extension of the time staying at their parental home. This action eases them to get a higher educational background, to save enough money to complete emancipation with some security or just to delay the time of searching for a job that meets their demands.

In fact, during the years of the real estate boom, the emancipation rate in Spain grew despite the exorbitant housing prices, and it was at the time that the economic crisis hit the labour market, with special emphasis on the youngest sector, thus changing the positive trend that the emancipation rate followed in the previous years. In other words, since Spain was going through an economic boom, more job opportunities appeared, so the emancipation rate grew despite the housing prices.

Therefore, it would be confirmed the initial hypothesis that established that the characteristics of the labour market and the income that young people obtain are more decisive in the emancipation of the youth sector in Spain than the residential system they access and the real estate market prices.

Moreover, this conclusion is reinforced if we take into account the fact that the emancipation rate did not improve despite the fall in the housing price after the 2008 crisis. A clear example is Ireland, where young people faced a high risk of over-indebtedness during the economic boom which must be added to the complicated

situation of the labour market described above. This situation made a broader gap between purchasing power and the prices offered by the market despite the prices drop.

Also, the indicator that measures the effort made by a young person to get access to the housing market has increased since 2014 for those under 25 years of age, reaching peaks of over 86% in 2017, as a direct consequence of the wages deterioration and the increased instability of their job trajectories.

Thus, the hypothesis would also be confirmed that the effort to buy a house, although it decreased after the start of the 2008 crisis, is still high and directly affects the residential independence of young Spanish people.

This has meant that in Spain the co-residence rate between parents and children, which had been decreasing since 2005, after the economic upheavals that began in 2008, grew by more than 10 percentage points in recent years. The magnitude of this problem is even greater in those under 25 years of age since in 2018 nine out of ten young people under this age were still living with their parents, a figure that has also been constantly increasing since 2010.

Given this situation, this research has suggested that it is important to know the specific impact of the deterioration of the economic situation could have had on the emancipation processes of young Spaniards.

For this purpose, an empirical analysis has been carried out based on an econometric model of autoregressive vectors, which has weighted the impact that certain economic variables have had on the emancipation of young Spanish people.

The results obtained show that in the short term the unemployment shock affected youth emancipation in Spain. Nevertheless, in the long term, this variable was no longer so decisive and, by contrast, the temporality rate of young people and the housing price became fundamental in the explanation of this process.

These conclusions suggest that emancipation processes depend more on the working conditions of young people and their ability to maintain themselves in the job market than on their ability to enter into it.

The conclusion drawn from this is clear: the persistence of the temporary nature of the contracts signed by young Spaniards and the constant rotation in employment, hinder

the possibility of emancipation by denying young people a horizon of stability and certainty that allows them to consolidate the process of emancipation. Also, unemployment constitutes a major obstacle insofar as emancipation does not even arise when there is no job.

Thus, the initial hypothesis would also be confirmed that the increase in job insecurity and youth unemployment are two direct elements that explain why the positive and upward trend that the emancipation rate had in Spain since the beginning of the 20th century was halted. Therefore, the growing labour vulnerability of the youth sector as a consequence of the 2008 economic crisis has been an obstacle and a considerable delay in the youth emancipation of this country.

In addition, it has been verified that the negative impact of the increase in unemployment on emancipation rate, returns to the previous situation in an accelerated way within a year, supporting the idea that the improvement of the economic indicators in the short/medium term would ease the consequences of the economic shock.

Although in the short term the influence of the housing price did not have a significant impact, in the medium and long term this incidence increases to levels that widely exceed the effects that could cause the unemployment rate. The explanation for this fact lies in the relationship that young Spaniards establish between the action of becoming independent residually and the acquisition of a house, a peculiarity of youth emancipation in the countries of the Mediterranean model and the opposite in other countries of the European Union.

This delay in youth emancipation in Spain as a consequence of the economic shock of 2008 in turn had a direct impact on household formation since the youth sector is the population group with the greatest potential when it comes to creating a new household. In this case, the negative impact of the unemployment rate on the creation of new households in Spain is more pronounced than in youth emancipation, especially during the first five quarters, being extended over two years, which is when these effects are overridden.

For its part, the variation in real estate market factors, both in the supply of new homes and in prices, have a marginal impact, although it is true that the price level from

the fourth quarter begins to cause a drop in household formation as a consequence of the economic deterioration and the difficulties in covering the mortgage payments.

In this way, it is confirmed the event that the economic shock was a clear slowdown to the formation of new households in Spain, which, for the time being, has not recovered the levels before the 2008 crisis.

At this point, the research takes up its institutional approach, from which it is defended the fact that the structures of the countries also impact on emancipation and household formation, in order to check if the effects of the economic shock were similar in a different country of the Mediterranean model.

To this end, the case of Portugal has been analysed for several reasons: the first is that both countries joined the European Union in 1986 and carried out the transition and the incorporation to the euro in the same year; secondly, between 1970 and 2013 their economic and real estate cycles showed a certain coincidence, with the difference that Portugal did not experience a real estate bubble at the origin of the crisis that it suffered in 2008 as it happened in Spain, which has helped to compare the influence that factors related to the housing market may have on the creation of new homes; and thirdly, the two economies that make up the Iberian Peninsula suffered with great virulence the effects of the economic crisis of 2008, to the point where they had to be financially rescued from European authorities, although the crisis responded to different causes in one and another country, a fact that could have different consequences on the creation of homes.

The results obtained indicate that there are differential effects on the creation of households according to the country observed. First, it has been found that the formation of new households in Portugal is more sensitive, both in magnitude and speed, to an impact on the unemployment rate than in Spain. In the Portuguese case, the impact is practically immediate and lasts for six quarters, while in Spain this effect manifests itself from the sixth quarter onwards. This means that there is a significant time between the moment when the shock occurs and the moment when household formation begins to feel those effects in the Spanish case.

Secondly, differences have also been found concerning the supply of the real estate market because the formation of new households in Portugal strongly responds to the variation of new construction, but in Spain, this effect is quite slight. However, the evolution of house prices has a higher incidence in Spain than the unemployment rate, something that does not happen in Portugal.

And, thirdly, in the long term, there has also been a differentiated behaviour between Spain and Portugal in terms of the variables that explain the variability in the creation of new households. While, in Spain, the weight of the attributes related to the real estate market can explain more than 60% of this variability, in Portugal the unemployment rate and the house price are the ones that acquire the greatest relevance, explaining the 61% of the variability of the creation of new households in Portugal in the long term.

In this way, it is rejected, at least in the Portuguese case, the initial hypothesis which established that in those countries framed in the same welfare model as Spain --that is, in the Mediterranean or rudimentary model-- the economic crisis would have had a similar incidence on the rate of household formation because they share structural elements. Furthermore, it is found that the impact of the economic shock would cease to affect the creation of new households after two years, as it is the case in Spain.

In short, the employment and residential situation that young Spaniards currently face makes it difficult for them to become independent and to start a life project outside the parental home. This, certainly, brings serious social, psychological, and economic effects on young people but, in turn, it implies a deterioration of society and social cohesion by hindering one of the fundamental processes that allows the reproduction of societies such as the formation of new households.

Against this background, many young Spaniards wish to get independent, so they need to have later access to the acquisition of a property, so beginning their residential independence by renting. Thus, they are putting their aspiration to start their life projects before the fact of becoming owners. This has produced a reorientation towards a more balanced situation between rent and ownership in the youth sector in Spain

All this adds up to the fact that in recent times an aspect that was not very typical among the Spanish population has changed: an increase in territorial mobility influenced by job seeking. The youngest, given the few job opportunities they find in their places, decide to move to other locations where their possibilities are greater, so the rent is presented as a more viable option than buying a house because it does not imply an important settlement in an area.

However, this scenario is in doubt due to the recent and considerable price increase that the rental market is experiencing, a fact that is also making it impossible for Spanish youth to buy a house.

Likewise, there has been a certain political will in favour of this reorientation towards another system of housing tenure, since actions have been developed aimed at increasing the public housing stock. However, the latest figures on social housing construction do not show a significant improvement despite the recovery context in which the housing market has found itself in recent years.

And the fact is that, despite the enormous effects of the 2008 economic crisis in Spain, the dynamics of the housing market have not undergone major changes and, therefore, there are real options to repeat past mistakes. For this reason, this research has examined the effects of different determining economic variables on house price levels after the beginning of the economic crisis, confirming that demand, represented by demographic evolution and population income, continues being an important driver of the price in Spain.

Furthermore, to the influence of demand on house prices, it is added that supply factors, such as investment or transactions, also have a positive correlation with the increase in housing prices. From this result a worrying conclusion has been drawn: the positive correlation obtained for investment.

Indeed, according to economic theory, this relationship should be the opposite, since an increase in investment in a positive rise in prices would produce a greater supply that would offset the excess demand, causing a decrease in the price level. However, this relationship is not fulfilled for the period analysed, so the values obtained between these two variables could indicate the existence of the beginning of a new price bubble since

the increase in supply is not having an impact on the price. For this reason, it is necessary that future researchers deepen and analyse this situation in order to complement these conclusions.

In any case, these results confirm the initial hypothesis in which it was established that in a context of improvement in the real estate market and an upward behaviour of prices, the demand would continue to be a determining factor in the increase in housing price levels in Spain; while, for its part, supply would not be an element that would curb, as might be expected, the increase in prices.

To conclude, all the points discussed so far show the need for public institutions to intervene through different strategies and measures aimed at solving this problem currently faced by Spanish youth, especially considering that today they have one of the highest rates of youth unemployment across Europe. These difficulties also affect different dimensions of the transition to adult life, ranging from the educational sphere to the labour environment and the residential scope.

In this way, the different political actions that have been developed in the European environment to facilitate youth transition have been examined, placing special emphasis on those aimed at the education system, the labour market, and housing, since they are the three fundamental dimensions of the transition from youth to adult life. From this review, it is inferred that it is necessary to adopt more ambitious measures aimed at both the educational and residential systems, especially in the latter, because traditionally the Spanish youth sector has received little aid aimed at facilitating their residential independence.

An analysis has also been made of the actions that Spain implemented in labour matters to reduce the high rate of youth unemployment, such as the Strategy for Entrepreneurship and Youth Employment 2013-2016, the incorporation of the Youth Guarantee after the approval of the National Youth Guarantee System to influence the employment situation of young Spaniards, the subsequent extension of the Youth Entrepreneurship and Employment Strategy, and the current 2019-2021 Youth Employment Shock Plan.



However, the measures implemented generally have not produced the expected results and, in fact, on different occasions, they have been responsible, either directly or indirectly, for the growth of job insecurity in the youth sector. This has been the consequence of the application of actions that aimed to achieve immediate results and that set aside other actions with a longer time frame that had repercussions on the structural problems faced by the youth population in Spain. However, not all the measures adopted in public matters that have been focused on the labour field have been erroneous or unsuccessful, since some have been correctly directed, such as the initiatives to compensate the low qualification of the workforce in those young people who left education at a young age, or the stimulation for employers to hire young people with no prior experience.

But, undoubtedly, in Spain, one of the greatest problems that all public policy measures have had in each of the areas that directly affect youth emancipation has been the absence of an evaluation of the measures that would clearly determine what results have had on the young population, which causes significant uncertainty over whether these actions have really been effective or not.

## Referencias

- Aassve, A. *et al.* (2001). "The impact of income and employment status on leaving home: Evidence from the Italian ECHP sample". *Labour: Review of Labour Economics and Industrial Relations*, 15 (3), 501-529.
- (2002). "Leaving home: A comparative analysis of ECHP data". *Journal of European Social Policy*, 12 (4), 259-275.
- (2013). "Youth prospects in a time of economic recession". *Demographic Research*, 29 (36), 949-961.
- Abramsson, M. *et al.* (2004). "The first years as independent actors in the housing market: Young households in a Swedish municipality". *Journal of Housing and the Built Environment*, 19 (2), 145-168.
- Adams, Z. & Füss, R. (2010). "Macroeconomic determinants of international housing markets". *Journal of Housing Economics*, 19, 38-50.
- Agnello, L. & Schuknecht, L. (2011). "Booms and busts in housing markets: Determinants and implications". *Journal of Housing Economics*, 20 (3), 171-190.
- Aguilar, M. y Laparra, M. (1999). "Tendencias de la exclusión y las políticas de integración en España", en J. F. Tezanos (ed.): *Tendencias en desigualdad y exclusión social*. Madrid: Sistema.
- Ahn, N. & Sánchez-Marcos, V. (2017). "Emancipation under the great recession in Spain". *Review of Economics of the Household*, 15, 477-495.
- Alguacil Denche, A. (2017). "Revisando el acceso a la vivienda de la juventud española". *INGURUAK*, 62, 95-107.
- Allen, J. *et al.* (2004). *Housing and Welfare in Southern Europe*. United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Allerbeck, K. y Rosenmayr, L. (1995). *Introducción a la sociología de la juventud*. Buenos Aires: Editorial Kapelusz.
- Altuzarra, A. & Esteban, M. (2011). "Land prices and housing prices: The case of Spain". *Journal of Housing and the Built Environment*, 26, 397-409.
- Alves, P. & Urtasun, A. (2019). "Recent housing market developments in Spain". *Economic Bulletin*, 2/2019, Banco de España.

- Anxo, D. *et al.* (2010). *The Welfare State and Life Transitions: A European Perspective*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Añón, M. J. y Miravet, P. (2005). “Paradojas del familiarismo en el estado del bienestar: mujeres y renta básica”. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 2, 101-121.
- Aparicio-Fenoll, A. & Oppedisano, V. (2015). “Fostering Household Formation: Evidence from a Spanish Rental Subsidy”. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 15, 53-84.
- Arellano, M. (1987). “Computing robust standard errors for within-groups estimators”. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 48, 431-434.
- Arestis, P. & González-Martínez, A.R. (2016). “House prices and current account imbalances in OECD countries”. *International Journal of Finance & Economics*, 21, 58-74.
- (2019). “Economic precariousness: A new channel in the housing market cycle”. *International Journal of Finances and Economics*, 24 (2), 1030-1043.
- Arnett, J. J. (2000). “Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties”. *American Psychologist*, 55 (5), 469-480.
- Arrazola Vacas, M. *et al.* (2018). *Desempleo juvenil en España: Situación, consecuencias e impacto sobre la vida laboral de los adultos*. Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
- Arshanapalli, B. & Nelson, W. (2008). “A cointegration test to verify the housing bubble”. *The International Journal of Business and Finance Research*, 2 (2), 35-43.
- Arundel, R. & Ronald, R. (2015). “Parental co-residence, shared living and emerging adulthood in Europe: Semi-dependent housing across welfare regime and housing system contexts”. *Journal of Youth Studies*, 19, 885-905.
- Autor, D. H. (2014). “Skills, education, and the rise of earnings inequality among the other 99 percent”. *Science*, 344, 843-851.
- Avery, R. *et al.* (1992). “Feathered nest/gilded cage: parental income and leaving home in the transition to adulthood”. *Demography*, 29, 375-388.
- Baizán, P. *et al.* (2002). “Political economy and life course patterns: The heterogeneity of occupational, family and household trajectories of young spaniards”. *Demographic Research*, 6, 192-240.
- Ball, M. *et al.* (2010). “Housing supply price elasticities revisited: evidence from international, national, local and company data”. *Journal of Housing Economics*, 19 (4), 255-268.

- Baltagi, B.H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Bankia (2019). *Diagnóstico de la Investigación sobre la Formación Profesional en España (2005-2017)*. Disponible en: <https://www.dualizabankia.com/recursos/doc/portal/2019/07/08/diagnostico-investigacion-fpi.pdf>
- Barceló, C. & Villanueva, E. (2018). “The risk of job loss, household formation and housing demand: evidence from differences in severance payments”. *Documento de trabajo* N° 1849, Banco de España, Mimeo.
- Barroso, M. (2017). “Crisis y trabajo. Un análisis de las políticas laborales de emergencia en Portugal, España y Grecia”. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 158, 3-22.
- Baviera Puig, I. (2017). “Perspectivas del empleo de los jóvenes en el marco de la Estrategia Europa 2020”. *Revista Española de Derecho del Trabajo*, 195, 165-192.
- Bayrakdar, S. & Coulter, R. (2018). “Parents, local house prices, and leaving home in Britain”. *Population, Space and Place*, 24 (2), 1-13.
- Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. (2002). *Individualization: Institutionalized individualism and its social and political consequences*. London: Thousand Oaks.
- Becker, S. *et al.* (2010), “Youth emancipation and perceived job insecurity of parents and children”. *Journal of Population Economics*, 23 (3), 1047-1071.
- Belfield, C. (2008). *The cost of early school-leaving and school failure*. New York: Queen’s College.
- Bell, D. & Blanchflower, D. (2011). “Young people and the Great Recession”. *IZA Discussion Paper* 5674.
- Bell, L. *et al.* (2007). “Failure to launch: comparative trends in the transition to economic independence”, in S. Danzinger and C.E. Rouse (eds.): *The Price of independence: The Economics of Early Adulthood*. New York: Russell Sage.
- Benedicto, J. y Morán, M. L. (2003). “Los jóvenes ¿Ciudadanos en Proyecto?”, en J. Benedicto y M.J. Morán (Eds.): *Aprendiendo a ser ciudadano*. Madrid: INJUVE.
- Bentolila, S. y Jansen, M. (2019). “La implantación de la FP dual en España: La experiencia de Madrid”. *Estudios sobre la Economía Española*, 32, FEDEA.

- Bernardi, F. (2007). "Movilidad social y dinámicas familiares. Una aplicación al estudio de la emancipación familiar en España". *Revista Internacional de Sociología*, 65, 33-54.
- Bernardi, F. & Martínez-Pastor, J. I. (2010). "Falling at the bottom: Unskilled jobs at entry in the labour market in Spain over time and in a comparative perspective". *International Journal of Comparative Sociology*, 51 (4), 289-307.
- Berngruber, A. (2015). "Generation boomerang' in Germany? Returning to the parental home in young adulthood". *Journal of Youth Studies*, 18 (10), 1274-1290.
- Berthoud, R. & Iacovou, M. (2004). *Social Europe: Living standards and welfare states*. UK: Edward Elgar.
- Betcherman, G. *et al.* (2007). "A review of interventions to support young workers: Findings of the youth employment inventory". *Social Protection Discussion Paper Series*, No. 715. Washington, DC: World Bank.
- Betrán Abadía, R. (2002). "De aquellos barros, estos lodos. La política de vivienda en la España franquista y postfranquista". *Acciones e Investigaciones Sociales*, 16, 25-67.
- Billari, F.C. (2004). "Becoming an adult in Europe: A macro (/micro)-demographic perspective". *Demographic Research*, 3 (2), 15-44.
- Billari, F. & Liefbroer, L. (2010). "Towards a new pattern of transition to adulthood?" *Advances in Life Course Research*, 15, 59-75.
- Blázquez, M. (2005). "Youth labour market integration in Spain: Search time job duration and Skill Mismatch". *Spanish Economic Review*, 7, 191-208.
- Blossfeld, H. *et al.* (2005). *Globalization, uncertainty and youth in society*. Londres: Routledge.
- Botelho Azevedo, A. (2016). *Housing and family dynamics in southern Europe*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona.
- Borgia, S. y Delgado, A. (2009). "Evolución de las políticas de vivienda en España. Comparativa con la UE-15". *Presupuesto y Gasto Público*, 57, 33-49.
- Börsch-Supan, A. (1986). "Household formation, housing prices, and public policy impacts". *Journal of Public Economics*, 30, 145-164.
- Bosch Meda, J. (2015). *Crisis y emancipación juvenil en Europa. Un análisis desde los modelos de Estado de bienestar*, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- (2017). "La relación entre política de vivienda y emancipación residencial de la juventud

- europa". *Papers*, 102 (1), 107-141.
- Bourassa, S.C. *et al.* (1994). "Independent living and home ownership: An analysis of Australian youth". *Australian Economic Review*, 27 (3), 29-44.
- Brannen, J. & Nilsen, A. (2005). "Individualisation, choice and structure: A discussion of current trends in sociological analysis". *Sociological Review*, 53 (3), 412-428.
- Breen, R. & Buchmann, M. (2002). "Institutional variation and the position of young people: A comparative perspective". *The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences*, 580, 288-305.
- Buchmann, M. & Kriesi, I. (2011). "Transition to adulthood in Europe". *Annual Review of Sociology*, 37, 481-503.
- Buck, N. & Scott, J. (1993). "She's leaving home: But why? An analysis of young people leaving the parental home". *Journal of Marriage and the Family*, 55 (4), 863-874.
- Burgess, P. & Leahy, P. (2004). "Youth policy and participation: Case study report for the Republic of Ireland". *YOYO-project*. Available at: <http://www.iris-egris.de/yoyo>.
- Bussi, M. & Geyer, L. (2013). *Youth guarantees and recent developments on measures against youth unemployment: A mapping exercise*. Bruselas: European Trade Union Institute.
- Bynner, J.M. (2005). "Rethinking the youth phase of the life-course: The case for emerging adulthood?" *Journal of Youth Studies*, 8 (4), 367-384.
- Byrne, D. *et al.* (2018). "Household formation and tenure choice: Did the great Irish housing bust alter consumer behaviour?" *The Economic and Social Review*, 49 (3), 287-317.
- Cabasés, M. A. *et al.* (2016). "The EU youth guarantee - a critical analysis of its implementation in Spain". *Journal of Youth Studies*, 19 (5), 684-704.
- (2017). "El modelo de empleo juvenil en España (2013-2016)". *Política y Sociedad*, 54 (3), 737-759.
- Cachón, L. (2008). "De las políticas de transición en Europa a las clases de transiciones y transiciones de clase en España". *Pensamiento Iberoamericano*, 3, 97-116.
- Caldera, A. & Johansson, Å. (2013). "The price responsiveness of housing supply in OECD countries". *Journal of Housing Economics*, 22 (3), 231-249.
- Cámaras de Comercio, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fondo Social Europeo (2014). Guía de Formación Dual. Disponible en: [http://www.cnse.es/guia\\_formacion\\_dual/principal/pdf/GuiaFormacionDual.pdf](http://www.cnse.es/guia_formacion_dual/principal/pdf/GuiaFormacionDual.pdf)

- Cantó, O. (2014). “La contribución de las prestaciones sociales a la redistribución”, en V. Renes (coord.): *VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014*, Fundación FOESSA-Cáritas, Madrid.
- Cantó-Sánchez, O. & Mercader-Prats, M. (2000). “Young people leaving home: The impact on poverty in Spain”, in B. Bradbury *et al.* (eds.): *Dynamics of child poverty in industrialised countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Capozza, D. *et al.* (2002). “Determinants of real house price dynamics”. *NBER Working Paper* 9262. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Capozza, D. & Seguin, P. J. (1996). “Expectations, efficiency, and euphoria in the housing market”. *Regional Science and Urban Economics*, 26 (3-4), 369-386.
- Carabaña, J. (2004). “Educación y movilidad social”, en V. Navarro (coord.): *El estado de bienestar en España*. Barcelona: Tecnos-UPF, 209-237.
- Caracuel-Cáliz, R. *et al.* (2018). “La escuela como agente de socialización y su influencia en la adquisición y mantenimiento de hábitos saludables y no saludables”. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 2 (2), 207-216.
- Carbajo, D. (2014). *Vivir en la precariedad. Trayectorias y estrategias residenciales de los jóvenes en la Comunidad Autónoma del País Vasco*. Tesis doctoral. Bilbao. UPV-EHU.
- Carballo-Cruz, F. (2011). “Causes and consequences of the Spanish economic crisis: Why the recovery is taken so long?” *Panoeconomicus*, 58 (5), 309-328.
- Card, D. & Lemieux, T. (2000). “Adapting to circumstances (The evolution of work, school, and living arrangements among North American youth)”, in D. G. Blanchflower and R. B. Freeman (eds.): *Youth employment and joblessness in advanced countries*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Carrasco, R. *et al.* (2013). *ESL in Spain. Towards a policy analysis*. Country Report 1. RESL.eu. Universitat Autònoma de Barcelona.
- (2014). “Returns to skills and the distribution of wages: Spain 1995-2010”. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 77 (4), 542-565.
- (2015). “¿Qué pueden hacer los centros públicos ante el abandono escolar prematuro? Explorando las medidas de apoyo al alumnado a través de dos estudios de caso en Cataluña en un contexto de crisis”. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 19 (3), 76-92.

- Casal, J. (1996). "Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del siglo 21: aproximación sucesiva, precariedad y desestructuración". *REIS, Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 75. Madrid.
- (2000). "Capitalismo informacional, trayectorias sociales de los jóvenes y políticas de juventud", en L. Cachón: *Juventudes y empleos, perspectivas comparadas*. Madrid: INJUVE.
- Casal, J. *et al.* (2006). "Aportaciones teóricas y metodológicas a la sociología de la juventud desde la perspectiva de la transición". *Papers*, 79, 21-48.
- Case, K. & Shiller, R. (2003). "Is there a bubble in the housing market?" *Brookings Papers on Economic Activity*, 2, 299-362.
- Castles, F. (2010). "The English-Speaking Countries", en F. G. Castles *et al.* (eds.): *The Oxford handbook of the Welfare State*. Oxford University Press,
- Castles, F. & Ferrera, M. (1996). "Homeownership and the Welfare State: Is Southern Europe different?" *South European Society and Politics*, 1 (2), 163-184.
- Catte, P. *et al.* (2004). Housing markets, wealth and the business cycle. *OECD Working Paper*, No. 394.
- Cavas Martínez, F. (2016). "Desempleo juvenil y políticas de incentivación económica al empleo en la X legislatura (2012-2015): balance y perspectivas". *Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo*, 187, 139-157.
- Cebrián, I. (2008). "Empleo temporal e indefinido y trayectorias laborales". *Gaceta Sindical: Reflexión y Debate*, 10, 43-66.
- Chandler, J. *et al.* (2004). "Living alone: Its place in household formation and change". *Sociological Research Online*, 9 (3), 42-54.
- Chanvrlil, F. *et al.* (2009). *La parentalité en Europe: Analyse séquentielle des trajectoires d'entrée dans l'âge adulte à partir de l'Enquête sociale européenne*. París: Caisse nationale des Allocations familiales, Dossiers d'études n° 122.
- Chiuri, M.C. & Del Boca, D. (2008). "Household membership decisions of adult children". *IZA Discussion Papers* 3546, Institute of Labor Economics (IZA).
- (2010). "Home-leaving decisions of daughters and sons". *Review of Economics of the Household*, 8, 393-408.



- Choi, J.H. & Painter, G. (2015). "Housing formation and unemployment rates: Evidence from 1975-2011". *The Journal of Real Estate Finances and Economics*, 50, 549-566.
- Clark, W. A. V. (2011). "Prices, expectations and the changing housing market: A commentary and discussion". *Housing, Theory and Society*, 28(3), 262-275.
- Clark, W.A.V. & Dieleman, F. (1996). *Households and housing: Choice and outcomes in the housing market*. New Brunswick: Centre for Urban Policy Research.
- Clasen, J. (2005). *Reforming European Welfare States: Germany and The United Kingdom compared*. Oxford: Oxford University Press.
- Crespo, E. *et al.* (2009). *Trabajo, subjetividad y ciudadanía: paradojas del empleo en una sociedad en transformación*. Madrid: CIS-UCM.
- Colom, M.C. *et al.* (2001). "Formación de hogar y situación en el mercado laboral: un análisis para los jóvenes adultos en España". *Estudios de Economía Aplicada*, 18, 105-128.
- Colom, M.C. y Molés, M.C. (2016). "Emancipación familiar en España: análisis del comportamiento de los jóvenes en 1990, 2000 y 2010". *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*, 22, 120-138.
- Comas Arnau, D. (2007). *Las políticas de juventud en la España democrática*. Estudios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INJUVE.
- Comisión Europea (2001). *European Commission White Paper. A new impetus for European Youth*. Brussels: Commission of the European Communities.
- (2012). *Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión que acompaña al Documento Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de una Garantía juvenil*. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 409, Bruselas.
- Consejo de la Juventud de España (2014). *Propuesta documento político formación profesional dual: Construyendo un modelo propio*. Disponible en: <http://www.cje.org/docs/5287/>
- Consejo Europeo (2013). *Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía juvenil*. Bruselas.
- Consejo Económico Social (2002). *La emancipación de los jóvenes y la situación de la vivienda en España*. Informe nº3.

- (2012). *Estudio de emancipación de los jóvenes. La situación de la vivienda en España*. Información facilitada por el Programa de Formación Inmobiliaria de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Cooper, D. & Luengo-Prado, M. J. (2018). “Household formation over time: Evidence from two cohorts of young adults”. *Journal of Housing Economics*, 41, 106-123.
- Correia, D. *et al.* (2014). “National report for Portugal”. *Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe*. Bruselas.
- Cortés, L. (1995). *La cuestión residencial. Bases para una sociología del habitar*. Madrid: Editorial Fundamentos.
- Crul, M. *et al.* (2013). *Dutch country report of WP 2.2, phase II*. Erasmus University Rotterdam.
- Cuestas, J. (2017). “House prices and capital inflows in Spain during the boom: Evidence from a cointegrated VAR and a structural Bayesian VAR”. *Journal of Housing Economics*, 37, 22-28.
- Culfaz, E. (2014). “El régimen del bienestar del sur de Europa y los efectos de la crisis de 2007 en el bienestar de España”. *Papeles de Europa*, 27 (1), 105-136.
- Cvijanovic, D. *et al.* (2010). *New in town: Demographics, immigration, and the price of real estate*. Londres: London School of Economics.
- DaVanzo, J. & Goldscheider, F. (1990). “Coming home again: Returns to the parental home of young adults”. *Population Studies*, 44, 241-255.
- Davidoff, T. (2013). “Supply elasticity and the housing cycle of the 2000s”. *Real Estate Economics*, 41(4), 793-813.
- De la Rica, S. (2015). “Políticas activas de empleo: una panorámica”. *Fedea Policy Papers*, 1. Disponible en: <http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/01/FPP2015-01.pdf>
- De Oliveira Tavares *et al.* (2014). “The portuguese residential real estate market. An evaluation of the last decade”. *Panoeconomicus*, 6, 739-757
- De Singly, F. (2005). “Las formas de terminar y de no terminar la juventud”. *Estudios de Juventud*, 71, 111-121. Madrid: INJUVE.
- Delair, L. & Ritzenthaler, A. (2018). *L’orientation desde jeunes*. *Journal Officiel de la République Française*. Disponible en: [https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018\\_12\\_orientation\\_jeunes.pdf](https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_12_orientation_jeunes.pdf)

- Di, Z. & Liu, X. (2006). "The effects of housing push factors and rent expectations on household formation of young adults". *Journal of Real Estate Research*, 28 (2), 149-166.
- Díaz, A. & Guilló, M. (2000). "Family ties and unemployment". *Working Paper AD 7*, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
- Díaz-Fernández, M. *et al.* (2018). "Interrelation between births and the housing market: A cointegration analysis for the Spanish case". *Population, Space and Place*, 25 (3), 1-10.
- Dolado, J. J. *et al.* (2000). "Youth labour markets in Spain: Education, training, and crowding-out". *European Economic Review*, 44, 943-956.
- (2002). "Drawing lessons from the boom of temporary jobs in Spain". *The Economic Journal*, 112, 270-295.
- (2013). "Youth labour market performance in Spain and its determinants: A micro-level perspective". *OECD Economics Department Working Papers*, 1039.
- Donat López, M. y Martín-Lagos López, M. D. (2020). "Juventud andaluza y emancipación. ¿Independencia residencial y/o autosuficiencia económica?" *Papers*, 105, 57-81.
- Du Bois-Reymond, M. y López Blasco, A. (2004). "Transiciones tipo yo-yo y trayectorias fallidas: hacia las políticas integradas de transición para los jóvenes europeos". *Revista de Estudios de Juventud*, 65, 11-19.
- Dukelow, F. & Heins, E. (2017). "The Anglo-Saxon welfare states: Still Europe's outlier – or trendsetter?", in P. Kennett and N. Lendvai-Bainton (eds.): *Handbook of European social policy*. Edward Elgar, Cheltenham, pp. 230-247.
- Echaves García, A. (2016). *Juventud, emancipación residencial y sistema de provisión de vivienda: las divergencias autonómicas del modelo español*. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
- (2017). "El difícil acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda en España: precios, regímenes de tenencia y esfuerzos". *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 35 (1), 127-149.
- Echeverría Samanes, B. y Martínez Clares, P. (2018). "Estrategias de mejora en la implantación de la Formación Profesional Dual en España". *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, 94, 178-203.
- Emmanuel, D. (2013). "Balancing autonomy, status and family in the transition to adulthood: Class and housing aspects of the Southern European model in Athens, 1987-2004", in

- R. Forrest and Y. Ngai-Ming (eds.): *Housing young people: Transitions, trajectories and generational fractures*. United Kingdom: Routledge.
- Emmenegger, P. *et al.* (2012). “How we grow unequal”, in P. Emmenegger *et al.* (eds.): *The age of dualization: The changing face of inequality in deindustrializing societies*. Oxford: Oxford University Press.
- Erhel, C. *et al.* (2010). “From selective exclusion towards activation: a life course perspective on the French social model”, in D. Anxo *et al.* (eds.): *The Welfare State and life transitions*. Cheltenham: Edward Elgar, 208-230.
- Ermisch, J.F. (1999). “Prices, parents, and young people's household formation”. *Journal of Urban Economics*, 45 (1), 47-71.
- Ermisch, J.F. & Di Salvo, P. (1997). “The economic determinants of young people's household formation”. *Economica*, 64 (256), 627-644.
- Escudero López, R. (2016). “El Sistema Nacional de Garantía Juvenil: entre un amplio número de medidas y unos resultados aún insuficientes”, en R. Escudero (ed.): *Jóvenes y empleo. Una mirada desde el derecho, la sociología y la economía*. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
- Escudero Vasconez, V. y López Mourelo, E. (2014). “El sistema de Garantía Juvenil en Europa: Características, desarrollo y desafíos”. *Revista ICE*, 881, 83-100.
- (2015). “The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges”. *ILO Working Paper* no. 4.
- (2017). “The European Youth Guarantee: A systematic review of its implementation across countries”. *ILO Working Paper* no. 21.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Cambridge: Polity press.
- (1999). *Social foundations of post-industrial economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Espínola Orrego, G. (2010). *El derecho a una vivienda digna y adecuada en el ordenamiento jurídico español*. Tesis Doctoral, Universidad de Alcalá de Henares, Departamento de Derecho Público, Madrid.
- Euler, D. (2013). *El sistema dual en Alemania. ¿Es posible transferir el modelo al extranjero?*, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. Disponible en:

[https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/72.\\_130610\\_El\\_sistema\\_dual\\_en\\_Alemania\\_1\\_.pdf](https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/72._130610_El_sistema_dual_en_Alemania_1_.pdf)

Eurofound (2013). *Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013*. Dublin: Eurofound.

European Commission (2013). “Public Works: how can PES contribute to increasing their value as an activation tool?” *Employment, Social Affairs & Inclusion*. Disponible en: <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13384&langId=en>

----- (2014). “EEPO Review: Start-up incentives- Portugal”. *Employment, Social Affairs & Inclusion*. Disponible en: <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13255&langId=en>

----- (2018a). *Youth policies in Sweden*. Disponible en: <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki>

----- (2018b). *Youth policies in Republic Czech*. Disponible en: [https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/czech\\_republic.pdf](https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/czech_republic.pdf)

Eurydice y Cedefop (2014). *La lucha contra el abandono temprano de la educación y la formación en Europa: estrategias, políticas y medidas*. Informe de Eurydice y Cedefop. Luxemburgo: Oficina de publicaciones de la Unión Europea.

Felgueroso, F. (2019). *Empleo juvenil: viejos problemas, nuevo escenario*. Recuperado en: <https://nadaesgratis.es/felgueroso/empleo-juvenil-viejos-problemas-nuevo-escenario>

Felgueroso, F. & Jansen, M. (2015). “The youth guarantee: Theory or reality?”, in J.J. Dolado (ed.): *No country for young people? Youth labour market problems in Europe*. London: CEPR Press.

Fenger, H. J. M. (2007). “Welfare regimes in central and Eastern Europe: Incorporating post-communist countries in a welfare regime typology”. *Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences*, 3 (2), 1-30.

Fernández, C. (2006). “The role of education vis-a-vis job experience in explaining the transitions to employment in the Spanish labour market”. *Spanish Economic Review*, 8, 161-187.

Fernández Cordon, J.A. (1997). “Youth residential independence and autonomy: A comparative study”. *Journal of Family Issues*, 16, 567-607.

- Fernández Enguita, M. *et al.* (2010). *Fracaso y abandono escolar en España*. Barcelona: Fundación la Caixa.
- Fernández-Kranz, D. & Hon, M. (2006). “A cross-section analysis of the income elasticity of housing demand in Spain: Is there a real estate nubble?” *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 32 (4), 449-470.
- Ferrera, M. (1996). “The ‘Southern’ model of Welfare in social Europe”. *Journal of European Social Policy*, 6 (1), 17-37.
- Ferrera, M. (2010). “The South European countries”, in F. G. Castles *et al.* (eds.): *The Oxford handbook of the Welfare State*. Oxford University Press, 616-629.
- Fitzpatrick, S. & Stephens, M. (2007a). “Welfare Regimes, housing systems and homelessness: How are they linked?” *European Journal of Homelessness*, 1, 201-211.
- (2007b). *An international review of homelessness and social housing policy*. London: Communities and Local Government.
- Flaquer, L. (2000). *La política familiar en una perspectiva comparada*. Barcelona: Fundación La Caixa.
- (2004). “La articulación entre familia y el estado de bienestar en los países de la Europa del sur”. *Papers. Revista de Sociología*, 73, 27-58.
- Fradique, R. & Rodrigues, P. (2014). “The dynamics and contrast of house prices in Portugal and Spain”. *Economic Bulletin*, Banco de Portugal, December.
- Furlong, A. *et al.* (2006). “Choice biographies and transitional linearity: re-conceptualising modern youth transitions”. *Papers. Revista de Sociología*, 79, 225-239.
- Furlong, A. & Cartmel, F. (2007). *Young people and social change*. New York: Mc.Graw Hill.
- Furlong, A. & McNeish, W. (2001) *Integration through training? Comparing the effectiveness of strategies to promote the integration of unemployed young people in the aftermath of the 1997 Luxembourg summit on employment*. Final Report to the European Commission. University of Glasgow.
- Fuster, N. *et al.* (2019). “From a culture of homeownership to generation rent: housing discourses of young adults in Spain”. *Journal of Youth Studies*, 22 (5), 585-603.
- Galland, O. (1991). *Sociologie de la jeunesse*. París: Armand Colin Press.
- Gallie, D. & Paugman, S. (2000). *Welfare Regimes and the experience of unemployment in Europe*. Oxford: Oxford University Press.

- García López, J. R. (2014). "El desempleo juvenil en España". *Información Comercial Española. Revista de Economía*, 881, 11-28.
- García Montalvo, J. (2008). "La dinámica de la sobrecualificación en España", en IVIE (ed.): *Análisis de la sobrecualificación y la flexibilidad laboral: Observatorio de la inserción laboral de los jóvenes 2008*. Valencia: Fundación Bancaja, 21-88.
- (2010). "Land use regulation and house prices in Spain". *Moneda y Crédito*, 230, 87-120.
- García Montalvo, J. et al. (2006). *Los jóvenes y el mercado de trabajo de la España urbana: resultados del Observatorio de Inserción Laboral 2005*. Valencia: Fundación Bancaja.
- García-Pérez, J. I. & Muñoz-Bullón, F. (2011). "Transitions into permanent employment in Spain: An empirical analysis for young workers". *British Journal of Industrial Relations*, 49 (1), 103-143.
- García Polavieja, J. (2003). *Estables y precarios. Desregulación laboral y estratificación social en España*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, Siglo XXI.
- García Serrano, C. (2007). "Las políticas del mercado de trabajo: desempleo y activación laboral". *Política y Sociedad*, 44 (2), 135-151.
- Garrido, L. y Requena, M. (1997). "Proyección de hogares y familia", en R. Vergés Escuín (ed.): *La edad de emancipación de los jóvenes*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 13-53.
- Gartner, H. (2000). "Das Auszugsverhalten junger Menschen aus dem Elternhaus in Westdeutschland seit 1984". *Discussion Paper 215*, Volkswirtschaftsliches Institut, Seminar für empirische Wirtschaftsforschung, Ludwig-Maximilians-Universität, München.
- Gattini, L. & Hiebert, P. (2010). "Forecasting and assessing Euro Area house prices through the Lens of key fundamentals". *ECB Working Paper 1249*. Frankfurt: European Central Bank.
- Gaviria, S. (2007). *Juventud y familia en Francia y en España*. Madrid: Colección "Monografías" no 234. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- (2011). "Dime cómo te construyes y te diré cómo te irás de casa. La emancipación de los/las jóvenes en Europa". *Revista Jóvenes y +*, 1. Disponible en: [http://jovenesymas.fad.es/userfiles/file/numero1/rev1\\_3afondo.pdf](http://jovenesymas.fad.es/userfiles/file/numero1/rev1_3afondo.pdf).

- Gentile, A. (2013). *Emancipación juvenil en tiempos de crisis: un diagnóstico para impulsar la inserción laboral y la transición residencial* (Estudios de Progreso no 73/2013). Madrid: Fundación Alternativas.
- (2016). "Rental subsidy and the emancipation of young adults in Spain". *International Journal of Housing Policy*, 16 (2), 243-254.
- Gentile, A. y Valls, F. (2015). "La intensificación de la inestabilidad laboral entre los jóvenes en España". *Panorama Social*, 22, 111-125.
- Ghidoni, M. (2002). "Determinants of young Europeans' decision to leave the parental household". *Working paper*, University College of London.
- Giannelli, G. C. & Monfardini, C. (2003). "Joint decisions on household membership and human capital accumulation of youths. The role of expected earnings and local markets". *Journal of Population Economics*, 16 (2), 265-285.
- Gil Calvo, E. (2002). "Emancipación tardía y estrategia familiar". *Estudios de Juventud*, 58, 1-9.
- (2005). "El envejecimiento de la juventud". *Revista de Estudios de Juventud*, 71, 11-19.
- Glaeser, E. & Gyourko, J. (2006). "Housing dynamics". *NBER Working Paper* 12787. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Glaeser, E. *et al.* (2008). "Housing supply and housing bubbles". *Journal of Urban Economics*, 64 (2), 198-217.
- Goldscheider, F. K. & DaVanzo, J. (1985). "Living arrangements and the transition to adulthood". *Demography*, 22 (4), 545-563.
- Gómez Torres, M.J. y Ordóñez Sierra, R. (2014). "Las transiciones de la formación al trabajo de los jóvenes españoles en el marco de las medidas educativas contempladas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016". *Temas laborales*, 127, 177-217.
- González-Blanch, M. J. (2017). *Políticas activas de empleo en la UE en tiempos de crisis económica*. Tesis doctoral, Departamento de Economía Aplicada III, Universidad Complutense de Madrid.
- Government Offices of Sweden (2016). *Sweden's national reform programme 2016*. Disponible en:



<https://www.government.se/contentassets/ed35143802ee497b93b0c876d91f19ae/swedens-national-reform-programme-2016.pdf>

- (2019). *Sweden's national reform programme 2019*. Disponible en: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-national-reform-programme-sweden\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-national-reform-programme-sweden_en.pdf)
- Gracia, E. y López Oller, J. (2017). "Emancipación residencial: el coste de acceso sólo cuenta parte de la historia". *Revista de Estudios de Juventud*, 116, 63-74.
- Grimes, A. & Aitken, A. (2010). "Housing supply, land costs and price adjustment". *Real Estate Economics*, 38 (2), 325-353.
- Guerreiro, M. e Abrantes, P. (2005). "Como tornar-se adulto: processos de transição na modernidade avançada". *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 20 (58), 157-175.
- Guillén, A. M. & León, M. (2011). "Introduction", en A.M. Guillén and M. León (eds.): *The Spanish Welfare State in European context*. Aldershot: Ashgate, 1-16.
- Gutiérrez, R. (2014). "Welfare performance in Southern Europe: Employment Crisis and poverty risk". *South European Society and Politics*, 19 (3), 371-392.
- Gunther, R. et al. (1995). *The politics of democratic consolidation: Southern Europe in comparative perspective*. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
- Gyourko, J. et al. (2008). "A new measure of the local regulatory environment for housing markets: the Wharton residential land use regulatory index". *Urban Studies*, 45 (3), 693-729.
- Halvorsen, R. & Hvinden, B. (2018). *Youth, diversity and employment: Comparative perspectives on labour market policies*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
- Haurin, D. R. et al. (1993). "The impact of real rents and wages on household formation". *The Review of Economics and Statistics*, 75, 284-293.
- (1997). "Home or alone: The costs of independent living for youth". *Social Science Research*, 26 (2), 135-152.
- Häusermann, S. & Schwander, H. (2012). "Varieties of dualization?: Labor market segmentation and insider-outsider divides across regimes", in P. Emmenegger et al. (eds.): *The age of dualization: The changing face of inequality in deindustrializing societies*. Oxford: Oxford University Press, 27-51.

- Hegedüs, J. *et al.* (2013). *Social housing in transition countries*. New York, Abingdon (UK): Routledge.
- Hemerijck, A. (2013). *Changing Welfare States*. Oxford: Oxford University Press.
- Hemerijck, A. *et al.* (2013). *Changing European Welfare States and the evolution of migrant incorporation regimes*. IMPACIM Project Report. Oxford: COMPAS, University of Oxford. Disponible en: [https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/PR-2013-IMPACIM\\_Background\\_Welfare\\_States.pdf](https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/PR-2013-IMPACIM_Background_Welfare_States.pdf)
- Herrador Buendía, F. (2002). “Aproximación teórica al fenómeno del desempleo: el caso del desempleo de larga duración”. *Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración*, 35, 121-144.
- Hilbers, P. *et al.* (2008). “House price developments in Europe: A comparison”. *IMF Working Paper*, 08/211. Washington: International Monetary Fund.
- Hill, C.J. & Holzer, H. (2007). “Labor market experiences and transitions to adulthood”, in S. Danziger and C.E. Rouse (eds.): *The price of independence: The economics of early adulthood*. New York: Russell Sage.
- Hillmert, S. (2011). “Occupational mobility and developments of inequality along the life course”. *European Societies*, 13 (3), 401-423.
- Himmelberg, C. *et al.* (2005). “Assessing high house prices: bubbles, fundamentals and misperception”. *Journal of Economic Perspectives*, 19, 67-92.
- Hoekstra, J. (2003). “Housing and the welfare state in the Netherlands: an application of Esping-Andersen’s typology”. *Housing, Theory and Society*, 20 (2), 58-71.
- Hoekstra, J. (2005). “Is there a connection between welfare regime and dwelling type? An exploratory statistical analysis”. *Housing Studies*, 20 (3), 475-495.
- Holdsworth, C. (1998). “Leaving home in Spain: A regional analysis”. *International Journal of Population Geography*, 4, 341-360.
- (2005). “When are the children going to leave home: Family culture and delayed transitions in Spain”. *European Societies*, 7 (4), 547-566.
- Holdsworth, C. *et al.* (2002). “Leaving home in Spain: When, where and why?”. *Regional Studies*, 36 (9), 989-1004.
- Holdsworth, C. & Irazoqui Solda, M. (2002). “First housing moves in Spain: An analysis of leaving home and first housing acquisition”. *European Journal of Population*, 18, 1-19.

- Hörisch, F. *et al.* (2014). *Labour market policies and youth unemployment*. CUPESSE Policy Brief I, University of Mannheim (Germany).
- Hsiao, C. (2003). *Analysis of panel data*. Cambridge: University Press.
- Hsiao, C. & Sun, B.H. (2000). *To pool or not to pool panel data*. *Panel Data Econometrics: Future Directions*, Papers in Honor of Professor Pietro Balestra, edited by J. Krishnakumar and E. Ronchetti. Amsterdam: North Holland.
- Iacoviello, M. & Minetti, R. (2003). “Financial liberalization and the sensitivity of house prices to monetary policy: theory and evidence”. *The Manchester School*, 71, 20-34.
- Iacovou, M. (2002). “Regional differences in the transition to adulthood”. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 580 (1), 40-69.
- (2010). “Leaving home: Independence, togetherness and income”. *Advances in Life Course Research*, 15, 147-160.
- Inurrieta Beruete, A. (2007). *Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional*. Documento de trabajo 113/2007, Barcelona, Fundación Alternativas.
- (2015). *Burbuja inmobiliaria y crisis en Andalucía: orígenes, dinámica y efectos*. Universidad de Málaga.
- Jansen, M. (2016). “El reto de la inserción de los desempleados de larga duración”. *Fedea Policy Paper*. Disponible en: <http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2016/12/FPP2016-26.pdf>
- Jones, G. (1995). *Leaving home*. Buckingham: Open University Press.
- Jones, G. & Wallace, C. (1992). *Youth, family and citizenship*. Buckingham: Open University Press.
- Juárez Tárraga, F. (2016). *Vivienda y pobreza*. Tesis doctoral, Departamento de Análisis Económico Aplicado, Universidad de Alicante.
- Jud, D. & Winkler, D. (2002). “The dynamics of metropolitan housing prices”. *Journal of Real Estate Research*, 23(1/2), 29-45.
- Jurado Guerrero, T. (2003). “La vivienda como determinante de la formación familiar en España desde una perspectiva comparada”. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 103, 113-157.
- (2006). “El creciente dinamismo familiar frente a la inflexibilidad del modelo de vivienda español”. *Cuadernos de Información Económica*, 193, 117-126.

- Kaplan, G. (2009). "Boomerang kids: Labor market dynamics and moving back home". *Working Paper 675*, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
- (2010). "Moving back home: Insurance against labor market risk". *Working Paper 677*, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
- Kathleen, M.H. (2010). "Impact of the economic downturn on young adults". *Congressional briefing on recession and recovery: How are Americans affected?*, sponsored by the Population Association of America, Washington, DC: Capitol Hill.
- Kelly, E. *et al.* (2012). "Transitions to long-term unemployment risk among young people: Evidence from Ireland". *Journal of Youth Studies*, 15 (6), 780-801.
- Kotthoff, H. G. (2011). "Between excellence and equity: the case of the german education system". *Revista Española de Educación Comparada*, 18, 27-60.
- Kwon, I. *et al.* (2010). "Cohort effects in promotions and wages: Evidence from Sweden and the United States". *Journal of Human Resources*, 45, 772-808.
- Laino, E. & Pittini, A. (2011). *Housing Europe review 2012: The nuts and bolts of European social housing systems*. Bruselas: CECODHAS Housing Europe.
- Lauster, N.T. (2006). "A room of one's own or room enough for two? Access to housing and new household formation in Sweden, 1968-1992". *Population Research and Policy Review*, 25, 329-351.
- Le Blanc, D. & Wolff, F.C. (2006). "Leaving home in Europe: The role of parent's and children's incomes". *Review of Economics of the Household*, 4 (1), 53-73.
- Leal Maldonado, J. (2000). "Comportamientos residenciales y necesidades de vivienda", en P. Taltavull (ed.): *Vivienda y familia*. Madrid: Visor/Fundación Argentaria.
- Leal Maldonado, J. y Cortés, L. (1995). *La vivienda en Madrid: análisis espacial de la dinámica residencial en la región*. Madrid: Consejería de Política Territorial/Comunidad de Madrid.
- Leal Maldonado, J. y Martínez del Olmo, A. (2017). "El progresivo abandono de la política de vivienda en España". *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 35 (1), 15-41.
- Lee, K., & Painter, G. (2013). "What happens to household formation in a recession?" *Journal of Urban Economics*, 76, 93-109.
- Lehwess-Litzmann, R. (2014). *Capability as a Yardstick for Flexicurity*. Gottingen: Universitätsverlag Göttingen.

- Leibfried, S. (1992). "Towards a European Welfare State?: On integrating poverty regimes into the European Community", in Z. Ferge and J.E. Kolberg (eds.): *Social policy in a changing Europe*. Frankfurt: Westview Press.
- Lennartz, C. *et al.* (2016). "Younger adults and homeownership in Europe through the Global Financial Crisis". *Population, Space and Place*, 22, 823-835.
- León, M. & Migliavacca, M. (2013). "Italy and Spain: Still the case of familistic welfare models?" *Population Review*, 52, 25-42.
- López-Andreu, M. y Verd Pericàs, J. M. (2017). "Recesión, austeridad y sus efectos en los regímenes de transición juvenil en España y Reino Unido". *Anuario IET de trabajo y relaciones laborales*, 4, 1-13.
- López-Rodríguez, D. y de los Llanos Matea, M. (2019). "Evolución reciente del mercado de alquiler de vivienda en España". *Boletín Económico*, 3/2019, Banco de España.
- López Blasco, A. (2008). *Informe español de juventud (Spanish Youth Report)*. Madrid: INJUVE.
- Lorentzen, T. *et al.* (2014). "Unemployment and economic security for young adults in Finland, Norway and Sweden: From unemployment protection to poverty relief". *International Journal of Social Welfare*, 23, 41-51.
- Lundahl, L. & Olofsson, J. (2014). "Guarded transitions? Youth trajectories and school-to-work transition policies in Sweden". *International Journal of Adolescence and Youth*, 19 (1), 19-34.
- Maattanen, N. & Tervio, M. (2010). "Income distribution and housing prices: an assignment model approach". *CEPR Discussion Papers*, 945.
- Machado, F. L. e Silva, A. (2009). *Quantos caminhos há no mundo? Transições para a vida adulta num Bairro Social*. Cascais: Princípia.
- Mairhuber, I. (2010). "Transitions in female and male life course: changes and continuities in Austria", in D. Anxo *et al.* (eds.): *The Welfare State and life transitions*. Cheltenham: Edward Elgar, 155-181.
- Malo, M. A. & Cueto, B. (2013). "Temporary contracts across generations: Long-term effects of a labour market reform at the margin". *MPRA Paper Num.* 44275.

- Manacorda, M. & E. Moretti. (2006). "Why do most Italian youths live with their parents? Intergenerational transfers and household structure". *Journal of the European Economic Association*, 4, 800-829.
- Mandic, S. (2008). "Home-leaving and its structural determinants in Western and Eastern Europe: An exploratory study". *Housing Studies*, 23 (4), 615-637.
- Manrique, J. & Ojah, K. (2003). The demand for housing in Spain: an endogenous switching regression analysis. *Applied Economics*, 35(3), 323-336.
- Marhuenda, F. *et al.* (2016). "La formación profesional dual en España. Consideraciones sobre los centros que la implementan". *Revista Internacional de Organizaciones*, 17, 43-63.
- Martin, C. (2015). "Southern Welfare States: Configuration of the Welfare balance between state and the family in Southern Europe?", in M. Baumeister and R. Sala (eds.): *Italy, Spain, Portugal, and Greece from the 1950s until the present day*.
- Marrez, H. & Pontuch, P. (2013). "Finland's high house prices and household debt: a source of concern?" *ECFIN Country Focus*, 3 (6), 1-8.
- Martín Castro, M. B. (2007). *Análisis de la política de juventud en el estado de bienestar español (1975- 2005)*. Sevilla: Alfar.
- Martínez, J. S. (2013). "Sobrecualificación de los titulados universitarios y movilidad social", en Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Eds.): *PIAAC: Programa Internacional para la evaluación de las competencias de la población adulta* (Informe español vol. II).
- Martínez Celorrio, X. y Marín, A. (2010). *Educació i ascens social a Catalunya*. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
- Martínez-Granado, M. & Ruiz-Castillo, J. (2002). "The decisions of Spanish youth: a Cross-section study". *Journal of Population Economics*, 15, 305-330.
- Martínez Pagés, J. & Maza, L.A. (2003). "Analysis of house prices in Spain". *Working Paper* #0307, Bank of Spain.
- Martínez Valverde, J.F. (2014). *El desarrollo autonómico y la eficacia de las Políticas Activas de Empleo. Un análisis comparado*. España: Estudios de Progreso, Fundación Alternativas.
- Martins, N. & Villanueva, E. (2009). "Does high cost of mortgage debt explain why young adults live with their parents?" *Journal of the European Economic Association*, 7 (5), 974-1010.

- Mascherini, M. (2012). *Youth guarantee: Experiences from Finland and Sweden*. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
- Matsudaira, J. (2010). "Economic conditions and the cyclical and secular changes in parental coresidence among young adults: 1960 to 2007". *SSRN Working Paper* No. 1702573.
- (2016). "Economic conditions and the living arrangements of young adults". *Journal of Population Economics*, 29, 167-195.
- Mayer, K. U. (2001). "The paradox of global social change and national path dependencies: Life course patterns in advanced societies", en A.E. Woodward and M. Kohli (eds.): *Inclusions and exclusions in European societies*. London: Routledge.
- McElroy, M. B. (1985). "The joint determination of household membership and market work: the case of young men". *Journal of Labor Economics*, 3, 293-315.
- Melo J. y Miret, P. (2010). "Transición a la vida adulta en España: una comparación en el tiempo y en el territorio utilizando el análisis de entropía". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 131, 75-107.
- Migliavacca, M. (2008). *Famiglie e lavoro. Trasformazioni ed equilibri nell'Europa mediterranea*. Milano: Bruno Mondadori.
- Mills, M. et al. (2005). "Becoming an adult in uncertain times: a 14-country comparison of the losers of globalization", en H.P. Blossfeld and E. Klijzing (eds.): *Globalization, uncertainty and youth in society*. Oxford: Routledge.
- Migueléiz, F. et al. (2015). *Diagnostico socioeconómico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014*. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball. Disponible en: <https://ddd.uab.cat/record/142865>
- Min, I. S. & Choi, P. S. (2009). *Panel data analysis*. Seoul, South Korea: The Korea Association of STATA.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2019). *Estadística del alumnado de formación profesional Curso 2017-2018*. Disponible en: <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a461da71-8247-4442-9ab1-e0401fff8039/nota-17-18.pdf>
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2015). Balance de la situación de Francia en el ámbito sociolaboral. *Revista de Actualidad Internacional Sociolaboral*, 191, 91-96.

- Miret, P. (2006). “Escolarización, mercado de trabajo y emancipación familiar en España: un análisis longitudinal a escala de comunidad autónoma”. *Papeles de Geografía*, 43, 73-92.
- Módenes, J. A. & Botelho Azevedo, A. (2017). “Más alquiler, ¿también más inseguridad residencial? Nuevas tendencias en los hogares jóvenes españoles tras la crisis”. *Revista de Estudios de Juventud*, 116, 95-109.
- Módenes, J. A. & López-Colás, J. (2014). “Cambio demográfico reciente y vivienda en España: ¿hacia un nuevo sistema residencial?” *REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 148, 103-134.
- Módenes, J. A. *et al.* (2013). “La formación de hogares y la tenencia de vivienda de los jóvenes en la reconfiguración de los sistemas residenciales europeos”. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 17 (460).
- Molgat, M. (2007). “Do transitions and social structures matter? How ‘emerging adults’ define themselves as adults”. *Journal of Youth Studies*, 10 (5), 495-516.
- Morales Ortega, J.M. (2013). “La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y la Ley 11/2013 en el contexto europeo: garantía laboral y garantía formativa”, en M.F. Fernández López y F.J. Calvo Gallego (Eds.): *La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en la Ley 11/2013: desempleo, empleo y ocupación juvenil*. Albacete: Bomarzo, 65-98.
- Moreno, L. (2006). “The model of social protection in Southern Europe: Enduring characteristics?” *Revue Française Des Affaires Sociales*, 1, 73-95.
- (2009). *Reformas de las políticas del bienestar en España*. Madrid: Siglo XXI.
- Moreno, L. y Marí-Klose, P. (2013). “Bienestar mediterráneo: trayectorias y retos de un régimen en transición”, en E. Del Pino y M. J. Rubio Lara (eds.): *Los estados del bienestar en la encrucijada*. Madrid: Tecnos, 139-160.
- Moreno-Galbis, E. y Sopraseuth, T. (2014). “Job polarization in aging economies”. *Labour Economics*, 27, 44-55.
- Moreno Mínguez, A. (2007). *Familia y empleo de la mujer en los Estados del bienestar del sur de Europa. Incidencia de las políticas familiares y laborales*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, Colección Monografías.



- (2008). “Rasgos característicos de la transición a la vida adulta de los jóvenes españoles en el marco comparado europeo”. *Revista de Pensamiento Iberoamericano*, 3, 17-48.
- (2012). “The transition to adulthood in Spain in a comparative perspective: The incidence of structural factors”. *Young*, 20 (1), 19-48.
- (2013). *Informe juventud en España 2012*. Madrid: Instituto de la Juventud.
- (2015). “La empleabilidad de los jóvenes en España: explicando el elevado desempleo juvenil durante la recesión económica”. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 11 (1), 3-20.
- (2016). “Economic crisis and the new housing transitions of young people in Spain”. *International Journal of Housing Policy*, 16, (2), 165-183.
- (2017a). “El reto de la Garantía Juvenil: ¿solución a un problema estructural?”, en Observatorio Social de “la Caixa”: *Dossier paro juvenil y pobreza. ¿Un problema estructural?* Disponible en: <https://observatoriosociallacaixa.org/-/el-reto-de-la-garantia-juvenil>
- (2017b). “Apuntes sobre las nuevas transiciones habitacionales de los jóvenes en España en el contexto de crisis económica”. *Revista de Estudios de Juventud*, 116, 31-41.
- Moreno Mínguez, A. et al. (2012). *La transición de los jóvenes a la vida adulta: crisis económica y emancipación tardía*. Barcelona: La Caixa.
- Mulder, C. H. (2013). “Family dynamics and housing: Conceptual issues and empirical findings”. *Demographic Research*, 29 (14), 355-378.
- Mulder, C.H. & Billari, F.C. (2010). “Homeownership regimes and low fertility”. *Housing Studies*, 25 (4), 527-541.
- Mulder, C. H. & Clark, W. (2000). “Leaving home and leaving the state: Evidence from the United States”. *International Journal of Population Geography*, 6, 423-437.
- Mulder, C.H. & Hooimeijer, P. (2002). “Leaving home in the Netherlands: Timing and first housing”. *Journal of Housing and the Built Environment*, 17 (3), 237-268.
- Murray, M.P. (1999). “Subsidized and unsubsidized housing stocks 1935-1987: crowding out and cointegration”. *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 18 (1), 107-124.
- Mykyta, L. (2012). “Economic downturns and the failure to launch: The living arrangements of young adults in the US 1995–2011”. *Working Paper 24*, US Census Bureau Social, Economic, and Housing Statistics Division.

- Mykyta, L. & Macartney, S. (2011). “The effects of recession on household composition: “doubling up” and economic well-being”. *SEHSD Working Paper*, Number 2011–4 U.S. Census Bureau.
- Naldini, M. (2003). *The family in the Mediterranean Welfare States*. London: Frank Cass/Routledge.
- Navarro, J. (2013). *Universidad y mercado de trabajo en Cataluña: un análisis de la inserción laboral de los titulados universitarios*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, España.
- Navarro Ruvalcaba, M. A. (2006). “Modelos y regímenes de bienestar social en una perspectiva comparativa: Europa, Estados Unidos y América Latina”. *Desacatos*, 21, 109-134.
- Nico, M. (2011). *Transição biográfica inacabada. Transições para a vida adulta em Portugal e na Europa na perspectiva do curso de vida*. PhD Thesis, Departamento de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa, Portugal.
- (2017). “Young individuals as microcosms of the Portuguese crisis”. *Contemporary Social Science*, 12 (3-4), 361-375.
- Nilsson, K. & Strandh, M. (1999). “Nest leaving in Sweden: The importance of early educational and labor market careers”. *Journal of Marriage and Family*, 61 (4), 1068-1079.
- Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI) (2014). *Informes periódicos sobre la situación de la población joven en España*. Consejo de la Juventud de España.
- Observatorio vasco de la Vivienda (2017). *La política fiscal de fomento del alquiler en las CCAA*. Disponible en: [http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv\\_alquiler\\_ccaa\\_fiscalidad/es\\_ovv\\_admi/adjuntos/Informe\\_Vivienda\\_Alquiler\\_POLITICA\\_FISCAL.pdf](http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_alquiler_ccaa_fiscalidad/es_ovv_admi/adjuntos/Informe_Vivienda_Alquiler_POLITICA_FISCAL.pdf)
- OECD (1991). *Políticas de mercado de trabajo en los noventa*. Madrid: MTSS.
- Official Journal of the European Union (2011). *Council Recommendation of 28 June 2011 on policies to reduce early school leaving*. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:en:PDF>
- OIT (2011). “Políticas de empleo juvenil durante la recuperación económica”. Disponible en: [https://www.ilo.org/global/docs/WCMS\\_151462/lang--es/index.htm](https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_151462/lang--es/index.htm)
- Ooi, J. & Lee, S. (2006). “Price discovery between residential land and housing markets”.

*Journal of Housing Research*, 15 (2), 95-112.

Orloff, A. S. (2002). "Women's employment and welfare regimes: Globalization, export orientation and social policy in Europe and North America". *Social Policy and Development Programme Paper* No. 12. Geneva, United Nations Research Institute for Social Development.

Paciorek, A. (2016). "The long and short of household formation". *Real Estate Economics*, 44 (1), 7-40.

Pais, J. M. (2001). *Ganchos, tachos e biscates. Jovens, trabalho e futuro*. Porto: Âmbar.

----- (2003). "The multiple faces of the future in the labyrinth of life". *Journal of Youth Studies*, 6 (2), 115-127.

----- (2007). *Chollos, chapuzas, changas. Jóvenes, trabajo precario y futuro*. Barcelona: Anthropos.

Palier, B. (2010). "Continental Western Europe", en F. Castles *et al.* (eds.): *The Oxford handbook of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press, 601-615.

Pareja-Eastaway, M. y Sánchez-Martínez, M. T. (2012). "La política de vivienda en España: lecciones aprendidas y retos de futuro". *Revista Galega de Economía*, 21 (2), 1-32.

----- (2014). "Private rented markets. Spain", in P. Kemp and A. Crook (eds): *Private rented markets in Europe*. London: Edward Elgar Press.

----- (2015). "El sistema de vivienda en España y el papel de las políticas. ¿Qué falta por resolver?" *Cuadernos Económicos de ICE*, 90, 149-174.

----- (2017). "More social housing? A critical analysis on social housing provision in Spain". *Critical Housing Analysis*, 4 (1), 124-131.

Parisi, L. (2008). "Leaving home and the chances of being poor: The case of young people in southern European countries". *Labour*, 22 (1), 89-114.

Patón Casas, J.M. (2007). "Emancipación juvenil y políticas de vivienda en Europa". *ACE. Architecture, City and Environment*, 5, 523-554.

Pérez, F. y Hernández, L. (2013). "Educación, conocimientos y perfiles ocupacionales", en Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Eds.): *PIAAC: Programa Internacional para la Evaluación de las Competencias de la población adulta*.

Pérez Infante, J.I. (2013). "Crisis económica, empleo y salarios". *Documentación Social*, 169, 17-45.

- Pittini, A. (2018). *Housing the EU Youth. A research briefing by the housing Europe Observatory*. Disponible en: <https://www.housingeurope.eu/resource-1081/housing-the-eu-youth>
- Pittini, A. *et al.* (2012). The state of housing in the EU 2012. Housing Europe Review. Disponible en: <http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Housing-Europe-Review-CECODHAS-2012.pdf>
- (2017). The state of housing in the EU 2017. Housing Europe Review. Disponible en: <http://www.housingeurope.eu/resource-1000/the-state-of-housing-in-the-eu-2017>.
- (2019). The state of housing in the EU 2019. Housing Europe Review. Disponible en: <http://www.housingeurope.eu/resource-1323/the-state-of-housing-in-the-eu-2019>
- Poggio, T. (2008). “The intergenerational transmission of home ownership and the reproduction of the familialistic Welfare Regime”, en C. Saraceno (ed.): *Families, ageing and social policy. Generational solidarity in European Welfare States*. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.
- Quigley, J.M. (2007). “Regulations and property values in US: the high cost of monopoly”. *Working Paper W006-004*, Berkeley Program on Housing and Urban Policy.
- Quigley, J.M. *et al.* (2008). “Measuring land use regulations and their effects in the housing market”. *Working Paper W008-004*, Berkeley Program on Housing and Urban Policy.
- Rahona, M. *et al.* (2005). “La influencia de la educación universitaria en la inserción laboral de los jóvenes”. *XII Jornadas de Economía de la Educación*, Oviedo.
- Recio, A. (2009). “La situación laboral de los jóvenes”. *Arquitectura, Ciudad y Entorno*, 5, 411-426.
- Requena, M. (2006). “Juventud y dependencia familiar en España”. *Revista de Juventud*, 58, 10-23.
- RESL.eu (2014). *Policies on early school leaving in nine European countries: A comparative analysis*. Reducing Early School Leaving in Europe [http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policies\\_early\\_school\\_leaving.pdf](http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policies_early_school_leaving.pdf)
- Rodríguez, C. y Ramos, J. (2016). “El sistema español de Garantía Juvenil y Formación Profesional Dual en el contexto de la Estrategia Europea de Empleo”. *ICEI Working papers*.

- Rodríguez, J. (2010). “Demanda de vivienda y esfuerzo económico”, en J. Leal Maldonado (coord.): *La política de vivienda es España*. Madrid: Fundación Pablo Iglesias.
- Rodríguez-Soler, J. y Verd, J. M. (2018). “El diseño y despliegue del sistema de garantía juvenil en España. Un análisis documental”. *Revista Española de Sociología*, 27 (3), 395-412.
- Rosas G. y Rossignotti, G. (2005). “Empezar bien el milenio, con empleo decente para los jóvenes”. *Revista Internacional del Trabajo*, 124 (2), 153-178.
- Rosenzweig, M. R. & Wolpin, K. I. (1993). “Intergenerational support and the life-cycle incomes of young men and their parents: human capital investments, coresidence, and intergenerational financial transfers”. *Journal of Labor Economics*, 11, 84-112.
- Rubery, J. (2010). “The UK welfare state: more than residual but still insufficient”, in D. Anxo *et al.* (eds.): *The Welfare State and life transitions*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 78-103.
- Ruíz Mosquera, A. y de las Olas Palma-García, M. (2018). “Jóvenes NiNi. Nuevas trayectorias hacia la exclusión social”. *Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales*, 15, 39-49.
- Sánchez Galán, F. J. (2017). “La influencia de la crisis económica en el régimen de tenencia y condiciones económicas del joven responsable de hogar”. *Revista de Estudios de Juventud*, 116, 49-61.
- Sánchez Martínez, M. T. (2002). *La política de vivienda en España. Análisis de sus efectos redistributivos*. Tesis doctoral, Universidad de Granada, España.
- (2005). “Distributive aspects of public expenditure on housing in Spain”. *International Journal of Housing Policy*, 5 (3), 237-253.
- Scanlon, K. *et al.* (2015). “Social housing in Europe”. *European Policy Analysis*, 17, 1-12.
- Serrano, L. y Soler, Á. (2014). *Evaluación del programa de cooperación territorial para la reducción del abandono temprano de la educación*. IVIE-Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
- (2015). *La formación y el empleo de los jóvenes españoles. Trayectoria reciente y escenarios futuros*. Madrid: Fundación BBVA/IVIE.
- Sims, C. *et al.* (1990). “Inference in linear time series models with some unit roots”. *Econometrica*, 58, 113-144.

- Skans, O. N. (2011). "Scarring effects of the first labor market experience". *IZA Discussion Paper* No. 5565.
- Soler Masó, P. y Comas Arnau, D. (2015). "Los estudios sobre políticas de juventud en España". *Revista de Estudios de Juventud*, 110, 173-189.
- Stephens, M. *et al.* (2010). *Study on housing and exclusion: Welfare policies, housing provision and labour markets*. Bruselas: European Commission.
- Stone, J. *et al.* (2011). "The changing determinants of UK young adults' living arrangements". *Demographic Research*, 25, 629-666.
- Strat, V.A. *et al.* (2016). "Regional development fueled by entrepreneurial ventures providing KIBS - Case study on Romania". *Amfiteatru Economic Journal*, 18 (41), 55-72.
- Strauch, L. (2011). "Las características del sistema de la formación dual en Alemania. Experiencias concretas y perspectivas de la formación dual en Alemania". Seminario Formación Dual: Perspectivas en España. Madrid, 24 de mayo de 2011. Cámara de Comercio alemana en España.
- Taltavull de La Paz, P. (2003). "Determinants of housing prices in Spanish cities". *Journal of Property Investment & Finance*, 21 (2), 109-135.
- (2012). "The responsiveness of new supply to house prices: a perspective from the Spanish housing market", in C. M. Jones *et al.* (eds). *Challenges of the housing economy: An international perspective*. London: Willey-Blackwell.
- (2014). "New housing supply and price reactions: Evidence from Spanish markets". *Journal of European Real Estate Research*, 7(1), 4-28.
- Taltavull de La Paz, P. & Gabrielli, L. (2015). "Housing supply and price reactions: A comparison approach to Spanish and Italian markets". *Housing Studies*, 30 (7), 1036-1063.
- Taltavull de La Paz, P. & White, M. (2012). "Fundamental drivers of house price change: the role of money, mortgages, and migration in Spain and the United Kingdom". *Journal of Property Research*, 29 (4), 341-367.
- Terrones, M. & Otrok, C. (2004). *The global house price boom*. IMF World Economic Outlook, September.
- Tezanos, J.F. (2007). "Juventud, ciudadanía y exclusión social". *Sistema: Revista de Ciencias Sociales*, 197, 103-120.

- Toharia Cortés, L. *et al.* (2001). *Flexibilidad, juventud y trayectorias laborales en el mercado de trabajo*. Madrid: CIS.
- Torres-Tellez, J. y Montero Soler, A. (2020). “Tasa de desempleo y formación de hogares en Portugal”. *Revista Galega de Economía*, 29 (1), 1-19.
- Tribunal de Cuentas Europeo (2017). *¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil*, Informe Especial n.º 5/2017, Luxemburgo.
- Trilla Bellart, C. y López Oller, J. (2005). “El acceso de los jóvenes a la vivienda: una cuestión todavía no resuelta”. *Documentación Social*, 138, 191-206.
- Universidad de Málaga (2015). “La situación de la vivienda social en Andalucía”, en Universidad de Málaga: *La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda*, Junta de Andalucía, Málaga.
- Valenzuela Rubio, M. (2013). “La vivienda tras la “burbuja”: grandes retos para un futuro incierto”, en Fundación Encuentro: *Informe España 2013-Una interpretación de su realidad social*. Madrid: Fundación Encuentro.
- Verd, J. M. y López-Andreu, M. (2016). “Crisis del empleo y polarización de las trayectorias laborales. El caso de los adultos jóvenes en Cataluña”. *Papers*, 101 (1), 5-30.
- Vitali, A. (2010). “Regional differences in young Spaniards’ living arrangement decisions: A multilevel approach”. *Advances in Life Course Research*, 15, 97-108.
- Wagner M. & Huinink J. (1991). “Neuere trends beim Auszug aus dem Elternhaus”, in G. Buttler *et al.* (eds.): *Acta Demographica 1991*. Heidelberg: Physica-Verlag.
- Wallace, C. & Bendit, R. (2009). “Youth policies in Europe: towards a classification of different tendencies in youth policies in the European union”. *Perspectives on European Politics and Society*, 10 (3), 441-458.
- Walther, A. (2006). “Regimes of youth transitions. Choice, flexibility and security in young people’s experiences across different European contexts”. *Young: Nordic Journal of Youth Research*, 14 (2), 119-139.
- Walther, A. *et al.* (2009). *Youth: actor of social change*, Final project report – uP2YouthH, Luxemburgo: European Commission.
- Wang, P. & Kang, M. (2014). “An empirical analysis on the housing prices in the Pearl River

- Delta Economic Region of China". *International Journal of Urban Sciences*, 18, 103-114.
- White, L. A. (2012). "Must we all be paradigmatic? Social investment policies and liberal welfare states". *Canadian Journal of Political Science*, 45 (3), 657-683.
- Whitehead, C. (2003). "The economics of social housing", in T. O'Sullivan and K. Gibb (eds.): *Housing economics and public policy*. London: Blackwell.
- Whittington, L.A. & Peters, H.E. (1996). "Economic incentives for financial and residential Independence". *Demography*, 33 (1), 82-97.
- Wiemers, E. (2014). "The effect of unemployment on household composition and doubling up". *Demography*, 51 (6), 2155-2178.
- Wooldridge, J.M (2002). *Econometric analysis of cross section and panel data*. Cambridge: MIT Press.